BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
GACETA DE MADRID

Depósito Legal M. 1-1958 Año CCCXVIII Viernes 29 de diciembre de 1978 Núm. 311.1

CONSTITUCION ESPAÑOLA

APROBADA POR LAS CORTES EN SESIONES PLENARIAS
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO CELEBRADAS
EL 31 DE OCTUBRE DE 1978

RATIFICADA POR EL PUEBLO ESPAÑOL EN REFERENDUM
DE 6 DE DICIEMBRE DE 1978

SANCIONADA POR S. M. EL REY ANTE LAS CORTES
EL 27 DE DICIEMBRE DE 1978

CONSTITUCION ESPAÑOLA

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,

SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCION:

PREAMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCION

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Artículo 5

La capital del Estado es la villa de Madrid.

Artículo 6

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 7

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción

de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 8

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

Artículo 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

TITULO I

De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

CAPITULO PRIMERO

De los españoles y los extranjeros

Artículo 11

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 12

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Artículo 13

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

CAPITULO SEGUNDO

Derechos y libertades

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Sección 1.ª

De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, si no con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 19

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22

1. Se reconoce el derecho de asociación.

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos

Artículo 25

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Artículo 28

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

SECCIÓN 2.ª

De los derechos y deberes de los ciudadanos

Artículo 30

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.

4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 32

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 33

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.

2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 35

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

CAPITULO TERCERO

De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 39

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Artículo 40

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Artículo 43

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Artículo 45

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Artículo 47

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

Artículo 50

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las

cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

CAPITULO CUARTO

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 53

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, *a)*.

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Artículo 54

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

CAPITULO QUINTO

De la suspensión de los derechos y libertades

Artículo 55

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, *a)* y *d)*, y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

TITULO II

De la Corona

Artículo 56

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

Artículo 57

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Artículo 58

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Artículo 59

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.

2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Artículo 60

1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

Artículo 61

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.

Artículo 62

Corresponde al Rey:

a) Sancionar y promulgar las leyes.

b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.

c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.

e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.

h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.

2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

TITULO III

De las Cortes Generales

CAPITULO PRIMERO

De las Cámaras

Artículo 66

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

3. Las Cortes Generales son inviolables.

Artículo 67

1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Artículo 68

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

Artículo 69

1. El Senado es la Cámara de representación territorial.

2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.

3 En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores —Gran Canaria, Mallorca y Tenerife— y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.

5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.

6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

Artículo 70

1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:

a) A los componentes del Tribunal Constitucional.

b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.

c) Al Defensor del Pueblo.

d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.

e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.

f) A los miembros de las Juntas Electorales.

2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

Artículo 71

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.

Artículo 72

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.

2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.

3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Artículo 73

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.

Artículo 74

1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94, 1, 145, 2, y 158, 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 75

1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.

2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación.

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 76

1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

Artículo 77

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

Artículo 78

1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.

3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.

4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

Artículo 79

1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.

2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.

3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

Artículo 80

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

CAPITULO SEGUNDO

De la elaboración de las leyes

Artículo 81

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 82

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.

2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.

5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

Artículo 83

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.

b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Artículo 85

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

Artículo 86

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 87

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500 000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Artículo 88

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Artículo 89

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.

Artículo 90

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.

2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.

3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Artículo 91

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Artículo 92

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

CAPITULO TERCERO

De los Tratados Internacionales

Artículo 93

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Artículo 94

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

a) Tratados de carácter político.

b) Tratados o convenios de carácter militar.

c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

Artículo 95

1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.

2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Artículo 96

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o

suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

TITULO IV

Del Gobierno y de la Administración

Artículo 97

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Artículo 98

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

Artículo 99

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Artículo 100

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.

Artículo 101

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Artículo 102

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Artículo 103

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 104

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 105

La ley regulará:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Artículo 106

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 107

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

TITULO V

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

Artículo 108

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Artículo 109

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 110

1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

Artículo 111

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.

2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Artículo 112

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Artículo 113

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Artículo 114

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.

2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

Artículo 115

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso,

del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.

2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.

3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

Artículo 116

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

TITULO VI

Del Poder Judicial

Artículo 117

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Artículo 118

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 119

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 120

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Artículo 121

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Artículo 122

1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de

los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Artículo 123

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Artículo 124

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 125

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Artículo 126

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

Artículo 127

1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

TITULO VII

Economía y Hacienda

Artículo 128

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Artículo 129

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Artículo 130

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

Artículo 131

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesi-

dades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

Artículo 132

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

Artículo 133

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.

4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Artículo 134

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Artículo 135

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

Artículo 136

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

TITULO VIII

De la Organización Territorial del Estado

CAPITULO PRIMERO

Principios generales

Artículo 137

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

CAPITULO SEGUNDO

De la Administración Local

Artículo 140

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo 141

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

CAPITULO TERCERO

De las Comunidades Autónomas

Artículo 143

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

Artículo 145

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Artículo 146

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Artículo 147

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.

b) La delimitación de su territorio.

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Artículo 148

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.

2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.

3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.

5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.

6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.

7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.

9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.

10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.

11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.

12.ª Ferias interiores.

13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.

14.ª La artesanía.

15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.

16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.

17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.

18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

20.ª Asistencia social.

21.ª Sanidad e higiene.

22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

Artículo 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3.ª Relaciones internacionales.

4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.

5.ª Administración de Justicia.

6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especia-

les, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.

12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.

13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.

15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.

17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.

22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

25.ª Bases del régimen minero y energético.

26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

31.ª Estadística para fines estatales.

32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Artículo 150

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros así como las formas de control que se reserve el Estado.

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Artículo 151

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143, 2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2.º de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 152

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

Artículo 153

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Artículo 154

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Artículo 155

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Artículo 157

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crédito.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Artículo 158

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

TITULO IX

Del Tribunal Constitucional

Artículo 159

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Artículo 160

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

Artículo 161

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Artículo 162

1. Están legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 163

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

TITULO X

De la reforma constitucional

Artículo 166

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Artículo 169

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Segunda.

La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado.

Tercera.

La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico.

Cuarta.

En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.

Segunda.

Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

Tercera.

La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.

Cuarta.

1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Organo Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Organo Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.

2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Organo Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.

Quinta.

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144.

Sexta.

Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.

Séptima.

Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos:

a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución.

b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143.

c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.

Octava.

1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.

2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101.

3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra *b)* del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69,3.

Novena.

A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.

DISPOSICION DEROGATORIA

1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.

2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.

En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.

DISPOSICION FINAL

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

POR TANTO,

MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCION COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO.

PALACIO DE LAS CORTES, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.

JUAN CARLOS

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES
Antonio Hernández Gil

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Fernando Alvarez de Miranda y Torres

EL PRESIDENTE DEL SENADO
Antonio Fontán Pérez

INDICE SISTEMATICO

	Páginas
PREÁMBULO	29315
TÍTULO PRELIMINAR	29315
TÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES	29316
Cap. I. De los españoles y los extranjeros	29316
Cap. II. Derechos y libertades	29316
Sec. 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas	29316
Sec. 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos	29319
Cap. III. De los principios rectores de la política social y económica	29319
Cap. IV. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales	29321
Cap. V. De la suspensión de los derechos y libertades	29321
TÍTULO II. DE LA CORONA	29321
TÍTULO III. DE LAS CORTES GENERALES	29323
Cap. I. De las Cámaras	29323
Cap. II. De la elaboración de las leyes	29325
Cap. III. De los Tratados Internacionales	29326
TÍTULO IV. DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN	29327
TÍTULO V. DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES	29328
TÍTULO VI. DEL PODER JUDICIAL	29329
TÍTULO VII. ECONOMÍA Y HACIENDA	29330
TÍTULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO	29331
Cap. I. Principios generales	29331
Cap. II. De la Administración Local	29332
Cap. III. De las Comunidades Autónomas	29332

Páginas

TÍTULO IX. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 29336
TÍTULO X. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 29337

DISPOSICIONES ADICIONALES 29338
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 29338
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 29339
DISPOSICIÓN FINAL 29339

IMPRENTA NACIONAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
GACETA DE MADRID

Depósito Legal M. 1-1958 Año CCCXVIII Viernes 29 de diciembre de 1978 Núm. 311.2

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

APROVADA PER LES CORTS EL 31 D'OCTUBRE DE 1978

RATIFICADA PEL POBLE ESPANYOL EN REFERÈNDUM DE 6 DE DESEMBRE DE 1978

SANCIONADA PER S. M. EL REI DAVANT LES CORTS EL 27 DE DESEMBRE DE 1978

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

PREÀMBUL

La Nació espanyola, amb el desig d'establir la justícia, la llibertat i la seguretat i de promoure el bé de tots els qui la integren, en ús, de la seva sobirania, proclama la voluntat de:

Garantir la convivència democràtica dins la Constitució i les lleis, de conformitat amb un ordre econòmic i social just.

Consolidar un Estat de Dret que asseguri l'imperi de la llei com a expressió de la voluntat popular.

Protegir tots els espanyols i els pobles d'Espanya en l'exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions.

Promoure el progrés de la cultura i de l'economia per tal d'assegurar a tothom una qualitat de vida digna.

Establir una societat democràtica avançada, i

Col.laborar a l'enfortiment d'unes relacions pacífiques i de cooperació eficaç entre tots els pobles de la Terra.

En conseqüència, les Corts aproven i el poble espanyol ratifica la següent

CONSTITUCIÓ

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1.

1. Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.

2. La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat.

3. La forma política de l'Estat espanyol és la Monarquia parlamentària.

Article 2.

La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.

Article 3.

1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la.

2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts.

3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.

Article 4.

1. La bandera d'Espanya és formada per tres franges horitzontals, vermella, groga i vermella; la groga és de doble amplada que la de cadascuna de les vermelles.

2. Els Estatuts podran reconèixer banderes i ensenyes pròpies de les Comunitats Autònomes. Aquestes s'utilitzaran juntament amb la bandera d'Espanya en els edificis públics i en els actes oficials.

Article 5.

La capital de l'Estat és la vila de Madrid.

Article 6.

Els partits polítics expressen el pluralisme polític, concorren a la formació i a la manifestació de la voluntat popular i són instrument fonamental per a la participació política. Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliurement dins el respecte a la Constitució i a la Llei. La seva estructura interna i el seu funcionament hauran de ser democràtics.

Article 7.

Els sindicats de treballadors i les associacions empresarials contribueixen a la defensa i a la promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis. Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliurement dins el respecte a la Constitució i a la Llei. L'estructura interna i el funcionament hauran de ser democràtics.

Article 8.

1. Les Forces Armades, constituïdes per l'Exèrcit de Terra, l'Armada i l'Exèrcit de l'Aire, tenen com a missió garantir la sobirania i la independència d'Espanya, defensar-ne la integritat territorial i l'ordenament constitucional.

2. Una llei orgànica regularà les bases de l'organització militar de conformitat amb els principis de la present Constitució.

Article 9.

1. Els ciutadans i els poders públics resten subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic.

2. Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n'impedesquin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

3. La Constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

TÍTOL I

Dels drets i dels deures fonamentals

Article 10.

1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l'ordre polític i de la pau social.

2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els Tractats i els Acords Internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya.

CAPÍTOL PRIMER

Dels espanyols i dels estrangers

Article 11.

1. La nacionalitat espanyola s'adquireix, es conserva i es perd d'acord amb el que la Llei estableix.

2. Cap espanyol d'origen no podrà ser privat de la seva nacionalitat.

3. L'Estat podrà concertar tractats de doble nacionalitat amb els països iberoamericans o amb aquells que hagin tengut o tenguin una vinculació particular amb Espanya. En aquests països, encara que no reconeguin als seus ciutadans un dret recíproc, els espanyols podran naturalitzar-s'hi sense perdre la nacionalitat d'origen.

Article 12.

Els espanyols són majors d'edat als 18 anys.

Article 13.

1. Els estrangers gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que garanteix el Títol present en els termes que estableixquin els tractats i la llei.

2. Només els espanyols seran titulars dels drets reconeguts en l'article 23, llevat d'allò que, amb criteris de reciprocitat, pugui establir-se per tractat o per llei per al dret de sufragi actiu en les eleccions municipals.

3. L'extradició només es concedirà en compliment d'un tractat o de la llei, d'acord amb el principi de reciprocitat. Resten exclosos de l'extradició els delictes polítics. No seran considerats com a tals els actes de terrorisme.

4. La llei establirà la forma en què els ciutadans d'altres països i els apàtrides podran gaudir del dret d'asil a Espanya.

CAPÍTOL SEGON

Drets llibertats

Article 14.

Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

SECCIÓ 1.ª

Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques

Article 15.

Tothom té dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap cas, ningú no pugui ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants. Resta abolida la pena de mort, llevat d'allò que puguin disposar les lleis penals militars per a temps de guerra.

Article 16.

1. Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense cap més limitació, quan siguin manifestats, que la necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit per la llei.

2. Ningú podrà ser obligat a declarar quant a la seva ideologia, religió o creences.

3. Cap confessió tendrà caràcter estatal. Els poders públics tendran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantendran les conseqüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica i les altres confessions.

Article 17.

1. Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat. Ningú podrà ser privat de la seva llibertat, sinó amb l'observància del que estableix aquest article i en els casos i en la forma prevists en la llei.

2. La detenció preventiva no podrà durar més temps del que sigui estrictament necessari per a fer les indagacions per tal d'aclarir els fets i, en qualsevol cas, dins el termini màxim de setanta-dues hores, el detingut haurà de ser posat en llibertat o a disposició de l'autoritat judicial.

3. Tota persona detinguda ha de ser informada immediatament i de manera que li sigui comprensible, dels seus drets i de les rons de la detenció, i no podrà ser obligada a declarar. Es garanteix l'assistència d'advocat al detingut en les diligències policials i judicials, en la forma que la llei establesqui.

4. La llei regularà un procediment d'«habeas corpus» per tal de posar immediatament a disposició judicial tota persona detinguda il.legalment. També es determinarà per llei el termini màxim de durada de la presó provisional.

Article 18.

1. Es garanteix el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

2. El domicili és inviolable. No s'hi podrà entrar ni fer-hi cap escorcoll sense el consentiment del titular o sense resolució judicial, llevat del cas de delicte flagrant.

3. Es garanteix el secret de les comunicacions i, especialment, de les postals, telegràfiques i telefòniques, excepte en cas de resolució judicial.

4. La llei limitarà l'ús de la informàtica per tal de garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.

Article 19.

Els espanyols tenen dret a elegir lliurement la residència i a circular pel territori nacional.

Tenen també dret a entrar i sortir d'Espanya en la forma que la llei estabiesqui. Aquest dret no podrà ser limitat per motius polítics o ideològics.

Article 20.

1. Es reconeixen i es protegeixen els drets:

a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitiançant la paraula l'escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció.

b) A la producció i a la creació literària, artística, científica i tècnica.

c) A la llibertat de càtedra.

d) A comunicar o a febre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l'exercici d'aquestes llibertats.

2. L'exercici d'aquests drets no pot ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia.

3. La llei regularà l'organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social que depenguin de l'Estat o de qualsevol entitat pública i garantirà l'accés a aquests mitjans dels grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diferents llengües d'Espanya.

4. Aquestes llibertats tenen el límit en el respecte als drets reconeguts en aquest Títol, en els preceptes de les lleis que el desenvolupen i, especialment, en el drt a l'honor, a la intimitat, a la imatge pròpia i a la protecció de la joventut i de la infància.

5. Només podrà acordar se el segrest de publicacions, gravacions i altres mitjans d'informació en virtut de resolució judicial.

Article 21.

1. Es reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes. Per a l'exercici d'aquest dret no caldrà autorització prèvia.

2. En els casos de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions caldrà comunicar-ho prèviament a l'autoritat, la qual només podrà prohibir-les quan hi hagi motius fonamentats d'alteració de l'ordre públic, amb perill per a persones o bens.

Article 22.

1. Es reconeix el dret d'associació.

2. Les associacions que cerquin finalitats o facin servir mitjans tipificats com a delicte són il.legals.

3. Les associacions emparades per aquest article hauran d'inscriure's en un registre únicament a efectes de publicitat.

4. Les activitats de les associacions només podran ser dissoltes o suspeses en virtut d'una resolució judicial motivada.

5. Es prohibeixen les associacions secretes i les de caràcter paramilitar.

Article 23.

1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament o per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal.

2. Tenen també el dret d'accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalin.

Article 24.

1. Tothom té dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i dels tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, pugui haver-hi indefensió.

2. Tothom té dret al jutge ordinari predeterminat per la llei, a ser defensat i assistit per un lletrat, a ser informat de

l'acusació formulada contra ell, a un procés públic sense dilacions indegudes i amb totes les garanties, a utilitzar els mitjans probatoris pertinents per la defensa pròpia, a no declarar contra si mateix, a no confessar-se culpable i a la presumpció d'innocència.

La llei regularà els casos en els quals, per raó de parentiu o de secret professional, no s'estarà obligat a declarar respecte de fets presumptament delictius.

Article 25.

1. Ningún pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constituesquin delicte, falta o infracció administrativa, segons la legislació vigent en aquell moment.

2. Les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat restaran orientades vers la reeducació i la reinserció social i no podran consistir en treballs forçats. El condemnat que estigués complint pena de presó gaudirà del drets fonamentals d'aquest Capítol, llevat d'aquells que es trobin limitats expressament pel contingut del veredicte condemnatori, pel sentit de la pena o per la llei penitenciària. En qualsevol cas, tindrà dret a un treball remunerat, als beneficis corresponents de la Seguretat Social, i a l'accés a la cultura i al desenvolupament integral de la personalitat.

3. L'Administració civil no podrà imposar sancions que directament o subsidiàriament impliquin privació de llibertat.

Article 26.

Es prohibeixen els Tribunals d'Honor en l'àmbit de l'Administració civil i de les organitzacions professionals.

Article 27.

1. Tothom té dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament.

2. L'educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principisdemocràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals.

3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que els fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb les seves conviccions.

4. L'ensenyament bàsic és obligatori i gratuit.

5. Els poders públics garanteixen el dret de tothom a l'educació, mitjançant una programació general de l'ensenyament, amb la participació col.lectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents.

6. Es reconeix a las persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents, dins el respecte als principis constitucionals.

7. Els professors, els pares i, en el seu cas, els alumnes intervindran en el control i en la gestió de tots els centres sostinguts per l'Administració amb fons públics, en la forma que la llei establesequi.

8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per tal de garantir el compliment de les lleis.

9. Els poders públics ajudaran aquells centres docents que reunesquin els requisits que la llei establesequi.

10. Es reconeix l'autonomia de les universitats, en la forma que la llei establesequi.

Article 28.

1. Tothom té dret a sindicar-se lliurement. La llei podrà limitar o suspendre l'exercici d'aquest dret a les Forces o als instituts armats o als altres cossos sotmesos a disciplina militar, i regularà les peculiaritats que l'exercici d'aquests presenti als funcionaris públics. La llibertat sindical comprèn el dret a fundar sindicats i a afiliar-s'hi a elecció, i el dret dels sindicats a formar confederacions i a fundar organitzacions sindicals internacionals o a afiliar-s'hi. Ningú podrà ser obligat a afiliar-se a un sidicat.

2. Es reconeix als treballadors el dret a la vaga per a la defensa dels seus interessos. La llei que reguli l'exercici d'aquest dret establirà les garanties que calguin per tal d'assegurar el manteniment dels serveis essencials a la comunitat.

Article 29.

1. Tots els espanyols tindran el dret de petició individual i col.lectiva, per escrit, en la forma i amb els efectes que determini la llei.

2. Els membres de les Forces o Institucions armades o dels cossos sotmesos a disciplina militar podran exercir aquest dret només individualment i d'acord amb allò que disposi la seva legislació específica.

SECCIÓ 2.ª

Dels drets i dels deures dels ciutadans

Article 30.

1. Els espanyols tenen el dret i el deure de defensar Espanya.

2. La llei fixarà les obligacions militars dels espanyols i regularà, amb les garanties que calguin, le objecció de consciència i les altres causes d'exempció del servei militar obligatori; podrà imposar, en el seu cas, una prestació social substitutòria.

3. Podrà establir-se un servei civil per al compliment de fins d'interés general.

4. Mitjançant una llei podran regular-se els deudes des ciutadans en els casos de risc greu, catàstrofe o calamitat pública.

Article 31.

1. Tothom contribuirà al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori.

2. La despesa pública realitzarà una assignació equitativa dels recursos públics i la seva programació i execució respondrà als criteris d'eficiència i economia.

Article 32.

1. L'home i la dona tenen dret a contreure matrimoni amb plena igualtat jurídica.

2. La llei regularà les formes de matrimoni, l'edat i la capacitat per a contreure'l, els drets i els deures dels cònjuges, les causes de separació i dissolució i els seus efectes.

Article 33.

1. Es reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència.

2. La funció social d'aquests drets en delimitarà el contingut, d'acord amb les lleis.

3. Ningú podrà ser privat dels seus béns ni dels seus drets sinó per causa justificada d'utilitat pública i d'interés social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin.

Article 34.

1. Es reconeix el dret de fundació per a finalitats d'interés general, d'acord amb la llei.

2. Regirà també per a les fundacions el que es disposa en els apartats 2 i 4 de l'article 22.

Article 35.

1. Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per tal de satisfer les seves necessitats i les de la seva família sense que en cap cas es pugui fer discriminació per raó de sexe.

2. La llei regularà un estatut dels treballadors.

Article 36.

La llei regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels Col.legis Professionals i l'exercici de les professions titulades. L'estructura interna i el funcionament dels Col.legis hauran de ser democràtics.

Article 37.

1. La llei garantirà el dret a la negociació col.lectiva del treball entre els representants dels treballadors i els empresaris, y la força vinculant dels convenis.

2. Es reconeix el dret dels treballadors i dels empresaris a adoptar mesures de conflicte col.lectiu. La llei que reguli l'exercici d'aquest dret, sens perjudici de les limitacions que pugui establir, inclourà les garanties que calguin per tal d'assegurar el funcionament dels servels essencials a la comunitat.

Article 38.

Es reconeix la llibertat d'empresa dins el marc de l'economia de mercat. Els poders públics en garanteixen l'exercici e il protegeixen; protegeixen també la defensa de la productivitat d'acord amb les exigències de l'economia general i, en el seu cas, de la planificació.

CAPÍTOL TERCER

Dels principis rectors de la política social i econòmica

Article 39.

1. Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família.
2. Els poders públics asseguren també la protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb independència de la filiació, i de les mares, sigui quin sigui el seu estat civil. La llei farà possible la investigació de la paternitat.
3. Els pares han de prestar assistència completa als fills tenguts dins o fora del matrimoni, durant la minoria d'edat i en els altres casos en què la llei els hi obligui.
4. Els infants gaudiran de la protecció prevista en els acords internacionals que vetlen pels seus drets.

Article 40.

1. Els poders públics promouran les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda regional i personal més equitativa, dins el marc d'una política d'estabilitat econòmica. De manera especial realitzaran una política orientada cap a la plena ocupació.
2. Els poders públics fomentaran també una política que garantesqui la formació i la readaptació professionals; vetlaran per la seguretat i la higiene en el treball i garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats.

Article 41.

Els poders públics mantendran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans, que garantesqui l'assistència i les prestacions socials suficients en les situacions de necessitat, especialment en cas de falta de feina. L'assistència i les prestacions complementàries seran lliures.

Article 42.

L'Estat vetlarà especialment per la salvaguarda dels drets econòmics i socials dels treballadors espanyols a l'estranger i orientarà la seva política a repatriar-los i reintegrar-los a la societat.

Article 43.

1. Es reconeix el dret a la protecció de la salut.
2. Correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris. La llei establirà els drets i els deures de tothom en aquest punt.
3. Els poders públics fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport. Facilitaran també la utilització adequada del lleure.

Article 44.

1. Els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tothom té dret.
2. Els poders públics promouran la ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l'interés general.

Article 45.

1. Tothom té dret a disposar d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-lo.
2. Els poders públics vetlaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col.lectiva.
3. La llei fixarà sancions penals o, en el seu cas, administratives per als qui violin el que es disposa en l'apartat anterior i establirà l'obligació d'aquests de reparar el dany causat.

Article 46.

Els poders públics garantiran la conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que l'integren, sigui quin sigui el règim jurídic i la titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni.

Article 47.

Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d'acord amb l'interés general per tal d'impedir l'especulació.

La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l'acció urbanística de les entitats públiques.

Article 48.

Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.

Article 49.

Els poders públics duran a terme una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals es prestarà l'atenció especialitzada que requeresquin, i els empararan especialment en la consecució dels drets que aquest Títol atorga a tots els ciutadans.

Article 50.

Els poders públics garantiran la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat, mitjançant pensions adequades i actualitzades periòdicament. Amb independència de les obligacions familiars, promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els seus problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure.

Article 51.

1. Els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i dels usuaris, i en protegiran amb procediments eficaços la seguretat, la salut i els legítims interessos.
2. Els poders públics promouran la informació i l'educació dels consumidors i dels usuaris, en fomentaran les organitzacions i les escoltaran en les qüestions que puguin afectar-los, en la forma que la llei establesqui.
3. Dins el marc del que disposen els apartats anteriors, la llei regularà el comerç interior i el règim d'autorització de productes comercials.

Article 52.

La llei regularà les organitzacions professionals que contribuesquin a la defensa dels interessos econòmics que els siguin propis. La seva estructura interna i el seu funcionament hauran de ser democràtics.

CAPÍTOL QUART

De les garanties de les llibertats i drets fonamentals

Article 53.

1. Els drets i les llibertats reconeguts en el Capítol Segon del present Títol vinculen tots els poders públics. Només per llei, que en tot cas haurà de respectar el seu contingut essencial, podrà regular-se l'exercici d'aquests drets i d'aquestes llibertats, que seran tutelades d'acord amb el que preveu l'article 161, 1 a).
2. Qualsevol ciutadà podrà demanar la tutela de les llibertats i dels drets reconeguts en l'article 14 i en la Secció 1.ª del Capítol Segon davant els Tribunals ordinaris per un procediment basat en els principis de preferència i sumarietat i, en el seu cas, a través del recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional. Aquest darrer recurs serà aplicable a l'objecció de consciència reconeguda en l'article 30.
3. El reconeixement, el respecte i la protecció dels principis reconeguts en el Capítol Tercer, informarà la legislació positiva, la pràctica judicial i l'actuació dels poders públics. Només podran ser al.legats davant la Jurisdicció ordinària d'acord amb allò que disposin les lleis que els desenvolupin.

Article 54.

Una llei orgànica regularà la institució del Defensor del Poble, com a alt comissionat de les Corts Generals, designat per aquestes per a defensar els drets compresos en aquest Títol; a aquest efecte podrà supervisar l'activitat de l'Administració, i donar-ne compte a les Corts Generals.

CAPÍTOL CINQUÈ

De la suspensió dels drets i de les llibertats

Article 55.

1. Els drets reconeguts en els articles 17, 18, apartats 2 i 3; articles 19, 20, apartats 1 a) i d), i 5; articles 21, 28, apartat 2,

l article 37, apartat 2, podran ser suspesos quan sigui acordada la declaració de l'estat d'excepció o de setge en els termes que preveu la Constitució. Resta exceptuat d'aquesta suspensió l'apartat 3 de l'article 17 en el cas de declaració de l'estat d'excepció.

2. Una llei orgànica podrà determinar la forma i els casos en què, de forma individual i amb la necessària intervenció judicial i l'adequat control parlamentari, els drets reconeguts en els articles 17, apartat 2, i 18, aparts 2 i 3, puguin ser suspesos per a persones determinades, en relació amb les investigacions corresponents a l'actuació de bandes armades o elements terroristes.

La utilització injustificada o abusiva de les facultats reconegudes en la dita llei orgànica comportarà responsabilitat penal per violació dels drets i de les llibertats reconegudes per les lleis.

TÍTOL II

De la Corona

Article 56.

1. El Rei es el Cap de l'Estat, símbol de la seva unitat i permanència, arbitra i modera el funcionament regular de les institucions, assumeix la més alta representació de l'Estat Espanyol en les relacions internacionals, especialment amb les nacions de la seva comunitat històrica, i exerceix les funcions que li atribueixen expressament la Constitució i les lleis.

2. El seu títol es el de Rei d'Espanya, i podrà utilitzar els altres que corresponguin a la Corona.

3. La persona del Rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat. Els seus actes seran sempre subjectes de referendació en la forma establida en l'article 64; sense aquesta referendació no tendran validesa, llevat del que disposa l'article 65.2.

Article 57.

1. La Corona d'Espanya és hereditària en els successors de S. M. Joan Carles I de Borbó, legítim hereu de la Dinastia històrica. La successió al tron seguirà l'ordre regular de primogenitura i de representació, i serà preferida sempre la línia anterior a les posteriors; en la mateixa línia, el grau més pròxim al més remot; en el mateix grau, l'home a la dona, i en el mateix sexe la persona major a la menor.

2. El Príncep hereu, des del naixement o des que succeesqui el fet que origini la cridada tendrà la dignitat de Príncep d'Astúries i els altres títols vinculats tradicionalment al successor de la Corona d'Espanya.

3. Havent-se extingit totes les línies cridades a dret, les Corts Generals proveiran a la succesió a la Corona en la forma que més convengui als interessos d'Espanya.

4. Les persones que, tenint dret a la succesió al tron, contraguessin matrimoni contra la prohibició expressa del Rei i de les Corts Generals, restaran excloses de la succesió a la Corona elles mateixes i els seus descendents.

5. Les abdicacions i les renúncies i qualsevol dubte de fet o de dret que s'esdevingui en l'ordre de successió a la Corona es resoldran amb una Llei Orgànica.

Article 58.

La Reina consort o el consort de la Reina no podran assumir funcions constitucionals, llevat del que es disposa per a la Regència.

Article 59.

1. Si el Rei fos menor d'edat, el pare o la mare del Rei i, per manca d'aquests, el parent major d'edat més pròxim en la successió a la Corona segons l'ordre establit en la Constitució, entrarà a exercir immediatament la Regència, i l'exercirà durant el temps de la minoria d'edat del Rei.

2. Si el Rei resultava inhabilitat per a l'exercici de la seva autoritat, i la impossibilitat fos reconeguda per les Corts Generals, entrarà immediatament a exercir la Regència el Príncep hereu de la Corona, si fos major d'edat. Si no ho fos caldrá procedir de la manera que preveu l'apartat anterior fins que el Príncep hereu aconseguesqui la majoria d'edat.

3. Si no hi hagués cap persona a qui correspongués la Regència, aquesta serà nomenada per les Corts Generals, i es compondrà d'una, tres, o cinc persones.

4. Per a exercir la Regència caldrà ser espanyol i mayor d'edat.

5. La Regència serà exercida per mandat constitucional i sempre en nom del Rei.

Article 60.

1. Serà tutor del Rei menor la persona que el Rei difunt hagi nomenat en el seu testament, sempre que sigui major d'edat i espanyol de naixement; si no n'hagués nomenat, en serà tutor el pare o la mare mentre restin vidus. Mancant aquets, el nomenaran les Corts Generals, però només podran acumular els càrrecs de regent i de tutor el pare, la mare o els ascendents directes del Rei.

2. L'exercici de la tutela és incompatible també amb el de qualsevol càrrec o representació política.

Article 61.

1. El Rei, en ser proclamat davant les Corts Generals, prestarà el jurament d'exercir fidelment les seves funcions, guardar i fer guardar la Constitució i les lleis i respectar els drets dels ciutadans i de les Comunitats Autònomes.

2. El Príncep hereu, en aconseguir la majoria d'edat, i el Regent o els Regents en fer-se càrrec de les seves funcions, prestaran el mateix jurament i el de fidelitat al Rei.

Article 62.

Correspon al Rei:

a) Sancionar i promulgar les lleis.

b) Convocar i dissoldre les Corts Generals i convocar eleccions en els termes prevists a la Constitució.

c) Convocar a referèndum en els casos prevists a la Constitució.

d) Proposar el candidat a President de Govern i, en el seu cas, nomenar-lo, i també posar fi a les seves funcions en els termes prevists en la Constitució.

e) Nomenar i remoure els membres del Govern a proposició del President d'aquest.

f) Expedir els decrets acordats en el Consell de Ministres, proveir els oficis civils i militars i concedir honors i distincions d'acord amb les lleis

g) Ser informat dels afers d'Estat i presidir, a aquest efecte, les sessions del Consell de Ministres quan ho cregui oportú, a petició del President del Govern.

h) El comandament suprem de les Forces Armades.

i) Exercir el dret de gràcia d'acord amb la llei, la qual no podrà autoritzar indults generals.

j) L'Alt Patronatge de les Reials Acadèmies.

Article 63.

1. El Rei acredita els ambaixadors i altres representants diplomàtics. Els representants estrangers a Espanya son acreditats davant ell.

2. Al Rei correspon de manifestar el consentiment de l'Estat per a obligar se internacionalment mitjançant tractats, de conformitat amb la Constitució i amb les lleis.

3. Al Rei correspon, prèvia autorització de les Corts Generals, de declarar la guerra i de fer la pau.

Article 64.

1. Els actes del Rei seran referendats pel President del Govern i, en el seu cas, pels Ministres competents. La proposta i el nomenament del President del Govern i la dissolució prevista en l'article 99 seran referendats pel President del Congrés.

2. Dels actes del Rei seran responsables les persones que els referendin.

Article 65.

1. El Rei percep dels Pressuposts de l'Estat una quantitat global per al sosteniment de la seva Família i Casa, i la distribueix lliurement.

2. El Rei nomena i relleva lliurement els membres civils i militars de la seva Casa.

TÍTOL III

De les Corts Generals

CAPITOL PRIMER

De les Cambres

Article 66.

1. Les Corts Generals representen el poble espanyol i són formades pel Congrés dels Diputats i el Senat.

2. Les Corts Generals exerceixen la potestat legislativa de l'Estat, n'aproven els pressuposts, controlen l'acció del Govern

i tenen les altres competències que els atribuesqui la Constitució.

3. Les Corts Generals són inviolables.

Article 67.

1. Ningú podrà ser membre de totes dues Cambres simultàniament, ni acumular l'acta d'una Assemblea d'una Comunitat Autònoma amb la de Diputat al Congrés.

2. Els membres de les Corts Generals no estaran lligats per mandat imperatiu.

3. Les reunions de Parlamentaris que se celebrin sense convocatòria reglamentària no vincularan les Cambres i no podran exercir les funcions d'aquestes ni ostentar-ne els privilegis.

Article 68.

1. El Congrés es compon d'un mínim de 300 i un màxim de 400 Diputats, elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret en els termes que estableixqui la llei.

2. La circumscripció electoral és la província. Les poblacions de Ceuta i Melilla seran representades cadascuna per un Diputat. La llei distribuirà el nombre total de Diputats, assignant una representació mínima inicial a cada circumscripció i distribuint els altres en proporció amb la població.

3. L'elecció es farà a cada circumscripció atenent a criteris de representació proporcional.

4. El Congrés és elegit per quatre anys. El mandat dels Diputats acaba quatre anys després de l'elecció o el dia de la dissolució de la Cambra.

5. Són electors i elegibles tots els espanyols que estiguin en ple ús dels seus drets polítics. La llei reconeixerà l'exercici del dret de sufragi als espanyols que es trobin fora del territori d'Espanya i l'Estat els el facilitarà.

6. Les eleccions tindran lloc entre els trenta i els seixanta dies després de l'acabament del mandat. El Congrés elecie haurà de ser convocat dins els vint-i-cinc dies següents al de la celebració de les eleccions.

Article 69.

1. El Senat és la Cambra de representació territorial.

2. Els votants de cada província elegiran quatre Senadors per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret en els termes que assenyali una llei orgànica.

3. A les províncies insulars, cada illa o agrupació d'illes, amb *cabildo* o consell insular, constituirà una circumscripció a efecte de l'elecció de Senadors; en correspondran tres a cadascuna de les illes majors (Gran Canària, Mallorca i Tenerife), i un a cadascuna de les illes o agrupacions d'illes següents: Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma.

4. Les poblacions de Ceuta i Melilla elegiran cadascuna dos Senadors.

5. Les Comunitats Autònomes designaran a més un Senador i encara un altre per cada milió d'habitants del seu territori respectiu. La designació correspondrà a l'Assemblea Legislativa o, si no n'hi havia, a l'òrgan col.legiat superior de la Comunitat Autònoma, d'acord amb el que estableixqui els Estatuts, que asseguraran, en qualsevol cas, la representació proporcional adequada.

6. El Senat és elegit per quatre anys. El mandat dels Senadors acaba quatre anys després de l'elecció o el dia de la dissolució de la Cambra.

Article 70.

1. La llei electoral determinarà les causes d'inelegibilitat i incompatibilitat dels Diputats i dels Senadors, les quals comprendran, en qualsevol cas:

a) Els components del Tribunal Constitucional.

b) Els alts càrrecs de l'Administració de l'Estat que determini la llei, amb l'excepció dels membres del Govern.

c) El Defensor del Poble.

d) Els Magistrats, els Jutges i els Fiscals en actiu.

e) Els militars professionals i els membres de les Forces i Cossos de Seguretat i Policia en actiu.

f) Els membres de les Juntes Electorals.

2. La validesa de les actes i de les credencials dels membres de totes dues Cambres restarà sotmesa al control judicial en els termes que estableixqui la llei electoral.

Article 71.

1. Els Diputats i els Senadors gaudiran d'inviolabilitat per les opinions manifestades en l'exercici de les seves funcions.

2. Durant el període del seu mandat, els Diputats i els Senadors gaudiran també d'immunitat, i només podran ser detinguts en cas de delicte flagrant. No podran ser inculpats ni processats sense l'autorització prèvia de la Cambra respectiva.

3. En les causes contra Diputats i Senadors serà competent la Sala del Penal del Tribunal Suprem.

4. Els Diputats i els Senadors percebran una assignació que serà fixada per les Cambres respectives.

Article 72.

1. Les Cambres estableixen els propis reglaments, aproven autònomament els seus pressuposts i, d'un comú acord, regulen l'estatut del personal de les Corts Generals. Els reglaments i la reforma d'aquests seràn sotmesos a una votació final sobre la totalitat, la qual requerirà la majoria absoluta.

2. Les cambres elegeixen els presidents respectius i els altres membres de les Meses. Les sessions conjuntes seran presidides pel President del Congrés i es regiran mitjançant un Reglament de les Corts Generals aprovat per la majoria absoluta de cada Cambra.

3. Els Presidents de les Cambres exerceixen en nom d'aquestes tots els poders administratius i les facultats de policia en l'interior dels estatges respectius.

Article 73.

1. Les Cambres es reuniran anualment en dos períodes ordinaris de sessions: el primer, del setembre al desembre, i el segon, del febrer al juny.

2. Les Cambres podran reunir-se en sessions extraordinàries a petició del Govern, de la Diputació permanent o de la majoria absoluta dels membres de qualsevol de les Cambres. Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades amb un ordre del dia determinat i seran closes després d'haver-lo exhaurit.

Article 74.

1. Les Cambres es reuniran en sessió conjunta per tal d'exercir les competències no legislatives que el Títol II atribueix expressament a les Corts Generals.

2. L'adopció de les decisions de les Corts Generals previstes en els articles 94.1, 145.2 i 158.2 requerirà la majoria de cada una de les Cambres. En el primer cas, el procés serà iniciat pel Congrés, i en els altres dos, pel Senat. En tots dos casos, si no hi hagués acord entre el Senat i el Congrés, s'intentarà obtenir-lo mitjançant una Comissió Mixta composada per un mateix nombre de Diputats i de Senadors. La Comissió presentarà un text que haurà de ser votat per totes dues Cambres. Si no s'aprova en la forma establida, decidirà el Congrés per majoria absoluta.

Article 75.

1. Les Cambres funcionaran en Ple i per Comissions.

2. Les Cambres podran delegar a les Comissions Legislatives permanents l'aprovació de projectes o proposicions de llei. El Ple, això no obstant, podrà requerir en qualsevol moment el debat i la votació de qualsevol projecte o proposició de llei que hagi estat objecte de la delegació.

3. Resten exceptuats del que disposa l'apartat anterior la reforma constitucional, les qüestions internacionals, les lleis orgàniques i de bases i els Pressuposts Generals de l'Estat.

Article 76.

1. El Congrés i el Senat i, si pertoca, totes dues Cambres conjuntament, podran nomenar Comissions d'investigació sobre qualsevol afer d'interés públic. Les conclusions obtingudes no seran vinculants per als Tribunals ni afectaran les resolucions judicials, sense que això sigui obstacle perquè el resultat de la investigació sigui comunicat al Ministeri Fiscal per tal que aquest exercesqui, si cal, les accions oportunes.

2. Serà obligatori de comparèixer a requeriment de les Cambres. La llei regularà les sancions que puguin imposar-se per causa de l'incompliment d'aquesta obligació.

Article 77.

1. Les Cambres poden rebre peticions individuals o col.lectives, sempre per escrit. En resta prohibida la presentació directa per mitjà de manifestacions ciutadanes.

2. Les Cambres poden trametre al Govern les peticions que rebran. El Govern té l'obligació d'explicar-se sobre el contingut d'aquestes sempre que les Cambres ho exigesquin.

Article 78.

1. A cada Cambra hi haurà una Diputació Permanent composta per un mínim de vint-i-un membres que representaran els grups parlamentaris en proporció a la seva importància numèrica.
2. Les Diputacions Permanents seran presidides pel President de la Cambra respectiva i tendran per funcions la que preveu l'article 73, la d'assumir les facultats que corresponguin a les Cambres, de conformitat amb els articles 86 i 116 si aquestes haguessin estat dissoltes o n'hagués expirat el mandat, i la de vetlar pels poders de les Cambres, quan aquestes no estiguin reunides.
3. Havent finit el mandat o en cas de dissolució, les Diputaciones Permanents continuaran exercint les seves funcions fins que es constituesquin les noves Corts Generals.
4. Reunida la Cambra corresponent, la Diputació Permanent donarà compte dels assumptes tractats i de les seves decisions.

Article 79.

1. Per tal d'adoptar acords, les Cambres han d'estar reunides reglamentàriament i comptar amb l'assistència de la majoria dels membres.
2. Perquè els dits acords siguin vàlids hauran de ser aprovats per la majoria dels membres presents, sens perjudici de les majories especials que estableixquin la Constitució o les lleis orgàniques i les que estableixquin els Reglaments de les Cambres per a l'elecció de persones.
3. El vot dels Senadors i el dels Diputats és personal i indelegable.

Article 80.

Les sessions plenàries de les Cambres seran públiques, salvant l'acord en contra de cada Cambra, adoptat per majoria absoluta o de conformitat amb el Reglament.

CAPÍTOL SEGON

De l'elaboració de les lleis

Article 81.

1. Són lleis orgàniques les relatives al desenvolupament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, les que aprovin els Estatuts d'Autonomia i el règim electoral general i les previstes per la Constitució.
2. L'aprovació, la modificació o la derogació de les Lleis orgàniques exigeix la majoria absoluta del Congrés en una votació final sobre el conjunt del projecte.

Article 82.

1. Les Corts Generals podran delegar al Govern la potestat de dictar normes amb rang de llei sobre matèries determinades no incloses en l'article anterior.
2. La delegació legislativa haurà d'atorgar-se mitjançant una llei de bases quan tengui per objecte la formació de texts articulats o mitjançant una llei ordinària quan es tracti de refondre diversos texts legals en un de sol.
3. La delegació legislativa haurà d'atorgar-se al Govern de forma expressa, per a una matèria concreta, i fixant-ne el termini d'exercici. La delegació resta esgotada en fer-ne ús el Govern amb la publicació de la norma corresponent. No podrà entendre's que ha estat concedida de manera implícita o per un lapse de temps indeterminat. Tampoc podrà permetre'n la subdelegació a autoritats altres que el mateix Govern.
4. Les lleis de bases delimitaran precisament l'objecte i l'abast de la delegació legislativa i els principis i criteris que en regiran l'exercici.
5. L'autorització per a refondre texts legals determinarà l'àmbit normatiu a què es refereix el contingut de la delegació, i haurà d'especificar si resta circumscrita a la mera formulació d'un text únic o si inclou la de regularitzar, aclarir i harmonitzar els texts legals que hagin de ser refosos.
6. Les lleis de delegació podran establir en cada cas fórmules addicionals de control sens perjudici de la competència pròpia dels Tribunals.

Article 83.

Les lleis de bases no podran en cap cas:

a) Autoritzar la modificació de la pròpia llei de bases.
b) Facultar per a dictar normes amb caràcter retroactiu.

Article 84.

Si una proposició de llei o una esmena és contrària a una delegació legislativa vigent, el Govern té la facultat d'oposar-se a la tramitació. Si això s'esdevenia, podrà presentar-se una proposició de llei per a la derogació total o parcial de la llei de delegació.

Article 85.

Les disposicions del Govern que contenguin legislació delegada rebran el títol de Decrets Legislatius.

Article 86.

1. En cas d'una necessitat urgent i extraordinària, el Govern podrà dictar disposicions legislatives provisionals que prendran la forma de Decrets-Lleis i que no podran afectar l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans regulats en el Títol I, el règim de les Comunitats Autònomes ni el Dret electoral general.
2. Els Decrets-Lleis hauran de ser sotmesos immediatament a debat i votació de la totalitat en el Congrés dels Diputats, convocat a aquest efecte, si no estigués reunit, dins el termini dels trenta dies següents a la promulgació. El Congrés haurà de pronunciar-se expressament dins aquest termini sobre la convalidació o la derogació, per a la qual cosa el Reglament establirà un procediment especial i sumari.
3. Durant el termini establit en el paràgraf anterior, les Corts podran tramitar-los com a projectes de llei pel procediment d'urgència.

Article 87.

1. La iniciativa legislativa correspon al Govern, al Congrés i al Senat, d'acord amb la Constitució i els Reglaments de les Cambres.
2. Les Assemblees de les Comunitats Autònomes podran demanar al Govern l'adopció d'un Projecte de Llei o trametre a la Mesa del Congrés una Proposició de Llei, i podran delegar davant la dita Cambra un màxim de tres membres de l'Assemblea encarregats de defensar-la.
3. Una llei orgànica regularà les formes d'exercici i els requisits de la iniciativa popular per a la presentació de proposicions de llei. En qualsevol cas es requerirà no menys de 500.000 signatures acreditades. No serà procedent aquesta iniciativa en les matèries pròpies de la llei orgànica, tributàries o de caràcter internacional ni en allò que pertany a la prerrogativa de gràcia.

Article 88.

Els projectes de llei seran aprovats pel Consell de Ministres, el qual els sotmetrà al Congrés acompanyats d'una exposició de motius i dels antecedents necessaris per a pronunciar-s'hi.

Article 89.

1. La tramitació de les proposicions de llei serà regulada pels Reglaments de les Cambres, sense que la prioritat deguda als projectes de llei impedeixqui l'exercici de la iniciativa legislativa en els termes regulats en l'article 87.
2. Les proposicions de llei que, de conformitat amb l'article 87, el Senat prengui en consideració seran trameses al Congrés perquè aquest les tramiti com a tal proposició.

Article 90.

1. Una vegada hagi estat aprovat un projecte de llei ordinària o orgànica pel Congrés de Diputats, el President d'aquest en donarà compte immediatament al President del Senat, el qual el sotmetrà a la deliberació d'aquesta darrera Cambra.
2. El Senat, dins el termini de dos mesos a comptar des del dia de la recepció del text, pot oposar-li el seu veto o introduir-hi esmenes mitjançant un missatge motivat. El veto haurà de ser aprovat per majoria absoluta. El projecte no podrà ser sotmès al Rei perquè el sancioni sense que el Congrés ratifiqui per majoria absoluta, en cas de veto, el text inicial, o per majoria simple, transcorreguts dos mesos d'ençà que fou interposat, o sense que es pronunciï sobre les esmenes, acceptant-les o no per majoria simple.
3. El termini de dos mesos es reduirà al de vint dies naturals en els projectes declarats urgents pel Govern o pel Congrés dels Diputats.

Article 91.

El Rei sancionarà les lleis aprovades per les Corts Generals dins el termini de quinze dies, i les promulgarà i n'ordenarà la publicació immediata.

Article 92.

1. Les decisions polítiques de transcendència especial podran ser sotmeses al referèndum consultiu de tots els ciutadans.

2. El Referèndum serà convocat pel Rei a proposició del President del Govern, autoritzada prèviament pel Congrés dels Diputats.

3. Una llei orgànica regularà les condicions i el procediment de les diverses modalitats de referèndum previstes per la present Constitució.

CAPÍTOL TERCER

Dels Tractats Internacionals

Article 93.

Mitjançant una llei orgànica es podrà autoritzar la celebració de tratats pels quals s'atribueixi a una organització o a una institució internacional l'exercici de competències derivades de la Constitució. La garantia del compliment d'aquests tractats i de les resolucions emanades dels organismes internacionals o supranacionals titulars de la cessió correspon, segons els casos, a les Corts Generals o al Govern.

Article 94

1. La prestació del consentiment de l'Estat per a obligar-se mitjançant tractats o convenis requerirà l'autorització prèvia de les Corts Generals en els casos següents:

a) Tractats de caràcter polític.
b) Tractats o convenis de caràcter militar.
c) Tractats o convenis que afectin la integritat territorial de l'Estat o els drets i els deures fonamentals establits en el Títol I.
d) Tractats o convenis que impliquin obligacions financeres per a la Hisenda Pública.
e) Tractats o convenis que suposin la modificació o la derogació d'alguna llei o exigeixin mesures legislatives per a la seva execució.

2. El Congrés i el Senat seran informats immediatament de la conclusió dels altres tractats o convenis.

Article 95.

1. La celebració d'un tractat internacional que contingui estipulacions contràries a la Constitució exigirà la revisió constitucional prèvia.
2. El Govern o qualsevol de les Cambres pot requerir el Tribunal Constitucional perquè declari si aquesta contradicció existeix o no.

Article 96.

1. Els tractats internacionals celebrats vàlidament formaran part de l'ordenament intern una vegada hagin estat publicats oficialment a Espanya. Les seves disposicions només podran ser derogades, modificades o suspeses en la forma prevista en els mateixos tractats o d'acord amb les normes generals del Dret internacional.
2. Per a denunciar els tractats i els convenis internacionals es farà servir el mateix procediment previst per a aprovar-los en l'article 94.

TÍTOL IV

Del Govern i de l'Administració

Article 97.

El Govern dirigeix la política interior i l'exterior, l'Administració civil i militar i la defensa de l'Estat. Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d'acord amb la Constitució i amb les lleis.

Article 98.

1. El Govern es compon del President, els Vice-presidents en el seu cas, els Ministres i els altres membres que estableixi la llei.
2. El President dirigeix l'acció del Govern i coordina les funcions dels altres membres d'aquest, sens perjudici de la competència ni de la responsabilitat directa d'ells en la seva gestió.
3. Els membres del Govern no podran exercir altres funcions representatives que les pròpies del mandat parlamentari, ni qualsevol altra funció pública que no derivi del seu càrrec, ni cap activitat professional o mercantil.
4. La llei regularà l'Estatut i les incompatibilitats dels membres del Govern.

Article 99.

1. Després de cada renovació del Congrés dels Diputats, i en els altres casos en què sigui procedent, el Rei, prèvia consulta amb els representants designats pels Grups Polítics amb representació parlamentària i a través del President del Congrés, proposarà un candidat a la Presidència del Govern.
2. El candidat proposat segons el que estableix l'apartat anterior exposarà davant el Congrés dels Diputats el programa polític del Govern que pretengui formar i demanarà la confiança de la Cambra.
3. Si el Congrés dels Diputats atorgava la seva confiança al dit candidat mitjançant el vot de la majoria absoluta dels seus membres, el Rei el nomenarà President. En el cas de no obtenir la dita majoria, la mateixa proposta serà sotmesa a una nova votació quaranta-vuit hores després de l'anterior i s'entendrà que la confiança ha estat atorgada si obtenia la majoria simple.
4. Si, una vegada fetes les votacions esmentades, no fos atorgada la confiança per a la investidura, es tramitaran propostes successives en la forma prevista en els apartats anteriors.
5. Si, després d'haver transcorregut el termini de dos mesos a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat hagués obtingut la confiança del Congrés, el Rei dissoldrà totes dues Cambres i convocarà noves eleccions amb l'aprovació del President del Congrés.

Article 100.

Els altres membres del Govern seran nomenats i remoguts pel Rei a propos del seu President.

Article 101.

1. El Govern cessa després de la celebració d'eleccions generals en els casos de pèrdua de la confiança parlamentària prevists per la Constitució, o per causa de la dimissió o la defunció del seu President.
2. El Govern cessant continuarà en funcions fins a la presa de possessió del nou Govern.

Article 102.

1. La responsabilitat criminal del President i dels altres membres del Govern serà exigible, en el seu cas, davant la Sala del Penal del Tribunal Suprem.
2. Si l'acusació fos per traició o per qualsevol delicte contra la seguretat de l'Estat en l'exercici de les seves funcions, només podrà ser plantejada per iniciativa de la quarta part dels membres del Congrés i amb l'aprovació de la majoria absoluta d'aquesta Cambra.
3. La prerrogativa reial de gràcia no serà aplicable a cap dels supòsits del present article.

Article 103.

1. L'Administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
2. Els òrgans de l'Administració de l'Estat són creats, regits i coordinats d'acord amb la llei.
3. La llei regularà l'estatut dels funcionaris públics, l'accés a la funció pública d'acord amb els principis del mèrit i de la capacitat, les peculiaritats de l'exercici del seu dret a la sindicació, el sistema d'incompatibilitats i les garanties per a la imparcialitat en l'exercici de les seves funcions.

Article 104.

1. Les Forces i els Cossos de Seguretat sota la dependència del Govern tindran per missió protegir el lliure exercici dels drets i de les llibertats i garantitzar la seguretat ciutadana.
2. Una llei orgànica en determinarà les funcions, els principis bàsics d'actuació i l'estatut.

Article 105.

La llei regularà:

a) L'audiència dels ciutadans directament o a través de les organitzacions i associacions reconegudes per la llei en el procediment d'elaboració de les disposicions administratives que els afectin.

b) L'accés dels ciutadans als arxius i als registres administratius, salvant el que afecti a la seguretat i a la defensa de l'Estat, la indagació dels delictes i la intimitat de les persones.

c) El procediment a través del qual han de fer-se els actes administratius, amb garantia, quan sigui procedent, de l'audiència de l'interessat

Article 106.

1. Els tribunals controlen la potestat reglamentària, la legalitat de l'actuació administrativa i la submissió d'aquesta als fins que la justifiquen.

2. Els particulars, en els termes establits per la llei, tendran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que patesquin en qualsevol dei seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.

Article 107.

El Consell d'Estat és l'òrgan consultiu suprem del Govern. Una llei orgànica en regularà la composició i la competència.

TÍTOL V

De les relacions entre el Govern i les Corts Generals

Article 108.

El Govern respon solidàriament de la seva gestió política davant el Congrés dels Diputats.

Article 109.

Les Cambres i les seves Comissions podran requerir a través dels Presidents d'aquelles, la informació i l'ajut que necessitin del Govern i dels seus Departaments i de qualssevol autoritats de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Article 110.

1. Les Cambres i les seves Comissions poden requerir la presència dels membres del Govern.

2. Els membres del Govern tenen accés a les sessions de les Cambres i a les seves Comissions i la facultat de fer-s'hi escoltar, i podran demanar que hi informin els funcionaris dels seus Departaments.

Article 111.

1. El Govern i cadascun dels seus membres resten sotmesos a les interpel.lacions i a les preguntes que els formulin a les Cambres. Per a aquesta classe de debat els Reglaments establiran un temps mínim setmanal.

2. Tota interpel.lació podrà donar lloc a una moció, amb la qual la Cambra manifesti la seva posició.

Article 112.

El President del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, pot plantejar davant el Congrés dels Diputats la qüestió de confiança sobre el seu programa o sobre una declaració de política general. S'entendrà que la confiança ha estat atorgada si voten favorablement la majoria simple dels Diputats.

Article 113.

1. El Congrés dels Diputats pot exigir la responsabilitat política del Govern mitjançant l'adopció de la moció de censura per majoria absoluta.

2. La moció de censura haurà de ser proposada com a mínim per la desena part dels Diputats i haurà d'incloure un candidat a la Presidència del Govern.

3. La moció de censura no podrà ser votada fins que hagin transcorregut deu dies des de la presentació. Dins els dos primers dies d'aquest termini podran presentar-se mocions alternatives.

4. Si la moció de censura no fos aprovada pel Congrès, els signataris no en podran presentar cap més durant el mateix període de sessions.

Article 114.

1. Si el Congrés nega la confiança al Govern, aquest presentarà la dimissió al Rei. A continuació s'haurà de procedir a la designació de President de Govern segons el que disposa l'article 99.

2. Si el Congrès adopta una moció de censura, el Govern presentarà la dimissió al Rei, i s'entendrà que resta investit de la confiança de la Cambra el candidat proposat dins la moció als efectes prevists per l'article 99. El Rei el nomenarà President del Govern.

Article 115.

1. El President del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, podrà proposar la dissolució del Congrés, del Senat o de les Corts Generals, la qual serà decretada pel Rei. El decret de dissolució fixarà la data de les eleccions.

2. La proposta de dissolució no podrà presentar-se quan hi hagi en tràmit una moció de censura.

3. No serà procedent cap nova dissolució abans que hagi transcorregut un any des de l'anterior, llevat del que disposa l'article 99, apartat 5.

Article 116.

1. Una llei orgànica regularà els estats d'alarma, d'excepció i de setge, i les competències i limitacions corresponents.

2. L'estat d'alarma serà declarat pel Govern mitjançant un decret acordat en un Consell de Ministres, per una durada màxima de quinze dies; haurà de donar-ne compte al Congrés dels Diputats, que serà reunit immediatament a aquest efecte i no podrà ser prorrogat sense l'autorització d'aquesta mateixa Cambra. El decret determinarà l'àmbit territorial al qual s'estenen els efectes de la declaració.

3. L'estat d'excepció serà declarat pel Govern mitjançant un decret acordat en un Consell de Ministres, prèvia autorització del Congrés dels Diputats. L'autorització i la proclamació de l'estat d'excepció haurà de determinar expressament els efectes d'aquest, l'àmbit territorial al qual s'estengui i la seva durada, que no podrà excedir de trenta dies, prorrogables per un termini igual, amb els mateixos requisits.

4. L'estat de setge serà declarat per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, a proposició exclusiva del Govern. El Congrés en determinarà l'àmbit territorial, la durada i les condicions.

5. El Congrés no podrà ser dissolt mentre restin declarats alguns dels estats compresos en el present article; si les Cambres no es trobassin en període de sessions, restaran convocades automàticament. Durant la vigència d'aquests estats no podrà interrompre's el funcionament de les Cambres ni el dels altres poders constitucionals. Si, havent estat dissolt el Congrés o havent-ne expirat el mandat, es produís alguna de les situacions que donen lloc a qualsevol dels dits estats, les competències del Congrés seran assumides per la seva Diputació Permanent.

6. La declaració dels estats d'alarma, d'excepció i de setge no modificarà el principi de responsabilitat del Govern ni dels seus agents reconeguts en la Constitució i en les lleis.

TÍTOL VI

Del poder judicial

Article 117.

1. La justicia emana del poble i és administrada en nom del Rei pels Jutges i pels Magistrats que integren el poder judicial, independents, inamovibles, responsables i sotmesos únicament a l'imperi de la llei.

2. Els Jutges i els Magistrats no podran ser remoguts, suspesos, traslladats ni jubilats més que per motiu de les causes que la llei preveu i amb les garanties que aquesta ofereix.

3. L'exercici de la potestad jurisdiccional, en qualsevol mena de processos, jutjant i fent complir allò que hagi estat jutjat, correspon exclusivament als Jutjats i als Tribunals que les lleis determinin, segons les normes de competència i de procediment que elles estabiesquin.

4. Els Jutjats i els Tribunals no exerciran funcions altres que les que assenyala l'apartat anterior i les que els siguin atribuïdes expressament per la llei en garantia de qualsevol dret.

5. El principi d'unitat jurisdiccional és la base de l'organització i del funcionament dels Tribunals. La llei regularà l'exercici de la jurisdicció militar dins l'àmbit estrictament castrense i en ocasió de l'estat de setge, d'acord amb els principis de la Constitució.

6. Resten prohibits els Tribunals d'excepció.

Article 118

Tothom té l'obligació de complir les sentències i les altres resolucions fermes dels Jutges i dels Tribunals i de prestar la col.laboració que aquests requeresquin en el curs del procés i en l'execució d'allò que hagi estat resolt.

Article 119.

La justicia serà gratuita quan la llei ho disposi, i, en qualsevol cas, per a aquells que acreditin insuficiència de recursos per a litigar.

Article 120.

1. Les actuacions judicials seran públiques, amb les excepcions previstes per les lleis de processament.
2. El procediment serà predominantment oral, sobretot en matèria criminal.
3. Les sentències seran motivades sempre i pronunciades en audiència pública.

Article 121.

Els danys causats per error judicial i els que siguin conseqüència del funcionament anormal de l'Administració de Justicia donaran dret a una indemnització a càrrec de l'Estat, de conformitat amb la llei.

Article 122.

1. La llei orgànica del poder judicial determinarà la constitució, el funcionament i el govern dels Jutjats i dels Tribunals, i l'estatut jurídic dels Jutges i dels Magistrats de carrera, els quals formaran un cos únic, i el del personal al servei de l'Administració de Justicia.
2. El Consell General del poder judicial és l'òrgan de govern d'aquest darrer. La llei orgànica n'establirà l'estatut i el règim d'incompatibilitats i les funcions dels seus membres, assenyaladament en matèria de nomenaments, ascensos, inspecció i règim disciplinari.
3. El Consell General del poder judicial serà integrat pel President del Tribunal Suprem, que el presidirà, i per vint membres nomenats pel Rei per a un periode de cinc anys. D'aquests, dotze entre els Jutges i els Magistrats de totés les categories judicials en els termes que establesqui la llei orgànica; quatre, a proposició del Congrés dels Diputats, i quatre a proposició del Senat, elegits en tots dos casos per majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, entre advocats i altres juristes, tots de competència reconeguda i amb més de quinze anys d'exercici professional.

Article 123.

1. El Tribunal Suprem, amb jurisdicció a tota Espanya, és l'òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres, llevat del que es disposa en matèria de garanties constitucionals.
2. El President del Tribunal Suprem serà nomenat pel Rei, a proposició del Consell General del poder judicial, en la forma que la llei determini.

Article 124.

1. El Ministeri Fiscal, sens perjudici de les funcions encomanades a altres òrgans, té la missió de promoure l'acció de la justicia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interés públic tutelat per la llei, d'ofici o bé a petició dels interessats, així com vetlar per la independència dels Tribunals i procurar davant ells la satisfacció de l'interés social.
2. El Ministeri Fiscal exerceix les seves funcions per mitjà d'òrgans propis, de conformitat amb els principis d'unitat d'actuació i dependència jeràrquica i subjectant-se, en tot cas, als de legalitat i imparcialitat.
3. La llei regularà l'estatut orgànic del Ministeri Fiscal.
4. El Fiscal General de l'Estat serà nomenat pel Rei, a proposició del Govern, havent estat escoltat el Consell General del poder judicial.

Article 125.

Els ciutadans podran exercir l'acció popular i participar en l'Administració de Justicia mitjançant la institució del Jurat, en la forma i en el processos penals que la llei determini, així com en els Tribunals consuetudinaris i tradicionals.

Article 126.

La policia judicial depèn dels Jutges, dels Tribunals i del Ministeri Fiscal en les seves funcions d'indagació del delicte y de descobriment i assegurament del delinqüent, en els termes que la llei establesqui.

Article 127.

1. Els Jutges i els Magistrats i també els Fiscals, mentre restin en actiu, no podran exercir altres càrrécs públics ni pertànyer a partits polítics o a sindicats. La llei establirà el sistema i les modalitats d'associació professional dels Jutges, del Magistrats i dels Fiscals.
2. La llei establirà el règim d'incompatibilitats dels membres del poder judicial, haurà d'assegurar la seva total independència.

TÍTOL VII

Economia i Finances

Article 128.

1. Tota la riquesa del país en les seves diverses formes, i sigui quina sigui la seva titularitat, resta subordinada a l'interés general.
2. Es reconeix la iniciativa pública en l'activitat económica. Mitjançant una llei, determinats recursos o serveis essencials podran ser reservats al sector públic, especialment en cas de monopoli; podrà ser acordada, també, la intervenció d'empreses quan ho exigesqui l'interés general.

Article 129.

1. La llei establirà les formes de participació dels interessats en la Seguretat Social i en l'activitat dels organismes públics la funció dels quals afecti directament la qualitat de la vida o l'interés general.
2. Els poders públics promouran eficaçment les diverses formes de participació en l'empresa i fomentaran, mitjançant una legislació adequada, les societats cooperatives. També establiran els mitjans que facilitin l'accés dels treballadors a la propietat dels mitjans de producció.

Article 130.

1. Els poders públics atendran a la modernització i al desenvolupament de tots els sectors econòmics i, assenyaladament, de l'agricultura, la ramaderia, la pesca i l'artesania, a fi d'equiparar el nivell de vida de tots els espanyols.
2. Amb la mateixa finalitat es donarà un tractament especial a les zones de muntanya.

Article 131.

1. L'Estat, mitjançant una llei, podrà planificar l'activitat econòmica general per a atendre les necessitats col.lectives, equilibrar i harmonitzar el desenvolupament regional i sectorial i estimular el creixement de la renda i de la riquesa i la distribució més justa d'aquesta darrera.
2. El Govern elaborarà els projectes de planificació d'acord amb les previsions que li siguin subministrades per les Comunitats Autònomes i l'assessorament i la col.laboració dels sindicats i de les altres organitzacions professionals, empresarials i econòmiques. Amb aquesta finalitat es constituirà un Consell, la composició i les funcions del qual desenvoluparà una llei.

Article 132.

1. La llei regularà el règim jurídic dels béns de domini públic i dels comunals inspirant-se en els principis d'inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat, i també en regularà la desafectació.
2. Són béns de domini públic estatal els que la llei determini i, en qualsevol cas, la zona marítimo-terrestre, les platges, la mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i de la plataforma continental.
3. Seran regulats per llei el Patrimoni de l'Estat i el Patrimoni Nacional, i l'administració, defensa i conservació d'aquests.

Article 133.

1. La potestat originària per a establir els tributs correspon exclusivament a l'Estat mitjançant una llei.
2. Les Comunitats Autònomes i les Corporacions locals podran establir i exigir tributs, d'acord amb la Constitució i amb les lleis.
3. Qualsevol benefici fiscal que afecti els tributs de l'Estat haurà d'establir-se en virtut d'una llei.
4. Les administracions públiques solament podran contreure obligacions financieres i fer despeses d'acord amb les lleis.

Article 134.

1. Correspon al Govern d'elaborar els pressuposts generals de l'Estat, i a les Corts Generals d'examinar-los, esmenar-los i aprovar-los.
2. Els pressuposts generals de l'Estat tindran caràcter anual, inclouran la totalitat de les despeses i els ingressos del sector públic estatal i s'hi consignarà l'import dels beneficis fiscals que afectin els tributs de l'Estat.
3. El Govern tindrà l'obligació de presentar davant el Congrés dels Diputats els pressuposts generals, tres mesos abans, com a mínim, que expirin els de l'any anterior.

4. Si la Llei de Pressuposts no s'aprovava abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, els Pressuposts de l'exercici anterior restaran prorrogats automàticament fins que s'aprovin els nous.

5. Havent aprovat els pressuposts generals de l'Estat, el Govern podrà presentar projectes de llei que impliquin l'augment de la despesa pública o la disminució dels ingressos corresponents a aquell mateix exercici pressupostari.

6. Tota proposició o esmena que suposi un augment dels crèdits o una disminució dels ingressos pressupostaris requerirà la conformitat del Govern per tal de ser tramitada.

7. La Llei de Pressuposts no pot crear tributs. Podrà modificar-los si una llei tributària substantiva ho fa preveure.

Article 135.

1. El Govern haurà de d'estar autoritzat per una llei per a d'emetre deute públic o contreure crèdit.

2. Es considerarà sempre que els crèdits per a abonar el pagament d'interessos i capital del Deute Públic són inclosos en l'estat de despeses dels pressuposts, i no podran ser objecte d'esmenes ni de modificacions mentre s'ajustin a les condicions de la llei d'emissió.

Article 136.

1. El Tribunal de Comptes és l'òrgan fiscalitzador suprem dels comptes i de la gestió econòmica de l'Estat i, alhora, del sector públic. Dependrà directament de les Corts Generals i exercirà les seves funcions delegadament d'elles en l'examen i la comprovació del Compte General de l'Estat.

2. Els comptes de l'Estat i del sector públic estatal seran retuts al Tribunal de Comptes, el qual els censurarà. El Tribunal de Comptes, sens perjudici de la seva jurisdicció, trametrà a les Corts Generals un informe anual en què, sempre que sigui procedent, comunicarà les infraccions o les responsabilitats en què, segons el seu judici, s'hagi incorregut.

3. Els membres del Tribunal de Comptes gaudiran de la mateixa independència i inamobilitat i restaran sotmesos a les mateixes incompatibilitats que els Jutges.

4. Una llei orgànica regularà la composició, l'organització i les funcions del Tribunal de Comptes.

TÍTOL VIII

De l'organització territorial de l'Estat

CAPÍTOL PRIMER

Principis generals

Article 137.

L'Estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en les Comunitats Autònomes que es constituesquin. Totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels interessos respectius.

Article 138.

1. L'Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat en l'article 2 de la Constitució i vetlarà per l'establiment d'un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol, i atendrà assenyaladament les circumstàncies del fet insular.

2. Les diferències entre els Estatuts de les diverses Comunitats Autònomes no podran implicar en cap cas privilegis econòmics o socials.

Article 139.

1. Tots els espanyols tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions en qualsevol part del territori de l'Estat.

2. Cap autoritat no podrà adoptar mesures que directament o indirectament obstaculitzin la llibertat de circulació i l'establiment de les persones i la lliure circulació de béns per tot el territori espanyol.

CAPÍTOL SEGON

De l'administració local

Article 140.

La Constitució garanteix l'autonomia dels municipis, els quals agudiran de personalitat jurídica plena. El govern i l'administració municipal correspon als respectius Ajustaments, integrats pels batles i els regidors. Els regidors seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal igual, lliure, directe i secret, en la forma establida per la llei. Els batles seran elegits pels regidors o pels veïns. La llei regularà les condicions en què sigui procedent el règim de consell obert.

Article 141.

1. La província és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinada per l'agrupació de municipis i la divisió territorial per al compliment de les activitats de l'Estat. Qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals per mitjà d'una llei orgànica.

2. El Govern i l'administració autònoma de les províncies seran encomanats a Diputacions o altres Corporacions de caràcter representatiu.

3. Es podran crear agrupacions de municipis diferents de la província.

4. En els arxipèlags, les illes tendran, a més, administració pròpia en forma de cabildos o consells.

Article 142.

Les Hisendes locals hauran de disposar dels mitjans suficients per a l'exercici de les funcions que la llei atribueix a les Corporacions respectives, i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de la participació en els de l'Estat i en els de les Comunitats Autònomes.

CAPÍTOL TERCER

De les comunitats autònomes

Article 143.

1. En l'exercici del dret a l'autonomia reconegut en l'article 2 de la Constitució, les províncies limítrofes que tenguin característiques històriques, culturals i econòmiques comunes, els territoris insulars i les províncies d'entitat regional històrica podran accedir a l'autogovern i constituir-se en Comunitats Autònomes d'acord amb el que preveu aquest Títol i els estatuts respectius.

2. La iniciativa del procés autonòmic correspon a totes les diputacions interessades o a l'òrgan interinsular corresponent, i als dos terços dels municipis la població dels quals representi, com a mínim, la majoria del cens electoral de cada província o de cada illa. Aquests requisits hauran d'acomplir-se dins el termini de sis mesos d'ençà del primer acord al respecte adoptat per alguna de les Corporacions locals interessades.

3. La iniciativa, en el cas de no reeixir, només podrà repetir-se al cap de cinc anys.

Article 144.

Per motiu d'interés nacional, i mitjançat una llei orgànica, les Corts Generals podran:

a) Autoritzar la constitució d'una comunitat autònoma encara que el seu àmbit territorial no superi el d'una província i no reuneixi les condicions de l'apartat 1 de l'article 143.

b) Autoritzar o acordar, en el seu cas, un estatut d'autonomia a territoris que no es trobin integrats en l'organització provincial.

c) Substituir la iniciativa de les Corporacions locals a què es refereix l'apartat 2 de l'article 143.

Article 145.

1. En cap cas s'admetrà la federació de Comunitats Autònomes.

2. Els estatuts podran preveure els casos, requisits i termes en què les Comunitats Autònomes podran celebrar convenis entre elles per tal d'acomplir i prestar serveis que els siguin propis; i podran preveure, també, el caràcter i els efectes de la corresponent comunicació a les Corts Generals. En els altres casos, els acords de cooperació entre les Comunitats Autònomes requeriran l'autorització de les Corts Generals.

Article 146.

El projecte d'Estatut serà elaborat per una assemblea composta pels membres de la Diputació o l'òrgan interinsular de les províncies afectades i pels Diputats i els Senadors que n'hagin estat elegits, i serà elevat a les Corts Generals, les quals li donaran tramitació de llei.

Article 147.

1. Dins els termes de la present Constitució, els estatuts seran la norma institucional bàsica de cada Comunitat Autònoma, i l'Estat els reconeixerà i els empararà com a part integrant del seu ordenament jurídic.

2. Els estatuts d'autonomia hauran de fer constar:

a) La denominació de la Comunitat que s'ajusti millor a la seva identitat històrica.

b) La delimitació del territori.
c) La denominació, l'organització i la seu de les institucions autònomes pròpies.
d) Les competències assumides dins el marc establert per la Constitució i les bases per al traspàs dels serveis que els correspondran.

3. La reforma dels Estatuts s'ajustarà al procediment que ells mateixos estableixin i requerirà, en quasevol cas, l'aprovació de les Corts Generals per llei orgànica.

Article 148.

1. Les Comunitats Autònomes podran assumir competències en les matèries següents:

1 Organització de les seves institucions d'autogovern.
2 Les alteracions dels termes municipals compresos en el seu territori i, en general, les funcions que corresponguin a l'Administració de l'Estat sobre les Corporacions locals, la transferència de les quals autoritzi la legislació sobre Règim Local.
3 Ordenació del territori, urbanisme i habitatge.
4 Les obres públiques d'interés per a la Comunitats Autònoma dins el seu territori.
5 Els ferrocarrils i les carreteres l'itinerari dels quals transcorri íntegrament dins el territori de la Comunitat Autònoma i, de la mateixa manera, el transport fet per aquests mitjans o per cable.
6 Els ports de refugi, els ports i els aeroports esportius i, en general, els que no acomplesquin activitats comercials.
7 L'agricultura i la ramaderia, d'acord amb l'ordenació general de l'economia.
8 Espais forestals i el seu aprofitament.
9 La gestió en matèria de protecció del medi ambient.
10 Els projectes, la construcció i l'explotació dels aprofitaments hidràulics, canals i regatges d'interés per a la Comunitat Autònoma, les aigües minerals i les termals.
11 La pesca en aigües interiors, la de marisc i l'aqüicultura, la caça i la pesca fluvial.
12 Fires interiors.
13 El foment del desenvolupament econòmic de la Comunitat Autònoma dins els objectius marcats per la política econòmica nacional.
14 L'artesania.
15 Els museus, les biblioteques i els conservatoris de música d'interés per a la Comunitat Autònoma.
16 El patrimoni monumental d'interés per a la Comunitat Autònoma.
17 El foment de la cultura, de la investigació i, en el seu cas, de l'ensenyament de la llengua de la Comunitat Autònoma.
18 La promoció i l'ordenació del turisme dins el seu àmbit territorial.
19 Promoció de l'esport i del lleure.
20 Assistència social.
21 Sanitat i Higiene.
22 La vigilància i la protecció dels seus edificis i de les seves instal·lacions. La coordinació i altres facultats en relació amb les policies locals en els termes que estableixi una llei orgànica.

2. Havent transcorregut cinc anys, i mitjançant la reforma dels seus estatuts, les Comunitats Autònomes podran ampliar successivament les seves competències dins el marc establit per l'article 149.

Article 149.

1. L'Estat té la competència exclusiva sobre les matèries següents:

1 La regulació de les condicions bàsiques que garantesquin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals.
2 Nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d'asil.
3 Relacions internacionals.
4 Defensa i Forces Armades.
5 Administració de Justícia.
6 Legislació mercantil, penal i penitenciària; legislació processal, sens perjudici de les especialitats que en aquest ordre es derivin necessàriament de les particularitats del dret substantiu de les Comunitats Autònomes.
7 Legislació laboral; sens perjudici que sigui executada pels òrgans de les Comunitats Autònomes.
8 Legislació civil, sens perjudici de la conservació, modificació i desenvolupament dels drets civils, forals o especials per part de les Comunitats Autònomes allà on n'hi hagi. En qualsevol cas, les regles relatives a l'aplicació i a l'eficàcia de les normes jurídiques, relacions jurídico-civils relatives a les formes de matrimoni, ordenació dels registres i instruments públics, bases de les obligacions contractuals, normes per a resoldre els conflictes de lleis i la determinació de les fonts del Dret, d'acord, en aquest darrer cas, amb les normes del dret foral o especial.
9 Legislació sobre propietat intel·lectual i industrial.
10 Règim duaner i aranzelari; comerç exterior.
11 Sistema monetari: divises, canvi i convertibilitat; bases de l'ordenació del crèdit, banca i assegurances.
12 Legislació sobre pesos i mesures, determinació de l'hora oficial.
13 Bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica.
14 Hisenda general i Deute de l'Estat.
15 Foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica.
16 Sanitat exterior. Bases i coordinació general de la sanitat. Legislació sobre productes farmacèutics.
17 Legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social, sens perjudici que les Comunitats Autònomes n'executin els serveis.
18 Les bases del règim jurídic de les Administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris, les quals garantiran, en qualsevol cas, als administrats un tractament comú davant aquelles; el procediment administratiu comú, sens perjudici de les especialitats derivades de l'organització pròpia de les Comunitats Autònomes; legislació sobre expropiació forçosa; legislació bàsica sobre contractes i concessions administratives i el sistema de responsabilitat de totes les Administracions públiques.
19 Pesca marítima, sens perjudici de les competències que s'atribueixin a les Comunitats Autònomes en aquest sector.
20 Marina mercant i abanderament de vaixells, il·luminació de costes i senyals marítims; ports d'interés general; control de l'espai aeri, trànsit i transport aeri; servei meteorològic i matriculació d'aeronaus.
21 Ferrocarrils i transports terrestres que circulin dins els territoris de més d'una Comunitat Autònoma; règim general de comunicacions; tràfic i circulació de vehicles de motor; correus i telecomunicacions; cables aeris, submarins i radiocomunicació.
22 La legislació, ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics si les aigües passen per més d'una Comunitat Autònoma, i l'autorització de les instal·lacions elèctriques si l'aprofitament afecta una altra Comunitat o si l'energia és transportada fora del seu àmbit territorial.
23 Legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de les Comunitas Autònomes per a l'establiment de normes addicionals de protecció. La legislació básica sobre espais i aprofitaments forestals i vies ramaderes.
24 Obres públiques d'interés general o la realització de les quals afecti més d'una Comunitat Autònoma.
25 Bases del régim miner i energètic.
26 Règim de producció, comerç, tinença i ús d'armes i d'explosius.
27 Normes bàsiques del règim de premsa, radio i televisió, i, en general, de tots els mitjans de comunicació social, sens perjudici de les facultats de desenvolupament i execució que corresponguin a les Comunitats Autònomes.
28 Defensa del patrimoni cultural, artístic i monumental espanyol contra l'exportació i l'expoliació; museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal, sens perjudici que les Comunitats Autònomes n'exercesquin la gestió.
29 Seguretat pública, sens perjudici que les Comunitats Autònomes puguin crear policies en la forma que els respectius estatuts estableixin dins el marc del que disposi una llei orgànica.
30 Regulació de les condicions d'obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals, i normes bàsiques per al desenvolupament de l'article 27 de la Constitució, a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.
31 Estadística per a finalitats estatals.
32 Autorització per a la convocatòria de consultes populars per via de referèndum.

2. Sens perjudici de les competències que podran assumir les Comunitats Autònomes, l'Estat considerarà el servei de la cultura com un deure i una atribució essencial i facilitarà la comunicació cultural entre les Comunitats Autònomes d'acord amb elles.

3. Les matèries no atribuïdes expressament a l'Estat per aquesta Constitució podran correspondre a les Comunitats Autò-

nomes en virtut dels Estatuts respectius. La competència sobre les matèries que no hagin estat assumides pels Estatuts d'Autonomia correspondrà a l'Estat, les normes del qual prevaldran, en cas de conflicte, sobre les de les Comunitats Autònomes en tot allò que no hagi estat atribuit a la competència exclusiva d'aquestes darreres. En qualsevol cas, el Dret estatal serà supletori del dret de les Comunitats Autònomes.

Article 150.

1. Les Corts Generals, en matèries de comptència estatal, podran atribuir a totes o a algunes de les Comunitats Autònomes la facultat de dictar, per a elles mateixes, normes legislatives dins del marc dels principis, bases i directrius fixats per una llei estatal. Sens perjudici de la competència dels Tribunals, dins cada llei-marc s'establirà la modalitat del control de les Corts Generals sobre aquestes normes legislatives de les Comunitats Autònomes.

2. L'Estat podrà transferir o delegar a les Comunitats Autònomes, mitjançant una llei orgànica, facultats corresponents a una matèria de titularitat estatal que per la seva naturalesa siguin susceptibles de transferència o de delegació. La llei preveurà en cada cas la transferència corresponent de mitjans financers i també les formes de control que l'Estat es reservi.

3. L'Estat podrà dictar lleis que estableixin els principis necessaris per a harmonitzar les disposicions normatives de les Comunitats, fins i tot en el cas de matèries atribuïdes a la seva competència, sempre que ho demani l'interés general. Correspon a les Corts Generals d'apreciar l'existència d'aquesta necessitat, per majoria absoluta de cada Cambra.

Article 151.

1. No caldrà deixar transcórrer el termini de cinc anys a què es refereix l'apartat 2 de l'article 148 en cas que, dins el termini que estableix l'article 143.2, acordin la iniciativa del procés autonòmic, a més de les Diputacions o els òrgans interinsulars corresponents, les tres quartes parts dels municipis de cadascuna de les provincies afectades, les quals representin, com a mínim, la majoria del cens electoral de cadascuna, i aquesta iniciativa sigui ratificada mitjançant un referèndum pel vot afirmatiu de la majoria absoluta dels electors de cada provincia en els termes que estableixi una llei orgànica.

2. En el cas previst per l'apartat anterior, el procediment per a elaborar l'Estatut serà el següent:

1 El Govern convocarà tots els Diputats i Senadors elegits en les circumscripcions compreses dins l'àmbit territorial que pretengui accedir a l'autogovern per tal que es constituesquin en Assemblea, amb l'única finalitat d'elaborar l'Estatut d'autonomia corresponent, mitjançan l'acord de la majoria absoluta dels seus membres.

2 Una vegada hagi aprovat el projecte d'Estatut l'Assemblea de Parlamentaris, aquest serà tramès a la Comissió Constitucional del Congrés, la qual, dins el termini de dos mesos, l'examinarà amb el concurs i l'assistència d'una delegació de l'Assemblea proposant per tal de determinar-ne d'un acord comú la formulació definitiva.

3 Si s'arribava a un acord, el text que en resultàs serà sotmès al referèndum del cos electoral de les provincies compreses dins l'àmbit territorial de l'Estatut projectat.

4 Si el projecte d'Estatut és aprovat a cada provincia per la majoria dels vots emesos vàlidament, serà elevat a les Corts Generals. Els Plens de totes dues Cambres decidiran sobre el text per mitjà d'un vot de ratificació. Havent estat aprovat l'Estatut, el Rei el sancionarà i el promulgarà com a llei.

5 Si no s'arribava a l'acord a què es refereix l'apartat 2 d'aquest número, el projecte d'Estatut serà tramitat com a projecte de llei per les Corts Generals. El text que aquestes aprovin serà sotmès al referèndum del cos electoral de les provincies compreses dins l'àmbit territorial de l'Estatut projectat. Si fos aprovat per la majoria dels vots emesos vàlidament a cada provincia, la promulgació serà feta en els termes del paràgraf anterior.

3. En els casos prevists pels paràgrafs 4 i 5 de l'apartat anterior, la manca d'aprovació del projecte d'Estatut per part d'una o de més d'una provincia no impedirà la constitució de la Comunitat Autònoma projectada per part de les altres en la forma que estableixi la llei orgànica prevista per l'apartat 1 d'aquest article.

Article 152.

1. En els Estatuts aprovats pel procediment a què es refereix l'article anterior, l'organització institucional autonòmica es basarà en una Assemblea Legislativa elegida per sufragi universal d'acord amb un sistema de representació proporcional que asseguri també la representació de les diverses zones del territori; un Consell de Govern amb funcions executives i administratives, i un President, elegit per l'Assemblea entre els seus membres i nomenat pel Rei, al qual correspon la direcció del Consell de Govern, la suprema representació de la comunitat respectiva i la de l'Estat dins aquella. El President i els membres del Consell de Govern seran responsables políticament davant l'Assemblea. Un Tribunal Superior de Justícia, sens perjudici de la jurisdicció que correspongui al Tribunal Suprem, culminarà l'organització judicial dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma. En els Estatuts de les Comunitats Autònomes podran establir-se els supòsits i les formes de participació d'aquelles en l'organització de les demarcacions judicials del territori, tot de conformitat amb el que preveu la llei orgànica del poder judicial i dins la unitat i la independència pròpies d'aquest darrer. Sens perjudici del que disposa l'article 123, les successives instàncies processals, en el seu cas, s'esgotaran davant òrgans radicats en el mateix territori de la Comunitat Autònoma en què estigui l'òrgan competent en primera instància.

2. Una vegada hagin estat sancionats i promulgats els respectius Estatuts, només podran ser modificats mitjançant els procediments que ells mateixos estableixquin i mitjançant referèndum entre els electors inscrits en els censos corresponents.

3. Els Estatuts podran establir circunscripcions territorials pròpies que gaudiran de plena personalitat jurídica mitjançant l'agrupació de municipis limítrofs.

Article 153.

El control de l'activitat dels òrgans de les Comunitats Autònomes serà exercit:

a) Pel Tribunal Constitucional en allò que es refereixqui a la constitucionalitat de les seves disposicions administratives amb força de llei.

b) Pel Govern, previ dictamen del Consell d'Estat, en allò que pertoqui a l'exercici de funcions delegades a què es refereix l'apartat 2 de l'article 150.

c) Per la jurisdicció contencioso-administrativa en allò que es refereixqui a l'administració autònoma o a les seves normes reglamentàries.

d) Pel Tribunal de Comptes en els aspectes econòmics i pressupostaris.

Article 154.

Un delegat nomenat pel Govern dirigirà l'administració de l'Estat en el territori de la Comunitat Autònoma i la coordinarà, si és procedent, amb l'administració pròpia de la Comunitat.

Article 155.

1. Si una Comunitat Autònoma no complia les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposaven, o actuava de forma que atemptàs greument contra l'interés general d'Espanya, el Govern, previ requeriment desatès fet al President de la Comunitat Autònoma; amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat podrà adoptar les mesures necesàries per tal d'obligar-la al compliment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l'interés general esmentat.

2. Per a l'execució de les mesures previstes a l'apartat anterior, el Govern podrà donar instruccions a totes les autoritats de les Comunitats Autònomes.

Article 156.

1. Les Comunitats Autònomes gaudiran d'autonomia financera per a acomplir i exercir les seves competències d'acord amb els principis de coordinació amb la Hisenda estatal i de solidaritat entre tots els espanyols.

2. Les Comunitats Autònomes podran actuar com a delegats o col·laboradors de l'Estat en la tasca de recaptació, gestió i liquidació dels recursos tributaris d'aquest, d'acord amb les lleis i els Estatuts.

Article 157.

1. Els recursos de les Comunitats Autònomes seran constituïts per:

a) Impostos cedits totalment o parcialment per l'Estat; recàrrecs sobre impostos estatals i altres participacions en els ingressos de l'Estat.

b) Els seus propis impostos, taxes i contribucions especials.

c) Transferències d'un fons de compensació interterritorial i altres assignacions a càrrec dels Pressuposts Generals de l'Estat.

d) Rendiments procedents del seu patrimoni i ingressos de drets privat.

e) El producte de les operacions de crèdit.

2. Les Comunitats Autònomes no podran adoptar en cap cas mesures tributàries sobre béns situats fora del seu territori

o que constituesquin un obstacle per a la lliure circulació de mercaderies o de serveis.

3. L'exercici de les competències financeres enumerades en l'anterior apartat 1, les normes per a resoldre els conflictes que poguessin sorgir i les possibles formes de col·laboració financera entre les Comunitats Autònomes i l'Estat podran ser regulades per mitjà d'una llei orgànica.

Article 158.

1. En els Pressuposts Generals de l'Estat es podrà establir una assignació a les Comunitats Autònomes en funció del volum dels serveis i de les activitats estatals que hagin assumit i de la garantia d'un nivell mínim en la prestació dels serveis públics fonamentals en tot el territori espanyol.

2. Per tal de corregir desequilibris econòmics interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat es constituirà un Fons de Compensació destinat a despeses d'inversió, els recursos del qual seran distribuïts per les Corts Generals entre les Comunitats Autònomes i les províncies, en el seu cas.

TÍTOL IX

Del Tribunal Constitucional

Article 159.

1. El Tribunal Constitucional es compon de 12 membres nomenats pel Rei, dels quals, quatre a proposició del Congrés, per majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, quatre a proposició del Senat, amb idèntica majoria, dos a proposició del Govern, i dos a proposició del Consell General del Poder judicial.

2. Els membres del Tribunal Constitucional hauran de ser nomenats entre Magistrats i Fiscals, Professors d'Universitat, funcionaris públics i advocats, tots ells juristes de competència reconeguda amb més de quinze anys d'exercici professional.

3. El període de designació dels membres del Tribunal Constitucional tindrà una durada de nou anys i es renovaran per terços cada tres anys.

4. La condició de membre del Tribunal Constitucional és incompatible: amb qualsevol mandat representatiu; amb els càrrecs polítics o administratius; amb l'exercici de funcions directives en un partit polític o en un sindicat o d'un càrrec al seu servei; amb l'exercici de les carreres judicial i fiscal; i amb qualsevol activitat professional o mercantil.

Altrament, els membres del Tribunal Constitucional tindran les incompatibilitats pròpies dels membres del poder judicial.

5. Els membres del Tribunal Constitucional seran independents i inamovibles en l'exercici del seu mandat.

Article 160.

El president del Tribunal Constitucional serà nomenat entre els membres d'aquest, pel Rei, a proposició del mateix Tribunal en ple i per a un període de tres anys.

Article 161.

1. El Tribunal Constitucional té jurisdicció en tot el territori espanyol i és competent per a conèixer:

a) Del recurs d'inconstitucionalitat contra lleis i disposicions normatives amb força de llei. La declaració d'inconstitucionalitat d'una norma amb rang de llei, interpretada per la jurisprudència afectarà aquesta, però la sentència o sentències que n'hagin recaigut no perdran el valor de cosa jutjada.

b) Del recurs d'emparament per violació dels drets i de les llibertats contenguts en l'article 53.2 d'aquesta Constitució, en els casos i formes que la llei estableixi.

c) Dels conflictes de competència entre l'Estat i les Comunitats Autònomes o dels de les Comunitats Autònomes entre elles.

d) De les altres matèries que li atribueixin la Constitució o les lleis orgàniques.

2. El Govern podrà impugnar davant el Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les Comunitats Autònomes. La impugnació provocarà la suspensió de la disposició o de la resolució recorreguda, però el Tribunal, en el seu cas, haurà de ratificar-la o alçar-la en un termini no superior als cinc mesos.

Article 162.

1. Tenen legitimitat:

a) Per a interposar el recurs d'inconstitucionalitat, el President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta Diputats, cinquanta Senadors, els òrgans col·legiats executius de les Comunitats Autònomes i, en el seu cas, les seves Assemblees.

b) Per a interposar el recurs d'emparament, tota persona natural o jurídica que invoqui un interés legítim, a més del Defensor del Poble i del Ministeri Fiscal.

2. En els altres casos la llei orgànica determinarà les persones i els òrgans legitimats.

Article 163.

Quan en algun procés, un òrgan judicial consideri que una norma amb rang de llei, aplicable al cas, de la validesa de la qual depengui el veredicte, pugui ser contrària a la Constitució, plantejarà la qüestió davant el Tribunal Constitucional en els casos, en la forma i amb els efectes que la llei establesqui, que en cap cas seran suspensius.

Article 164.

1. Les sentències del Tribunal Constitucional es publicaran en el butlletí oficial de l'Estat amb els vots particulars, si n'hi hagués. Tenen el valor de cosa jutjada a partir de l'endemà d'haver estat publicades i no hi ha cap recurs en contra. Aquelles que declarin la inconstitucionalitat d'una llei o d'una norma amb força de llei i totes aquelles que no es limitin a l'estimació subjectiva d'un dret, tenen plens efectes davant tothom.

2. Llevat que en el veredicte es disposi una altra cosa, subsistirà la vigència de la llei en la part no afectada per la inconstitucionalitat.

Article 165.

Una llei orgànica regularà el funcionament del Tribunal Constitucional, l'estatut dels seus membres, el procediment davant aquell i les condicions per a l'exercici de les accions.

TÍTOL X

De la reforma constitucional

Article 166.

La iniciativa de reforma constitucional s'exercirà en la forma prevista en els apartats 1 i 2 de l'article 87.

Article 167.

1. Els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats per una majoria de les tres cinquenes parts de cada una de les Cambres. Si no hi hagués acord entre totes dues, s'intentarà obtenir-lo mitjançant la creació d'una Comissió de composició paritària de Diputats i Senadors que presentarà un text que serà votat pel Congrés i pel Senat.

2. En cas de no aconseguir-se l'aprovació mitjançant el procediment de l'apartat anterior, i sempre que el text hagués obtingut el vot favorable de la majoria absoluta del Senat, el Congrés, per majoria de les dues terceres parts, podrà aprovar la reforma.

3. Una vegada hagi estat aprovada la reforma per les Corts Generals, serà sotmesa a referèndum per tal de ser ratificada, sempre que ho demani una dècima part dels membres de qualsevol de les Cambres, dins l'espai dels quinze dies següents al de l'aprovació.

Article 168.

1. Si es proposava la revisió total de la Constitució o una de parcial que afectàs el títol Preliminar, el Capítol Segon, Secció 1.ª del Títol I, o el Títol II, es procedirà a l'aprovació del principi per majoria dels dos terços de cada Cambra, i a la dissolució immediata de les Corts.

2. Les Cambres elegides hauran de ratificar la decisió i procedir a l'estudi del nou text constitucional, que haurà de ser aprovat per majoria dels dos terços de les dues Cambres.

3. Un cop aprovada la reforma per les Corts Generals, serà sotmesa a referèndum per a la seva ratificació.

Article 169.

No podrà iniciar-se la reforma constitucional en temps de guerra o de vigència d'algun dels estats previstos en l'article 116.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.

La Constitució empara i respecta els drets històrics dels territoris forals.

L'actualització general del dit règim foral es durà a terme, en el seu cas, dins el marc de la Constitució i dels Estatuts d'Autonomia.

Segona.

La declaració de majoria d'edat que conté l'article 12 d'aquesta Constitució no perjudica les situacions emparades pels drets forals en l'àmbit del dret privat.

Tercera.

La modificació del règim econòmic i fiscal de l'arxipèlag canari requerirà un informe previ de la Comunitat Autònoma o, en el seu cas, de l'òrgan provisional autonòmic.

Quarta.

En les Comunitats Autònomes on resideskui més d'una Audiència Territorial, els Estatuts d'Autonomia respectius podran mantenir les que ja hi eren i distribuir les competències entre elles, sempre de conformitat amb el que preveu la llei orgànica del poder judicial i mantenint-ne la unitat i la independència.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.

En els territoris dotats d'un règim provisional d'autonomia, els seus òrgans col.legiats superiors, per mitjà d'un acord adoptat per la majoria absoluta dels seus membres, podran substituir la iniciativa que l'apartat 2 de l'article 143 atribueix a les Diputacions Provincials o als òrgans interinsulars corresponents.

Segona.

Els territoris que en el passat haguessin plebiscitat afirmativament projectes d'Estatut d'Autonomia i en el moment de promulgar-se aquesta Constitució comptin amb règims provisionals d'autonomia, podran procedir immediatament en la forma prevista per l'apartat 2 de l'article 148, sempre que ho acordin així, per majoria absoluta, els òrgans preautonòmics col.legiats superiors, els quals hauran de comunicarho al Govern. El projecte d'Estatut serà elaborat d'acord amb allò que estableix l'article 151, número 2, a convocatòria de l'òrgan col.legiat preautonòmic.

Tercera.

La iniciativa del procés autonòmic per part de les Corporacions locals o dels seus membres, prevista per l'apartat 2 de l'article 143, s'entén que és diferida, amb tots els seus efectes, fins a la celebració de les primeres eleccions locals sota la vigència de la Constitució.

Quarta.

1. En el cas de Navarra, i a efectes de la seva incorporació al Consell General Basc o al règim autonòmic basc que el substituesqui, en lloc del que estableix l'article 143 de la Constitució, la iniciativa correspon a l'òrgan Foral competent, el qual adoptarà la seva decisió per majoria dels membres que la componen. Per tal que la dita iniciativa sigui vàlida, caldrà, a més, que la decisió de l'òrgan Foral competent sigui ratificada per un referèndum convocat expressament a aquest efecte, i aprovat per majoria dels vots vàlids emesos.

2. Si la iniciativa no reeixís, només es podrà tornar a produir en un altre període de mandat de l'òrgan Foral competent, i en qualsevol cas, quan hagi transcorregut el termini mínim que estableix l'article 143.

Cinquena.

Les ciutats de Ceuta i Melilla podran constituir-se en Comunitats Autònomes en el cas que ho decidesquin així els seus respectius Ajuntaments, per mitjà d'un acord adoptat per la majoria absoluta dels seus membres i que ho autoritzin les Corts Generals, mitjançant una llei orgànica, en els termes prevists per l'article 144.

Sisena.

Si es trameten a la Comissió de Constitució del Congrés diversos projectes d'Estatut, seran dictaminats per l'ordre en què hi haguessin entrat, i el termini de dos mesos a què es refereix l'article 151 començarà a comptar des que la Comissió acabi l'estudi del projecte o projectes de què successivament hagi conegut.

Setena.

Els organismes provisionals autonòmics es consideraran dissolts en els casos següents:

a) Una vegada hagin estat constituïts els òrgans que estableskuin els estatuts d'autonomia aprovats de conformitat amb aquesta Constitució.

b) En cas que la iniciativa del procés autonòmic no arribés a reeixir per tal com no complís els requisits prevists a l'article 143.

c) Si l'organisme no hagués exercit el dret que li reconeix la disposició transitòria primera dins el termini de 3 anys.

Vuitena.

1. Després de l'entrada en vigor de la present Constitució les Cambres que l'han aprovada assumiran les funcions i les competències que s'hi assenyalen respectivament per al Congrés i per al Senat, sense que en cap cas el seu mandat s'estengui més enllà del 15 de juny de 1981.

2. A efecte del que estableix l'article 99, la promulgació de la Constitució es considera com un cas constitucional en el qual és procedent d'aplicar-lo. A aquest efecte, a partir de la dita promulgació s'obrirà un període de trenta dies per a l'aplicació del que disposa el dit article. Durant aquest període, l'actual President del Govern, que assumirà les funcions i les competències que la Constitució estableix per a aquest càrrec, podrà optar per usar de la facultat que li reconeix l'article 115 o bé donar pas, amb la seva dimissió, a l'aplicació del que estableix l'article 99; en aquest darrer cas restarà en la situació prevista en l'apartat 2 de l'article 101.

3. En cas de dissolució, d'acord amb el que preveu l'article 115 i si no s'hagués produït legalment allò que preveuen els articles 68 i 69, caldrà aplicar a les eleccions les normes vigents anteriorment, amb les úniques excepcions que en allò que fa referència a inelegibilitats i incompatibilitats s'aplicarà directament allò que preveu l'incís segon de la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 70 de la Constitució i el que aquesta mateixa disposa respecte a l'edad de votar i el que estableix l'article 69.3.

Novena.

Als tres anys d'haver estat elegits per primera vegada els membres del Tribunal Constitucional es designarà per sorteig un grup de quatre membres de la mateixa procedència electiva que hagin de cessar i ser renovats. A aquest únic efecte, es consideraran agrupats com membres de la mateixa procedència els dos designats a proposició del Govern i els dos que procedeixen de la formulada pel Consell General del poder judicial. Després d'un segon període de tres anys es renovarà pel mateix procediment un dels dos grups no afectats pel sorteig anterior. Des d'aquell moment la renovació s'ajustarà al que estableix el número 3 de l'article 159.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

1. Resta derogada la Llei 1/1977, del 4 de gener per a la Reforma Política, i, en la mesura que no fossin ja derogades per aquesta llei, la de Principios Fundamentales del Movimiento del 17 de maig de 1958, el Fuero de los Españoles del 17 de juliol de 1945, el Fuero del Trabajo del 9 de març de 1938, la Ley Constitutiva de las Cortes del 17 de juliol de 1942, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado del 26 de juliol de 1947, modificades totes per la llei orgànica de l'Estat del 10 de gener de 1967 i de la mateixa manera aquesta darrera i la del Referèndum Nacional del 22 d'octubre de 1945.

2. En la mesura que poguessin conservar alguna vigència, es considera derogada definitivamente la Llei del 25 d'octubre de 1839 en allò que pogués afectar les províncies d'Alaba, Guipúscoa i Biscaia.

De la mateixa forma es considera derogada definitivament la Llei del 21 de juliol de 1876.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Constitució entrarà en vigor el mateix dia que en sigui publicat el text oficial al Butlletí Oficial de l'Estat. Serà publicada també en les altres llengües d'Espanya.

IMPRENTA NACIONAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
GACETA DE MADRID

Depósito Legal M. 1-1958 Año CCCXVIII Viernes 29 de diciembre de 1978 Núm. 311.3

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

APROVADA PER LES CORTS EL 31 D'OCTUBRE DE 1978

RATIFICADA PEL POBLE ESPANYOL EN REFERÈNDUM DE 6 DE DESEMBRE DE 1978

SANCIONADA PER S. M. EL REI DAVANT LES CORTS EL 27 DE DESEMBRE DE 1978

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

PREAMBUL

La Nació espanyola, amb el desig d'establir la justícia, la llibertat i la seguretat i de promoure el bé de tots els qui la integren, en ús de la seva sobirania, proclama la voluntat de:

Garantir la convivència democràtica dins la Constitució i les lleis de conformitat amb un ordre econòmic i social just.

Consolidar un Estat de Dret que asseguri l'imperi de la llei com a expressió de la voluntat popular.

Protegir tots els espanyols i els pobles d'Espanya en l'exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions.

Promoure el progrés de la cultura i de l'economia per tal d'assegurar a tothom una qualitat de vida digna.

Establir una societat democràtica avançada, i

Col.laborar a l'enfortiment d'unes relacions pacífiques i de cooperació eficaç entre tots els pobles de la Terra.

En conseqüència, les Corts aproven i el poble espanyol ratifica la següent,

CONSTITUCIÓ

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1.

1. Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.

2. La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat.

3. La forma política de l'Estat espanyol és la Monarquia parlamentària.

Article 2.

La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.

Article 3.

1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la.

2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts.

3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.

Article 4.

1. La bandera d'Espanya és formada per tres franges horitzontals, vermella, groga i vermella: la groga és de doble amplada que la de cadascuna de les vermelles.

2. Els Estatuts podran reconèixer banderes i ensenyes pròpies de les Comunitats Autònomes. Aquestes s'utilitzaran juntament amb la bandera d'Espanya en els edificis públics i en els actes oficials.

Article 5.

La capital de l'Estat és la vila de Madrid.

Article 6.

Els partits polítics expressen el pluralisme polític, concorren a la formació i a la manifestació de la voluntat popular i són instrument fonamental per a la participació política. Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliurement dins el respecte a la Constitució i a la Llei. L'estructura interna i el funcionament hauran de ser democràtics.

Article 7.

Els sindicats de treballadors i les associacions empresarials contribueixen a la defensa i a la promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis. Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliurement dins el respecte a la Constitució i a la Llei. L'estructura interna i el funcionament hauran de ser democràtics.

Article 8.

1. Les Forces Armades, constituïdes per l'Exèrcit de Terra, l'Armada i l'Exèrcit de l'Aire, tenen com a missió garantir la sobirania i la independència d'Espanya, defensar-ne la integritat territorial i l'ordenament constitucional.

2. Una llei orgànica regularà les bases de l'organització militar de conformitat amb els principis de la present Constitució.

Article 9.

1. Els ciutadans i els poders públics resten subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic.

2. Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

3. La Constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

TÍTOL I

Dels drets i dels deures fonamentals.

Article 10.

1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l'ordre polític i de la pau social.

2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconegui s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els Tractats i els Acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya.

CAPÍTOL PRIMER

Dels espanyols i dels estrangers

Article 11.

1. La nacionalitat espanyola s'adquireix, es conserva i es perd d'acord amb el que la Llei estableix.

2. Cap espanyol d'origen no podrà ser privat de la seva nacionalitat.

3. L'Estat podrà concertar tractats de doble nacionalitat amb els països iberoamericans o amb aquells que hagin tingut o tinguin una vinculació particular amb Espanya. En aquests països, encara que no reconeguin als seus ciutadans un dret recíproc, els espanyols podran naturalizar-s'hi sense perdre la nacionalitat d'origen.

Article 12.

Els espanyols són majors d'edat als 18 anys.

Article 13.

1. Els estrangers gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que garanteix el Títol present en els termes que estableixin els tractats i la llei.

2. Només els espanyols seran titulars dels drets reconeguts en l'article 23, llevat d'allò que, amb criteris de reciprocitat, pugui establir-se per tractat o per llei per al dret de sufragi actiu en les eleccions municipals.

3. L'extradició només es concedirà en compliment d'un tractat o de la llei, d'acord amb el principi de reciprocitat. Resten exclosos de l'extradició els delictes polítics. No seran considerats com a tals els actes de terrorisme.

4. La llei establirà la forma en què els ciutadans d'altres països i els apàtrides podran gaudir del dret d'asil a Espanya.

CAPÍTOL SEGON

Drets i llibertats

Article 14.

Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

SECCIÓ 1.ª

Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques

Article 15.

Tothom té dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap cas, ningú no pugui ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants. Resta abolida la pena de mort, llevat d'allò que puguin disposar les lleis penals militars per a temps de guerra.

Article 16.

1. Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense cap més limitació, quan siguin manifestats, que la necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit per la llei.

2. Ningú podrà ser obligat a declarar quant a la seva ideologia, religió o creences.

3. Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les conseqüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica i les altres confessions.

Article 17.

1. Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat. Ningú podrà ser privat de la seva llibertat, sinó amb l'observància del que estableix aquest article i en els casos i en la forma prevists en la llei.

2. La detenció preventiva no podrà durar més temps del que sigui estrictament necessari per a fer les indagacions per tal d'aclarir els fets i, en qualsevol cas, dins el termini màxim de setanta-dues hores, el detingut haurà de ser posat en llibertat o a disposició de l'autoritat judicial.

3. Tota persona detinguda ha de ser informada immediatament i de manera que li sigui comprensible, dels seus drets i de les raons de la detenció, i no podrà ser obligada a declarar. Es garanteix l'assistència d'advocat al detingut en les diligències policials i judicials, en la forma que la llei estableixi.

4. La llei regularà un procediment d'«habeas corpus» per tal de posar immediatament a disposició judicial tota persona detinguda il·legalment. També es determinarà per llei el termini màxim de durada de la presó provisional.

Article 18.

1. Es garanteix el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

2. El domicili és inviolable. No s'hi podrà entrar ni fer-hi cap escorcoll sense el consentiment del titular o sense resolució judicial, llevat del cas de delicte flagrant.

3. Es garanteix el secret de les comunicacions i, especialment, de les postals, telegràfiques i telefòniques, excepte en cas de resolució judicial.

4. La llei limitarà l'ús de la informàtica per tal de garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.

Article 19.

Els espanyols tenen dret a elegir lliurement la residència i a circular pel territori nacional.

Tenen també dret a entrar i sortir d'Espanya en la forma que la llei estableixi. Aquest dret no podrà ser limitat per motius polítics o ideològics.

Article 20.

1. Es reconeixen i es protegeixen els drets:

a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l'escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció.

b) A la producció i a la creació literària, artística, científica i tècnica.

c) A la llibertat de càtedra.

d) A comunicar o a rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l'exercici d'aquestes llibertats.

2. L'exercici d'aquests drets no pot ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia.

3. La llei regularà l'organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social que depenguin de l'Estat o de qualsevol entitat pública i garantirà l'accés a aquests mitjans dels grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diferents llengües d'Espanya.

4. Aquestes llibertats tenen el límit en el respecte als drets reconeguts en aquest Títol, en els preceptes de les lleis que el desenvolupen i, especialment, en el dret a l'honor, a la intimitat, a la imatge pròpia i a la protecció de la joventut i de la infància.

5. Només podrà acordar-se el segrest de publicacions, gravacions i altres mitjans d'informació en virtut de resolució judicial.

Article 21.

1. Es reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes. Per a l'exercici d'aquest dret no caldrà autorització prèvia.

2. En els casos de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions caldrà comunicar-ho prèviament a l'autoritat, la qual només podrà prohibir-les quan hi hagi motius fonamentats d'alteració de l'ordre públic, amb perill per a persones o béns.

Article 22.

1. Es reconeix el dret d'associació.

2. Les associacions que cerquin finalitats o facin servir mitjans tipificats com a delicte són il·legals.

3. Les associacions emparades per aquest article hauran d'inscriure's en un registre únicament a efectes de publicitat.

4. Les activitats de les associacions només podran ser dissoltes o suspeses en virtut d'una resolució judicial motivada.

5. Es prohibeixen les associacions secretes i les de caràcter paramilitar.

Article 23.

1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal.

2. Tenen també el dret d'accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalin.

Article 24.

1. Tothom té dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i dels tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, pugui haver-hi indefensió.

2. Tothom té dret al Jutge ordinari predeterminat per la llei, a ser defensat i assistit per un lletrat, a ser informat de l'acusació formulada contra ell, a un procés públic sense dilacions

indegudes i amb totes les garanties, a utilitzar els mitjans probatoris pertinents per la defensa pròpia, a no declarar contra si mateix, a no confessar-se culpable i a la presumpció d'innocència.

La llei regularà els casos en els quals, per raó de parentiu o de secret professional, no s'estarà obligat a declarar respecte de fets presumptament delictius.

Article 25.

1. Ningú pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa, segons la legislació vigent en aquell moment.

2. Les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat restaran orientades vers la reeducació i la reinserció social i no podran consistir en treballs forçats. El condemnat que estigués complint pena de presó gaudirà dels drets fonamentals d'aquest Capítol, llevat d'aquells que es trobin limitats expressament pel contingut del veredicte condemnatori, pel sentit de la pena o per la llei penitenciària. En qualsevol cas, tindrà dret a un treball remunerat, als beneficis corresponents de la Seguretat Social, i a l'accés a la cultura i al desenvolupament integral de la personalitat.

3. L'Administració civil no podrà imposar sancions que directament o subsidiàriament impliquin privació de llibertat.

Article 26.

Es prohibeixen els Tribunals d'Honor en l'àmbit de l'Administració civil i de les organitzacions professionals.

Article 27.

1. Tothom té dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament.

2. L'educació tindrà com objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals.

3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que els fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb les seves conviccions.

4. L'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït.

5. Els poders públics garanteixen el dret de tothom a l'educació, mitjançant una programació general de l'ensenyament, amb la participació col.lectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents.

6. Es reconeix a las persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents, dins el respecte als principis constitucionals.

7. Els professors, els pares i, en el seu cas, els alumnes intervindran en el control i en la gestió de tots els centres sostinguts per l'Administració amb fons públics, en la forma que la llei estableixi.

8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per tal de garantir el compliment de les lleis.

9. Els poders públics ajudaran aquells centres docents que reuneixin els requisits que la llei estableixi.

10. Es reconeix l'autonomia de les universitats, en la forma que la llei estableixi.

Article 28.

1. Tothom té dret a sindicar-se lliurement. La llei podrà limitar o suspendre l'exercici d'aquest dret a les Forces o als Instituts armats o als altres cossos, sotmesos a disciplina militar, i regularà les peculiaritats que l'exercici d'aquests presenti als funcionaris públics. La llibertat sindical comprèn el dret a fundar sindicats i a afiliar-s'hi a elecció, i el dret dels sindicats a formar confederacions i a fundar organitzacions sindicals internacionals o a afiliar-s'hi. Ningú podrà ser obligat a afiliar-se a un sindicat.

2. Es reconeix als treballadors el dret a la vaga per a la defensa dels seus interessos. La llei que reguli l'exercici d'aquest dret establirà les garanties que calguin per tal d'assegurar el manteniment dels serveis essencials a la comunitat.

Article 29.

1. Tots els espanyols tindran el dret de petició individual i col.lectiva, per escrit, en la forma i amb els efectes que determini la llei.

2. Els membres de les Forces o Institucions armades o dels cossos sotmesos a disciplina militar podran exercir aquest dret només individualment i d'acord amb allò que disposa la seva legislació específica.

SECCIÓ 2.ª

Dels drets i dels deures dels ciutadans

Article 30.

1. Els espanyols tenen el dret i el deure de defensar Espanya.

2. La llei fixarà les obligacions militars dels espanyols i regularà, amb les garanties que calguin, l'objecció de consciència i les altres causes d'exempció del servei militar obligatori; podrà imposar, en el seu cas, una prestació social substitutòria.

3. Podrà establir-se un servei civil per al compliment de fins d'interès general.

4. Mitjançant una llei podran regular-se els deures dels ciutadans en els casos de risc greu, catàstrofe o calamitat pública.

Article 31.

1. Tothom contribuirà al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori.

2. La despesa pública realitzarà una assignació equitativa dels recursos públics i la programació i l'execució respondran als criteris d'eficiència i economia.

Article 32.

1. L'home i la dona tenen dret a contreure matrimoni amb plena igualtat jurídica.

2. La llei regularà les formes de matrimoni, l'edat i la capacitat per a contreure'l, els drets i els deures dels cònjuges, les causes de separació i dissolució i els seus efectes.

Article 33.

1. Es reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència.

2. La funció social d'aquests drets en delimitarà el contingut, d'acord amb les lleis.

3. Ningú podrà ser privat dels seus béns ni dels seus drets sinó per causa justificada d'utilitat pública i d'interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin.

Article 34.

1. Es reconeix el dret de fundació per a finalitats d'interès general, d'acord amb la llei.

2. Regirà també per a les fundacions el que es disposa en els apartats 2 i 4 de l'article 22.

Article 35.

1. Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per tal de satisfer les seves necessitats i les de la seva família sense que en cap cas es pugui fer discriminació per raó de sexe.

2. La llei regularà un estatut dels treballadors.

Article 36.

La llei regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels Col.legis Professionals i l'exercici de les professions titulades. L'estructura interna i el funcionament dels Col.legis hauran de ser democràtics.

Article 37.

1. La llei garantirà el dret a la negociació col.lectiva del treball entre els representants dels treballadors i els empresaris, i la força vinculant dels convenis.

2. Es reconeix el dret dels treballadors i dels empresaris a adoptar mesures de conflicte col.lectiu. La llei que reguli l'exercici d'aquest dret, sens perjudici de les limitacions que pugui establir, inclourà les garanties que calguin per tal d'assegurar el funcionament dels serveis essencials a la comunitat.

Article 38.

Es reconeix la llibertat d'empresa dins el marc de l'economia de mercat. Els poders públics en garanteixen l'exercici e il protegeixen; protegeixen també la defensa de la productivitat d'acord amb les exigències de l'economia general i, en el seu cas, de la planificació.

CAPÍTOL TERCER

Dels principis rectors de la política social i econòmica

Article 39.

1. Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica y jurídica de la família.
2. Els poders públics asseguren també la protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb independència de la filiació, i de les mares, sigui quin sigui el seu estat civil. La llei farà possible la investigació de la paternitat.
3. Els pares han de prestar assistència completa als fills tinguts dins o fora del matrimoni, durant la minoria d'edat i en els altres casos en què la llei els hi obligui.
4. Els infants guadiran de la protecció prevista en els acords internacionals que vetllen pels seus drets.

Article 40.

1. Els poders públics promouran les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda regional i personal més equitativa, dins el marc d'una política d'estabilitat econòmica. De manera especial realitzaran una política orientada cap a la plena ocupació.
2. Els poders públics fomentaran també una política que garanteixi la formació i la readaptació professionals; vetllaran per la seguretat i la higiene en el treball i garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats.

Article 41.

Els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans, que garanteixi l'assistència i les prestacions socials suficients en les situacions de necessitat, especialment en cas de falta de feina. L'assistència i les prestacions complementàries seran lliures.

Article 42.

L'Estat vetllarà especialment per la salvaguarda dels drets econòmics i socials dels treballadors espanyols a l'estranger i orientarà la seva política a repatriar-los i reintegrar-los a la societat.

Article 43.

1. Es reconeix el dret a la protecció de la salut.
2. Correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris. La llei establirà els drets i els deures de tothom en aquest punt.
3. Els poders públics fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport. Facilitaran també la utilització adequada del lleure.

Article 44

1. Els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tothom té dret.
2. Els poders públics promouran la ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l'interès general.

Article 45.

1. Tothom té dret a disposar d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-lo.
2. Els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva.
3. La llei fixarà sancions penals o, en el seu cas, administratives pers als qui violin el que es disposa en l'apartat anterior i establirà l'obligació d'aquests de reparar el dany causat.

Article 46.

Els poders públics garantiran la conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que l'integren, sigui quin sigui el règim jurídic i la titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni.

Article 47.

Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poder públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització de sòl d'acord amb l'interès general per tal d'impedir l'especulació.

La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l'acció urbanística de les entitats públiques.

Article 48.

Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.

Article 49.

Els poders públics duran a terme una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals es prestarà l'atenció especialitzada que requereixen, i els empararan especialment en la consecució dels drets que aquest Títol atorga a tots els ciutadans.

Article 50.

Els poders públics garantiran la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat, mitjançant pensions adequades i actualitzades periòdicament. Amb independència de les obligacions familiars, en promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure.

Article 51.

1. Els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i dels usuaris, i en protegiran amb procediments eficaços la seguretat, la salut i els legítims interessos.
2. Els poders públics promouran la informació i l'educació dels consumidors i dels usuaris, en fomentaran les organitzacions i les escoltaran en les qüestions que puguin afectar-los, en la forma que la llei estableixi.
3. Dins el marc del que disposen els apartats anteriors, la llei regularà el comerç interior i el règim d'autorització de productes comercials.

Article 52.

La llei regularà les organitzacions professionals que contribueixin a la defensa dels interessos econòmics que els siguin propis. L'estructura interna i el funcionament hauran de ser democràtics.

CAPÍTOL QUART

De les garanties de les llibertats i drets fonamentals

Article 53.

1. Els drets i les llibertats reconeguts en el Capítol Segon del present Títol vinculen tots els poders públics. Només per llei, que en tota causa haurà de respectar el seu contingut essencial, podrà regular-se l'exercici d'aquests drets i d'aquestes llibertats, que seran tutelades d'acord amb el que preveu l'article 156, 1 a).
2. Qualsevol ciutadà podrà demanar la tutela de les llibertats i dels drets reconeguts en l'article 14 i en la Secció 1.ª del Capítol Segon davant els Tribunals ordinaris per un procediment basat en els principis de preferència i sumarietat i, en el seu cas, a través del recurs d'emparament davant el Tribunal Constitutcional. Aquest darrer recurs serà aplicable a l'objecció de consciència reconeguda en l'article 30.
3. El reconeixement, el respecte i la protecció dels principis reconeguts en el Capítol Tercer, informarà la legislació positiva, la pràctica judicial i l'actuació dels poders públics. Només podran ser al·legats davant la Jurisdicció ordinària d'acord amb allò que disposin les lleis que els desenvolupen.

Article 54.

Una llei orgànica regularà la institució del Defensor del Poble, com a alt comissionat de les Corts Generals, designat per aquestes per a defensar els drets compresos en aquest Títol; a aquest efecte podrà supervisar l'activitat de l'Administració, i donar-ne compte a les Corts Generals.

CAPÍTOL CINQUÈ

De la suspensió dels drets i de les llibertats

Article 55.

1. Els drets reconeguts en els articles 17, 18, apartats 2 i 3; articles 19, 20, apartats 1 a) i d), i 5; articles 21, 28, apartat 2, i article 31, apartat 2, podran ser suspesos quan sigui acordada

la declaració de l'estat d'excepció o de setge en els termes que preveu la Constitució. Resta exceptuat d'aquesta suspensió l'apartat 3 de l'article 17 en el cas de declaració de l'estat d'excepció.

2. Una llei orgànica podrà determinar la forma i els casos en què, de forma individual i amb la necessària intervenció judicial i l'adequat control parlamentari, els drets reconeguts en els articles 17.2 i 18, apartats 2 i 3, puguin ser suspesos per a persones determinades, en relació amb les investigacions corresponents a l'actuació de bandes armades o elements terroristes.

La utilització injustificada o abusiva de les facultats reconegudes en la dita llei orgànica comportarà responsabilitat penal per violació dels drets i de les llibertats reconegudes per les lleis.

TÍTOL II

De la Corona

Article 56.

1. El Rei és el Cap de l'Estat, símbol de la seva unitat i permanència, arbitra i modera el funcionament regular de les institucions, assumeix la més alta representació de l'Estat Espanyol en les relacions internacionals, especialment amb les nacions de la seva comunitat històrica, i exerceix les funcions que li atribueixen expressament la Constitució i les lleis.

2. El seu títol és el de Rei d'Espanya, i podrà utilitzar els altres que corresponguin a la Corona.

3. La persona del Rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat. Els seus actes seran sempre subjectes de referendament en la forma establerta en l'article 64, sense la qual no tindran validesa, llevat del que disposa l'article 65.2.

Article 57.

1. La Corona d'Espanya és hereditària en els successors de S. M. Joan Carles I de Borbó, legítim hereu de la Dinastia històrica. La successió al tron seguirà l'ordre regular de primogenitura i de representació, i serà preferida sempre la línia anterior a les posteriors; en la mateixa línia, el grau més pròxim al més remot; en el mateix grau, l'home a la dona, i en el mateix sexe la persona major a la menor.

2. El Príncep hereu, des del naixement o des que s'esdevingui el fet que origini l'evocació, tindrà la dignitat de Príncep d'Astúries i els altres títols vinculats tradicionalment al successor de la Corona d'Espanya.

3. Havent-se extingit totes les línies cridades a dret, les Corts Generals proveiran a la successió a la Corona en la forma que més convingui als interessos d'Espanya.

4. Les persones que, tenint dret la successió al tron, contraguessin matrimoni contra la prohibició expresa del Rei i de les Corts Generals, restaran excloses de la successió a la Corona elles mateixes i els seus descendents.

5. Les abdicacions i les renúncies i qualsevol dubte de fet o de dret que s'esdevingui en l'ordre de successió a la Corona es resoldran amb una Llei Orgànica.

Article 58.

La Reina consort o el consort de la Reina no podran assumir funcions constitucionals, llevat del que es disposa per a la Regència.

Article 59.

1. Si el Rei fos menor d'edat, el pare o la mare del Rei i, per manca d'aquests, el parent major d'edat més pròxim en la successió a la Corona segons l'ordre establert en la Constitució, entrarà a exercir immediatament la Regència, i l'exercirà durant el temps de la minoria d'edat del Rei.

2. Si el Rei resultava inhabilitat per a l'exercici de la seva autoritat, i la impossibilitat fos reconeguda per les Corts Generals, entrarà immediatament a exercir la Regència el Príncep hereu de la Corona, si era major d'edat. Si no ho era, caldrà procedir de la manera que preveu l'apartat anterior fins que el Príncep hereu aconsegueixi la majoria d'edat.

3. Si no hi hagués cap persona a qui correspongués la Regència, aquesta serà nomenada per les Corts Generals, i es compondrà d'una, tres, o cinc persones.

4. Per a exercir la Regència caldrà ser espanyol i major d'edat.

5. La Regència serà exercida per mandat constitucional i sempre en nom del Rei.

Article 60.

1. Serà tutor del Rei menor la persona que el Rei difunt hagi nomenat en el seu testament, sempre que sigui major d'edat i espanyol de naixement; si no n'hagués nomenat, en serà tutor el pare o la mare mentre restin vidus. Mancant aquests, el nomenaran les Corts Generals, però només podran acumular els càrrecs de regent i de tutor el pare, la mare o els ascendents directes del Rei.

2. L'exercici de la tutela és incompatible també amb el de qualsevol càrrec o representació política.

Article 61.

1. El Rei, en ser proclamat davant les Corts Generals, prestarà el jurament d'exercir fidelment les seves funcions, guardar i fer guardar la Constitució i les lleis i respectar els drets dels ciutadans i de les Comunitats Autònomes.

2. El Príncep hereu, en aconseguir la majoria d'edat, i el Regent o els Regents en fer-se càrrec de les seves funcions, prestaran el mateix jurament i el de fidelitat al Rei.

Article 62.

Correspon al Rei:

a) Sancionar i promulgar les lleis.

b) Convocar i dissoldre les Corts Generals i convocar eleccions en els termes previstos a la Constitució.

c) Convocar a referéndum en els casos previstos a la Constitució.

d) Proposar al candidat a President de Govern i, en el seu cas, nomenar-lo, i també posar fi a les seves funcions en els termes previstos en la Constitució.

e) Nomenar i remoure els membres del Govern a proposició del President d'aquest.

f) Expedir els decrets acordats en el Consell de Ministres, proveir els oficis civils i militars i concedir honors i distincions d'acord amb les lleis.

g) Ser informat dels afers d'Estat i presidir, a aquest efecte, les sessions del Consell de Ministres quan ho cregui oportú, a petició del President del Govern.

h) El comandament suprem de les Forces Armades.

i) Exercir el dret de gràcia d'acord amb la llei, la qual no podrà autoritzar indults generals.

Article 63.

1. El Rei acredita els ambaixadors i altres representants diplomàtics. Els representants estrangers a Espanya són acreditats davant ell.

2. Al Rei correspon de manifestar el consentiment de l'Estat per a obligar-se internacionalment mitjançant tractats, de conformitat amb la Constitució i amb les lleis.

3. Al Rei correspon, previà autorització de les Corts Generals, de declarar la guerra i de fer la pau.

Article 64.

1. Els actes del Rei seran referendats pel President del Govern i, en el seu cas, pels Ministres competents. La proposta i el nomenament del President del Govern i la dissolució prevista en l'article 99 seran referendats pel President del Congrés.

2. Dels actes del Rei seran responsables les persones que els referendin.

Article 65.

1. El Rei percep dels Pressuposts de l'Estat una quantitat global per al sosteniment de la seva Família i Casa, i la distribueix lliurement.

2. El Rei nomena i relleva lliurement els membres civils i militars de la seva Casa.

TÍTOL III

De les Corts Generals

CAPÍTOL PRIMER

De les Cambres

Article 66.

1. Les Corts Generals representen el poble espanyol i són formades pel Congrés dels Diputats i el Senat.

2. Les Corts Generals exerceixen la potestat legislativa de

l'Estat, n'aproven els pressuposts, controlen l'acció del Govern i tenen les altres competències que els atribueixi la Constitució.

3. Les Corts Generals són inviolables.

Article 67.

1. Ningú podrà ser membre de totes dues Cambres simultàniament, ni acumular l'acta d'una Assemblea d'una Comunitat Autònoma amb la de Diputat al Congrés.

2. Els membres de les Corts Generals no estaran lligats per mandat imperatiu.

3. Les reunions de Parlamentaris que se celebrin sense convocatòria reglamentària no vincularan les Cambres i no podran exercir les funcions d'aquestes ni ostentar-ne els privilegis.

Article 68.

1. El Congrés es compon d'un mínim de 300 i un màxim de 400 Diputats, elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret en els termes que estableixi la llei.

2. La circumscripció electoral és la província. Les poblacions de Ceuta i Melilla seran representades cadascuna per un Diputat. La llei distribuirà el nombre total de Diputats, assignarà una representació mínima inicial a cada circumscripció i distribuirà els altres en proporció amb la població.

3. L'elecció es farà a cada circumscripció atenint a criteris de representació proporcional.

4. El Congrés és elegit per quatre anys. El mandat dels Diputats acaba quatre anys després de l'elecció o el dia de la dissolució de la Cambra.

5. Són electors i elegibles tots els espanyols que estiguin en ple ús dels seus drets polítics. La llei reconeixerà l'exercici del dret de sufragi als espanyols que es trobin fora del territori d'Espanya i l'Estat els el facilitarà.

6. Les eleccions tindran lloc entre els trenta i els seixanta dies després de l'acabament del mandat. El Congrés electe haurà de ser convocat dins els vint-i-cinc dies següents al de la celebració de les eleccions.

Article 69.

1. El Senat és la Cambra de representació territorial.

2. Els votants de cada província elegiran quatre Senadors per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret en els termes que assenyali una llei orgànica.

3. A les províncies insulars, cada illa o agrupació d'illes, amb cabildo o consell insular, constituirà una circumscripció a efecte de l'elecció de Senadors; en correspondran tres a cadascuna de les illes majors (Gran Canària, Mallorca i Tenerife), i un a cadascuna de les illes o agrupacions d'illes següents: Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma.

4. Les poblacions de Ceuta i Melilla elegiran cadascuna dos Senadors.

5. Les Comunitats Autònomes designaran a més un Senador i encara un altre per cada milió d'habitants del seu territori respectiu. La designació correspondrà a l'Assemblea Legislativa o, si no n'hi havia, a l'òrgan col·legiat superior de la Comunitat Autònoma, d'acord amb el que estableixin els Estatuts, que asseguraran, en qualsevol cas, la representació proporcional adequada.

6. El Senat és elegit per quatre anys. El mandat dels Senadors acaba quatre anys després de l'elecció o el dia de la dissolució de la Cambra.

Article 70.

1. La llei electoral determinarà les causes d'inelegibilitat i incompatibilitat dels Diputats i dels Senadors, les quals comprendran, en qualsevol cas:

a) Els components del Tribunal Constitucional.

b) Els alts càrrecs de l'Administració de l'Estat que determini la llei, amb l'excepció dels membres del Govern.

c) El Defensor del Poble.

d) Els Magistrats, els Jutges i els Fiscals en actiu.

e) Els militars professionals i els membres de les Forces i Cossos de Seguretat i Policia en actiu.

f) Els membres de les Juntes Electorals.

2. La validesa de les actes i de les credencials dels membres de totes dues Cambres restarà sotmesa al control judicial en els termes que estableixi la llei electoral.

Article 71.

1. Els Diputats i els Senadors gaudiran d'inviolabilitat per les opinions manifestades en l'exercici de les seves funcions.

2. Durant el període del seu mandat, els Diputats i els Senadors gaudiran també d'immunitat, i només podran ser detinguts en cas de delicte flagrant. No podran ser inculpats ni processats sense l'autorització prèvia de la Cambra respectiva.

3. En les causes contra Diputats i Senadors serà competent la Sala del Penal del Tribunal Suprem.

4. Els Diputats i els Senadors percebran una assignació que serà fixada per les Cambres respectives.

Article 72.

1. Les Cambres estableixen els propis reglaments, aproven autònomament els seus pressuposts i, d'un comú acord, regulen l'estatut del personal de les Corts Generals. Els reglaments i la reforma d'aquests seran sotmesos a una votació final sobre la totalitat, la qual requerirà la majoria absoluta.

2. Les Cambres elegeixen els presidents respectius i els altres membres de les Meses. Les sessions conjuntes seran presidides pel President del Congrés i es regiran mitjançant un Reglament de les Corts Generals aprovat per la majoria absoluta de cada Cambra.

3. Els Presidents de les Cambres exerceixen en nom d'aquestes tots els poders administratius i les facultats de policia en l'interior dels estatges respectius.

Article 73.

1. Les Cambres es reuniran anualment en dos períodes ordinaris de sessions: el primer, del setembre al desembre, i el segon, del febrer al juny.

2. Les Cambres podran reunir-se en sessions extraordinàries a petició del Govern, de la Diputació permanent o de la majoria absoluta dels membres de qualsevol de les Cambres. Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades amb un ordre del dia determinat i seran closes després d'haver-lo exhaurit.

Article 74.

1. Les Cambres es reuniran en sessió conjunta per tal d'exercir les competències no legislatives que el Títol II atribueix expressament a les Corts Generals.

2. L'adopció de les decisions de les Corts Generals previstes en els articles 94.1, 145.2 i 158.2 requerirà la majoria de cada una de les Cambres. En el primer cas, el procés serà iniciat pel Congrés, i en els altres dos, pel Senat. En tots dos casos, si no hi hagués acord entre el Senat i el Congrés, s'intentarà obtenir-lo mitjançant una Comissió Mixta composada per un mateix nombre de Diputats i de Senadors. La Comissió presentarà un text que haurà de ser votat per totes dues Cambres. Si no s'aprova en la forma establerta, decidirà el Congrés per majoria absoluta.

Article 75.

1. Les Cambres funcionaran en Ple i per Comissions.

2. Les Cambres podran delegar a les Comissions Legislatives permanents l'aprovació de projectes o proposicions de llei. El Ple, això no obstant, podrà requerir en qualsevol moment el debat i la votació de qualsevol projecte o proposició de llei que hagi estat objecte de la delegació.

3. Resten exceptuats del que disposa l'apartat anterior la reforma constitucional, les qüestions internacionals, les lleis orgàniques i de bases i els Pressuposts Generals de l'Estat.

Article 76.

1. El Congrés i el Senat i, si pertoca, totes dues Cambres conjuntament, podran nomenar Comissions d'investigació sobre qualsevol afer d'interès públic. Les conclusions obtingudes no seran vinculants per als Tribunals ni afectaran les resolucions judicials, sense que això sigui obstacle perquè el resultat de la investigació sigui comunicat al Ministeri Fiscal per tal que aquest exerceixi, si cal, les accions oportunes.

2. Serà obligatori de comparèixer a requeriment de les Cambres. La llei regularà les sancions que puguin imposar-se per causa de l'incompliment d'aquesta obligació.

Article 77.

1. Les Cambres poden rebre peticions individuals o col·lectives, sempre per escrit. En resta prohibida la presentació directa per mitjà de manifestacions ciutadanes.

2. Les Cambres poden trametre al Govern les peticions que rebran. El Govern té l'obligació d'explicar-se sobre el contingut d'aquestes sempre que les Cambres ho exigeixin.

Article 78.

1. A cada Cambra hi haurà una Diputació Permanent composta per un mínim de vint-i-un membres que representaran els grups parlamentaris en proporció a la importància numèrica.

2. Les Diputacions Permanents seran presidides pel President de la Cambra respectiva i tindran per funcions la que preveu l'article 73, la d'assumir les facultats que corresponguin a les Cambres, de conformitat amb els articles 86 i 116 si aquestes haguessin estat dissoltes o n'hagués expirat el mandat, i la de vetllar pels poders de les Cambres, quan aquestes no estiguin reunides.

3. Havent finit el mandat o en cas de dissolució, les Diputacions Permanents continuaran exercint les seves funcions fins que es constitueixin les noves Corts Generals.

4. Reunida la Cambra corresponent, la Diputació Permanent donarà compte dels assumptes tractats i de les seves decisions.

Article 79.

1. Per tal d'adoptar acords, les Cambres han d'estar reunides reglamentàriament i comptar amb l'assistència de la majoria dels membres.

2. Perquè els dits acords siguin vàlids, hauran de ser aprovats per la majoria dels membres presents, sens perjudici de les majories especials que estableixin la Constitució o les lleis orgàniques i les que estableixin els Reglaments de les Cambres per a l'elecció de persones.

3. El vot dels Senadors i el dels Diputats és personal i indelegable.

Article 80.

Les sessions plenàries de les Cambres seran públiques, salvant l'acord en contra de cada Cambra, adoptat per majoria absoluta o de conformitat amb el Reglament.

CAPITOL SEGON

De l'elaboració de les lleis

Article 81.

1. Són lleis orgàniques les relatives al desenvolupament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, les que aprovin els Estatuts d'Autonomia i el règim electoral general i les previstes per la Constitució.

2. L'aprovació, la modificació o la derogació de les Lleis orgàniques exigeix la majoria absoluta del Congrés en una votació final sobre el conjunt del projecte.

Article 82.

1. Les Corts Generals podran delegar al Govern la potestat de dictar normes amb rang de llei sobre matèries determinades no incloses en l'article anterior.

2. La delegació legislativa haurà d'atorgar-se mitjançant una llei de bases quan tingui per objecte la formació de texts articulats o mitjançant una llei ordinària quan es tracti de refondre diversos texts legals en un de sol.

3. La delegació legislativa haurà d'atorgar-se al Govern de forma expressa per a una matèria concreta, i fixant-ne el termini d'exercici. La delegació resta esgotada en fer-ne ús el Govern amb la publicació de la norma corresponent. No podrà entendre's que ha estat concedida de manera implícita o per un lapse de temps indeterminat. Tampoc podrà permetre's la subdelegació a autoritats altres que el mateix Govern.

4. Les lleis de bases delimitaran precisament l'objecte i l'abast de la delegació legislativa i els principis i criteris que en regiran l'exercici.

5. L'autorització per a refondre texts legals determinarà l'àmbit normatiu a què es refereix el contingut de la delegació, i haurà d'especificar si resta circumscrita a la mera formulació d'un text únic o si inclou la de regularitzar, aclarir i harmonitzar els texts legals que hagin de ser refosos.

6. Les lleis de delegació podran establir en cada cas fórmules addicionals de control sens perjudici de la competència pròpia dels Tribunals.

Article 83.

En cap cas podrán, les lleis de bases:

a) Autoritzar la modificació de la pròpia llei de bases.
b) Facultar per a dictar normes amb caràcter retroactiu.

Article 84.

Si una proposició de llei o una esmena és contrària a una delegació legislativa vigent, el Govern té la facultat d'oposar-se a la tramitació. Si això s'esdevenia, podrà presentar-se una proposició de llei per a la dérogació total o parcial de la llei de delegació.

Article 85.

Les disposicions del Govern que continguin legislació delegada rebran el títol de Decrets Legislatius.

Article 86.

1. En cas d'una necessitat urgent i extraordinària, el Govern podrá dictar disposicions legislatives provisionals que prendran la forma de Decrets-Lleis i que no podran afectar l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans regulats en el Títol I, el règim de les Comunitats Autònomes ni el Dret electoral general.

2. Els Decrets-Lleis hauran de ser sotmesos immediatament a debat i votació de la totalitat en el Congrés dels Diputats, convocat a aquest efecte, si no estigués reunit, dins el termini dels trenta dies següents a la promulgació. El Congrés haurà de pronunciar-se expressament dins aquest termini sobre la convalidació o la derogació, per a la qual cosa el Reglament establirà un procediment especial i sumari.

3. Durant el termini establert en el paràgraf anterior, les Corts podran tramitar-los com a projectes de llei pel procediment d'urgència.

Article 87.

1. La iniciativa legislativa correspon al Govern, al Congrés i al Senat, d'acord amb la Constitució i els Reglaments de les Cambres.

2. Les Assemblees de les Comunitats Autònomes podran demanar al Govern l'adopció d'un Projecte de Llei o trametre a la Mesa del Congrés una Proposició de Llei, i podran delegar davant la dita Cambra un màxim de tres membres de l'Assemblea encarregats de defensar-la.

3. Una llei orgànica regularà les formes d'exercici i els requisits de la iniciativa popular per a la presentació de proposicions de llei. En qualsevol cas es requerirà no menys de 500.000 signatures acreditades. No serà procedent aquesta iniciativa en les matèries pròpies de la llei orgànica, tributàries o de caràcter internacional ni en allò que pertany a la prerrogativa de gràcia.

Article 88.

Els projectes de llei seran aprovats pel Consell de Ministres, el qual els sotmetrà al Congrés acompanyats d'una exposició de motius i dels antecedents necessaris per a pronunciar-s'hi.

Article 89.

1. La tramitació de les proposicions de llei serà regulada pels Reglaments de les Cambres, sense que la prioritat deguda als projectes de llei impedeixi l'exercici de la iniciativa legislativa en els termes regulats en l'article 87.

2. Les proposicions de llei que, de conformitat amb l'article 87, el Senat prengui en consideració seran trameses al Congrés perquè aquest les tramiti com a tal proposició.

Article 90.

1. Una vegada hagi estat aprovat un projecte de llei ordinària o orgànica pel Congrés de Diputats, el President d'aquest en donarà compte immediatament al President del Senat, el qual el sotmetrà a la deliberació d'aquesta darrera Cambra.

2. El Senat, dins el termini de dos mesos a comptar des del dia de la recepció del text, pot oposar-li el seu veto o introduir-hi esmenes mitjançan un missatge motivat. El veto haurà de ser aprovat per majoria absoluta. El projecte no podrà ser sotmès al Rei perquè el sancioni sense que el Congrés ratifiqui per majoria absoluta, en cas de veto, el text inicial, o per majoria simple, transcorreguts dos mesos d'ençà que fou interposat, o sense que es pronunciï sobre les esmenes, havent-les acceptades o no per majoria simple.

3. El termini de dos mesos reduirà al de vint dies naturals en els projectes declarats urgents pel Govern o pel Congrés dels Diputats.

Article 91.

El Rei sancionarà les lleis aprovades per les Corts Generals dins el termini de quinze dies, i les promulgarà i n'ordenarà la publicació immediata.

Article 92.

1. Les decisions polítiques de transcendència especial podran ser sotmeses al referèndum consultiu de tots els ciutadans.
2. El Referèndum serà convocat pel Rei a proposició del President del Govern, autoritzada prèviament pel Congrés dels Diputats.
3. Una llei orgànica regularà les condicions i el procediment de les diverses modalitats de referèndum previstes per la present Constitució.

CAPÍTOL TERCER

Dels Tractats Internacionals

Article 93.

Mitjançant una llei orgànica es podrà autoritzar la celebració de tractats pels quals s'atribueixi a una organització o a una institució internacional l'exercici de competències derivades de la Constitució. La garantia del compliment d'aquests tractats i de les resolucions emanades dels organismes internacionals o supranacionals titulars de la cessió correspon, segons els casos, a les Corts Generals o al Govern.

Article 94.

1. La prestació del consentiment de l'Estat per a obligar-se mitjançant tractats o convenis requerirà l'autorització prèvia de les Corts Generals en els casos següents:

a) Tractats de caràcter polític.
b) Tractats o convenis de caràcter militar.
c) Tractats o convenis que afectin la integritat territorial de l'Estat o els drets i els deures fonamentals establerts en el Títol I.
d) Tractats o convenis que impliquin obligacions financeres per a la Hisenda Pública.
e) Tractats o convenis que suposin la modificació o la derogació d'alguna llei o l'execució de la qual exigeixi mesures legislatives.

2. El Congrés i el Senat seran informats immediatament de la conclusió dels altres tractats o convenis.

Article 95.

1. La celebració d'un tractat internacional que contingui estipulacions contràries a la Constitució exigirà la revisió constitucional prèvia.
2. El Govern o qualsevol de les Cambres pot requerir el Tribunal Constitucional perquè declari si aquesta contradicció existeix o no.

Article 96.

1. Els tractats internacionals celebrats vàlidament formaran part de l'ordenament intern una vegada hagin estat publicats oficialment a Espanya. Les seves disposicions només podran ser derogades, modificades o suspeses en la forma prevista en els mateixos tractats o d'acord amb les normes generals del Dret internacional.
2. Per a denunciar els tractats i els convenis internacionals es farà servir el mateix procediment previst per a aprovar-los en l'article 94.

TÍTOL IV

Del Govern i de l'Administració

Article 97.

El Govern dirigeix la política interior i l'exterior, l'Administració civil i militar i la defensa de l'Estat. Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d'acord amb la Constitució i amb les lleis.

Article 98.

1. El Govern es compon del President, els Vice-presidents en el seu cas, els Ministres i els altres membres que estableixi la llei.
2. El President dirigeix l'acció del Govern i coordina les funcions dels altres membres d'aquest, sens perjudici de la competència i de la responsabilitat directa d'aquells en la seva gestió.
3. Els membres del Govern no podran exercir funcions representatives altres que les pròpies del mandat parlamentari ni qualsevol altra funció pública que no derivi del seu càrrec ni cap activitat professional o mercantil.
4. La llei regularà l'Estatut i les incompatibilitats dels membres del Govern.

Article 99.

1. Després de cada renovació del Congrés dels Diputats, i en els altres casos en què sigui procedent, el Rei, prèvia consulta amb els representants designats pels Grups Polítics amb representació parlamentària i a través del President del Congrés, proposarà un candidat a la Presidència del Govern.
2. El candidat proposat conformement al que estableix l'apartat anterior exposarà davant el Congrés dels Diputats el programa polític del Govern que pretengui formar i demanarà la confiança de la Cambra.
3. Si el Congrés dels Diputats atorgava la seva confiança al dit candidat mitjançant el vot de la majoria absoluta dels seus membres, el Rei el nomenarà President. En el cas de no obtenir la dita majoria, la mateixa proposta serà sotmesa a una nova votació quaranta-vuit hores després de l'anterior i s'entendrà que la confiança ha estat atorgada si obtenia la majoria simple.
4. Si, una vegada fetes les votacions esmentades, no fos atorgada la confiança per a la investidura, es tramitaran propostes successives en la forma prevista en els apartats anteriors.
5. Si, després d'haver transcorregut el termini de dos mesos a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat hagués obtingut la confiança del Congrés, el Rei dissoldrà totes dues Cambres i convocarà noves eleccions amb l'aprovació del President del Govern.

Article 100.

Els altres membres del Govern seran nomenats i remoguts pel Rei a proposició del seu President.

Article 101.

1. El Govern cessa després de la celebració d'eleccions generals, en cas de pèrdua de la confiança parlamentària previst per la Constitució o per la causa de la dimissió o la defunció del seu President.
2. El Govern cessant continuarà en funcions fins a la presa de possessió del nou Govern.

Article 102.

1. La responsabilitat criminal del President i dels altres membres del Govern serà exigible, en el seu cas, davant la Sala del Penal del Tribunal Suprem.
2. Si l'acusació fos per traïció o per qualsevol delicte contra la seguretat de l'Estat en l'exercici de les seves funcions, només podrà ser plantejada per iniciativa de la quarta part dels membres del Congrés i amb l'aprovació de la majoria absoluta d'aquesta Cambra.
3. La prerrogativa reial de gràcia no serà aplicable a cap dels supòsits del present article.

Article 103.

1. L'Administració pública serveix amb objectivat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
2. Els òrgans de l'Administració de l'Estat són creats, regits i coordinats d'acord amb la llei.
3. La llei regularà l'estatut dels funcionaris públics, l'accés a la funció pública d'acord amb els principis del mèrit i de la capacitat, les peculiaritats de l'exercici del seu dret a la sindicació, el sistema d'incompatibilitats i les garanties per a la imparcialitat en l'exercici de les seves funcions.

Article 104.

1. Les Forces i els Cossos de Seguretat sota la dependència del Govern tindran per missió protegir el lliure exercici dels drets i de les llibertats i garantitzar la seguretat ciutadana.
2. Una llei orgànica en determinarà les funcions, els principis bàsics d'actuació i l'estatut.

Article 105.

La llei regularà:

a) L'audiència dels ciutadans directament o a través de les organitzacions i associacions reconegudes per la llei en el procediment d'elaboració de les disposicions administratives que els afectin.

b) L'accés dels ciutadans als arxius i als registres administratius, salvant el que afecti a la seguretat i a la defensa de l'Estat, la investigació dels delictes i la intimitat de les persones.

c) El procediment a través del qual han de fer-se els actes administratius, amb garantia, quan sigui procedent, de l'audiència de l'interessat.

Article 106.

1. Els tribunals controlen la potestat reglamentària, la legalitat de l'actuació administrativa i la submissió d'aquesta als fins que la justifiquen.

2. Els particulars, en els termes establerts per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol del seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.

Article 107.

El Consell d'Estat és l'òrgan consultiu suprem del Govern. Una llei orgànica en regularà la composició i la competència.

TÍTOL V

De les relacions entre el Govern i les Corts Generals

Article 108.

El Govern respon solidàriament de la seva gestió política davant el Congrés dels Diputats.

Article 109.

Les Cambres i les seves Comissions podran requerir a través dels Presidents d'aquelles, la informació i l'ajut que necessitin del Govern i dels seus Departaments i de qualsevol autoritats de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Article 110.

1. Les Cambres i les seves Comissions poden requerir la presència dels membres del Govern.

2. Els membres del Govern tenen accés a les sessions de les Cambres i a les seves Comissions i la facultat de fer s'hi escoltar, i podran demanar que hi informin els funcionaris dels seus Departaments.

Article 111.

1. El Govern i cadascun dels seus membres resten sotmesos a les interpel·lacions i a les preguntes que els formulin davant les Cambres. Per a aquesta classe de debat els Reglaments establiran un temps mínim setmanal.

2. Tota interpel·lació podrà donar lloc a una moció, amb la qual la Cambra manifesti la seva posició.

Article 112.

El President del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, pot plantejar davant el Congrés dels Diputats la qüestió de confiança sobre el seu programa o sobre una declaració de política general. S'entendrà que la confiança ha estat atorgada si voten favorablement la majoria simple dels Diputats.

Article 113.

1. El Congrés dels Diputats pot exigir la responsabilitat política del Govern mitjançant l'adopció de la moció de censura per majoria absoluta.

2. La moció de censura haurà de ser proposada com a mínim per la desena part dels Diputats i haurà d'incloure un candidat a la Presidència del Govern.

3. La moció de censura no podrà ser votada fins que hagin transcorregut deu dies de la presentació. Dins els dos primers dies d'aquest termini podran presentar-se mocions alternatives.

4. Si la moció de censura no fos aprovada pel Congrés, els signataris no en podran presentar cap més durant el mateix període de sessions.

Article 114.

1. Si el Congrés nega la confiança al Govern, aquest presentarà la dimissió al Rei. A continuació s'haurà de procedir a la designació de President de Govern segons el que disposa l'article 99.

2. Si el Congrés adopta una moció de censura, el Govern presentarà la dimissió al Rei, i s'entendrà que resta investit de la confiança de la Cambra el candidat proposat dins la moció als efectes prevists per l'article 99. El Rei el nomenarà President del Govern.

Article 115.

1. El President del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, podrà proposar la dissolució del Congrés, del Senat o de les Corts Generals, la qual serà decretada pel Rei. El decret de dissolució fixarà la data de les eleccions.

2. La proposta de dissolució no podrà presentar-se quan hi hagi en tràmit una moció de censura.

3. No serà procedent cap nova dissolució abans que hagi transcorregut un any des de l'anterior, llevat del que disposa l'article 99, apartat 5.

Article 116.

1. Una llei orgànica regularà els estats d'alarma, d'excepció i de setge, i les competències i limitacions corresponents.

2. L'estat d'alarma serà declarat pel Govern mitjançant un decret acordat en un Consell de Ministres, amb una durada màxima de quinze dies; haurà de donar-ne compte al Congrés dels Diputats, que serà reunit inmediatament a aquest efecte i no podrà ser prorrogat sense l'autorització d'aquesta mateixa Cambra. El decret determinarà l'àmbit territorial al qual s'estenen els efectes de la declaració.

3. L'estat d'excepció serà declarat pel Govern mitjançant un decret acordat en un Consell de Ministres, prèvia autorització del Congrés dels Diputats. L'autorització i la proclamació de l'estat d'excepció haurà de determinar expressament els efectes d'aquest, l'àmbit territorial al qual s'estengui i la durada, que no podrà excedir de trenta dies, prorrogables per un termini igual, amb els mateixos requisits.

4. L'estat de setge serà declarat per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, a proposició exclusiva del Govern. El Congrés en determinarà l'àmbit territorial, la durada i les condicions.

5. El Congrés no podrà ser dissolt mentre restin declarats alguns dels estats compresos en el present article; si les Cambres no es trobessin en període de sessions, restaran convocades automàticament. Durant la vigència d'aquests estats no podrà interrompre's el funcionament de les Cambres ni el dels altres poders constitucionals. Si, havent estat dissolt el Congrés o havent-ne expirat el mandat, es produís alguna de les situacions que donen lloc a qualsevol dels dits estats, les competències del Congrés seran assumides per la seva Diputació Permanent.

6. La declaració dels estats d'alarma, d'excepció i de setge no modificara el principi de responsabilitat del Govern ni dels seus agents reconeguts en la Constitució i en les lleis.

TÍTOL VI

Del poder judicial

Article 117.

1. La justícia emana del poble i és administrada en nom del Rei pels Jutges i pels Magistrats que integren el poder judicial, independents, inamovibles, responsables i sotmesos únicament a l'imperi de la llei.

2. Els Jutges i els Magistrats no podran ser removguts, suspesos, traslladats ni jubilats més que per motiu de les causes que la llei preveu i amb les garanties que aquesta ofereix.

3. L'exercici de la potestat jurisdiccional, en qualsevol mena de processos, jutjant i fent complir allò que hagi estat jutjat, correspon exclusivament als Jutjats i als Tribunals que les lleis determinen, segons les normes de competència i de procediment que elles estableixin.

4. Els Jutjats i els Tribunals no exerciran funcions altres que les que assenyala l'apartat anterior i les que els siguin atribuïdes expressament per la llei en garantia de qualsevolt dret.

5. El principi d'unitat jurisdiccional és la base de l'organització i del funcionament dels Tribunals. La llei regularà l'exercici de la jurisdicció militar dins l'àmbit estrictament castrense i en ocasió de l'estat de setge, d'acord amb els principis de la Constitució.

6. Resten prohibits els Tribunals d'excepció.

Article 118.

Tothom té l'obligació de complir les sentències i les altres resolucions fermes dels Jutges i dels Tribunals i de prestar la col.laboració que aquests requereixin en el curs del procés i en l'execució d'allò que hagi estat resolt.

Article 119.

La justícia serà gratuïta quan la llei ho disposi, i, en qualsevol cas, per a aquells que acreditin insuficiència de recursos per a litigar.

Article 120.

1. Les actuacions judicials seran públiques, amb les excepcions previstes per les lleis de processament.
2. El procediment serà predominantment oral, sobretot en matèria criminal.
3. Les sentències seran motivades sempre i pronunciades en audiència pública.

Article 121.

Els danys causats per error judicial i els que siguin conseqüencia del funcionament anormal de l'Administració de Justícia donaran dret a una indemnització a càrrec de l'Estat conformement amb la llei.

Article 122.

1. La llei orgànica del poder judicial determinarà la constitució, el funcionament i el govern dels Jutjats i dels Tribunals, i l'estatut jurídic dels Jutges i dels Magistrats de carrera, els quals formaran un cos únic, i el del personal al servei de l'Administració de Justícia.
2. El Consell General del poder judicial és l'òrgan de govern d'aquest darrer. La llei orgànica n'establirà l'estatut i el règim d'incompatibilitats i les funcions dels seus membres, assenyaladament en matèria de nomenaments, ascensos, inspecció i règim disciplinari.
3. El Consell General del poder judicial serà integrat pel President del Tribunal Suprem, que el presidirà, i per vint membres nomenats pel Rei per a un període de cinc anys. D'aquests, dotze entre els Jutges i els Magistrats de totes les categories judicials en els termes que estableixi la llei orgànica; quatre, a proposició del Congrés dels Diputats, i quatre a proposició del Senat, elegits en tots dos casos per majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, entre advocats i altres juristes, tots de competència reconeguda i amb més de quinze anys d'exercici professional.

Article 123.

1. El Tribunal Suprem, amb jurisdicció a tota Espanya, és l'òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres, llevat del que es disposa en matèria de garanties constitucionals.
2. El President del Tribunal Suprem serà nomenat pel Rei, a proposició del Consell General del poder judicial, en la forma que la llei determini.

Article 124.

1. El Ministeri Fiscal, sens perjudici de les funcions encomanades a altres òrgans, té la missió de promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interès públic tutelat per la llei, d'ofici o bé a petició dels interessats, vetllar per la independència dels Tribunals i procurar davant ells la satisfacció de l'interès social.
2. El Ministeri Fiscal exerceix les seves funcions per mitjà d'òrgans propis, de conformitat amb els principis d'unitat d'actuació i dependència jeràrquica i subjectant-se, en tot cas, als de legalitat i imparcialitat.
3. La llei regularà l'estatut orgànic del Ministeri Fiscal.
4. El Fiscal General de l'Estat serà nomenat pel Rei, a proposició del Govern, havent estat escoltat el Consell General del poder judicial.

Article 125.

Els ciutadans podran exercir l'acció popular i participar en l'Administració de Justícia mitjançant la institució del Jurat, en la forma i en els processos penals que la llei determini, i en els Tribunals consuetudinaris i tradicionals.

Article 126.

La policia judicial depèn dels Jutges, dels Tribunals i del Ministeri Fiscal en les seves funcions d'indagació del delicte i de descobriment i assegurament del delinqüent, en els termes que la llei estableixi.

Article 127.

1. Els Jutges i els Magistrats i també els Fiscals, mentre restin en actiu, no podran exercir altres càrrecs públics ni pertànyer a partits polítics o a sindicats. La llei establirà el sistema i les modalitats d'associació professional dels Jutges, dels Magistrats i dels Fiscals.
2. La llei establirà el règim d'incompatibilitats dels membres del poder judicial, que haurà d'assegurar la seva total independència.

TÍTOL VII

Economia i Finances

Article 128.

1. Tota la riquesa del país en les seves diverses formes, i sigui quina sigui la titularitat, resta subordinada a l'interès general.
2. Es reconeix la iniciativa pública en l'activitat econòmica. Mitjançant una llei, determinats recursos o serveis essencials podran ser reservats al sector públic, especialment en cas de monopoli; podrà ser acordada, també, la intervenció d'empreses quan ho exigeixi l'interès general.

Article 129.

1. La llei establirà les formes de participació dels interessats en la Seguretat Social i en l'activitat dels organismes públics la funció dels quals afecti directament la qualitat de la vida o l'interès general.
2. Els poders públics promouran eficaçment les diverses formes de participació en l'empresa i fomentaran, mitjançant una legislació adequada, les societats cooperatives. També establiran els mitjans que facilitin l'accés dels treballadors a la propietat dels mitjans de producció.

Article 130.

1. Els poders públics atendran a la modernització i al desenvolupament de tots els sectors econòmics i, assenyaladament, de l'agricultura, la ramaderia, la pesca i l'artesania, a fi d'equiparar el nivell de vida de tots els espanyols.
2. Amb la mateixa finalitat es donarà un tractament especial a les zones de muntanya.

Article 131.

1. L'Estat, mitjançant una llei, podrà planificar l'activitat econòmica general per a atendre les necessitats col.lectives, equilibrar i harmonitzar el desenvolupament regional i sectorial i estimular el creixement de la renda i de la riquesa i la distribució més justa d'aquesta darrera.
2. El Govern elaborarà els projectes de planificació d'acord amb les previsions que li siguin subministrades per les Comunitats Autònomes i l'assessorament i la col.laboració dels sindicats i de les altres organitzacions professionals, empresarials i econòmiques. Amb aquesta finalitat es constituirà un Consell, la composició i les funcions del qual desenvoluparà una llei.

Article 132.

1. La llei regularà el règim jurídic dels béns de domini públic i dels comunals inspirant-se en els principis d'inalienabilitat, imprescriptibilitat e inembargabilitat, i també en regularà la desafectació.
2. Són béns de domini públic estatal els que la llei determini i, en qualsevol cas, la zona marítimo-terrestre, les platges, la mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i de la plataforma continental.
3. Seran regulats per llei, el Patrimoni de l'Estat i el Patrimoni Nacional, i l'administració, defensa i conservació d'aquests.

Article 133.

1. La potestat originària per a establir els tributs correspon exclusivament a l'Estat mitjançant una llei.
2. Les Comunitats Autònomes i les Corporacions locals podran establir i exigir tributs, d'acord amb la Constitució i amb les lleis.
3. Qualsevol benefici fiscal que afecti els tributs de l'Estat haurà d'establir-se en virtut d'una llei.
4. Les administracions públiques solament podran contreure obligacions financeres i fer despeses d'acord amb les lleis.

Article 134.

1. Correspon al Govern d'elaborar els pressuposts generals de l'Estat, i a les Corts Generals d'examinar-los, esmenar-los i aprovar-los.
2. Els pressuposts generals de l'Estat tindran caràcter anual, inclouran la totalitat de les depeses i els ingressos del

sector públic estatal i s'hi consignarà l'import dels beneficis fiscals que afectin els tributs de l'Estat.

3. El Govern tindrà l'obligació de presentar davant el Congrés dels Diputats els pressuposts generals, tres mesos abans, com a mínim, que expirin els de l'any anterior.

4. Si la Llei de Pressuposts no s'aprovava abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, els Pressuposts de l'exercici anterior restaran prorrogats automàticament fins que s'aprovin els nous.

5. Havent aprovat els pressuposts generals de l'Estat, el Govern podrà presentar projectes de llei que impliquin l'augment de la despesa pública o la disminució dels ingressos corresponents a aquell mateix exercici pressupostari.

6. Tota proposició o esmena que suposi un augment dels crèdits o una disminució dels ingressos pressupostaris requerirà la conformitat del Govern per tal de ser tramitada.

7. La Llei de Pressuposts no pot crear tributs. Podrà modificarlos si una llei tributària subtantiva ho fa preveure.

Article 135.

1. El Govern haurà de restar autoritzat per una llei per tal d'emetre deute públic o contreure crèdit.

2. Es considerarà sempre que els crèdits per a abonar el pagament d'interessos i capital del Deute Públic són inclosos en l'estat de despeses dels pressuposts, i no podran ser objecte d'esmenes ni de modificacions mentre s'ajustin a les condicions de la llei d'emissió.

Article 136.

1. El Tribunal de Comptes és l'òrgan fiscalitzador suprem dels comptes i de la gestió econòmica de l'Estat i, alhora, del sector públic. Dependrà directament de les Corts Generals i exercirà les seves funcions delegadament d'elles en l'examen i la comprovació del Compte General de l'Estat.

2. Els comptes de l'Estat i del sector públic estatal seran retuts al Tribunal de Comptes, el qual els censurarà. El Tribunal de Comptes, sens perjudici de la seva jurisdicció, trametrà a les Corts Generals un informe anual en què, sempre que sigui procedent, comunicarà les infraccions o les responsabilitats en que, segons el seu judici, s'hagi incorregut.

3. Els membres del Tribunal de Comptes gaudiran de la mateixa independència i inamobilitat i restaran sotmesos a les mateixes incompatibilitats que els Jutges.

4. Una llei orgànica regularà la composició, l'organització i les funcions del Tribunal de Comptes.

TÍTOL VIII

De l'organització territorial de l'Estat

CAPÍTOL PRIMER

Principis generals

Article 137.

L'Estat s'organitza territorialment en municipis, en provincies i en les Comunitats Autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels interessos respectius.

Article 138.

1. L'Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat en l'article 2 de la Constitució i vetllarà per l'establiment d'un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol, i atendrà assenyaladament les circumstàncies del fet insular.

2. Les diferències entre els Estatuts de les diverses Comunitats Autònomes no podran implicar en cap cas privilegis econòmics o socials.

Article 139.

1. Tots els espanyols tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions en qualsevol part del territori de l'Estat.

2. Cap autoritat no podrà adoptar mesures que directament o indirectament obstaculitzin la llibertat de circulació i l'establiment de les persones i la lliure circulació de béns per tot el territori espanyol.

CAPÍTOL SEGON

De l'administració local

Article 140.

La Constitució garanteix l'autonomia dels municipis, els quals gaudiran de personalitat jurídica plena. El govern i l'administració municipal correspon als respectius Ajuntaments, integrats pels batlles i els regidors. Els regidors seran elegits pels veins del municipi mitjançant sufragi universal igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per la llei. Els batlles seran elegits pels regidors o pels veins. La llei regularà les condicions en què sigui procedent el règim de consell obert.

Article 141.

1. La província és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinada per l'agrupació de municipis i la divisió territorial per al compliment de les activitats de l'Estat. Qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals per mitjà d'una llei orgànica.

2. El Govern i l'administració autònoma de les províncies seran encomanats a Diputacions o altres Corporacions de caràcter representatiu.

3. Es podran crear agrupacions de municipis diferents de la província.

4. En els arxipèlags, les illes tindran, a més, administració pròpia en forma de cabildos o consells.

Article 142.

Les Hisendes locals hauran de disposar dels mitjans suficients per a l'exercici de les funcions que la llei atribueix a les Corporacions respectives, i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de la participació en els de l'Estat i en els de les Comunitats Autònomes.

CAPÍTOL TERCER

De les comunitats autònomes

Article 143.

1. En l'exercici del dret a l'autonomia reconegut en l'article 2 de la Constitució, les províncies limítrofs que tinguin característiques històriques, culturals i econòmiques comunes, els territoris insulars i les províncies d'entitat regional històrica podran accedir a l'autogovern i constituir-se en Comunitats Autònomes d'acord amb el que preveu aquest Títol i els estatuts respectius.

2. La iniciativa del procés autonòmic correspon a totes les diputacions interessades o a l'òrgan interinsular corresponent, i als dos terços dels municipis la població dels quals representi, com a mínim, la majoria del cens electoral de cada província o de cada illa. Aquests requisits hauran d'acomplir-se dins el termini de sis mesos d'ençà del primer acord al respecte adoptat per alguna de les Corporacions locals interessades.

3. La iniciativa, en el cas de no reeixir, només podrà repetir-se al cap de cinc anys.

Article 144.

Per motiu d'interès nacional, i mitjançant una llei orgànica, les Corts Generals podran:

a) Autoritzar la constitució d'una comunitat autònoma encara que el seu àmbit territorial no superi el d'una província i no reuneixi les condicions de l'apartat 1 del l'article 143.

b) Autoritzar o acordar, en el seu cas, un estatut d'autonomia a territoris que no es trobin integrats en l'organització provincial.

c) Substituir la iniciativa de les Corporacions locals a què es refereix l'apartat 2 de l'article 143.

Article 145.

1. En cap cas s'admetrà la federació de Comunitats Autònomes.

2. Els estatuts podran preveure els casos, requisits i termes en què les Comunitats Autònomes podran celebrar convenis entre elles per tal d'acomplir i prestar serveis que els siguin propis; i podran preveure, també, el caràcter i els efectes de la corresponent comunicació a les Corts Generals. En els altres casos, els acords de cooperació entre les Comunitats Autònomes requeriran l'autorització de les Corts Generals.

Article 146.

El projecte d'Estatut serà elaborat per una assemblea composta pels membres de la Diputació o l'òrgan interinsular de les províncies afectades i pels Diputats i els Senadors que n'hagin estat elegits, i serà elevat a les Corts Generals, les quals li donaran tramitació de llei.

Article 147.

1. Dins els termes de la present Constitució, els estatuts seran la norma institucional bàsica de cada Comunitat Autònoma, i l'Estat els reconeixerà i els emparará com a part integrant del seu ordenament jurídic.

2. Els estatuts d'autonomia hauran de fer constar:

a) La denominació de la Comunitat que s'ajusti millor a la seva identitat històrica.
b) La delimitació del territori.
c) La denominació, l'organització i la seu de les institucions autònomes pròpies.
d) Les competències assumides dins el marc establert per la Constitució i per les bases per al traspàs dels serveis que els correspondran.

3. La reforma dels Estatuts s'ajustarà al procediment que ells mateixos estableixin i requerirà, en qualsevol cas, l'aprovació de les Corts Generals per llei orgànica.

Article 148.

1. Les Comunitats Autònomes podran assumir competències en les matèries següents:

1 Organització de les seves institucions d'autogovern.
2 Les alteracions dels termes municipals compresos en el seu territori i, en general, les funcions que corresponguin a l'Administració de l'Estat sobre Corporacions locals, la transferència de les quals autoritzi la legislació sobre Règim Local.
3 Ordenació del territori, urbanisme i habitatge.
4 Les obres públiques d'interès per a la Comunitat Autònoma dins el seu territori.
5 Els ferrocarrils i les carreteres l'itinerari dels quals transcorri íntegrament dins el territori de la Comunitat Autònoma i, de la mateixa manera, el transport fet per aquests mitjans o per cable.
6 Els ports de refugi, els ports i els aeroports esportius i, en general, els que no acompleixin activitats comercials.
7 L'agricultura i la ramaderia, d'acord amb l'ordenació general de l'economia.
8 Espais forestals i el seu aprofitament.
9 La gestió en matèria de protecció del medi ambient.
10 Els projectes, la construcció i l'explotació dels aprofitaments hidràulics, canals i regatges d'interès per a la Comunitat Autònoma, les aigües minerals i les termals.
11 La pesca en aigües interiors, la de marisc i l'aqüicultura, la caça i la pesca fluvial.
12 Fires interiors.
13 El foment del desenvolupament econòmic de la Comunitat Autònoma dins els objectius marcats per la política econòmica nacional.
14 L'artesania.
15 Els museus, les biblioteques i els conservatoris de música d'interès per a la Comunitat Autònoma.
16 El patrimoni monumental d'interès per a la Comunitat Autònoma.
17 El foment de la cultura, de la investigació i, en el seu cas, de l'ensenyament de la llengua de la Comunitat Autònoma.
18 La promoció i l'ordenació del turisme dins el seu àmbit territorial.
19 Promoció de l'esport i del lleure.
20 Assistència social.
21 Sanitat i Higiene.
22 La vigilància i la protecció dels seus edificis i de les seves instal·lacions. La coordinació i altres facultats en relació amb les policies locals en els termes que estableixi una llei orgànica.

2. Havent transcorregut cinc anys, i mitjançant la reforma dels seus estatuts, les Comunitats Autònomes podran ampliar successivament les seves competències dins el marc establert per l'article 149.

Article 149.

1. L'Estat té la competència exclusiva sobre les matèries següents:

1 La regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals.
2 Nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d'asil.
3 Relacions internacionals.
4 Defensa i Forces Armades.
5 Administració de Justícia.
6 Legislació mercantil, penal i penitenciària; legislació processal, sens perjudici de les especialitats que en aquest ordre es deriven necessàriament de les particularitats del dret substantiu de les Comunitats Autònomes.
7 Legislació laboral; sens perjudici que sigui executada pels òrgans de les Comunitats Autònomes.
8 Legislació civil, sens perjudici de la conservació, modificació i desenvolupament dels drets civils, forals o especials per part de les Comunitats Autònomes allà on n'hi hagi. En qualsevol cas, les regles relatives a l'aplicació i a l'eficàcia de les normes jurídiques, relacions jurídico-civils relatives a les formes de matrimoni, ordenació dels registres i instruments públics, bases de les obligacions contractuals, normes per a resoldre els conflictes de lleis i la determinació de les fonts del Dret, d'acord, en aquest darrer cas, amb les normes del dret foral o especial.
9 Legislació sobre propietat intel·lectual i industrial.
10 Règim duaner i aranzelari; comerç exterior.
11 Sistema monetari: divises, canvi i convertibilitat; bases de l'ordenació del crèdit, banca i assegurances.
12 Legislació sobre pesos i mesures, determinació de l'hora oficial.
13 Bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica.
14 Hisenda general i Deute de l'Estat.
15 Foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica.
16 Sanitat exterior. Bases i coordinació general de la sanitat. Legislació sobre productes farmacèutics.
17 Legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social, sens perjudici que les Comunitats Autònomes n'executin els serveis.
18 Les bases del règim jurídic de les Administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris, les quals garantiran, en qualsevol cas, als administrats un tractament comú davant aquelles; el procediment administratiu comú, sens perjudici de les especialitats derivades de l'organització pròpia de les Comunitats Autònomes; legislació sobre expropiació forçosa; legislació bàsica sobre contractes i concessions administratives i el sistema de responsabilitat de totes les Administracions públiques.
19 Pesca marítima, sens perjudici de les competències que s'atribueixin a les Comunitats Autònomes en aquest sector.
20 Marina mercant i abanderament de vaixells, il·luminació de costes i senyals marítims; ports d'interès general; control de l'espai aeri, trànsit i transport aeri; servei meteorològic i matriculació d'aeronaus.
21 Ferrocarrils i transports terrestres que circulin dins els territoris de més d'una Comunitat Autònoma; règim general de comunicacions; tràfic i circulació de vehicles de motor; correus i telecomunicacions; cables aeris, submarins i radiocomunicació.
22 La legislació, ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics si les aigües passen per més d'una Comunitat Autònoma, i l'autorització de les instal·lacions elèctriques si l'aprofitament afecta una altra Comunitat o si l'energia es transportada fora del seu àmbit territorial.
23 Legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de les Comunitats Autònomes per a l'establiment de normes addicionals de protecció. La legislació bàsica sobre espais i aprofitaments forestals i vies ramaderes.
24 Obres públiques d'interès general o que la realització de les quals afecti més d'una Comunitat Autònoma.
25 Bases del règim miner i energètic.
26 Règim de producció, comerç, tinença i ús d'armes i d'explosius.
27 Normes bàsiques del règim de premsa, radio i televisió, i, en general, de tots els mitjans de comunicació social, sens perjudici de les facultats de desenvolupament i execució que corresponguin a les Comunitats Autònomes.
28 Defensa del patrimoni cultural, artístic i monumental espanyol contra l'exportació i l'espoliació; museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal, sens perjudici que les Comunitats Autònomes n'exerceixin la gestió.
29 Seguretat pública, sens perjudici que les Comunitats Autònomes puguin crear policies en la forma que els respectius estatuts estableixin dins el marc del que disposi una llei orgànica.
30 Regulació de les condicions d'obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals, i normes bàsiques per al desenvolupament de l'article 27 de la Constitució, a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.
31 Estadística per a finalitats estatals.
32 Autorització per a la convocatòria de consultes populars per via de referèndum.

2. Sens perjudici de les competències que podran assumir les Comunitats Autònomes, l'Estat considerarà el servei de la cultura com un deure i una atribució essencial i facilitarà la

comunicació cultural entre les Comunitats Autònomes d'acord amb elles.

3. Les matèries no atribuïdes expressament a l'Estat per aquesta Constitució podran correspondre a les Comunitats Autònomes en virtut dels Estatuts respectius. La competència sobre les matèries que no hagin estat assumides pels Estatuts d'Autonomia correspondrà a l'Estat, les normes del qual prevaldran, en cas de conflicte, sobre les de les Comunitats Autònomes en tot allò que no hagi estat atribuït a la competència exclusiva d'aquestes darreres. En qualsevol cas, el Dret estatal serà supletori del dret de les Comunitats Autònomes.

Article 150.

1. Les Corts Generals, en matèries de competència estatal, podran atribuir a totes o a algunes de les Comunitats Autònomes la facultat de dictar, per a elles mateixes, normes legislatives dins del marc dels principis, bases i directrius fixats per una llei estatal. Sens perjudici de la competència dels Tribunals, dins cada llei-marc s'establirà la modalitat del control de les Corts Generals sobre aquestes normes legislatives de les Comunitats Autònomes.

2. L'Estat podrà transferir o delegar a les Comunitats Autònomes, mitjançant una llei orgànica, facultats corresponents a una matèria de titularitat estatal que per la seva naturalesa sigui susceptible de transferència o de delegació. La llei preveurà en cada cas la transferència corresponent de mitjans financers i també les formes de control que l'Estat es reservi.

3. L'Estat podrà dictar lleis que estableixin els principis necessaris per a harmonitzar les disposicions normatives de les Comunitats, fins i tot en el cas de matèries atribuïdes a la seva competència, sempre que ho demani l'interès general. Correspon a les Corts Generals d'apreciar l'existència d'aquesta necessitat, per majoria absoluta de cada Cambra.

Article 151.

1. No caldrà deixar transcórrer el termini de cinc anys a què es refereix l'apartat 2 de l'article 148 en cas que, dins el termini que estableix l'article 143.2, acordin la iniciativa del procés autonòmic, a més de les Diputacions o els òrgans interinsulars corresponents, les tres quartes parts dels municipis de cadascuna de les províncies afectades, les quals representin, com a mínim, la majoria del cens electoral de cadascuna i sigui ratificada mitjançant un referèndum pel vot afirmatiu de la majoria absoluta dels electors de cada província en els termes que estableixi una llei orgànica.

2. En el cas previst per l'apartat anterior, el procediment per a elaborar l'Estatut serà el següent:

1 El Govern convocarà tots els Diputats i Senadors elegits en les circumscripcions compreses dins l'àmbit territorial que pretengui accedir a l'autogovern per tal que es constitueixin en Assemblea, amb l'única finalitat d'elaborar l'Estatut d'autonomia corresponent, mitjançant l'acord de la majoria absoluta dels seus membres.

2 Una vegada hagi aprovat el projecte d'Estatut l'Assemblea de Parlamentaris, aquest serà tramès a la Comissió Constitucional del Congrés, la qual, dins el termini de dos mesos, l'examinarà amb el concurs i l'assistència d'una delegació de l'Assemblea proposant per tal de determinar-ne d'un acord comú la formulació definitiva.

3 Si s'arribava a un acord, el text que en resultés serà sotmès al referèndum del cos electoral de les províncies compreses dins l'àmbit territorial de l'Estatut projectat.

4 Si el projecte d'Estatut és aprovat a cada província per la majoria dels vots emesos vàlidament, serà elevat a les Corts Generals. Els Plens de totes dues Cambres decidiran sobre el text per mitjà d'un vot de ratificació. Havent estat aprovat l'Estatut, el Rei el sancionarà i el promulgarà com a llei.

5 Si no s'arribava a l'acord a què es refereix l'apartat 2 d'aquest número, les Corts Generals donaran al projecte d'Estatut la tramitació de llei. El text que aquestes aprovin serà sotmès al referèndum del cos electoral de les províncies compreses dins l'àmbit territorial de l'Estatut projectat. Si fos aprovat per la majoria dels vots emesos vàlidament a cada província, la promulgació serà feta en els termes de l'apartat anterior.

3. En els casos previstos pels paràgrafs 4 i 5 de l'apartat anterior, la manca d'aprovació del projecte d'Estatut per part d'una o de més d'una província no impedirà la constitució de la Comunitat Autònoma projectada per part de les altres en la forma que estableixi la llei orgànica prevista per l'apartat 1 d'aquest article.

Article 152.

1. En els Estatuts aprovats pel procediment a què es refereix l'article anterior, l'organització institucional autonòmica es basarà en una Assemblea Legislativa elegida per sufragi universal d'acord amb un sistema de representació proporcional que asseguri també la representació de les diverses zones del territori; un Consell de Govern, amb funcions executives i administratives, i un President, elegit per l'Assemblea entre els seus membres i nomenat pel Rei, al qual correspon la direcció del Consell de Govern, la suprema representació de la comunitat respectiva i la de l'Estat dins aquella. El President i els membres del Consell de Govern seran responsables políticament davant l'Assemblea. Un Tribunal Superior de Justícia, sens perjudici de la jurisdicció que correspongui al Tribunal Suprem, culminarà l'organització judicial dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma. En els Estatuts de les Comunitats Autònomes podran establir-se els supòsits i les formes de participació d'aquelles en l'organització de les demarcacions judicials del territori, tot de conformitat amb el que preveu la llei orgànica del poder judicial i dins la unitat i la independència pròpies d'aquest darrer. Sens perjudici del que disposa l'article 123, les successives instàncies processals, en el seu cas, s'esgotaran davant òrgans radicats en el mateix territori de la Comunitat Autònoma en què estigui l'òrgan competent en primera instància.

2. Una vegada hagin estat sancionats i promulgats els respectius Estatuts, només podran ser modificats mitjançant els procediments que ells mateixos estableixin i mitjançant referèndum entre els electors inscrits en els censos corresponents.

3. Els Estatuts podran establir circumscripcions territorials pròpies que gaudiran de plena personalitat jurídica mitjançant l'agrupació de municipis limítrofs.

Article 153.

El control de l'activitat dels òrgans de les Comunitats Autònomes serà exercit:

a) Pel Tribunal Constitucional en allò que es refereixi a la constitucionalitat de les seves disposicions administratives amb força de llei.

b) Pel Govern, previ dictamen del Consell d'Estat, en allò que pertoqui a l'exercici de funcions delegades a què es refereix l'apartat 2 de l'article 150.

c) Per la jurisdicció contencioso-administrativa en allò que es refereixi a l'administració autònoma o a les seves normes reglamentàries.

d) Pel Tribunal de Comptes en els aspectes econòmics i pressupostaris.

Article 154.

Un delegat nomenat pel Govern dirigirà l'administració de l'Estat en el territori de la Comunitat Autònoma i la coordinarà, si és procedent, amb l'administració pròpia de la Comunitat.

Article 155.

1. Si una Comunitat Autònoma no complia les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposaven, o actuava de forma que atemptés greument contra l'interès general d'Espanya, el Govern, previ requeriment desatès fet al President de la Comunitat Autònoma, amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat podrà adoptar les mesures necessàries per tal d'obligar-la al compliment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l'interès general esmentat.

2. Per a l'execució de les mesures previstes a l'apartat anterior, el Govern podrà donar instruccions a totes les autoritats de les Comunitats Autònomes.

Article 156.

1. Les Comunitats Autònomes gaudiran d'autonomia financera per a acomplir i exercir les seves competències d'acord amb els principis de coordinació amb la Hisenda estatal i de solidaritat entre tots els espanyols.

2. Les Comunitats Autònomes podran actuar com a delegats o col·laboradors de l'Estat en la tasca de recaptació, gestió i liquidació dels recursos tributaris d'aquest, d'acord amb les lleis i els Estatuts.

Article 157.

1. Els recursos de les Comunitats Autònomes seran constituïts per:

a) Impostos cedits totalment o parcialment per l'Estat; recàrrecs sobre impostos estatals i altres participacions en els ingressos de l'Estat.

b) Els seus propis impostos, taxes i contribucions especials.
c) Transferències d'un fons de compensació interterritorial i altres assignacions a càrrec dels Pressuposts Generals de l'Estat.
d) Rendiments procedents del seu patrimoni i ingressos de dret privat.
e) El producte de les operacions de crèdit.

2. Les Comunitats Autònomes no podran adoptar en cap cas mesures tributàries sobre béns situats fora del seu territori o que constitueixin un obstacle per a la lliure circulació de mercaderies o de serveis.
3. L'exercici de les competències financeres enumerades en l'anterior apartat 1, les normes per a resoldre els conflictes que poguessin sorgir i les possibles formes de col·laboració financera entre les Comunitats Autònomes i l'Estat podran ser regulades per mitjà d'una llei orgànica.

Article 158.

1. En els Pressuposts Generals de l'Estat es podrà establir una assignació a les Comunitats Autònomes en funció del volum dels serveis i de les activitats estatals que hagin assumit i de la garantia d'un nivell mínim en la prestació dels serveis públics fonamentals en tot el territori espanyol.
2. Per tal de corregir desequilibris econòmics interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat es constituirà un Fons de Compensació destinat a despeses d'inversió, els recursos del qual seran distribuïts per les Corts Generals entre les Comunitats Autònomes i les províncies, en el seu cas.

TÍTOL IX

Del Tribunal Constitucional

Article 159.

1. El Tribunal Constitucional es compon de 12 membres nomenats pel Rei, dels quals, quatre a proposició del Congrés, per majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, quatre a proposició del Senat, amb idèntica majoria, dos a proposició del Govern, i dos a proposició del Consell General del Poder judicial.
2. Els membres del Tribunal Constitucional hauran de ser nomenats entre Magistrats i Fiscals, Professors d'Universitat, funcionaris públics i advocats, tots ells juristes de competència reconeguda amb més de quinze anys d'exercici professional.
3. El període de designació dels membres del Tribunal Constitucional tindrà una durada de nou anys i es renovarà per terços cada tres anys.
4. La condició de membre del Tribunal Constitucional és incompatible: amb qualsevol mandat representatiu; amb els càrrecs polítics o administratius; amb l'exercici de funcions directives en un partit polític o en un sindicat o d'un càrrec al seu servei; amb l'exercici de les carreres judicial i fiscal; i amb qualsevol activitat professional o mercantil.
Altrament, els membres del Tribunal Constitucional tindran les incompatibilitats pròpies dels membres del poder judicial.
5. Els membres del Tribunal Constitucional seran independents i inamovibles en l'exercici del seu mandat.

Article 160.

El president del Tribunal Constitucional serà nomenat entre els membres d'aquest, pel Rei, a proposició del mateix Tribunal en ple, i per a un període de tres anys.

Article 161.

1. El Tribunal Constitucional té jurisdicció en tot el territori espanyol i és competent per a conèixer:

a) Del recurs d'inconstitucionalitat contra lleis i disposicions normatives amb força de llei. La declaració d'inconstitucionalitat d'una norma amb rang de llei, interpretada per la jurisprudència afectarà aquesta, però la sentència o sentències que n'hagin recaigut no perdran el valor de cosa jutjada.
b) Del recurs d'emparament per violació dels drets i de les llibertats continguts en l'article 53.2 d'aquesta Constitució, en els casos i formes que la llei estableixi.
c) Dels conflictes de competència entre l'Estat i les Comunitats Autònomes o dels de les Comunitats Autònomes entre elles.
d) De les altres matèries que li atribueixen la Constitució o les lleis orgàniques.

2. El Govern podrà impugnar davant el Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les Comunitats Autònomes. La impugnació provocarà la suspensió de la disposició o de la resolució recorreguda, però el Tribunal, en el seu cas, haurà de ratificar-la o alçar-la en un termini no superior als cinc mesos.

Article 162.

1. Tenen legitimitat:

a) Per a interposar el recurs d'inconstitucionalitat, el President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta Diputats, cinquanta Senadors, els òrgans col·legiats executius de les Comunitats Autònomes i, en el seu cas, les seves Assemblees.
b) Per a interposar el recurs d'emparament, tota persona natural o jurídica que invoqui un interès legítim, a més del Defensor del Poble i del Ministeri Fiscal.
2. En els altres casos la llei orgànica determinarà les persones i els òrgans legitimats.

Article 163.

Quan en algun procés, un òrgan judicial consideri que una norma amb rang de llei, aplicable al cas, de la validesa de la qual depengui el veredicte, pugui ser contrària a la Constitució, plantejarà la qüestió davant el Tribunal Constitucional en els casos, en la forma i amb els efectes que la llei estableixi, que en cap cas seran suspensius.

Article 164.

1. Les sentències del Tribunal Constitucional es publicaran en el butlletí oficial de l'Estat amb els vots particulars, si n'hi hagués. Tenen el valor de cosa jutjada a partir de l'endemà d'haver estat publicades i no hi ha cap recurs en contra. Aquelles que declarin la inconstitucionalitat d'una llei o d'una norma amb força de llei i totes aquelles que no es limitin a l'estimació subjetiva d'un dret, tenen plens efectes davant tothom.
2. Llevat que en el veredicte es disposi fins una altra cosa, subsistirà la vigència de la llei en la part no afectada per la inconstitucionalitat.

Article 165.

Una llei orgànica regularà el funcionament del Tribunal Constitucional, l'estatut dels seus membres, el procediment davant aquell i les condicions per a l'exercici de les accions.

TÍTOL X

De la reforma constitucional

Article 166.

La iniciativa de reforma constitucional s'exercirà en la forma prevista en els apartats 1 i 2 de l'article 87.

Article 167.

1. Els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats per una majoria de les tres cinquenes parts de cada una de les Cambres. Si no hi hagués acord entre totes dues, s'intentarà obtenir-lo mitjançant la creació d'una Comissió de composició paritària de Diputats i Senadors que presentarà un text que serà votat pel Congrés i pel Senat.
2. En cas de no aconseguir-se l'aprovació mitjançant el procediment de l'apartat anterior, i sempre que el text hagués obtingut el vot favorable de la majoria absoluta del Senat, el Congrés, per majoria de les dues terceres parts, podrà aprovar la reforma.
3. Una vegada hagi estat aprovada la reforma per les Corts Generals, serà sotmesa a referèndum per tal de ser ratificada, sempre que ho demani una dècima part dels membres de qualsevol de les Cambres, dins l'espai dels quinze dies següents al de l'aprovació.

Article 168.

1. Si es proposava la revisió total de la Constitució o una de parcial que afectés el Títol Preliminar, el Capítol Segon, Secció 1.ª del Títol I, o el Títol II, es procedirà a l'aprovació del principi per majoria dels dos terços de cada Cambra, i a la dissolució immediata de les Corts.
2. Les Cambres elegides hauran de ratificar la decisió i procedir a l'estudi del nou text constitucional, que haurà de ser aprovat per majoria dels tos terços de les dues Cambres.

Article 169.

No podrà iniciar-se la reforma constitucional en temps de guerra o de vigència d'algun dels estats previstos en l'article 116.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.

La Constitució empara i respecta els drets històrics dels territoris forals.

L'actualització general del dit règim foral es durà a terme, en el seu cas, dins el marc de la Constitució i dels Estatuts d'Autonomia.

Segona.

La declaració de majoria d'edat que conté l'article 12 d'aquesta Constitució no perjudica les situacions emparades pels drets forals en l'àmbit del dret privat.

Tercera.

La modificació del règim econòmic i fiscal de l'arxipèlag canari requerirà un informe previ de la Comunitat Autònoma o, en el seu cas, de l'òrgan provisional autonòmic.

Quarta.

En les Comunitats Autònomes on resideixi més d'una Audiència Territorial, els Estatuts d'Autonomia respectius podran mantenir les que ja hi eren i distribuir les competències entre elles, sempre de conformitat amb el que preveu la llei orgànica i mantenint-ne la unitat i la independència.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.

En els territoris dotats d'un règim provisional d'autonomia, el seus òrgans col.legiats superiors, per mitjà d'un acord adoptat per la majoria absoluta dels seus membres, podran substituir la iniciativa que l'apartat 2 de l'article 143 atribueix a les Diputacions Provincials o als òrgans interinsulars corresponents.

Segona.

Els territoris que en el passat haguessin plebiscitat afirmativament projectes d'Estatut d'Autonomia i en el moment de promulgar aquesta Constitució comptin amb règims provisionals d'autonomia, podran procedir immediatament en la forma prevista per l'apartat 2 de l'article 148, sempre que ho acordin així, per majoria absoluta, els òrgans preautonòmics col.legiats superiors, els quals hauran de comunicar-ho al Govern. El projecte d'Estatut serà elaborat d'acord amb allò que estableix l'article 151, número 2, a convocatòria de l'òrgan col.legiat preautonòmic.

Tercera.

La iniciativa del procés autonòmic per part de les Corporacions locals o dels seus membres, prevista per l'apartat 2 de l'article 143, s'entén que és diferida, amb tots els seus efectes, fins a la celebració de les primeres eleccions locals sota la vigència de la Constitució.

Quarta.

1. En el cas de Navarra, i a efectes de la seva incorporació al Consell General Basc o al règim autonòmic basc que el substitueixi en lloc del que estableix l'article 143 de la Constitució, la iniciativa correspon a l'òrgan Foral competent, el qual adoptarà la seva decisió per majoria dels membres que la componen. Per tal que la dita iniciativa sigui vàlida, caldrà, a més, que la decisió de l'òrgan Foral competent sigui ratificada per un referèndum convocat expressament a aquest efecte, i aprovat per majoria dels vots vàlids emesos.

2. Si la iniciativa no reeixís, només es podrà tornar a produir en un altre període de mandat de l'òrgan Foral competent, i en qualsevol cas, quan hagi transcorregut el termini mínim que estableix l'article 143.

Cinquena.

Les ciutats de Ceuta i Melilla podran constituir-se en Comunitats Autònomes en el cas que ho decideixin així els seus respectius Ajuntaments, per mitjà d'un acord adoptat per la majoria absoluta dels seus membres i, si ho autoritzen les Corts Generals, mitjançant una llei orgànica, en els termes prevists per l'article 144.

Sisena.

Si es trameten a la Comissió de Constitució del Congrés diversos projectes d'Estatut, seran dictaminats per l'ordre en què hi haguessin entrat, i el termini de dos mesos a què es refereix l'article 151 començarà a comptar des que la Comissió acabi l'estudi del projecte o projectes de què successivament hagi conegut.

Setena.

Els organismes provisionals autonòmics es consideraran dissolts en els casos següents:

a) Una vegada hagin estat constituïts els òrgans que estableixin els estatuts d'autonomia aprovats conformement a aquesta Constitució.

b) En cas que la iniciativa del procés autonòmic no arribés a reeixir per tal com no complís els requisits prevists a l'article 143.

c) Si l'organisme no hagués exercit el dret que li reconeix la disposició transitòria primera dins el termini de 3 anys.

Vuitena.

1. Després de l'entrada en vigor de la present Constitució les Cambres que l'an aprovada assumiran les funcions i les competències que s'hi assenyalen respectivament per al Congrés i per al Senat, sense que en cap cas el seu mandat s'estengui més enllà del 15 de juny de 1981.

2. A efecte del que estableix l'article 99, la promulgació de la Constitució es considera com un cas constitucional en el qual és procedent d'aplicar-lo. A aquest efecte, a partir de la dita promulgació s'obrirà un període de trenta dies per a l'aplicació del que disposa el dit article. Durant aquest període, l'actual President del Govern, que assumirà les funcions i les competències que la Constitució estableix per a aquest càrrec, podrà optar per usar de la facultat que li reconeix l'article 115 o bé donar pas, amb la seva dimissió, a l'aplicació del que estableix l'article 99; en aquest darrer cas restarà en la situació prevista en l'apartat 2 de l'article 101.

3. En cas de dissolució, d'acord amb el que preveu l'article 115 i si no s'hagués produït legalment allò que preveuen els articles 68 i 69, caldrà aplicar a les eleccions les normes vigents anteriorment, amb les úniques excepcions que en allò que fa referència a ineligibilitats i incompatibilitats s'aplicarà directament allò que preveu l'incís segon de la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 70 de la Constitució i el que aquesta mateixa disposa respecte a l'edat de votar i el que estableix l'article 69.3.

Novena.

Als tres anys d'haver estat elegits per primera vegada els membres del Tribunal Constitucional es designarà per sorteig un grup de quatre membres de la mateixa procedència electiva que hagin de cessar i ser renovats. A aquest únic efecte, es consideraran agrupats com membres de la mateixa procedència els dos designats a proposició del Govern i els dos que procedeixen de la formulada pel Consell General del poder judicial. Després d'un segon període de tres anys es renovarà pel mateix procediment un dels dos grups no afectats pel sorteig anterior. Des d'aquell moment la renovació s'ajustarà al que estableix el número 3 de l'article 154.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

1. Resta derogada la Llei 1/1977, del 4 de gener per a la Reforma Política, i, en la mesura que no fossin ja derogades aquesta llei, la de Principios Fundamentales del Movimiento del 17 de maig de 1958, el Fuero de los Españoles del 17 de juliol de 1945, el Fuero de Trabajo del 9 de març de 1938, la Ley Constitutiva de las Cortes del 17 de juliol de 1942, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado del 26 de juliol de 1947, modificades totes per la llei orgànica de l'Estat del 10 de gener de 1967 i de la mateixa manera, aquesta darrera i la del Referèndum Nacional del 22 d'octubre de 1945.

2. En la mesura que poguessin conservar alguna vigència, es considera derogat definitivament la Llei del 25 d'octubre de 1839 en allò que pogués afectar les províncies d'Àlaba, Guipúscoa i Biscaia.

De la mateixa forma es considera derogada definitivament la Llei del 21 de juliol de 1876.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Constitució entrarà en vigor el mateix dia que en sigui publicat el text oficial al Butlletí Oficial de l'Estat. Serà publicada també en les altres llengües d'Espanya.

IMPRENTA NACIONAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
GACETA DE MADRID

Depósito Legal M. 1-1958 Año CCCXVIII Viernes 29 de diciembre de 1978 Núm. 311.4

CONSTITUCION ESPAÑOLA

APROBADA POLAS CORTES O 31 DE OUTUBRO DE 1978

RATIFICADA POLO POBO ESPAÑOL NO REFERENDUM
DO 6 DE DECEMBRO DE 1978

SANCIONADA POR S. M. O REI ANTE AS CORTES
O 27 DE DECEMBRO DE 1978

CONSTITUCION ESPAÑOLA

PREAMBULO

A Nación española, desexando que se estableza a xusticia, a libertade e a seguridade e que se promova o ben de cantos a integran, no uso da súa soberanía, proclama a súa vontade de:

Garantizar, dentro da Constitución e das leis, a convivencia democrática, conforme a un orde económico e social xusto.

Consolidar un Estado de Dereito que asegure o imperio da lei como expresión da vontade popular.

Protexer a tódolos españois e pobos de España no exercicio dos dereitos humanos, das súas culturas e tradicións, das súas linguas e institucións.

Promover, para asegurar a todos unha digna calidade de vida, o progreso da cultura e da economía.

Establecer unha sociedade democrática avanzada, e

Colaborar no fortalecemento dunhas relacións pacíficas e de eficaz cooperación entre tódolos pobos da Terra.

En consecuencia, as Cortes aproban e o pobo español ratifica a seguinte

CONSTITUCION

TITULO PRELIMINAR

Artigo 1.

1. España constitúese nun Estado social e democrático de Dereito, que propugna como valores superiores de seu ordenamento xurídico a libertade, a xusticia, a igualdade e o pluralismo político.

2. A soberanía nacional reside no pobo español, do que emanan os poderes do Estado.

3. A forma política do Estado español é a Monarquía parlamentaria.

Artigo 2.

A Constitución fundaméntase na indisoluble unidade da Nación española, patria común e indivisible de tódolos españois, e recoñece e garantiza o dereito á autonomía das nacionalidades e rexións que a integran e a solidaridade entre todas elas.

Artigo 3.

1. O castelán é a lingua española oficial do Estado. Tódolos españois teñen o deber de coñecela e o dereito a usala.

2. As outras linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas de acordo cos seus Estatutos.

3. A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respeto e protección.

Artigo 4.

1. A bandeira de España está formada por tres franxas horizontais, vermella, marela e vermella; a marela é dobre de ancha do que cada unha das vermellas.

2. Os Estatutos poderán recoñecer bandeiras e mais enseñas propias das Comunidades Autónomas. Estas utilizaranse xunto á bandeira de España nos seus edificios públicos e nos seus actos oficiais.

Artigo 5.

A capital do Estado é a vila de Madrid.

Artigo 6.

Os partidos políticos expresan o pluralismo político, concorren á formación e manifestación da vontade popular e son instrumento fundamental para a participación política. A súa creación e o exercicio da súa actividade son libres dentro do respeto a Constitución e mais á lei. A súa estrutura interna e funcionamento deberán ser democráticos.

Artigo 7.

Os sindicatos de traballadores e as asociacións empresariais contribuen á defensa e promoción dos intereses económicos e sociais que lles son propios. A sua creación e o exercicio da sua actividade son libres dentro do respeto á Constitución e á lei. A sua estructura interna e funcionamento deberán sér democráticos.

Artigo 8.

1. As Forzas Armadas, constituídas polo Exército de Terra, a Armada e o Exército do Aire, teñan como misión garantiza-la soberanía e a independencia de España, defende-la súa integridade territorial e o ordenamento constitucional.

2. Unha lei orgánica regulará as bases da organización militar de acordo cos principios da presente Constitución.

Artigo 9.

1. Os cidadáns e os poderes públicos están suxeitos á Constitución e ao resto do ordenamento xurídico.

2. Corresponde aos poderes públicos promoveren as condicións para que a libertade e a igualdade do individuo e mais dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas; removeren os atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitaren a participación de tódolos cidadáns na vida política, económica, cultural e social.

3. A Constitución garantiza o principio da legalidade, a xerarquía normativa, a publicidade das normas, a irretroactividade das disposicións sancionadoras non favorables ou restritivas de dereitos individuais, a seguridade xurídica, a responsabilidade e maila interdición da arbitrariedade dos poderes públicos.

TITULO I

Dos dereitos e deberes fundamentais

Artigo 10.

1. A dignidade da persoa, os dereitos inviolables que lle son inherentes, o libre desenvolvemento da persoalidade, o respeto á lei e aos dereitos dos demais son fundamento do orde político e da paz social.

2. As normas relativas aos dereitos fundamentais e ás libertades que a Constitución recoñece, interpretaranse conforme á Declaración Universal dos Dereitos Humanos e aos tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias ratificados por España.

CAPITULO PRIMEIRO

Dos españois e dos extranxeiros

Artigo 11.

1. A nacionalidade española adquírese, consérvase e pérdese de acordo co establecido pola lei.

2. Ningún español de orixe poderá ser privado da súa nacionalidade.

3. O Estado poderá concertar tratados de dobre nacionalidade cos países iberoamericanos ou con aqueles que tiveran ou teñan un particular vencello con España. Nestes mesmos países, aínda que non recoñezcan aos seus cidadáns un dereito recíproco, poderán naturalizarse os españois sin perderen a súa nacionalidade de orixe.

Artigo 12.

Os españois son maiores de edade aos 18 anos.

Artigo 13.

1. Os extranxeiros gozarán en España das libertades públicas que garantiza o presente Título nos termos que establezan os tratados e maila lei.

2. Só os españois serán titulares dos dereitos recoñecidos no artigo 23, non sendo o que, atendendo a criterios de reci-

procidade, poida establecerse por tratado ou lei para o dereito de sufraxio activo nas eleccións municipais.

3. A extradición non se concederá senón en cumprimento dun tratado ou da lei, atendendo ao principio da reciprocidade. Quedan excluidos da extradición os delitos políticos, non considerándose como tales os actos de terrorismo.

4. A lei establecerá os termos en que os cidadáns doutros países e mailos apátridas poderán gozar do dereito de asilo en España.

CAPITULO SEGUNDO

Dereitos e libertades

Artigo 14.

Os españois son iguais ante a lei, sin que poida prevalecer discriminación ningunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

SECCION 1.ª

Dos dereitos fundamentais e das libertades públicas

Artigo 15.

Todos teñen dereito á vida e á integridade física e moral, sin que, en caso ningún, poidan ser sometidos a tortura nin a penas ou tratos inhumanos ou degradantes. Queda abolida a pena de morte, salvo o que se poida dispoñer nas leis penais militares para tempos de guerra.

Artigo 16.

1. Garantízase a libertade ideolóxica, relixiosa e de culto dos individuos e das comunidades sin mais limitación, nas súas manifestacións, cá necesaria para a conservación do orde público protexido pola lei.

2. Ninguén poderá ser obrigado a declarar sobre a súa ideoloxía, relixión ou crenzas.

3. Ningunha confesión terá carácter estatal. Os poderes públicos terán en conta as crenzas relixiosas da sociedade española e manterán as conseguintes relacións de cooperación coa Igrexa Católica e as demais confesións.

Artigo 17.

1. Toda persoa ten dereito á libertade e á seguridade. Ninguén poderá ser privado da súa libertade senón coa observancia do establecido neste artigo e nos casos e na forma previstos pola lei.

2. A detención preventiva non poderá durar mais do tempo estritamente necesario para a realización das averiguacións tendentes ao esclarecemento dos feitos, e, en todo caso, no prazo máximo de setenta e dúas horas, o detido deberá ser posto en libertade ou a disposición da autoridade xudicial.

3. Toda persoa detida debe ser informada de forma inmediata, e de modo que lle sexa comprensible, dos seus dereitos e das razóns da súa detención, sin que poida ser obrigada a declarar. Garantízase a asistencia do abogado ao detido nas dilixencias policiais e xudiciais, nos termos que a lei estableza.

4. A lei regulará un procedemento de «habeas corpus» para que se produza a inmediata posta a disposición xudicial de toda persoa detida ilegalmente. Igualmente, determinarase por lei o prazo máximo de duración da prisión provisional.

Artigo 18.

1. Garantízase o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e mais á propia imaxe.

2. O domicilio é inviolable. Ningunha entrada ou rexistro poderá facerse nel sin consentimento do titular ou resolución xudicial, non sendo en caso de manifesto delito.

3. Garantízase o segredo das comunicacións e, en especial, das postais, telegráficas ou telefónicas, non sendo en caso de resolución xudicial.

4. A lei limitará o uso da informática para que se garantice o honor e mailа intimidade persoal e familiar dos cidadáns e o pleno exercicio dos seus dereitos.

Artigo 19.

Os españois teñen derelto a elexir libremente a súa residencia e a circularen por todo o territorio nacional.

Tamén teñen dereito a entrar e saír libremente de España nos termos que a lei estableza. Este dereito non poderá ser limitado por motivos políticos ou ideolóxicos.

Artigo 20.

1. Recoñécense e protéxense os dereitos:

a) A expresar e difundir libremente os pensamentos, ideas e opinións mediante a palabra, o escrito ou calquera outro medio de reproducción.

b) A produción e creación literaria, artística, científica e técnica.

c) A libertade de cátedra.

d) A comunicar ou recibir libremente información veraz por calquera medio de difusión. A lei regulará o dereito á cláusula de conciencia e ao segredo profesional no exercicio destas libertades.

2. O exercicio destes dereitos non pode restrinxirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. A lei regulará a organización e control parlamentario dos medios de comunicación social dependentes do Estado ou de calquera ente público e garantizará o acceso aos citados medios dos grupos sociais e políticos significativos, respetando o pluralismo da sociedade e das diversas linguas de España.

4. Estas libertades teñen o seu límite no respeto aos dereitos recoñecidos neste Título, nos preceptos das leis que os desenvolven e, especialmente, no dereito ao honor, á intimidade, á propia imaxe e á protección da mocedade e da infancia.

5. Só poderá acordarse o secuestro de publicacións, gravacións e outros medios de información en virtude de resolución xudicial.

Artigo 21.

1. Recoñécese o dereito de reunión pacífica e sin armas. O exercicio deste dereito non necesitará autorización previa.

2. Nos casos de reunión en lugares de tránsito público e manifestacións darase comunicación previa á autoridade, que só as poderá prohibir cando existan razóns fundadas de alteración do orde público, con perigo para persoas ou bens.

Artigo 22.

1. Recoñécese o dereito de asociación.

2. As asociacións que persigan fins ou empreguen medios tipificados como delito son ilegais.

3. As asociacións constituídas ao abeiro deste artigo deberánse inscribir nun rexistro aos únicos efectos de publicidade.

4. As asociacións só poderán ser disoltas ou suspendidas nas súas actividades en virtude de resolución xudicial motivada.

5. Prohíbense as asociacións secretas e mailas de carácter paramilitar.

Artigo 23.

1. Os cidadáns teñen dereito a participar nos asuntos públicos, directamente ou por medio de representantes, libremente elexidos en eleccións periódicas por sufraxio universal.

2. Tamén teñen dereito a acceder en condicións de igualdade ás funcións e cargos públicos, cos requisitos que sinalan as leis.

Artigo 24.

1. Tódalas persoas teñen dereito a obte-la tutela efectiva dos xueces e tribunais no exercicio dos seus dereitos e intereses lexítimos, sin que, en ningún caso, poida producirse indefensión.

2. Do mesmo xeito, todos teñen dereito ao Xuez ordinario predeterminado pola lei, á defensa e á asistencia de letrado, a seren informados da acusación formulada contra eles, a un proceso público sin dilacións indebidas e con tódalas garantías, a utilizaren os medios de proba pertinentes para a súa defensa, a non declararen contra sí mesmos, a non se confesaren culpables e á presunción de inocencia.

A lei regulará os casos en que, por razón de parentesco ou de segredo profesional, non se estea obrigado a declarar sobre feitos presuntamente delitivos.

Artigo 25.

1. Ninguén poderá ser condenado ou sancionado por accións ou omisións que no momento de se produciren non constitúan delito, falta ou infracción administrativa, segundo a lexislación vixente daquela.

2. As penas privativas de libertade e as medidas de seguridade estarán encamiñadas á reeducación e reinserción social e non poderán consistir en traballos forzados. O condenado a pena de prisión que estea cumprindo a mesma gozará dos dereitos fundamentais deste Capítulo, fóra dos que se vexan expresamente limitados polo contido do fallo condenatorio, o sentido da pena e a lei penitenciaria. En todo caso, terá dereito a un traballo remunerado e mais aos beneficios correspondentes da Seguridade Social, así como ao acceso á cultura e ao desenvolvemento integral da súa personalidade.

3. A Administración civil non poderá impoñer sancións que, directa ou subsidiariamente, impliquen privación de libertade.

Artigo 26.

Prohíbense os Tribunais de Honor no ámbito da Administración civil e das organizacións profesionais.

Artigo 27.

1. Todos teñen dereito á educación. Recoñécese a libertade de ensino.

2. A educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana no respeto aos principios democráticos de convivencia e aos dereitos e libertades fundamentais.

3 Os poderes públicos garantizan o dereito que asiste aos pais para que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias convicións.

4. O ensino básico é obrigatorio e gratuito.

5. Os poderes públicos garantizan o dereito de todos á educación, mediante unha programación xeral do ensino, con participación efectiva de tódolos sectores afectados e a creación de centros docentes.

6. Recoñécese ás persoas físicas e xurídicas a libertade de creación de centros docentes, dentro do respeto aos principios constitucionais.

7. Os profesores, os pais e se procede, os alunos, intervirán no control e xestión de tódolos centros sostidos pola Administración con fondos públicos, nos termos que a lei estableza.

8. Os poderes públicos inspeccionarán e homologarán o sistema educativo para garantizaren o cumprimento das leis.

9. Os poderes públicos axudarán aos centros docentes que reúnan os requisitos que a lei estableza.

10. Recoñécese a autonomía das Universidades, nos termos que a lei estableza.

Artigo 28.

1. Todos teñen dereito a sindicarse libremente. A lei poderá pór limitacións ou excepcións ao exercicio deste dereito ás Forzas ou Institutos armados ou aos demais Corpos sometidos a disciplina militar e regulará as peculiaridades do seu exercicio para os funcionarios públicos. A libertade sindical comprende o dereito a fundar sindicatos e a se afiliar ao da súa elección, así como o dereito dos sindicatos a formaren confederacións e a fundaren organizacións sindicais internacionais ou a se afiliaren ás mesmas. Ninguén poderá ser obrigado a se afiliar a un sindicato.

2. Recoñécese o dereito á folga dos traballadores para a defensa dos seus intereses. A lei que regule o exercicio deste dereito establecerá as garantías precisas para que se asegure o mantemento dos servicios esenciais da comunidade.

Artigo 29.

1. Tódolos españois terán o dereito de petición individual e colectiva, por escrito, na forma e cos efectos que determine a lei.

2. Os membros das Forzas ou Institutos armados ou dos Corpos sometidos a disciplina militar poderán exercer este dereito só individualmente e de acordo co disposto na súa lexislación específica.

SECCION 2.ª

Dos dereitos e deberes dos cidadáns

Artigo 30.

1. Os españois teñen o dereito e o deber de defender a España.

2. A lei fixará as obrigas militares dos españois e regulará, coas debidas garantías, a obxección de conciencia, así como as demais causas de exención do servicio militar obrigatorio, podendo impoñer, no seu caso, unha prestación social sustitutoria.

3. Poderase establecer un servicio civil para o cumprimento de fins de interés xeral.

4. Mediante a lei poderán regularse os deberes dos cidadáns nos casos de grave risco, catástrofe ou calamidade pública.

Artigo 31.

1. Todos contribuirán ao sustentamento dos gastos públicos de acordo coa súa capacidade económica mediante un sistema tributario xusto inspirado nos principios de igualdade e progresividade que, en ningún caso, chegará a ser confiscatorio.

2. O gasto público realizará unha asignación equitativa dos recursos públicos e a súa programación e execución responderán aos criterios de eficiencia e economía.

3. Só poderán establecerse prestacións personais ou patrimoniais de carácter público reguladas pola lei.

Artigo 32.

1. O home e a muller teñen dereito a contraer matrimonio con plena igualdade xurídica.

2. A lei regulará as formas de matrimonio, a edade e malla capacidade para o contraer, os dereitos e deberes dos cónxuxes, as causas de separación e disolución e os seus efectos.

Artigo 33.

1. Recoñécese o dereito á propiedade privada e á herdanza.

2. A función social destes dereitos delimitará o seu contido, de acordo coas leis.

3. Ninguén poderá ser privado dos seus bens e dereitos se non é por causa xustificada de utilidade pública ou interés social, mediante a correspondente indemnización e de conformidade co disposto polas leis.

Artigo 34.

1. Recoñécese o dereito de fundación para fins de interés xeral, regulado pola lei.

2. Rexerá tamén para as fundacións o disposto nos apartados 2 e 4 do artigo 22.

Artigo 35.

1. Tódolos españois teñen o deber de traballar e o dereito ao traballo, á libre elección de profesión ou oficio, á promoción a través do traballo e a unha remuneración suficiente para satisfaceren as súas necesidades e as da súa familia, sin que en ningún caso se poida facer discriminación por razón de sexo.

2. A lei regulará un estatuto dos traballadores.

Artigo 36.

A lei regulará as peculiaridades propias do réxime xurídico dos Colexios Profesionais e do exercicio das profesións tituladas. A estrutura interna e o funcionamento dos Colexios deberán ser democráticos.

Artigo 37.

1. A lei garantizará o dereito á negociación colectiva laboral entre os representantes dos traballadores e empresarios, así como a forza vinculante dos convenios.

2. Recoñécese o dereito dos traballadores e empresarios a adoptaren medidas de conflito colectivo. A lei que regula o exercicio deste dereito, sin perxuicio das limitacións que poida establecer, incluirá as garantías precisas para que se asegure o funcionamento dos servicios esenciais da comunidade.

Artigo 38.

Recoñécese a libertade de empresa no marco da economía de mercado. Os poderes públicos garantizan e protexen o seu exercicio e a defensa da produtividade, de acordo coas esixencias da economía xeral e cando corresponda, da planificación.

CAPITULO TERCEIRO

Dos principios rectores da política social e económica

Artigo 39.

1. Os poderes públicos aseguran a protección social, económica e xurídica da familia.

2. Os poderes públicos asegurán, tamén, a protección integral dos fillos, iguais estes perante a lei con independencia da súa filiación, e a das nais, calquera que sexa o seu estado civil. A lei posibilitará a investigación da paternidade.

3. Os pais deberán prestar asistencia de todo tipo aos fillos tidos dentro ou fóra do matrimonio, durante a súa minoría de edade e nos demais casos en que legalmente proceda.

4. Os nenos gozarán da protección prevista nos acordos internacionais que miran polos seus dereitos.

Artigo 40.

1. Os poderes públicos promoverán as condicións favorables para o progreso social e económico e para unha distribución da renda rexional e persoal mais equitativa, no marco dunha política de estabilidade económica. De maneira especial realizarán unha política orientada ao pleno emprego.

2. Además, os poderes públicos fomentarán unha política que garantice a formación e readaptación profesionais; mirarán pola seguridade e hixiene no traballo e garantizarán o descanso necesario, mediante a limitación da xornada laboral, as vacacións periódicas retribuídas e a promoción de centros adecuados.

Artigo 41.

Os poderes públicos manterán un réxime público de Seguridade Social para tódolos cidadáns, que garantice a asistencia e prestacións sociais suficientes ante situacións de necesidade, especialmente en caso de desemprego. A asistencia e prestacións complementarias serán libres.

Artigo 42.

O Estado mirará especialmente pola salvagarda dos dereitos económicos e sociais dos traballadores españois no extranxeiro, e orientará a súa política cara ao seu regreso.

Artigo 43.

1. Recoñécese o dereito á protección da saúde.

2. Corresponde aos poderes públicos organizaren e tutelaren a saúde pública mediante medidas preventivas e as prestacións e servicios necesarios. No tocante a iso a lei establecerá os dereitos e deberes de todos.

3. Os poderes públicos fomentarán a educación sanitaria, a educación física e mailo deporte. Tamén facilitarán a adecuada utilización do lecer.

Artigo 44.

1. Os poderes públicos promoverán e tutelarán o acceso á cultura, á que todos teñen dereito.

2. Os poderes públicos promoverán a ciencia e investigación científica e técnica en beneficio do interés xeral.

Artigo 45.

1. Todos teñen dereito a disfrutar dun medio ambiente adecuado para e desenvolvemento da persoa, así como o deber de o conservaren.

2. Os poderes públicos mirarán pola utilización racional de tódolos recursos naturais, co fin de protexeren e melloraren a calidade da vida e defenderen e restauraren o medio ambiente, coa axuda da indispensable solidaridade colectiva.

3. Para quen viole o disposto no apartado anterior, nos termos que a lei fixe estableceranse sancións penais ou; se houbera lugar, administrativas, así como a obriga da reparación do dano causado.

Artigo 46

Os poderes públicos garantizarán a conservación e promoverán o enriquecemento do patrimonio histórico, cultural e artístico dos pobos de España e dos bens que o integran, calquera que sexa o seu réxime xurídico e a súa titularidade. A lei penal sancionará os atentados contra este patrimonio.

Artigo 47.

Tódolos españois teñen derelto a disfrutar dunha vivenda digna e axeitada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para faceren efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interés xeral para que se impida a especulación.

A comunidade participará nas plusvalías que nazan da acción urbanística dos entes públicos.

Artigo 48.

Os poderes públicos promoverán as condicións para a participación libre e eficaz da mocedade no desenvolvemento político, social, económico e cultural.

Artigo 49.

Os poderes públicos realizarán unha política de previsión, tratamento, rehabilitación e integración dos disminuídos físicos, sensoriais e psíquicos, aos que prestarán a atención especializada que requiran e ampararanos especialmente para o disfrute dos dereitos que este Título outorga a tódolos cidadáns.

Artigo 50.

Os poderes públicos garantizarán, mediante pensións axeitadas e periodicamente actualizadas, a suficiencia económica aos cidadáns na terceira edade. Tamén e con independencia das obrigas familiares, promoverán o seu benestar mediante un sistema de servicios sociais que atenderán os seus problemas específicos de saúde, vivienda, cultura e lecer.

Artigo 51.

1. Os poderes públicos garantizarán a defensa dos consumidores e usuarios, protexendo, mediante procedementos eficaces, a seguridade, a saúde e mailos lexítimos intereses económicos dos mesmos.

2. Os poderes públicos promoverán a información e maila educación dos consumidores e usuarios, fomentarán as súas organizacións e oirán a estas nas cuestións que poidan afectar a aqueles, nos termos que a lei estableza.

3. No marco do disposto polos apartados anteriores, a lei regulará o comercio interior e mailo réxime de autorización de produtos comerciais.

Artigo 52.

A lei regulará as organizacións profesionais que contribúan á defensa dos intereses económicos que lles sexan propios. A súa estrutura interna e funcionamento deberán de ser democráticos.

CAPITULO CUARTO

Das garantías das libertades e dereitos fundamentais

Artigo 53.

1. Os dereitos e libertades recoñecidos no Capítulo segundo do presente Título vinculan a tódolos poderes públicos. Só por lei, que en todo caso deberá respeta-lo seu contido esencial, poderá regularse o exercicio de tales dereitos e libertades que se tutelarán de acordo co previsto no artigo 161, 1 a).

2. Calquera cidadán poderá reclama-la tutela das libertades e dereitos recoñecidos no artigo 14 e a Sección 1.ª do Capítulo Segundo ante os Tribunais ordinarios por un procedemento baseado nos principios de preferencia e sumariedade e, se fose mester, a través do recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional. Este derradeiro recurso será aplicable á obxección de conciencia recoñecida no artigo 30.

3. O recoñecemento, o respeto e a protección dos principios recoñecidos no Capítulo Terceiro, informará a lexislación positiva, a práctica xudicial e a actuación dos poderes públicos. Só poderán ser alegados perante a Xurisdición ordinaria de acordo co que dispoñan as leis que os desenvolvan.

Artigo 54.

Unha lei orgánica regulará a institución do Defensor do Pobo, como alto comisionado das Cortes Xerais, designado por estas para a defensa dos dereitos comprendidos neste Título; para iso poderá supervisa-la actividade da Administración, dando conta ás Cortes Xerais.

CAPITULO QUINTO

Da suspensión dos dereitos e libertades

Artigo 55.

1. Os dereitos recoñecidos nos artigos 17, 18, apartados 2 e 3, artigos 19, 20, apartados 1, a), d), e 5, artigos 21, 28 apartado 2, e artigo 37, apartado 2, poderán ser suspendidos cando se acorde a declaración de estado de excepción ou de sitio nos termos previstos na Constitución. Exceptúase do establecido anteriormente o apartado 3 do artigo 17 para o suposto de declaración de estado de excepción.

2. Unha lei orgánica poderá determina-la forma e os casos nos que, de xeito individual e coa necesaria intervención xudicial e o adecuado control parlamentario, os dereitos recoñecidos nos artigos 17, apartado 2, e 18, apartados 2 e 3, poden ser suspendidos para persoas determinadas, en relación coas investigacións correspondentes á actuación de bandas armadas ou elementos terroristas.

A utilización inxustificada ou abusiva das facultades recoñecidas na citada lei orgánica producirá responsabilidade penal, como violación dos dereitos e libertades recoñecidos polas leis.

TITULO II

Da Coroa

Artigo 56.

1. O Rei é o Xefe do Estado, símbolo da súa unidade e permanencia, arbitra e modera o funcionamento regular das institucións, asume a mais alta representación do Estado Español nas relacións internacionais, especialmente coas nacións da súa comunidade histórica, e exerce as funcións que lle atribúen expresamente a Constitución e mailas leis.

2. O seu título é o Rei de España e poderá facer uso dos demais que correspondan á Coroa.

3. A persoa do Rei é inviolable e non está suxeita a responsabilidade. Os seus actos estarán sempre refrendados na forma establecida no artigo 64, carecendo de validez sin ese refrendo, agás o disposto no artigo 65, 2.

Artigo 57.

1. A Coroa de España é hereditaria nos sucesores da S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, lexítimo herdeiro da dinastía histórica. A sucesión no trono seguirá o orde regular de primoxenitura e representación, sendo preferida sempre a liña anterior ás posteriores; na mesma liña, o grado máis próximo ao mais remoto; no mesmo grado, o varón á muller, e no mesmo sexo, a persoa de mais edade á de menos.

2. O Príncipe herdeiro, dende o seu nacemento ou desque se produza o feito que orixine o chamamento, terá a dignidade de Príncipe de Asturias e os demais títulos vinculados tradicionalmente ao sucesor da Coroa de España.

3. Extinguidas tódalas liñas chamadas en Dereito, as Cortes Xerais proverán a sucesión na Coroa na forma que mais conveña aos intereses de España.

4. Aquelas persoas que tendo dereito á sucesión no trono contraian matrimonio contra a expresa prohibición do Rei e das Cortes Xerais, quedarán excluídas na sucesión á Coroa elas e os seus descendentes.

5. As abdicacións e renuncias e calquera dúbida de feito ou de dereito que ocorra no orde de sucesión á Coroa, resolveranse por unha lei orgánica.

Artigo 58.

A Raíña consorte ou o consorte da Raíña non poderán asumir funcións constitucionais, fóra do disposto para a Rexencia.

Artigo 59.

1. Cando o Rei for menor de edade, o pai ou a nai do Rei e, no seu defecto, o parente mais vello mais próximo a suceder na Coroa, segundo o orde establecido na Constitución, entrará a exercer inmediatamente a Rexencia e a exercerá durante o tempo da minoría de edade do Rei.

2. Se o Rei quedase inhabilitado para o exercicio da súa autoridade e a imposibilidade fose recoñecida polas Cortes Xerais, entrará a exercer inmediatamente a Rexencia o Príncipe herdeiro da Coroa, de ser maior de edade. De nono ser, procederase da maneira prevista no apartado anterior, estra que o Príncipe herdeiro chegue á maioría de edade.

3. Se non houbese ningunha persoa a quen corresponda a Rexencia, esta será nomeada polas Cortes Xerais, e comporase dunha, tres ou cinco persoas.

4. Para o exercicio da Rexencia compre ser español e maior de edade.

5. A Rexencia exercerase por mandamento constitucional e sempre en nome do Rei.

Artigo 60.

1. Será tutor do Rei menor a persoa que no seu testamento nomeara o Rei defunto, sempre que sexa maior de edade e español de nacemento; se non o nomeara, será tutor o pai ou a nai, mentres permanezan viúdos. No seu defecto, nomearano as Cortes Xerais, pro non poderán acumularse os cargos de Rexente e tutor senon no pai, nai ou ascendentes directos do Rei.

2. O exercicio da tutela é tamén incompatible co de todo cargo ou representación política.

Artigo 61.

1. O Rei, ao ser proclamado ante as Cortes Xerais, prestará xuramento de desempeñar fielmente as súas funcións, gardar e facer que se garde a Constitución e mailas leis e que se respeten os dereitos dos cidadáns e das Comunidades Autónomas.

2. O Príncipe herdeiro, ao chegar á maioría de edade, e o Rexente ou Rexentes ao se faceren cargo dar súas funcións, prestarán o mesmo xuramento, así como o de fidelidade ao Rei.

Artigo 62.

Corresponde ao Rei:

a) A sanción e a promulgación das leis.

b) A convocatoria e disolución das Cortes Xerais e a convocatoria de eleccións nos termos previstos na Constitución.

c) Convocar a referéndum nos casos previstos na Constitución.

d) Propoñer candidato a Presidente do Goberno e, no seu caso, nomealo, así como pór fin ás súas funcións nos termos previstos na Constitución.

e) Nomear e separar aos membros do Goberno, a proposta do seu Presidente.

f) Expedi-los decretos acordados no Consello de Ministros, conferi-los empregos civís e militares e a concesión de honores e distincións de acordo coas leis.

g) Ser informado dos asuntos de Estado e presidir, a estes efectos, as sesións do Consello de Ministros, cando o estime oportuno, a petición do Presidente do Goberno.

h) O mando supremo das Forzas Armadas.

i) O exercicio do dereito de gracia de acordo coa lei, que non poderá autorizar indultos xerais.

j) O Alto Padroado das Reais Academias.

Artigo 63.

1. O Rei acredita aos embaixadores e a otros representantes diplomáticos. Os representantes extranxeiros en España están acreditados perante el.

2. Ao Rei corresponde a manifestación do consentimento do Estado para se obrigar internacionalmente por medio de tratados, de conformidade coa Constitución e as leis.

3. Ao Rei corresponde, previa autorización das Cortes Xerais declarar a guerra e facer a paz.

Artigo 64.

1. Os actos do Rei serán refrendados polo Presidente do Goberno e, se compre, polos Ministros competentes. A proposta e o nomeamento do Presidente do Goberno, e a disolución prevista no artigo 99, serán refrendados polo Presidente do Congreso.

2. Dos actos do Rei serán responsables as persoas que os refrenden.

Artigo 65.

1. O Rei recibe dos Presupostos do Estado unha cantidade global para sustento da súa Familia e Casa, e distribúe libremente a mesma.

2. O Rei nomea e releva libremente aos membros civís e militares da súa Casa.

TITULO III

Das Cortes Xerais

CAPITULO PRIMEIRO

Das Cámaras

Artigo 66.

1. As Cortes Xerais representan ao pobo español e están formadas polo Congreso dos Diputados e o Senado.

2. As Cortes Xerais exercen a potestade lexislativa do Estado, aproban os seus presupostos, controlan a acción do Goberno e teñen as demais competencias que lles atribúa a Constitución.

3. As Cortes Xerais son inviolables.

Artigo 67.

1. Ninguén poderá ser membro das dúas Cámaras simultaneamente, nin acumula-la acta dunha Asamblea de Comunidade Autónoma coa de Diputado ao Congreso.

2. Os membros das Cortes Xerais non estarán ligados por mandato imperativo.

3. As reunións de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria regramentaria non vincularán ás Cámaras, e non poderán facer exercicio das súas funcións nin ostentación dos seus privilexios.

Artigo 68.

1. O Congreso componse dun mínimo de 300 e un máximo de 400 Diputados, elexidos por sufraxio universal, libre, igual, directo e secreto, nos termos que estableza a lei.

2. A circunscripción electoral é a provincia. As poboacións de Ceuta e Melilla estarán representadas con cadenseu Diputado. A lei distribuirá o número total de Diputados, asignando unha representación mínima inicial a cada circunscripción e distribuíndo os demais en proporción á súa poboación.

3. A elección verificarase en cada circunscripción atendendo a criterios de representación proporcional.

4. O Congreso elíxese por catro anos. O mandato dos Diputados termina catro anos despois da súa elección ou o día da disolución da Cámara.

5. Son electores e elexibles tódolos españois que estean en pleno uso dos seus dereitos políticos.

A lei recoñecerá e o Estado facilitará o exercicio do dereito de sufraxio aos españois que se atopen fóra do territorio de España.

6. As eleccións terán lugar entre os trinta días e sesenta días desde a terminación do mandato. O Congreso electo deberá de ser convocado dentro dos vintecinco días seguintes á celebración das eleccións.

Artigo 69.

1. O Senado é a Cámara de representación territorial.

2. En cada provincia elexiránse catro Senadores por sufraxio universal, libre, igual, directo e secreto polos votantes de cada unha delas, nos termos que sinale unha lei orgánica.

3. Nas provincias insulares, cada illa ou agrupación delas, con Cabido ou Consello Insular, constituirá unha circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondendo tres a cada unha das illas maiores —Gran Canaria, Mallorca e Tenerife— e un a cada unha das seguintes illas ou agrupacións: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La Palma.

4. As poboacións de Ceuta e Melilla elexirán cada unha delas dous Senadores.

5. As Comunidades Autónomas designarán ademais un Senador e outro mais por cada millón de habitantes do seu respectivo territorio. A designación corresponderá á Asamblea lexislativa ou, no seu defecto, ao órgano colexiado superior da Comunidade Autónoma, de acordo co que establezan os Estatutos, que asegurarán, en todo caso, a adecuada representación proporcional.

6. O Senado elíxese por catro anos. O mandato dos Senadores termina catro anos despois da súa elección ou o día da disolución da Cámara.

Artigo 70.

1. A lei electoral determinará as causas de inelexibilidade e incompatibilidade dos Diputados e Senadores, que comprenderán, en todo caso:

a) Aos compoñentes do Tribunal Constitucional.

b) Aos altos cargos da Administración do Estado que determine a lei, coa excepción dos membros do Goberno.

c) Ao Defensor do Pobo.

d) Aos Maxistrados, Xueces e Fiscais en activo.

e) Aos militares profesionais e membros das Forzas e Corpos de Seguridade e Policía en activo.

f) Aos membros das Xuntas Electorais.

2. A validez das actas e credenciais dos membros de ámbalas Cámaras estará sometida a control xudicial, nos termos que estableza a lei electoral.

Artigo 71

1. Os Diputados e Senadores gozarán de inviolabilidade polas opinións manifestadas no exercicio das súas funcións.

2. Durante o período do seu mandato os Diputados e Senadores gozarán tamén de inmunidade e só poderán ser detidos en caso de flagrante delito. Non poderán ser inculpados nin procesados sin a previa autorización da Cámara respectiva.

3. Nas causas contra Diputados e Senadores será competente a Sala do Penal do Tribunal Supremo.

4. Os Diputados e Senadores percibirán unha asignación que será fixada polas respectivas Cámaras.

Artigo 72.

1. As Cámaras establecen os seus propios regramentos, aproban autonomamente os seus presupostos e, de común acordo, degulan o Estatuto do Persoal das Cortes Xerais. Os Regramentos e a súa reforma serán sometidos a unha votación final sobre a súa totalidade, que requerirá a maioría absoluta.

2. As Cámaras elixen os seus respectivos Presidentes e os demais membros das súas Mesas. As sesións conxuntas serán presididas polo Presidente do Congreso e rexeránse por un Regramento das Cortes Xerais aprobado por maioría absoluta de cada Cámara.

3. Os Presidentes das Cámaras exercen en nome das mesmas tódolos poderes administrativos e facultades de policía no interior das súas respectivas sés.

Artigo 73.

1. As Cámaras reuniranse anualmente en dous períodos ordinarios de sesións: o primeiro, de setembro a decembro, e o segundo, de febreiro a xuño.

2. As Cámaras poderán reunirse en sesións extraordinarias a petición do Goberno, da Diputación Permanente ou da maioría absoluta dos membros de calquera das Cámaras. As sesións extraordinarias deberanse convocar sobre un orde do día determinado e serán clausuradas unha vez que este se esgote.

Artigo 74.

1. As Cámaras reuniranse en sesión conxunta para o exercicio das competencias non lexislativas que o Título II atribúe expresamente ás Cortes Xerais.

2. As decisións das Cortes Xerais previstas nos artigos 94, 1; 145, 2, e 158,2, adoptaranse por maioría de cada unha das Cámaras. No primeiro caso, o procedemento iniciarao o Congreso, e nos outros dous, o Senado. En ámbolos casos, se non houbera acordo entre Senado e Congreso, intentarase obter por unha Comisión Mixta composta de igual número de Diputados e Senadores. A Comisión presentará un texto, que será votado por ámbalas Cámaras. Se non se aproba na forma establecida, decidirá o Congreso por maioría absoluta.

Artigo 75.

1. As Cámaras funcionarán en Pleno e por Comisións.

2. As Cámaras poderán delegar nas Comisións Lexislativas Permanentes a aprobación de proxectos ou proposicións de lei. O Pleno poderá, con todo, recabar en calquera momento o debate e votación de calquera proxecto ou proposición de lei que xa fora obxecto desta delegación.

3. Quedan exceptuados do disposto no apartado anterior a reforma constitucional, as cuestións internacionais, as leis orgánicas e de bases e os Presupostos Xerais do Estado.

Artigo 76.

1. O Congreso e o Senado, e, no seu caso, ámbalas Cámaras asemade, poderán nomear Comisións de investigación sobre calquera asunto de interés público. As súas conclusións non serán vinculantes para os Tribunais, nin afectarán ás resolucións xudiciais, sin perxuicio de que o resultado da investigación sexa comunicado ao Ministerio Fiscal para o exercicio, cando proceda, das accións oportunas.

2. Será obrigatorio comparecer a requerimento das Cámaras. A lei regulará as sancións que poidan impoñerse por incumprimento desta obriga.

Artigo 77.

1. As Cámaras poden recibir peticións individuais e colectivas, sempre por escrito, quedando prohibida a representación directa por manifestacións cidadás.

2. As Cámaras poden remitir ao Goberno as peticións que reciban. O Goberno está obrigado a explicarse sobre o seu contido, sempre que as Cámaras o esixan.

Artigo 78.

1. En cada Cámara haberá unha Diputación Permanente composta por un mínimo de vinteún membros, que representarán aos grupos parlamentarios, en proporción á súa importancia numérica.

2. As Diputacións Permanentes estarán presididas polo Presidente da Cámara respectiva e terán como funcións a prevista no artigo 73, a de asumi-las facultades que correspondan ás Cámaras, de acordo cos artigos 86 e 116, en caso de que estas fosen disoltas ou expirase o seu mandato e a de velar polos poderes das Cámaras, cando estas non estean reunidas.

3. Expirado o mandato ou en caso de disolución, as Diputacións Permanentes seguirán exercendo as súas funcións astra a constitución das novas Cortes Xerais.

4. Reunida a Cámara correspondente, a Diputación Permanante dará conta dos asuntos tratados e das súas decisións.

Artigo 79.

1. Para adoptaren acordos as Cámaras deben estar reunidas regramentariamente e con asistencia da maioría dos seus membros.
2. Eses acordos, para seren válidos, deberán ser aprobados pola maioría dos membros presentes, sin perxuicio das maorías especiais que establezan a Constitución ou as leis orgánicas e mailas que para a elección de persoas establezan os Regramentos das Cámaras.
3. O voto de Senadores e Diputados é personal e indelegable.

Artigo 80.

As sesións plenarias das Cámaras serán públicas, salvo acordo contrario de cada Cámara, adoptado por maioría absoluta ou de acordo co Regramento.

CAPITULO SEGUNDO

Da elaboración das leis

Artigo 81.

1. Son leis orgánicas as relativas ao desenvolvemento dos dereitos fundamentais e das libertades públicas, as que aproben os Estatutos de Autonomía e o réxime electoral xeral e as demais previstas na Constitución.
2. A aprobación, modificación ou derogación das leis orgánicas esixirá maioría absoluta do Congreso, nunha votación final sobre o conxunto do proxecto.

Artigo 82.

1. As Cortes Xerais poderán delegar no Goberno a potestade de ditar normas con categoría de lei sobre materias determinadas non incluídas no artigo anterior.
2. A delegación lexislativa deberase otorgar mediante unha lei de bases cando o seu obxecto sexa a formación de textos articulados ou por unha lei ordinaria cando se trate de refundir varios textos legais nun só.
3. A delegación lexislativa terase que otorgar ao Goberno de forma expresa para materia concreta e con fixación do prazo para o seu exercicio. A delegación esgotarase polo uso que dela faga o Goberno mediante a publicación da norma correspondente. Non poderá entenderse concedida de modo implícito ou por tempo indeterminado. Tampouco poderá ser permitida a subdelegación a autoridades distintas do propio Goberno.
4. As leis de bases delimitarán con precisión o obxecto e alcance da delegación lexislativa e os principios e criterios que se han de seguir no seu exercicio.
5. A autorización para refundir textos legais determinará o ámbito normativo a que se refiere o contido da delegación, especificando se se circunscribe á mera formulación dun texto único ou se se inclúe a regularización, aclaración e armonización dos textos legais que van ser refundidos.
6. Sin perxuicio da competencia propia dos Tribunais, as leis de delegación poderán establecer en cada caso fórmulas adicionais de control.

Artigo 83.

As leis de bases non poderán en ningún caso:

a) Autoriza-la modificación da propia lei de bases.
b) Facultar para ditar normas con carácter retroactivo.

Artigo 84.

Cando unha proposición de lei ou unha enmenda sexa contraria a unha delegación lexislativa en vigor, o Goberno está facultado para se opor á súa tramitación. En tal suposto, poderá presentarse unha proposición de lei para a derogación total ou parcial da lei de delegación.

Artigo 85.

As disposicións do Goberno que conteñan a lexislación delegada recibirán o título de Decretos Lexislativos.

Artigo 86.

1. En caso de extraordinaria e urxente necesidade, o Goberno poderá ditar disposicións lexislativas provisionais que tomarán a forma de Decretos-leis e que non poderán afectar ao ordenamento das institucións básicas do Estado, aos dereitos, deberes e libertades dos cidadáns regulados no Título I, ao réxime das Comunidades Autónomas, nin ao Dereito electoral xeral.
2. Os Decretos-leis deberán ser inmediatamente sometidos a debate e votación de totalidade ao Congreso dos Diputados, convocado ao efecto se non estivese reunido, no prazo dos trinta días seguintes á súa promulgación. O Congreso terase que pronunciar expresamente dentro dese prazo sobre a súa convalidación ou derogación; para iso o Regramento establecerá un procedemento especial e sumario.
3. Durante o prazo establecido no apartado anterior as Cortes poderán tramitalos como proxectos de lei polo procedemento de urxencia.

Artigo 87.

1. A iniciativa lexislativa corresponde ao Goberno, ao Congreso e ao Senado, de acordo coa Constitución e os Regramentos das Cámaras.
2. As Asambleas das Comunidades Autónomas poderán solicitar do Goberno a adopción dun proxecto de lei ou remitiren á Mesa do Congreso unha proposición de lei, delegando ante a citada Cámara un máximo de tres membros da Asamblea encargados da súa defensa.
3. Unha lei orgánica regulará as formas de exercicio e requisitos da iniciativa popular para a presentación de proposicións de lei. En todo caso esixiranse non menos de 500.000 firmas acreditadas. Non procederá esa iniciativa en materias propias de lei orgánica, fributarias ou de carácter internacional, nin no relativo á prerrogativa de gracia.

Artigo 88.

Os proxectos de lei serán aprobados en Consello de Ministros, que os someterá ao Congreso, acompañados dunha exposición de motivos e dos antecedentes necesarios para se pronunciar sobre eles.

Artigo 89.

1. A tramitación das proposicións de lei regularase polos Regramentos das Cámaras, sin que a prioridade debida aos proxectos de lei impida o exercicio da iniciativa lexislativa nos termos regulados polo artigo 87.
2. As proposicións de lei que, de acordo co artigo 87 tome en consideración o Senado, remitiranse ao Congreso para o seu trámite néste como tal proposición.

Artigo 90.

1. Aprobado un proxecto de lei ordinaria ou orgánica polo Congreso dos Diputados, o seu Presidente dará inmediata conta do mesmo ao Presidente do Senado, que o someterá á deliberación deste.
2. O Senado no prazo de dous meses, a partir do día da recepción do texto, pode, mediante mensaxe motivada, vetalo ou introducir enmendas no mesmo. O veto deberá ser aprobado por maioría absoluta. O proxecto non poderá ser sometido ao Rei para sanción sin que o Congreso ratifique por maioría absoluta, en caso de veto, o texto inicial, ou por maioría simple, unha vez transcurridos dous meses desde a interposición do mesmo, ou se pronuncie sobre as enmendas, aceptándoas ou non por maioría simple.
3. O prazo de dous meses de que o Senado dispón para vetar ou enmenda-lo proxecto reducirase ao de vinte días naturais nos proxectos declarados urxentes polo Goberno ou polo Congreso dos Diputados.

Artigo 91.

O Rei sancionará no prazo de quince días as leis aprobadas polas Cortes Xerais, e promulgaraas e ordenará a súa inmediata publicación.

Artigo 92.

1. As decisións políticas de especial trascendencia poderán ser sometidas a referéndum consultivo de tódolos cidadáns.
2. O referéndum será convocado polo Rei, mediante proposta do Presidente do Goberno, previamente autorizada polo Congreso dos Diputados.
3. Unha lei orgánica regulará as condicións e mailo procedemento das distintas modalidades de referéndum previstas nesta Constitución.

CAPITULO TERCEIRO

Dos Tratados Internacionais

Artigo 93.

Mediante lei orgánica poderá autorizarse a celebración de tratados polos que se atribúa a unha organización ou institución internacional o exercicio de competencias derivadas da Constitución. Corresponde ás Cortes Xerais e mais ao Goberno, segundo os casos, a garantía do cumprimento destes tratados e das resolucións emanadas dos organismos internacionais ou supranacionais titulares da cesión.

Artigo 94.

1. A prestación do consentimento do Estado para se obrigar por medio de tratados ou convenios requerirá a previa autorización das Cortes Xerais, nos seguintes casos:

a) Tratados de carácter político.
b) Tratados ou convenios de carácter militar.
c) Tratados ou convenios que afecten á integridade territorial do Estado ou aos dereitos e deberes fundamentais establecidos no Título I.
d) Tratados ou convenios que impliquen obrigas financieiras para a Facenda Pública.
e) Tratados ou convenios que supoñan modificación ou derogación dalgunha lei ou esixan medidas lexislativas para a súa execución.

2. O Congreso e mailo Senado serán inmediatamente informados da conclusión dos restantes tratados ou convenios.

Artigo 95.

1. A celebración dun tratado internacional que conteña estipulacións contrarias á Constitución esixirá a previa revisión constitucional.
2. O Goberno ou calquera das Cámaras pode requerir ao Tribunal Constitucional para que declare se existe ou non esa contradición.

Artigo 96.

1. Os tratados internacionais válidamente celebrados, unha vez publicados oficialmente en España, formarán parte do ordenamento interno. As súas disposicións só poderán ser derogadas, modificadas ou suspendidas na forma prevista nos propios tratados ou de acordo coas normas xerais do Dereito Internacional.
2. Para a denuncia dos tratados e convenios internacionais utilizarase o mesmo procedemento previsto para a súa aprobación no artigo 94.

TITULO IV

Do Goberno e da Administración

Artigo 97.

O Goberno dirixe a política interior e exterior, a Administración civil e militar e a defensa do Estado. Exerce a función executiva e a potestade regramentaria de acordo coa Constitución e as leis.

Artigo 98.

1. O Goberno componse do Presidente, dos Vicepresidentes no seu caso, dos Ministros e dos demais membros que estableza a lei.
2. O Presidente dirixe a acción do Goberno e coordina as funcións dos demais membros do mesmo, sin perxuicio da competencia e responsabilidade directa destes na súa xestión.
3. Os membros do Goberno non poderán exercer outras funcións representativas cás propias do mandato parlamentario, nin calquera outra función pública que non derive do seu cargo, nin ningunha actividade profesional ou mercantil.
4. A lei regulará o Estatuto e incompatibilidades dos membros do Goberno.

Artigo 99.

1. Despois de cada renovación do Congreso dos Diputados, e nos demais supostos constitucionais en que así proceda, o Rei, previa consulta cos representantes designados polos Grupos políticos con representación parlamentaria, e por medio do Presidente do Congreso, proporá un candidato á Presidencia do Goberno.
2. O candidato proposto conforme ao previsto no apartado anterior exporá ante o Congreso dos Diputados o programa político do Goberno que pretenda formar e solicitará a confianza da Cámara.
3. Se o Congreso dos Diputados, polo voto de maioría absoluta dos seus membros, outorgase a súa confianza ao citado candidato, o Rei nomearao Presidente. Se non se acada esa maioría, someterase a mesma proposta a nova votación corenta e oito horas despois da anterior, e a confianza entenderase outorgada se obtén a maioría simple.
4. Se efectuadas as citadas votacións non se outorgase a confianza para a investidura, tramitaránse sucesivas propostas na forma prevista nos apartados anteriores.
5. Se transcurrido o prazo de dous meses, a contar da primeira votación de investidura, ningún candidato obtivo a confianza do Congreso, o Rei disolverá ámbalas Cámaras e convocará novas eleccións co refrendo do Presidente do Congreso.

Artigo 100.

Os demais membros do Goberno serán nomeados e separados polo Rei, a proposta do seu Presidente.

Artigo 101.

1. O Goberno cesa trala celebración de eleccións xerais, nos casos de perda de confianza parlamentaria previstos na Constitución, ou por dimisión ou morte do seu Presidente.
2. O Goberno cesante continuará en funcións astra a toma de posesión do novo Goberno.

Artigo 102.

1. A responsabilidade criminal do Presidente e dos demais membros do Goberno será esixible, cando exista, perante a Sala do Penal do Tribunal Supremo.
2. Se a acusación fose por traición ou por calquera delito contra a seguridade do Estado no exercicio das súas funcións, só poderá ser plantexada por iniciativa da cuarta parte dos membros do Congreso, e coa aprobación da maioría absoluta do mesmo.
3. A prerrogativa real de gracia non será aplicable a ningún dos supostos do presente artigo.

Artigo 103.

1. A Administración pública serve con obxectividade os intereses xerais e actúa de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación, con sometemento pleno á lei e mais ao Dereito.
2. Os órganos da Administración do Estado son creados, rexidos e coordinados de acordo coa lei.
3. A lei regulará o estatuto dos funcionarios públicos, o acceso á función pública de acordo cos principios de mérito e capacidade, as peculiaridades do exercicio do seu dereito á sindicación, o sistema de incompatibilidades e as garantías para a imparcialidade no exercicio das súas funcións.

Artigo 104.

1. As Forzas e Corpos de seguridade, baixo a dependencia do Goberno, terán como misión protexe-lo libre exercicio dos dereitos e libertades e garantiza-la seguridade cidadá.
2. Unha lei orgánica determinará as funcións, principios básicos de actuación e estatutos das Forzas e Corpos de Seguridade.

Artigo 105.

A lei regulará:

a) A audiencia dos cidadáns, directamente ou mediante as organizacións e asociacións recoñecidas pola lei, no procedemento de elaboración das disposicións administrativas que os afecten.
b) O acceso dos cidadáns aos arquivos e rexistros administrativos, menos no que afecte á seguridade e defensa do Estado, á averiguación dos delitos e á intimidade das persoas.
c) O procedemento polo que deben producirse os actos administrativos, garantizando, cando proceda, a audiencia do interesado.

Artigo 106.

1. Os Tribunais controlan a potestade regramentaria e a legalidade da actuación administrativa, así como o sometemento desta aos fins que a xustifican.
2. Os particulares, nos termos establecidos pola lei, terán dereito a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cal-

quera dos seus bens e dereitos, agás en casos de forza maior sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento dos servicios públicos.

Artigo 107.

O Consello de Estado é o supremo órgano consultivo do Goberno. Unha lei orgánica regulará a súa composición e competencia.

TITULO V

Das relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais

Artigo 108.

O Goberno responde solidariamente da súa xestión política perante o Congreso dos Diputados.

Artigo 109.

As Cámaras e as suas Comisións poderán recabar, por medio dos Presidentes daquelas, a información e axuda que precisen do Goberno e dos seus Departamentos e de calesquera autoridades do Estado e das Comunidades Autónomas.

Artigo 110.

1. As Cámaras e as súas Comisións poden reclama-la presencia dos membros do Goberno.
2. Os membros do Goberno teñen acceso ás sesións das Cámaras e ás súas Comisións e a facultade de se faceren oir nelas, e poderán solicitar que informen ante as mesmas funcionarios dos seus Departamentos.

Artigo 111.

1. O Goberno e cada un dos seus membros están sometidos ás interpelacións e preguntas que lles formulen nas Cámaras. Para esta clase de debate os Regramentos establecerán un tempo mínimo semanal.
2. Toda interpelación poderá dar lugar a unha moción na que a Cámara manifeste a súa posición.

Artigo 112.

O Presidente do Goberno, previa deliberación do Consello de Ministros, pode plantexar perante o Congreso dos Diputados a cuestión de confianza sobre o seu programa ou sobre unha declaración de política xeral. A confianza entenderase outorgada cando vote a favor da mesma a maioría simple dos Diputados.

Artigo 113.

1. O Congreso dos Diputados pode esixi-la responsabilidade política do Goberno mediante a adopción por maioría absoluta da moción de censura.
2. A moción de censura deberá ser proposta cando menos pola décima parte dos Diputados, e terá que incluir un candidato á Presidencia do Goberno.
3. A moción de censura non poderá ser votada en tanto non transcurran cinco días dende a súa presentación. Nos dous primeiros días do devandito prazo poderán presentarse mocións alternativas.
4. Se a moción da censura non fose aprobada polo Congreso, os seus signatarios non poderán presentar outra durante o mesmo período de sesións.

Artigo 114.

1. Se o Congreso nega a súa confianza ao Goberno, este presentará a súa dimisión ao Rei, procedéndose a continuación á designación de Presidente do Goberno, segundo o disposto no artigo 99.
2. Se o Congreso adopta unha moción de censura, o Goberno presentará a súa dimisión ao Rei e o candidato incluído naquela entenderase investido da confianza da Cámara aos efectos previstos no artigo 99. O Rei nomeará o Presidente do Goberno.

Artigo 115.

1. O Presidente do Goberno, previa deliberación do Consello de Ministros, e baixo a súa exclusiva responsabilidade, poderá propoñe-la disolución do Congreso, do Senado ou das Cortes Xerais, que será decretada polo Rei. O decreto de disolución fixará a data das eleccións.
2. A proposta de disolución non poderá presentarse cando estea en trámite unha moción de censura.
3. Non procederá nova disolución antes de que transcurra un ano dende a anterior, agás o disposto no artigo 99, apartado 5.

Artigo 116.

1. Unha lei orgánica regulará os estados de alarma, de excepción e de sitio, e as competencias e limitacións correspondentes.
2. O estado de alarma será declarado polo Goberno mediante decreto acordado en Consello de Ministros por un prazo máximo de quince días, dando conta ao Congreso dos Diputados, reunido inmediatamente ao efecto; sin a autorización deste non poderá ser prorrogado o citado prazo. O decreto determinará o ámbito territorial a que se extenden os efectos da declaración.
3. O estado de excepción será declarado polo Goberno mediante decreto acordado en Consello de Ministros, previa autorización do Congreso dos Diputados. A autorización e proclamación do estado de excepción deberá determinar expresamente os efectos do mesmo, o ámbito territorial a que se extende e a súa duración, que non poderá exceder de trinta días, prorrogables por outro prazo igual, cos mesmos requisitos.
4. O estado de sitio será declarado pola maioría absoluta do Congreso dos Diputados, a proposta exclusiva do Goberno. O Congreso determinará o seu ámbito territorial, duración e condicións.
5. Non poderá procederse á disolución do Congreso mentres estean declarados algúns dos estados comprendidos no presente artigo, quedando automáticamente convocadas as Cámaras de non estaren en período de sesión. O seu funcionamento, así como o dos demais poderes constitucionais do Estado, non poderán interrumpirse durante a vixencia destes estados.

Disolto o Congreso ou expirado o seu mandato, de se producir algunha das situacións que dan lugar a calquera dos citados estados, as competencias do Congreso serán asumidas pola súa Diputación Permanente.

6. A declaración dos estados de alarma, de excepción e de sitio non modificarán o principio de responsabilidade do Goberno e dos seus axentes recoñecidos na Constitución e nas leis.

TITULO VI

Do Poder Xudicial

Artigo 117.

1. A xusticia emana do pobo e administrase en nome do Rei por Xueces e Maxistrados integrantes do poder xudicial, independentes, inamovibles, responsables e sometidos únicamente ao imperio da lei.
2. Os Xueces e Maxistrados non poderán ser separados, suspendidos, trasladados nin xubilados, a non ser por algunha das causas e coas garantías previstas na lei.
3. O exercicio da potestade xurisdicional en toda clase de procesos, xulgando e facendo executa-lo xulgado, corresponde só aos Xulgados e Tribunais determinados polas leis, conforme ás normas de competencia e procedemento que as mesmas establezan.
4. Os Xulgados e Tribunais non exercerán mais funcións cás sinaladas no apartado anterior e as que expresamente lles sexan atribuídas pola lei en garantía de calquera dereito.
5. O principio de unidade xurisdicional é a base da organización e funcionamento dos Tribunais. A lei regulará o exercicio da xurisdición militar no ámbito estritamente castrense e nos supostos de estado de sitio, segundo os principios da Constitución.
6. Prohíbense os Tribunais de excepción.

Artigo 118.

É obrigatorio o cumprimento das sentencias e demais resolucións firmes dos Xueces e Tribunais, así como prestar tamén a colaboración por eles requerida no curso do proceso e na execución das resolucións.

Artigo 119.

A xusticia será gratuita cando así o dispoña a lei, e, en todo caso, respecto de quenes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artigo 120.

1. As actuacións xudiciais serán públicas, coas excepcións previstas nas leis de procedemento.
2. O procedemento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
3. As sentencias serán sempre motivadas e pronunciaranse en audiencia pública.

Artigo 121.

Os danos causados por erro xudicial, así como tamén os que sexan consecuencia do funcionamento anormal da Administración de Xusticia darán dereito a unha indemnización a cargo do Estado, conforme á lei.

Artigo 122.

1. A lei orgánica do poder xudicial determinará a constitución, funcionamento e goberno dos Xulgados e Tribunais, así como o estatuto xurídico dos Xueces e Maxistrados de carreira, que formarán un Corpo único, e do persoal ao servicio da Administración de Xusticia.

2. O Consello Xeral do Poder Xudicial é o órgao de goberno do mesmo. A lei orgánica establecerá o seu estatuto e o réxime de incompatibilidades dos seus membros e das súas funcións, especialmente en materia de nomeamentos, ascensos, inspección e réxime disciplinario.

3. O Consello Xeral do Poder Xudicial estará integrado polo Presidente do Tribunal Supremo, que o presidirá, e por vinte membros nomeados pólo Rei por un período de cinco anos. Destes, doce entre Xueces e Maxistrados de tódalas categorías xudiciais, nos termos que estableza a lei orgánica; catro a proposta do Congreso dos Diputados e catro a proposta do Senado, elexidos en ámbolos casos por maioría de tres quintos dos seus membros, entre abogados e outros xuristas, todos eles de recoñecida competencia e con mais de quince anos de exercicio na súa profesión.

Artigo 123.

1. O Tribunal Supremo, con xurisdición en toda España, é o órgano xurisdicional superior en tódolos ordes, salvo o disposto en materia de garantías constitucionais.

2. O Presidente do Tribunal Supremo será nomeado polo Rei, a proposta do Consello Xeral do Poder Xudicial, da maneira que determine a lei.

Artigo 124.

1. O Ministerio Fiscal, aparte das funcións encomendadas a outros órganos, ten por finalidades promove-la acción da xusticia en defensa da legalidade, dos dereitos dos cidadáns e do interés público tutelado pola lei, de oficio ou a petición dos interesados, así como velar pola independencia dos Tribunais e percurar perante estes a satisfacción do interés social.

2. O Ministerio Fiscal exerce as súas funcións mediante órganos de seu, conforme aos principios de unidade de actuación e dependencia xerárquica e con suxeición, en todo caso, aos de legalidade e imparcialidade.

3. A lei regulará o estatuto orgánico do Ministerio Fiscal.

4. O Fiscal Xeral do Estado será nomeado polo Rei, a proposta do Goberno, unha vez escoitado o Consello Xeral do Poder Xudicial.

Artigo 125.

Os cidadáns poderán exerce-la acción popular e participaren na Administración de Xusticia mediante a institución do Xurado, na forma e con respecto a aqueles procesos penais que a lei determine, e tamén nos Tribunais consuetudinarios e tradicionais.

Artigo 126.

A policía xudicial depende dos Xueces, dos Tribunais e do Ministerio Fiscal nas súas funcións de pescuda do delito e de descubrimento e aseguramento do delincuente, nos termos que a lei estableza.

Artigo 127.

1. Os Xueces e Maxistrados, e mailos Fiscais, mentres estean en activo, non poderán desempeñar outros cargos públicos nin pertencer a partidos políticos ou sindicatos. A lei establecerá o sistema e modalidades de asociación profesional dos Xueces, Maxistrados e Fiscais.

2. A lei establecerá o réxime de incompatibilidades dos membros do poder xudicial, de maneira que asegure a total independencia deles.

TITULO VII

Economía e Facenda

Artigo 128.

1. Toda a riqueza do país nas súas distintas formas e calquera que sexa a súa titularidade está subordinada ao interés xeral.

2. Recoñécese a iniciativa pública na actividade económica. Mediante lei poderanse reservar ao sectór público recursos ou servicios esenciais, especialmente no caso de monopolio e tamén acorda-la intervención de empresas cando así o esixa o interés xeral.

Artigo 129.

1. A lei establecerá as formas de participación dos interesados na Seguridade Social e na actividade dos organismos públicos con función que afecte directamente á calidade da vida ou ao benestar xeral.

2. Os poderes públicos promoverán con eficacia as diversas formas de participación na empresa e fomentarán, mediante unha lexislación axeitada, as sociedades cooperativas. Tamén establecerán os medios que faciliten o acceso dos traballadores á propiedade dos medios de producción.

Artigo 130.

1. Os poderes públicos atenderán á modernización e desenrolo de tódolos sectores económicos e, en particular, da agricultura, da ganderia, da pesca, e da artesanía, co fin de equipara-lo nivel de vida de tódolos españois.

2. Co mesmo fin, outorgaráselles un tratamento especial ás zonas de montaña.

Artigo 131.

1. O Estado, mediante lei, poderá planifica-la actividade económica xeral para atender ás necesidades colectivas, equilibrar e armoniza-lo desenrolo rexional e sectorial e estimula-lo crecemento da renda e da riqueza e a súa mais xusta distribución.

2. O Goberno elaborará os proxectos de planificación, de acordo coas previsións que lle sexan suministradas polas Comunidades Autónomas e o asesoramento e colaboración dos sindicatos e outras organizacións profesionais, empresariais e económicas. A tal fin constituirase un Consello, cuia composición e funcións se desenvolverán por lei.

Artigo 132.

1. A lei regulará o réxime xurídico dos bens de dominio público e dos comunais, inspirándose nos principios de inalienabilidade, imprescriptibilidade e inembargabilidade, así como a súa desafectación.

2. Son bens de dominio público estatal os que determine a lei e, en todo caso, a zona marítimo-terrestre, as praias, o mar territorial e os recursos naturais da zona económica e a plataforma continental.

3. Regularanse por lei o Patrimonio do Estado e o Patrimonio Nacional, a súa administración, defensa e conservación.

Artigo 133.

1. A potestade orixinaria para establece-los tributos corresponde exclusivamente ao Estado, mediante lei.

2. As Comunidades Autónomas e as Corporacións locais poderán establecer e esixir tributos de acordo coa Constitución e coas leis.

3. Todo beneficio fiscal que afecte aos tributos do Estado deberase establecer por lei.

4. As administracións públicas só poderán contraer obrigas financeiras e realizar gastos de acordo coas leis.

Artigo 134.

1. Corresponde ao Goberno a elaboración dos Presupostos Xerais do Estado e ás Cortes Xerais o seu exame, emenda e aprobación.

2. Os Presupostos Xerais do Estado terán carácter anual, incluirán a totalidade dos gastos e ingresos do sector público estatal e neles consignarase o importe dos beneficios fiscais que afecten aos tributos do Estado.

3. O Goberno deberá presentar ante o Congreso dos Diputados os Presupostos Xerais do Estado cando menos tres meses antes da expiración dos do ano anterior.

4. Se a Lei de Presupostos non se aprobase antes do primeiro día do exercicio económico correspondente, considerarase automáticamente prorrogados os Presupostos do exercicio anterior astra a aprobación dos novos.

5. Aprobados os Presupostos Xerais do Estado, o Goberno poderá presentar proxectos de lei que impliquen aumento de gasto público ou disminución dos ingresos correspondentes ao mesmo exercicio presupostario.

6. Toda proposición ou emenda que supoña aumento dos créditos ou disminución dos ingresos presupostarios requerirá a conformidade do Goberno para a súa tramitación.

7. A Lei de Presupostos non pode crear tributos. Poderá modificalos cando estea previsto nunha lei tributaria substantiva.

Artigo 135.

1. O Goberno terá que estar autorizado por lei para emitir Débeda Pública ou contraer crédito.
2. Os créditos para satisface-lo pago de intereses e capital da Débeda Pública do Estado considéraranse sempre incluídos no estado de gastos dos presupostos e non poderán ser obxecto de enmenda ou modificación, mentres se axusten ás condicións da lei de emisión.

Artigo 136.

1. O Tribunal de Contas é o supremo órgano fiscalizador das contas e da xestión económica do Estado, así como do sector público.
Dependerá directamente das Cortes Xerais e exercerá as súas funcións por delegación delas no exame e comprobación da Conta Xeral do Estado.
2. As contas do Estado e do sector público estatal renderanse ao Tribunal de Contas e serán censuradas por este.
O Tribunal de Contas, sin perda da súa propia xurisdición, remitirá ás Cortes Xerais un Informe anual no que, cando proceda, comunicará as infraccións ou responsabilidades nas que, ao seu xuicio, se incurrise.
3. Os membros do Tribunal de Contas gozarán da mesma independencia e inamovibilidade e estarán sometidos ás mesmas incompatibilidades cós Xueces.
Unha lei orgánica regulará a composición, organización e funcións do Tribunal de Contas.

TITULO VIII

Da Organización Territorial do Estado

CAPITULO PRIMEIRO

Principios xerais

Artigo 137.

O Estado organízase territorialmente en municipios, en provincias e nas Comunidades Autónomas que se constitúan. Todas estas entidades gozan de autonomía para a xestión dos seus respectivos intereses.

Artigo 138.

1. O Estado garantiza a realización efectiva do principio de solidaridade consagrado no artigo 2 da Constitución, mirando de establecer un equilibrio económico, axeitado e xusto entre as diversas partes do territorio español, e atendendo en particular ás circunstancias do feito insular.
2. As diferencias entre os Estatutos das diferentes Comunidades Autónomas, non poderán implicar, en caso ningún, privilexios económicos ou sociais.

Artigo 139.

1. Tódolos españois teñen os mesmos dereitos e obrigas en calquera parte do territorio do Estado.
2. Ningunha autoridade poderá adoptar medidas que directa ou indirectamente obstaculicen a libertade de circulación e establecemento das persoas e a libre circulación de bens en todo o territorio español.

CAPITULO SEGUNDO

Da Administración Local

Artigo 140.

A Constitución garantiza a autonomía dos concellos. Estes gozarán de personalidade xurídica plena. O seu goberno e administración corresponde aos seus respectivos Axuntamentos, integrados polos Alcaldes e mailos Concellais. Os Concellais serán elexidos polos veciños do concello mediante sufraxio universal, igual, libre, directo e secreto, na forma establecida pola lei. Os Alcaldes serán elexidos polos Concellais ou polos veciños. A lei regulará as condicións nas que conveña o réxime de concello aberto.

Artigo 141.

1. A provincia é unha entidade local con personalidade xurídica propia, definida pola agrupación de concellos e división territorial para o cumprimento das actividades do Estado. Calquera alteración dos límites provinciais terá que ser aprobada polas Cortes Xerais mediante lei orgánica.
2. O goberno e a administración autónoma das provincias estarán encomendados a Diputacións ou a outras Corporacións de carácter representativo.
3. Poderanse crear agrupacións de concellos diferentes da provincia.
4. Nos arquipélagos, as illas terán ademais a súa administración propia e forma de Cabidos ou Consellos.

Artigo 142.

As Facendas locais deberán dispor dos medios suficientes para o desempeño das funcións que a lei atribúe ás Corporacións respectivas e nutriranse fundamentalmente de tributos propios e de participación nos do Estado e nos das Comunidades Autónomas.

CAPITULO TERCEIRO

Das Comunidades Autónomas

Artigo 143.

1. No exercicio do dereito á autonomía recoñecido no artigo 2 da Constitución, as provincias limítrofes con características históricas, culturais e económicas comúns, os territorios insulares e as provincias con entidade rexional histórica poderán acceder ao seu autogoberno e constituírse en Comunidades Autónomas conforme ao previsto neste Título e nos respectivos Estatutos.
2. A iniciativa do proceso autonómico corresponde a tódalas Diputacións interesadas ou ao órgano interinsular correspondente e ás dúas terceiras partes dos concellos se a súa poboación representa, cando menos, a maioría do censo electoral de cada provincia ou illa. Estes requisitos terán que ser cumpridos no prazo de seis meses desde o primeiro acordo adoptado neste sentido por algunha das Corporacións locais interesadas
3. A iniciativa, en caso de non prosperar, só se poderá reiterar pasados cinco anos.

Artigo 144.

As Cortes Xerais, mediante lei orgánica, poderán, por motivos de interés nacional:

a) Autoriza-la constitución dunha comunidade autónoma cando o seu ámbito territorial non supere o dunha provincia e non reúna as condicións do apartado 1 do artigo 143.
b) Autorizar ou acordar, segundo os casos, un Estatuto de autonomía para territorios que non estean integrados na organización provincial.
c) Sustituir a iniciativa das Corporacións locais a que se refire o apartado 2 do artigo 143.

Artigo 145.

1. Non se admitirá en caso ningún a federación de Comunidades Autónomas.
2. Os Estatutos poderán prever os supostos, requisitos e termos en que as Comunidades Autónomas poderán celebrar convenios entre sí para a xestión e prestación de servicios propios delas, así como o carácter e efectos da correspondente comunicación ás Cortes Xerais. Nos outros supostos, os acordos de cooperación entre as Comunidades Autónomas necesitarán a autorización das Cortes Xerais.

Artigo 146.

O proxecto de Estatuto será elaborado por unha asamblea composta polos membros da Diputación ou órgano interinsular das provincias afectadas e polos Diputados e Senadores elexidos nelas e será elevado ás Cortes Xerais para a súa tramitación como lei.

Artigo 147.

1. Dentro dos termos da presente Constitución, os Estatutos serán a norma institucional básica de cada Comunidade Autónoma e o Estado reconoceraos e ampararaos como parte integrante do seu ordenamento xurídico.
2. Os Estatutos de autonomía deberán conter:

a) A denominación da Comunidade que mellor corresponda á súa identidade histórica.
b) A delimitación do seu territorio.
c) A denominación, organización e sé das institucións autónomas propias.
d) As competencias asumidas dentro do marco establecido na Constitución e as bases para o traspaso dos servicios correspondentes ás mesmas.

3. A reforma dos Estatutos axustarase ao procedemento que neles se estableza e requerirá en todo caso a aprobación polas Cortes Xerais, mediante lei orgánica.

Artigo 148.

1. As Comunidades Autónomas poderán asumir competencias nas seguintes materias:

1.ª Organización das súas institucións de autogoberno.
2.ª As alteracións dos termos municipais comprendidos no seu territorio e, en xeral, as funcións que correspondan á Administración do Estado sobre as Corporacións locais e de transferencia autorizada pola lexislación sobre Réxime Local.
3.ª Ordenación do territorio, urbanismo e vivenda.
4.ª As obras públicas de interés da Comunidade Autónoma no seu propio territorio.
5.ª As vías férreas e estradas de recorrido comprendido íntegramente no territorio da Comunidade Autónoma e, nos mesmos termos, o transporte levado a cabo por estes medios ou por cable.
6.ª Os portos de refuxio, os portos e aeroportos deportivos e, en xeral, os que non desenvolvan actividades comerciais.
7.ª A agricultura e a gandería, de acordo coa ordenación xeral da economía.
8.ª Os montes e aproveitamentos forestais.
9.ª A xestión en materia de protección do medio ambiente.
10.ª Os proxectos, construcción e explotación dos aproveitamentos hidráulicos, canles e regadíos de interés da Comunidade Autónoma; as augas minerais e termais.
11.ª A pesca nas augas interiores, o marisqueo e a acuicultura, a caza e a pesca fluvial.
12.ª Feiras interiores.
13.ª O fomento do desenvolvemento económico da Comunidade Autónoma dentro dos obxectivos marcados pola política económica nacional.
14.ª A artesanía.
15.ª Museos, bibliotecas e conservatorios de música de interés para a Comunidade Autónoma.
16.ª Patrimonio monumental de interés da Comunidade Autónoma.
17.ª O fomento da cultura, da investigación e, no seu caso, do ensino da lingua da Comunidade Autónoma.
18.ª Promoción e ordenación do turismo no seu ámbito territorial.
19.ª Promoción do deporte e da axeitada utilización do lecer.
20.ª Asistencia social.
21.ª Sanidade e hixiene.
22.ª A vixilancia e protección dos seus edificios e instalacións. A coordinación e demais facultades en relación coas policías locais nos termos que estableza unha lei orgánica.

2. Transcurridos cinco anos, e mediante a reforma dos seus Estatutos, as Comunidades Autónomas poderán ampliar sucesivamente as súas competencias dentro do marco establecido no artigo 149.

Artigo 149.

1. O Estado ten competencia exclusiva sobre as seguintes materias:

1.ª A regulación das condicións básicas que garanticen a igualdade de tódolos españois no exercicio dos dereitos e no cumprimento dos deberes constitucionais.
2.ª Nacionalidade, inmigración, emigración, extranxeiría e dereito de asilo.
3.ª Relacións internacionais.
4.ª Defensa e Forzas Armadas.
5.ª Administración de Xusticia.
6.ª Lexislación mercantil, penal e penitenciaria; lexislación procesal, sin perda das necesarias especialidades que neste orde se deriven das particularidades do dereito substantivo das Comunidades Autónomas.
7.ª Lexislación laboral; sin perxuízo da súa execución polos órganos das Comunidades Autónomas.
8.ª Lexislación civil, aparte da conservación, modificación e desenvolvemento polas Comunidades Autónomas dos dereitos civís, forais ou especiais, alí onde existan. En todo caso, as regras relativas á aplicación e eficacia das normas xurídicas, relacións xurídico-civís relativas ás formas de matrimonio, ordenación dos rexistros e instrumentos públicos, bases das obrigas contractuais, normas para resolve-los conflitos de leis e determinación das fontes do Derelto, con respeto, no caso derradeiro, ás normas de dereito foral ou especial.
9.ª Lexislación sobre propiedade intelectual e industrial.
10.ª Réxime aduaneiro e arancelario; comercio exterior.
11.ª Sistema monetario: divisas, cambio e convertibilidade; bases da ordenación do crédito, banca e seguros.
12.ª Lexislación sobre pesas e medidas, determinación da hora oficial.
13.ª Bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica.
14.ª Facenda xeral e Débeda do Estado.
15.ª Fomento e coordinación xeral da investigación científica e técnica.
16.ª Sanidade exterior. Bases e coordinación xeral de sanidade. Lexislación sobre os produtos farmacéuticos.
17.ª Lexislación básica e réxime económico da Seguridade Social, sin perxuízo da execución dos seus servicios polas Comunidades Autónomas.
18.ª As bases do réxime xurídico das Administracións Públicas e do réxime estatutario dos seus funcionarios que, en todo caso, garantizarán aos administrados un tratamento común ante delas; o procedemento administrativo común, sin perxuízo das especialidades derivadas da organización propia das Comunidades Autónomas; lexislación sobre expropiación forzosa; lexislación básica sobre contratos e concesións administrativas e o sistema de responsabilidade de tódalas Administracións públicas.
19.ª Pesca marítima, sin perxuízo das competencias que na ordenación do sector se atribúan ás Comunidades Autónomas.
20.ª Mariña mercante e abandeiramento de buques; alumeamento de costas e sinais marítimos; portos de interés xeral; aeroportos de interés xeral; control do espacio aéreo; tránsito e transporte aéreo, servicio meteorolóxico e matriculación de aeronaves.
21.ª Vías férreas e transportes terrestres que transcorran polo territorio de mais dunha Comunidade Autónoma; réxime xeral de comunicacións; tráfico e circulación de vehículos a motor; correos e telecomunicacións; cables aéreos, submariños e radiocomunicación.
22.ª A lexislación, ordenación e concesión de recursos e aproveitamentos hidráulicos cando as augas corran por mais dunha Comunidade Autónoma, e a autorización das instalacións eléctricas, cando o seu aproveitamento afecte a outra Comunidade ou o transporte de enerxía saia do seu ámbito territorial.
23.ª Lexislación básica sobre protección do medio ambiente sin perxuicio das facultades das Comunidades Autónomas de establecer-en normas adicionais de protección. A lexislación básica sobre montes, aproveitamentos forestais e vías pecuarias.
24.ª Obras públicas de interés xeral ou de realización que afecte a mais dunha Comunidade Autónoma.
25.ª Bases de réxime minelro e enerxético.
26.ª Réxime de producción, comercio e posesión e uso de armas e explosivos.
27.ª Normas básicas do réxime de prensa, radio e televisión e, en xeral, de tódolos medios de comunicación social, sin perda das facultades que no seu desenvolvemento e execución correspondan as Comunidades Autónomas.
28.ª Defensa do patrimonio cultural, artístico e monumental español contra a exportación e a espoliación; museos, bibliotecas e arquivos de titularidade estatal, sin tocar á súa xestión por parte das Comunidades Autónomas.
29.ª Seguridade pública, sin perxuízo da posibilidade de creación de policías polas Comunidades Autónomas na forma que se estableza nos respectivos Estatutos no marco do que dispoña unha lei orgánica.
30.ª Regulación das condicións de obtención, expedición e homologación de títulos académicos e profesionais e normas básicas para o desenvolvemento do artigo 27 da Constitución a fin de garantizar o cumprimento das obrigas dos poderes públicos nesta materia.
31.ª Estadística para fins estatais.
32.ª Autorización para a convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

2. Aparte das competencias que poderán asumi-las Comunidades Autónomas, o Estado considerará o servicio da cultura como deber e atribución esencial e facilitará a comunicación cultural entre as Comunidades Autónomas de acordo con elas.

3. As materias non atribuídas expresamente ao Estado por esta Constitución poderán corresponder ás Comunidades Autónomas, segundo os seus respectivos Estatutos. A competencia sobre as materias que non foran asumidas polos Estatutos de Autonomía corresponderá ao Estado, e as normas deste prevalecerán, en caso de conflito, sobre as das Comunidades Autónomas en todo o que non estea atribuído á exclusiva competencia destas. O derelto estatal será, en calquera caso, supletorio do derelto das Comunidades Autónomas.

Artigo 150.

1. As Cortes Xerais, en materias de competencia estatal, poderán atribuir a todas ou a algunha das Comunidades Autónomas a facultade de ditaren, para si mesmas, normas lexislativas no marco dos principios, bases e directrices fixados por unha lei estatal. Aparte das competencias dos Tribunais, en cada lei marco establecerase a modalidade do control das Cortes Xerais sobre estas normas lexislativas das Comunidades Autónomas.

2. O Estado poderá transferir ou delegar nas Comunidades Autónomas, mediante lei orgánica, facultades correspondentes a materia de titularidade estatal que pola súa propia naturaleza sexan susceptibles de transferencia ou delegación. A lei preverá en cada caso a correspondente transferencia de medios financieiros, así como as formas de control que se reserve o Estado.

3. O Estado poderá ditar leis que establezan os principios necesarios para armonizar as disposicións normativas das Comunidades Autónomas, ainda no caso de materias atribuídas á competencia destas, cando así o esixa o interés xeral. Corresponde ás Cortes Xerais, por maioría absoluta de cada Cámara, a apreciación desta necesidade.

Artigo 151

1. Non será necesario deixar transcurrir o prazo de cinco anos a que se refire o apartado 2 do artigo 148 cando a iniciativa do proceso autonómico sexa acordada dentro do prazo do artigo 143, 2, ademais de polas Diputacións ou os órganos interinsulares correspondentes polas tres cuartas partes dos Concellos de cada unha das provincias afectadas que representen, cando menos, a maioría do censo electoral de cada unha delas e a citada iniciativa sexa ratificada mediante referéndum polo voto afirmativo da maioría absoluta dos electores de cada provincia nos termos que estableza unha lei orgánica.

2. No suposto previsto no apartado anterior, o procedemento para a elaboración do Estatuto será o seguinte:

1.° O Goberno convocará a tódolos Diputados e Senadores elexidos nas circunscricións comprendidas no ámbito territorial que pretenda acceder ao autogoberno, para que se constitúan en Asamblea, para os únicos efectos de elaboraren o correspondente proxecto de Estatuto de autonomía, mediante o acordo da maioría absoluta dos seus membros.

2.° Aprobado o proxecto de Estatuto pola Asamblea de Parlamentarios, remitirase á Comisión Constitucional do Congreso, a cal dentro do prazo de dous meses o examinará co concurso e asistencia dunha delegación da Asamblea proponente para determinaren de común acordo a súa formulación definitiva.

3.° Se se alcanzase o devandito acordo o texto resultante será sometido a referéndum do corpo electoral das provincias comprendidas no ámbito territorial do proxectado Estatuto.

4.° Se o proxecto de Estatuto é aprobado en cada provincia pola maioría dos votos validamente emitidos, será elevado ás Cortes Xerais. Os Plenos de ámbalas Cámaras decidirán sobre o texto mediante un voto de ratificación. Aprobado o Estatuto, o Rei sancionarao e promulgarao como lei.

5.° De non alcanzarse o acordo ao que se refire o apartado 2.° deste número, o proxecto de Estatuto será tramitado como proxecto de lei perante as Cortes Xerais. O texto aprobado por estas será sometido a referéndum do corpo electoral das provincias comprendidas no ámbito territorial do proxectado Estatuto. No caso de ser aprobado pola maioría dos votos validamente emitidos en cada provincia, procederá a súa promulgación nos termos do párrafo anterior.

3. Nos casos dos párrafos 4.° e 5.° do apartado anterior, a non aprobación do proxecto de Estatuto por unha ou varias provincias, non impedirá a constitución entre as restantes da Comunidade Autónoma proxectada, na forma que estableza a lei orgánica prevista no apartado 1 deste artigo.

Artigo 152.

1. Nos Estatutos aprobados polo procedemento a que se refire o artigo anterior, a organización institucional autonómica basarase nunha Asamblea Lexislativa elexida por sufraxio universal conforme a un sistema de representación proporcional que asegure, ademais, a representación das diversas zonas do territorio; un Consello de Goberno con funcións executivas e administrativas, e un Presidente, elexido pola Asamblea, de entre os seus membros, e nomeado polo Rei, a quen corresponde a dirección do Consello de Goberno, a suprema representación da respectiva Comunidade e a ordinaria do Estado naquela. O Presidente e os membros do Consello do Goberno serán políticamente responsables ante a Asamblea.

Un Tribunal Superior de Xustiza, sin perxuicio da xurisdición que corresponde ao Tribunal Supremo, culminará a organización xudicial no ámbito territorial de Comunidade Autónoma. Nos Estatutos das Comunidades Autónomas poderán establecerse os supostos e as formas de participación de aquelas na organización das demarcacións xudiciais do territorio. Todo isto de conformidade co previsto na lei orgánica do poder xudicial e dentro da unidade e independencia deste.

Sin perxuicio do disposto no artigo 123, as sucesivas instancias procesais, no seu caso, esgotaranse perante órganos xudiciais radicados no mesmo territorio da Comunidade Autónoma no que estea o órgano competente en primeira instancia.

2. Unha vez sancionados e promulgados os respectivos Estatutos, só poderán ser modificados mediante os procedementos neles establecidos e con referéndum entre os electores inscritos nos censos correspondentes.

3. Mediante a agrupación de concellos limítrofes, os Estatutos poderán establecer circunscricións territoriais de seu que gozarán dunha persoalidade xurídica plena.

Artigo 153.

O control da actividade dos órganos das Comunidades Autónomas exercerase:

a) Polo Tribunal Constitucional, o relativo á constitucionalidade das súas disposicións normativas con forza de lei.

b) Polo Goberno, previo dictame do Consello de Estado, o do exercicio de funcións delegadas a que se refire o apartado 2 do artigo 150.

c) Pola xurisdición contencioso-administrativa, o da administración autónoma e as súas normas regramentarias.

d) Polo Tribunal de Contas, o económico e presupostario.

Artigo 154.

Un delegado nomeado polo Goberno dirixirá a administración do Estado no territorio da Comunidade Autónoma e coordinaraa, cando proceda, coa administración propia da Comunidade.

Artigo 155.

1. Se unha Comunidade Autónoma non cumprise as obrigas que a Constitución ou outras leis lle impoñan, ou actuase de forma que atente gravemente ao interés xeral de España, o Goberno, previo requerimento ao Presidente da Comunidade Autónoma e, no caso de non ser atendido, coa aprobación por maioría absoluta do Senado, poderá adopta-las medidas necesarias para obrigar a aquela ao cumprimento forzoso das citadas obrigas ou para a protección do mencionado interés xeral.

2. Para a execución das medidas previstas no apartado anterior, o Goberno poderá dar instrucións a tódalas autoridades das Comunidades Autónomas.

Artigo 156.

1. As Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financieira para o desenvolvemento e execución das súas competencias de acordo cos principios de coordinación coa Facenda estatal e de solidaridade entre tódolos españois.

2. As Comunidades Autónomas poderán actuar como delegados ou colaboradores do Estado para a recaudación, a xestión e a liquidación dos recursos tributarios daquel, de acordo coas leis e os Estatutos.

Artigo 157.

1. Os recursos das Comunidades Autónomas estarán constituídos por:

a) Impostos cedidos total ou parcialmente polo Estado; recargos sobre impostos estatais e outras participacións nos ingresos do Estado.

b) Os seus propios impostos, tasas e contribucións especiais.

c) Transferencias dun fondo de compensación interterritorial e outras asignacións con cargo aos Presupostos Xerais do Estado.

d) Rendementos procedentes do seu patrimonio e ingresos de dereito privado.

e) O produto das operacións de crédito.

2. As Comunidades Autónomas non poderán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bens situados fóra do seu territorio ou que supoñan obstáculo á libre circulación de mercancías ou servicios.

3. Mediante lei orgánica poderá regularse o exercicio das competencias financieiras enumeradas no precedente apartado 1, as normas que resolvan os conflitos que puideran xurdir e as posibles formas de colaboración financieira entre as Comunidades Autónomas e o Estado.

Artigo 158.

1. Nos Presupostos Xerais do Estado poderase establecer unha asignación ás Comunidades Autónomas en función do volume dos servicios e actividades estatais que asumisen e da garantía dun nivel mínimo na prestación dos servicios públicos fundamentais en todo o territorio español.

2. A fin de correxir desequilibrios económicos interterritoriais e facer efectivo o principio de solidaridade constitúirase un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión; os recursos deste Fondo serán distribuídos polas Cortes Xerais entre as Comunidades Autónomas e provincias, no seu caso.

TITULO IX

Do Tribunal Constitucional

Artigo 159

1. O Tribunal Constitucional componse de 12 membros nomeados polo Rei; de entre eles, catro a proposta do Congreso por maioría de tres quintos dos seus membros; catro a proposta do Senado, con idéntica maioría; dous a proposta do Goberno e dous a proposta do Consello Xeral do Poder Xudicial.

2. Os membros do Tribunal Constitucional deberán ser nomeados entre Maxistrados e Fiscais, Profesores de Universidade, funcionarios públicos e abogados; todos eles xuristas de recoñecida competencia con mais de quince anos de exercicio profesional.

3. Os membros do Tribunal Constitucional serán designados por un período de nove anos e renovaranse por terceiras partes cada tres.

4. A condición de membro do Tribunal Constitucional é incompatible: con mandato representativo; cos cargos políticos ou administrativos; co desempeño de funcións directivas nun partido político ou nun sindicato e co emprego ao servicio dos mesmos; co exercicio das carreiras xudicial e fiscal; e con calquera actividade profesional ou mercantil.

No demais, os membros do Tribunal Constitucional terán as incompatibilidades propias dos membros do poder xudicial.

5. Os membros do Tribunal Constitucional serán independentes e inamovibles no exercicio do seu mandato.

Artigo 160.

O Presidente do Tribunal Constitucional será nomeado entre os seus membros polo Rei, a proposta do mesmo Tribunal en pleno e por un período de tres anos.

Artigo 161.

1. O Tribunal Constitucional ten xurisdición en todo o territorio español e é competente para coñecer:

a) Do recurso de inconstitucionalidade contra leis e disposicións normativas con forza de lei. A declaración de inconstitucionalidade dunha norma xurídica con categoría de lei, interpretada pola xurisprudencia, afectará a esta, se ben a sentencia ou sentencias recaídas non perderán o valor de cousa xulgada.

b) Do recurso de amparo por violación dos dereitos e liberdades referidos no artigo 53, 2 desta Constitución, nos casos e formas que a lei estableza.

c) Dos conflitos de competencia entre o Estado e as Comunidades Autónomas ou dos estas entre si.

d) Das demais materias que lle atribúan a Constitución ou as leis orgánicas.

2. O Goberno poderá impugnar perante o Tribunal Constitucional as disposicións e resolucións adoptadas polos órganos das Comunidades Autónomas. A impugnación producirá a suspensión da disposición ou da resolución recorrida, mais o Tribunal, se corresponde, deberá ratificala ou levantala nun prazo non superior a cinco meses.

Artigo 162.

1. Están lexitimados:

a) Para interporen o recurso de inconstitucionalidade, o Presidente do Goberno, o Defensor do Pobo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, os órganos colexiados executivos das Comunidades Autónomas, e, no seu caso, as Asambleas das mesmas.

b) Para interporen o recurso de amparo, toda persoa natural ou xurídica que invoque un interés lexítimo, así como o Defensor do Pobo e o Ministerio Fiscal.

2. Nos demais casos, a lei orgánica determinará as persoas e órganos lexitimados.

Artigo 163.

Cando un órgano xudicial considere, nalgún proceso, que unha norma con categoría de lei, aplicable ao caso, da validez da cal dependa o fallo, poida ser contraria á Constitución, plantexará a cuestión perante o Tribunal Constitucional nos supostos, na forma e cos efectos que estableza a lei, que en ningún caso serán suspensivos.

Artigo 164.

1. As sentencias do Tribunal Constitucional publicaranse no boletín oficial do Estado cos votos particulares, se os houbese. Teñen o valor de cousa xulgada a partir do día seguinte da súa publicación e non cabe recurso ningún contra elas. As que declaren a inconstitucionalidade dunha lei ou dunha norma con forza de lei e tódalas que non se limiten á estimación subxectiva dun dereito, teñen plenos efectos frente a todos.

2. De non ser que no fallo se dispoña outra cousa, subsistirá a vixencia da lei na parte non afectada pola inconstitucionalidade.

Artigo 165.

Unha lei orgánica regulará o funcionamento do Tribunal Constitucional, o estatuto dos seus membros, o procedemento perante o mesmo e as condicións para o exercicio das accións.

TITULO X

Da reforma constitucional

Artigo 166.

A iniciativa de reforma constitucional exercerase nos termos previstos nos apartados 1 e 2 do artigo 87.

Artigo 167.

1. Os proxectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por unha maioría de tres quintos de cada unha das Cámaras. Se non hai acordo entre ámbalas dúas intentarase obtelo mediante a creación dunha Comisión de composición paritaria de Diputados e Senadores, que presentará un texto que será votado polo Congreso e o Senado.

2. De non se lograr a aprobación mediante o procedemento do apartado anterior, e sempre que o texto obtivera o voto favorable da maioría absoluta do Senado, o Congreso por maioría de dous tercios poderá aprobar a reforma.

3. Aprobada a reforma polas Cortes Xerais, será sometida a referéndum para a súa ratificación cando así o soliciten, dentro dos quince días seguintes á súa aprobación, unha décima parte dos membros de calquera das Cámaras.

Artigo 168.

1. Cando se propoña a revisión total da Constitución ou unha parcial que afecte ao Título Preliminar, ao Capítulo Segundo, Sección 1.ª do Título I, ou ao Título II, procederase á aprobación do principio por maioría de dous tercios de cada Cámara, e á disolución inmediata das Cortes.

2. As Cámaras elexidas deberán ratificar a decisión e proceder ao estudio do novo texto constitucional, que deberá ser aprobado por maioría de dous tercios de ámbalas Cámaras.

3. Aprobada a reforma polas Cortes Xerais, será sometida a referéndum para a súa ratificación.

Artigo 169.

Non poderá iniciarse a reforma constitucional en tempo de guerra ou de vixencia dalgún dos estados previstos no artigo 116.

DISPOSICIONS ADICIONAIS

Primeira.

A Constitución ampara e respeta os dereitos históricos dos territorios forais.

A actualización xeral dese réxime foral levarase a cabo, no seu caso, no marco da Constitución e dos Estatutos de Autonomía.

Segunda.

A declaración de maioría de edade contida no artigo 12 desta Constitución non perxudica as situacións amparadas polos dereitos forais no ámbito do Dereito privado.

Terceira.

A modificación do réxime económico e fiscal do arquipélago canario requerirá informe previo da Comunidade Autónoma ou, cando non do órgano provisional autonómico.

Cuarta.

Nas Comunidades Autónomas onde teñan a súa sede mais dunha Audiencia Territorial, os Estatutos de Autonomía respectivos poderán mante-las existentes, distribuíndo as competencias entre elas, sempre de conformidade co previsto na lei orgánica do poder xudicial e dentro da unidade e independencia deste.

DISPOSICIONS TRANSITORIAS

Primeira.

Nos territorios dotados dun réximen provisional de autonomía, os seus órganos colexiados superiores, mediante acordo adoptado pola maioría absoluta dos seus membros, poderán substitui-la iniciativa que o apartado 2 do artigo 143 atribúe ás Diputacións Provinciais ou aos órganos interinsulares correspondentes.

Segunda.

Os territorios que no pasado plebiscitaron afirmativamente proxectos de Estatuto de autonomía e conten, no intre de se promulgar esta Constitución, con réximes provisionais de autonomía poderán proceder inmediatamente na forma que se prevé no apartado 2 do artigo 148, cando así o acorden, por maioría absoluta, os seus órganos preautonómicos colexiados superiores, comunicándoo ao Goberno. O proxecto de Estatuto será elaborado de acordo co establecido no artigo 151, número 2, por convocatoria do órgano colexiado preautonómico.

Terceira.

A iniciativa do proceso autonómico por parte das Corporacións locais ou dos seus membros, prevista no apartado 2 do artigo 143, enténdese diferida, con tódolos seus efectos, astra a celebración das primeiras eleccións locais unha vez vixente a Constitución.

Cuarta.

1. No caso de Navarra, e a efectos da súa incorporación ao Consello Xeral Vasco ou ao réxime autonómico vasco que o sustitúa, en lugar do que establece o artigo 143 da Constitución, a iniciativa corresponde ao Organo Foral competente, que adoptará a súa decisión por maioría dos membros que o compoñen. Para a validez da citada iniciativa será preciso, además, que a decisión do Organo Foral competente sexa ratificada por referéndum expresamente convocado ao efecto, e aprobado por maioría dos votos válidos emitidos.

2. Se a iniciativa non prosperase, só se poderá reproduci-la mesma en distinto período de mandato do Organo Foral competente, e en todo caso, cando xa transcurrira o prazo mínimo que establece o artigo 143.

Quinta.

As cidades de Ceuta e Melilla poderanse constituír en Comunidades Autónomas se o deciden así os seus respectivos Axuntamentos, mediante acordo adoptado pola maioría absoluta dos seus membros e se o autorizan tamén así as Cortes Xerais, mediante unha lei orgánica, nos termos previstos no artigo 144.

Sexta.

En caso de se remitiren á Comisión de Constitución do Congreso varios proxectos de estatuto, ditaminaranse polo seu orde de entrada na mesma, e o prazo de dous meses a que fai referencia o artigo 151 empezará a contar desque a Comisión remate o estudio do proxecto ou proxectos dos que sucesivamente fose tendo coñecemento.

Sétima.

Os organismos provisionais autonómicos consideraranse disoltos nos casos seguintes:

a) Cando estean constituídos os órganos que establezan os Estatutos de autonomía aprobados conforme a esta Constitución.

b) No caso de que a iniciativa do porceso autonómico non chegara a coallar por non cumprir tódolos requisitos previstos no artigo 143.

c) Se o organismo non exerceu o dereito que lle recoñece a disposición transitoria primeira no prazo de tres anos.

Oitava.

1. As Cámaras que aprobaron a presente Constitución asumirán, trala entrada en vigor da mesma, as funcións e competencias que se sinalen nela tanto para o Congreso como para o Senado, sin que en caso ningún o seu mandato se extenda máis aló do 15 de xuño de 1981.

2. Conforme o establecido no artigo 99, a promulgación da Constitución considerarase como suposto constitucional no que procede a súa aplicación. Para isto, e a partir da devandita promulgación, abrirase un período de trinta días para a aplicación do disposto no citado artigo.

Neste período, o actual Presidente do Goberno, que asumirá as funcións e competencias que para ese cargo establece a Constitución, poderase decidir pola utilización da facultade que lle recoñece o artigo 115 ou dar paso, por medio da dimisión, á aplicación do establecido no artigo 99, quedando no derradeiro caso na situación prevista no apartado 2 do artigo 101.

3. No caso de se disolver, conforme ao previsto no artigo 115 e, de non desenvolverse legalmente o previsto nos artigos 68 a 69, serán de aplicación nas eleccións as normas vixentes con anterioridade, pro coa excepción de que, no que se refire a inelixibilidades e incompatibilidades, se aplicará directamente o previsto no inciso segundo a letra b) do apartado 1 do artigo 70 da Constitución; e igualmente o disposto nela con respecto á edade para o voto e o establecido no artigo 69, 3.

Novena.

Aos tres anos de elexidos por primeira vez os membros do Tribunal Constitucional procederase a sortes á designación dun grupo de catro membros da mesma procedencia electiva entre os que teñan que cesar e renovarse. Só no que a isto se refire, consideraranse agrupados como membros da mesma procedencia aos dous designados a proposta do Goberno e aos dous que proceden da formulada polo Consello Xeral do Poder Xudicial. Procederase de igual xeito unha vez transcurridos outros tres anos entre os dous grupos non afectados polo sorteo anterior. A partir de entón seguirase o establecido no número 3 do artigo 159.

DISPOSICION DEROGATORIA

1. Queda derogada a Lei 1/1977, de 4 de xaneiro, para a Reforma Política, así como, en tanto en canto non estiveran xa derogadas pola Lei mencionada anteriormente, a de Principios do Movemento Nacional de 17 de maio de 1958, o Foro dos Españois de 17 de xullo de 1945, o do Traballo de 9 de marzo de 1938, a Lei Constitutiva das Cortes de 17 de xullo de 1942, a Lei de Sucesión na Xefatura do Estado de 26 de xullo de 1947, todas elas modificadas pola Lei Orgánica do Estado de 10 de xaneiro de 1967 e nos mesmos termos esta última e malla do Referéndum Nacional de 22 de outubro de 1945.

2. En tanto en canto puidera conservar algunha vixencia, considérase definitivamente derogada a Ley de 25 de outubro de 1839 no que pudiera afectar ás provincias de Alava, Guipúzcoa e Bizcaia.

Nos mesmos termos considérase definitivamente derogada a Lei de 21 de xullo de 1876.

3. Asimesmo quedan derogadas cantas disposicións se opoñan ao establecido nesta Constitución.

DISPOSICION DERRADEIRA

Esta Constitución entrará en vigor o mesmo día da publicación do seu texto oficial no boletín oficial do Estado. Publicarase tamén nas demais linguas de España.

IMPRENTA NACIONAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
GACETA DE MADRID

Depósito Legal M. 1-1958 Año CCCXVIII Viernes 29 de diciembre de 1978 Núm. 311.5

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

APROVADA PER LES CORTS EL 31 D'OCTUBRE DE 1978

RATIFICADA PEL POBLE ESPANYOL EN REFERÈNDUM DE 6 DE DESEMBRE DE 1978

SANCIONADA PER S. M. EL REI DAVANT LES CORTS EL 27 DE DESEMBRE DE 1978

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

PREÀMBUL

La Nació espanyola, amb el desig d'establir la justícia, la llibertat i la seguretat i de promoure el bé de tots els qui la integren, en ús de la seua sobirania, proclama la voluntat de:

Garantir la convivència democràtica dins la Constitució i les lleis de conformitat amb un ordre econòmic i social just.

Consolidar un Estat de Dret que assegure l'imperi de la llei com a expressió de la voluntat popular.

Protegir tots els espanyols i els pobles d'Espanya en l'exercici dels drets humans, les seues cultures i tradicions, llengües i institucions.

Promoure el progrés de la cultura i de l'economia per tal d'assegurar a tots una qualitat de vida digna.

Establir una societat democràtica avançada, i

Col·laborar a l'enfortiment d'unes relacions pacífiques i de cooperació eficaç entre tots els pobles de la Terra.

En conseqüència, les Corts aproven i el poble espanyol ratifica la següent

CONSTITUCIÓ

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1.

1. Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.

2. La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat.

3. La forma política de l'Estat espanyol és la Monarquia parlamentària.

Article 2.

La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.

Article 3.

1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la.

2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts.

3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.

Article 4.

1. La bandera d'Espanya és formada per tres franges horitzontals, vermella, groga i vermella; la groga és de doble amplària que la de cadascuna de les vermelles.

2. Els Estatuts podran reconéixer banderes i ensanyes pròpies de les Comunitats Autònomes. Aquestes s'utilitzaran juntament amb la bandera d'Espanya en els edificis públics i en els actes oficials.

Article 5.

La capital de l'Estat és la vila de Madrid.

Article 6.

Els partits polítics expressen el pluralisme polític, concorren a la formació i a la manifestació de la voluntat popular i són instrument fonamental per a la participació política. Són creats i exerciran la seva activitat lliurement dins el respecte a la Constitució i a la Llei. L'estructura interna i el funcionament hauran de ser democràtics.

Article 7.

Els sindicats de treballadors i les associacions empresarials contribueixen a la defensa i a la promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis. Podran ser creats i exerciran la seua activitat lliurement dins el respecte a la Constitució i a la Llei. L'estructura interna i el funcionament hauran de ser democràtics.

Article 8.

1. Les Forces Armades, constituïdes per l'Exèrcit de Terra, l'Armada i l'Exèrcit de l'Aire, tenen com a missió garantir la sobirania i la independència d'Espanya, defensar-ne la integritat territorial i l'ordenament constitucional.

2. Una llei orgànica regularà les bases de l'organització militar de conformitat amb els principis de la present Constitució.

Article 9.

1. Els ciutadans i els poders públics resten subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic.

2. Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que n'impedesquen o en dificulten la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

3. La Constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

TÍTOL PRIMER

Dels drets i dels deures fonamentals

Article 10.

1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l'ordre polític i de la pau social.

2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconega s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els Tractats i els Acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya.

CAPÍTOL PRIMER

Dels espanyols i dels estrangers

Article 11.

1. La nacionalitat espanyola s'adquireix, es conserva i es perd d'acord amb el que la llei estableix.

2. Cap espanyol d'origen no podrà ser privat de la seua nacionalitat.

3. L'Estat podrà concertar tractats de doble nacionalitat amb els països iberoamericans o amb aquells que hagen tingut o tinguen una vinculació particular amb Espanya. En aquests països, encara que no reconeguen als seus ciutadans un dret recíproc, els espanyols podran naturalitzar-s'hi sense perdre la nacionalitat d'origen.

Article 12.

Els espanyols són majors d'edat als divuit anys.

Article 13.

1. Els estrangers gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que garanteix el present Títol en els termes que estableixquen els tractats i la llei.

2. Només els espanyols seran titulars dels drets reconeguts en l'article 23, llevat d'allò que, amb criteris de reciprocitat, puga establir-se per tractat o per llei per al dret de sufragi actiu en les eleccions municipals.

3. L'extradició només es concedirà en compliment d'un tractat o de la llei, d'acord amb el principi de reciprocitat. Resten exclosos de l'extradició els delictes polítics. No seran considerats com a tals els actes de terrorisme.

4. La llei establirà la forma en què els ciutadans d'altres països i els apàtrides podran gaudir del dret d'asil a Espanya.

CAPÍTOL SEGON

Drets i llibertats

Article 14.

Els espanyols són iguals davant la llei, sense que puga prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

SECCIÓ 1.ª

Dels drets fonamentals i de las llibertats públiques

Article 15.

Tothom té dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap cas, ningú no puga ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants. Resta abolida la pena de mort, llevat d'allò que puguen disposar les lleis penals militars per a temps de guerra.

Article 16.

1. Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa y de culte dels individus i de les comunitats sense cap més limitació, quan siguen manifestats, que la necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit per la llei.

2. Ningú podrà ser obligat a declarar quant a la seua ideologia, religió o creences.

3. Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les conseqüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica i les altres confessions.

Article 17.

1. Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat. Ningú podrà ser privat de la seua llibertat, sinó amb l'observància del que estableix aquest article i en els casos i en la forma prevists en la llei.

2. La detenció preventiva no podrà durar més temps del que siga estrictament necessari per a fer les indagacions per tal d'aclarir els fets i, en qualsevol cas, dins el termini màxim de setanta-dues hores, el detingut haurà de ser posat en llibertat o a disposició de l'autoritat judicial.

3. Tota persona detinguda ha de ser informada immediatament i de manera que li siga comprensible, dels seus drets i de les raons de la detenció, i no podrà ser obligada a declarar. Es garanteix l'assistència d'advocat al detingut en les diligències policials i judicials, en la forma que la llei establesca.

4. La llei regularà un procediment d'«habeas corpus» per tal de posar immediatament a disposició judicial tota persona detinguda il·legalment. També es determinarà per llei el termini màxim de durada de la presó provisional.

Article 18.

1. Es garanteix el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

2. El domicili és inviolable. No s'hi podrà entrar ni fer-hi cap escorcoll sense el consentiment del titular o sense resolució judicial, llevat del cas de delicte flagrant.

3. Es garanteix el secret de les comunicacions i, especialment, de les postals, telegràfiques i telefòniques, excepte en cas de resolució judicial.

4. La llei limitarà l'ús de la informàtica per tal de garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.

Article 19.

Els espanyols tenen dret a elegir lliurement la residència i a circular pel territori nacional.

Tenen també dret a entrar i eixir d'Espanya en la forma que la llei establesca. Aquest dret no podrà ser limitat per motius polítics o ideològics.

Article 20.

1. Es reconeixen i es protegeixen els drets:

a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions per mitjà de la paraula, l'escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció.

b) A la producció i a la creació literària, artística, científica i tècnica.

c) A la llibertat de càtedra.

d) A comunicar o a rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la clàusula de conscièncía i al secret professional en l'exercici d'aquestes llibertats.

2. L'exercici d'aquests drets no pot ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia.

3. La llei regularà l'organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social que depenguen de l'Estat o de qualsevol entitat pública i garantirà l'accés a quests mitjans dels grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diferents llengües d'Espanya.

4. Aquestes llibertats tenen el límit en el respecte als drets reconeguts en aquest Títol, en els preceptes de les lleis que el desenrotllen i, especialment, en el dret a l'honor, a la intimitat, a la imatge pròpia i a la protecció de la joventut i de la infància.

5. Només podrà acordar-se el segrest de publicacions, gravacions i altres mitjans d'informació en virtut de resolució judicial.

Article 21.

1. Es reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes. Per a l'exercici d'aquest dret no caldrà autorització prèvia.

2. En els casos de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions caldrà comunicar-ho prèviament a l'autoritat, la qual només podrà prohibir-les quant hi haja motius fonamentats d'alteració de l'ordre públic, amb perill per a persones o béns.

Article 22.

1. Es reconeix el dret d'associació.

2. Les associacions que cerquen finalitats o facen servir mitjans tipificats com a delicte són il·legals.

3. Les associacions emparades per aquest article hauran d'inscriure's en un registre únicament a efectes de publicitat.

4. Les activitats de les associacions només podran ser dissoltes o suspenses en virtut d'una resolució judicial motivada.

5. Es prohibeixen les associacions secretes i les de caràcter paramilitar.

Article 23.

1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics directament per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal.

2. Tenen també el dret d'accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalen.

Article 24.

1. Tothom té dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i dels tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, puga haver-hi indefensió.

2. Tothom té dret al jutge ordinari predeterminat per la llei, a ser defensat i assistit per un lletrat, a ser informat de l'acusació formulada contra ell, a un procés públic sense dilacions indegudes i amb totes les garanties, a utilitzar els mitjans probatoris pertinents per la defensa pròpia, a no declarar contra mateix, a no confessar-se culpable i a la presumpció d'innocència.

La llei regularà els casos en els qualls, per raó de parentiu o de secret professional, no s'estarà obligat a declarar respecte de fets presumptament delictius.

Article 25.

1. Ningú pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constituesquen delicte, falta o infracció administrativa, segons la legislació vigent en aquell moment.

2. Les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat restaran orientades vers la reeducació i la reinserció social i no podran consistir en treballs forçats. El condemnat que estiguera complint pena de presó gaudirà dels fonamentals d'aquest Capítol, llevat d'aquells que es troben limitats expressament pel contingut del veredicte condemnatori, pel sentit de la pena o per la llei penitenciària. En qualsevol cas, tindrà dret a un treball remunerat, als beneficis corresponents de la Seguretat Social, i a l'accés a la cultura i al desenvolupament integral de la personalitat.

3. L'Administració civil no podrà imposar sancions que directament o subsidiàriament impliquen privació de llibertat.

Article 26.

Es prohibeixen els Tribunals d'Honor en l'àmbit de l'Administració civil i de les organitzacions professionals.

Article 27.

1. Tothom té dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament.

2. L'educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals.

3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que els fills reben la formació religiosa i moral que vaja d'acord amb les seues conviccions.

4. L'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït.

5. Els poders públics garanteixen el dret de tots a l'educació, mitjançan una programació general de l'ensenyament, amb la participació col.lectiva de tolts els sectors afectats i la creació de centres docents.

6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents, dins el respecte als principis constitucionals.

7. Els professors, els pares i, en el seu cas, els alumnes intervindran en el control i en la gestió de tots els centres sostinguts per l'Administració amb fons públics, en la forma que la llei establesca.

8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per tal de garantir el compliment de les lleis.

9. Els poders públics ajuderan aquells centres docents que reunesquen els requisits que la llei establesca.

10. Es reconeix l'autonomia de les universitats, en la forma que la llei establesca.

Article 28.

1. Tothom té dret a sindicar-se lliurement. La llei podrà limitar o suspendre l'exercici d'aquest dret a les Forces o als Instituts armats o als altres cossos, sotmesos a disciplina militar, i regularà les peculairitats que l'exercici d'aquest dret presente als funcionaris públics. La llibertat sindical comprén el dret a fundar sindicats i a afiliar-s'hi a elecció, i el dret dels sindicats a formar confederacions i a fundar organitzacions sindicals internacionals o a afiliar-s'hi. Ningú podrà ser obligat a afiliar-se a un sindicat.

2. Es reconeix als treballadors el dret a la vaga per a la defensa dels seus interessos. La llei que regule l'exercici d'aquest dret establirà les garanties que calguen per tal d'assegurar el manteniment dels serveis essencials a la comunitat.

Article 29.

1. Tots els espanyols tindran el dret de petició individual i col.lectiva, per escrit, en la forma i amb els efectes que determine la llei.

2. Els membres de les Forces o Institucions armades o dels cossos sotmesos a disciplina militar podran exercir aquest dret només individualment i d'acord amb allò que dispose la seua legislació específica.

SECCIÓ 2.ª

Dels drets i dels deures dels ciutadans

Article 30.

1. Els espanyols tenen el dret i el deure de defensar Espanya.

2. La llei fixarà les obligacions militars dels espanyols i regularà, amb les garanties que calguen, l'objecció de consciència i les altres causes d'exempció del servei militar obligatori; podrà imposar, en el seu cas, una prestació social substitutòria.

3. Podrà establir-se un servei civil per al compliment de fins d'interés general.

4. Mitjançant una llei podran regular-se els deures dels ciutadans en els casos de risc greu, catàstrofe o calamitat pública.

Article 31.

1. Tothom contribuirà al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la seua capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori.

2. La despesa pública realitzarà una assignació equitativa dels recursos públics i la programació i l'execució respondran als criteris d'eficiència i economia.

Article 32.

1. L'home i la dona tenen dret a contraure matrimoni amb plena igualtat jurídica.

2. La llei regularà les formes de matrimoni, l'edat i la capacitat per a contraure'l, els drets i els deures dels cònjuges, les causes de separació i dissolució i els seus efectes.

Article 33.

1. Es reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència.

2. La funció social d'aquests drets en delimitarà el contingut, d'acord amb les lleis.

3. Ningú podrà ser privat dels seus béns ni dels seus drets sinó per causa justificada d'utilitat pública i d'interés social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb el que les lleis disposen.

Article 34.

1. Es reconeix el dret de fundació per a finalitats d'interés general, d'acord amb la llei.

2. Regirà també per a les fundacions el que es disposa en els apartats 2 i 4 de l'article 22.

Article 35.

1. Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per tal de satisfer les seues necessitats i les de la seua família sense que en cap cas es puga fer discriminació per raó de sexe.

2. La llei regularà un estatut dels treballadors.

Article 36.

La llei regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels Col.legis Professionals i l'exercici de les professions titulades. L'estructura interna i el funcionament dels Col.legis hauran de ser democràtics.

Article 37.

1. La llei garantirà el dret a la negociació col.lectiva del treball entre els representants dels treballadors i els empresaris, i la força vinculant dels convenis.

2. Es reconeix el dret dels treballadors i dels empresaris a adoptar mesures de conflicte col.lectiu. La llei que regule l'exercici d'aquest dret, sens perjudici de les limitacions que puga establir, inclourà les garanties que calguen per tal d'assegurar el funcionament dels serveis essencials a la comunitat.

Article 38.

Es reconeix la llibertat d'empresa dins el marc de l'economia de mercat. Els poders públics en garanteixen l'exercici i el protegeixen; protegeixen també la defensa de la productivitat d'acord amb les exigències de l'economia general i, en el seu cas, de la planificació.

CAPÍTOL TERCER

Dels principis rectors de la política social i econòmica

Article 39.

1. Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família.

2. Els poders públics asseguren també la protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb independència de la filiació, i de les mares, siga quin siga el seu estat civil. La llei farà possible la investigació de la paternitat.

3. Els pares han de prestar assistència completa als fills tinguts dins o fora del matrimoni, durant la minoria d'edat i en els altres casos en què la llei els hi obligue.

4. Els infants gaudiran de la protecció prevista en els acords internacionals que vetlen pels seus drets.

Article 40.

1. Els poders públics promouran les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda regional i personal més equitativa, dins el marc d'una política d'estabilitat econòmica. De manera especial realitzaran una política orientada cap a la plena ocupació.

2. Els poders públics fomentaran també una política que garantesca la formació i la readaptació professionals; vetlaran per la seguritat i la higiene en el treball i garantiran el descans necessari; mitjançant la limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats.

Article 41.

Els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans, que garantesca l'assistència i les prestacions socials suficients en les situacions de necessitat, especialment en cas de falta de feina. L'assistència i les prestacions complementàries seran lliures.

Article 42.

L'Estat vetlarà especialment per la salvaguarda dels drets econòmics i socials dels treballadors espanyols a l'estranger i orientarà la seua política a repatriar-los e integrar-los a la societat.

Article 43.

1. Es reconeix el dret a la protecció de la salut.

2. Correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris. La llei establirà els drets i els deures de tots en aquest punt.

3. Els poders públics fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport. Facilitaran també la utilització adequada del lleure.

Article 44.

1. Els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tothom té dret.

2. Els poders públics promouran la ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l'interés general.

Article 45.

1. Tots tenen dret a disposar d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-lo.

2. Els poders públics vetlaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col.lectiva.

3. La llei fixarà sancions penals o, en el seu cas, administratives per a aquells que violen el que es disposa en l'apartat anterior i establirà l'obligació d'aquests de reparar el dany causat.

Article 46.

Els poders públics garantiran la conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que l'integren, siga quin siga el règim jurídic i la titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni.

Article 47.

Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d'acord amb l'interés general per tal d'impedir l'especulació.

La comunitat participarà en les plusvàlues que genere l'acció urbanística de les entitats públiques.

Article 48.

Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.

Article 49.

Els poders públics duran a terme una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals es prestarà l'atenció especialitzada que requeresquen, i els empararan especialment en la consecució dels drets que aquest Títol otorga a tots els ciutadans.

Article 50.

Els poders públics garantiran la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat, mitjançant pensions adequades i actualitzades periòdicament. Amb independència de les obligacions familiars, en promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els seus problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure.

Article 51.

1. Els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i dels usuaris, i en protegiran amb procediments eficaços la seguretat, la salut i els legítims interessos.

2. Els poders públics promouran la informació i l'educació dels consumidors i dels usuaris, en fomentaran les organitzacions i les escoltaran en les qüestions que puguen afectar-los, en la forma que la llei establesca.

3. Dins el marc del que disposen els apartats anteriors, la llei regularà el comerç interior y el règim d'autorització de productes comercials.

Article 52.

La llei regularà les organitzacions professionals que contribuesquen a la defensa dels interessos econòmics que els siguen propis. L'estructura interna i el funcionament hauran de ser democràtics.

CAPÍTOL QUART

De les garanties de les llibertats i drets fonamentals

Article 53.

1. Els drets i les llibertats reconeguts en el Capítol Segon del present Títol vinculen tots els poders públics. Només per llei, que en tota causa haurà de respectar el seu contingut essencial, podrà regular-se l'exercici d'aquests drets i d'aquestes llibertats, que seran tutelades d'acord amb el que preveu l'article 156, 1, a).

2. Qualsevol ciutadà podrà demanar la tutela de les llibertats i dels drets reconeguts en l'article 14 o en la Secció 1.ª del Capítol Segon davant els Tribunals ordinaris per un procediment basat en els principis de preferència i sumarietat i, en el seu cas, a través del recurs d'emparament davant el Tribunal Constitucional. Aquest darrer recurs serà aplicable a l'objecció de consciència reconeguda en l'article 30.

3. El reconeixement, el respecte i la protecció dels principis reconeguts en el Capítol Tercer, informarà la legislació positiva, la pràctica judicial i l'actuació dels poders públics. Només podran ser al.legats davant la Jurisdicció ordinària d'acord amb allò que disposen les lleis que els desenvolupen.

Article 54.

Una llei orgànica regularà la Institució del Defensor del Poble, com a alt comissionat de les Corts Generals, designat per aquestes per a defensar els drets compresos en aquest Títol; a aquest efecte podrà supervisar l'activitat de l'Administració, i donar-ne compte a les Corts Generals.

CAPÍTOL CINQUÉ

De la suspensió dels drets i de les llibertats

Article 55.

1. Els drets reconeguts en els articles 17, 18, apartats 2 i 3; articles 19, 20, apartats 1, a), i d), i 5; articles 21, 28, apartat 2, i article 31, apartat 2, podran ser suspesos quan siga acordada la declaració de l'estat d'excepció o de setge en els termes que preveu la Constitució. Resta exceptuat d'aquesta suspensió l'apartat 3 de l'article 17 en el cas de declaració de l'estat d'excepció.

2. Una llei orgànica podrà determinar la forma i els casos en què, de forma individual i amb la necessària intervenció judicial i l'adequat control parlamentari, els drets reconeguts en els articles 17.2 i 18, apartats 2 i 3, puguen ser suspesos per a persones determinades, en relació amb les investigacions corresponents a l'actuació de bandes armades o elements terroristes.

La utilització injustificada o abusiva de les facultats reconegudes en la dita llei orgànica comportarà responsabilitat penal per violació dels drets i de les llibertats reconegudes per les lleis.

TÍTOL II

De la Corona

Article 56.

1. El Rei és el Cap de l'Estat, símbol de la seua unitat i permanència, arbitra i modera el funcionament regular de les institucions, assumeix la més alta representació de l'Estat Espanyol en les relacions internacionals, especialment amb les nacions de la seua comunitat històrica, i exerceix les funcions que li atribueixen expressament la Constitució i les lleis.

2. El seu títol és el de Rei d'Espanya, i podrà utilitzar els altres que corresponguen a la Corona.

3. La persona del Rei és inviolable i no està subjacta a responsabilitat. Els seus actes seran sempre subjectes de refrendament en la forma establerta en l'article 64, sense la qual no tindran validesa, llevat del que disposa l'article 65.2.

Article 57.

1. La Corona d'Espanya és hereditària en els successors de S. M. Joan Carles I de Borbó, legítim hereu de la Dinastia històrica. La successió al tron seguirà l'ordre regular de primogenitura i de representació, i serà preferida sempre la línia anterior a les posteriors; en la mateixa línia, el grau més pròxim al més remot; en el mateix grau, l'home a la dona, i en el mateix sexe, la persona major a la menor.

2. El Príncep hereu, des del seu naixement o des que s'esdevinga el fet que origine l'evocació, tindrà la dignitat de Príncep d'Astúries i els altres títols vinculats tradicionalment a l successors de la Corona d'Espanya.

3. Havent-se extingit totes les línies cridades a dret, les Corts Generals proveiran a la successió a la Corona en la forma que més convinga als interessos d'Espanya.

4. Les persones que, tenint dret a la successió al tron, contraguessen matrimoni contra la prohibició expressa del Rei i de les Corts Generals, restaran excloses de la successió a la Corona elles mateixes i els seus descendents.

5. Les abdicacions i les renúncies i qualsevol dubte fet o de dret que s'esdevinga en l'ordre de successió a la Corona es resoldran amb una llei orgànica.

Article 58.

La Reina consort o el consort de la Reina no podran assumir funcions constitucionals, llevat del que es disposa per a la Regència.

Article 59.

1. Si el Rei fóra menor d'edat, el pare o la mare del Rei i, per manca d'aquests, el paren major d'edat més pròxim en la successió a la Corona segons l'ordre establit en la Constitució, entrarà a exercir immediatament la Regència, i l'exercirá durant el temps de minoria d'edat del Rei.

2. Si el Rei resultava inhabilitat per a l'exercici de la seua autoritat, i la impossibilitat fóra reconeguda per les Corts Generals, entrarà immediatament a exercir la Regència el Príncipe hereu de la Corona, si era major d'edat. Si no ho era, caldrà procedir de la manera que preveu l'apartat anterior fins que el Príncep hereu aconseguesca la majoria d'edat.

3. Si no hi haguera cap persona a qui corresponguera la Regència, aquesta serà nomenada per les Corts Generals, i es compondrà d'una, tres, o cinc persones.

4. Per a exercir la Regència caldrà ser espanyol i major d'edat.

5. La Regència serà exercida per mandat constitucional i sempre en nom del Rei.

Article 60.

1. Serà tutor del Rei menor la persona que el Rei difunt haja nomenat en el seu testament, sempre que siga major d'edat i espanyol de naixement; si no n'haguera nomenat, en serà tutor el pare o la mare mentre resten vidus. Mancant aquests, el nomenaran les Corts Generals, però només podran acumular els càrrecs de regent i de tutor el pare, la mare o els ascendents directes del Rei.

2. L'exercici de la tutela és incompatible també amb el de qualsevol càrrec o representació política.

Article 61.

1. El Rei, en ser proclamat davant les Corts Generals, prestarà el jurament d'exercir fidelment les seues funcions, guardar i fer guardar la Constitució i les lleis i respectar els drets dels ciutadans i de les Comunitats Autònomes.

2. El Príncep hereu, en aconseguir la majoria d'edat, i el Regent o els Regents en fer-se càrrec de les seues funcions, prestaran el mateix jurament i el de fidelitat al Rei.

Article 62.

Correspon al Rei:

a) Sancionar i promulgar les lleis.

b) Convocar i dissoldre les Corts Generals i convocar eleccions en els termes prevists a la Constitució.

c) Convocar a referèndum en els casos prevists a la Constitució.

d) Proposar el candidat a President de Govern i, en el seu cas, nomenar-lo, i també posar fi a les seues funcions en els termes previstos en la Constitució.

e) Nomenar i remoure els membres del Govern a proposició del President d'aquest.

f) Expedir els decrets acordats en el Consell de Ministres, proveir els oficis civils i militars concedir honors i distincions d'acord amb les lleis.

g) Ser informat dels afers d'Estat i presidir, a aquest efecte, les sessions del Consell de Ministres quan ho crega oportú, a petició del President del Govern.

h) El comandament suprem de les Forces Armades.

i) Exercir el dret de gràcia d'acord amb la llei, la qual no podrà autoritzar indults generals.

Article 63.

1. El Rei acredita els ambaixadors i altres representants diplomàtics. Els representants estrangers a Espanya són acreditats davant ell.

2. Al Rei correspon de manifestar el consentiment de l'Estat per a obligar-se internacionalment mitjançant tractats, de conformitat amb la Constitució i amb les lleis.

3. Al Rei correspon, prèvia autorització de les Corts Generals, de declarar la guerra i de fer la pau.

Article 64.

1. Els actes del Rei seran referendats pel President del Govern i, en el seu cas, pels Ministres competents. La proposta i el nomenament del President del Govern i la dissolució prevista en l'article 99 seran referendats pel President del Congrés.

2. Dels actes del Rei seran responsables les persones que els referenden.

Article 65.

1. El Rei percep dels Pressuposts de l'Estat una quantitat global per al sosteniment de la seua Família I Casa, i la distribueix lliurement.

2. El Rei nomena i relleva lliurement els membres civils i militars de la seua Casa.

TÍTOL III

De les Corts Generals

CAPÍTOL PRIMER

De les Cambres

Article 66.

1. Les Corts Generals representen el poble espanyol i són formades pel Congrés dels Diputats i el Senat.

2. Les Corts Generals exerceixen la potestat legislativa de l'Estat, n'aproven els pressuposts, controlen l'acció del Govern i tenen les altres competències que els atribuesca la Constitució.

3. Les Corts Generals són inviolables.

Article 67.

1. Ningú podrà ser membre de les dues Cambres simultàniament, ni acumular l'acta d'una Assemblea d'una Comunitat Autònoma amb la de Diputat al Congrés.

2. Els membres de les Corts Generals no estaran lligats per mandat imperatiu.

3. Les reunions de Parlamentaris que se celebren sense convocatòria reglamentària no vincularan les Cambres i no podran exercir les funcions d'aquestes ni ostentar-ne els privilegis.

Article 68.

1. El Congrés es compon d'un mínim de 300 i un màxim de 400 Diputats, elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret en els termes que establesca la llei.

2. La circumscripció electoral és la provincia. Les poblacions de Ceuta i Melilla seran representades cadascuna per un Diputat. La llei distribuirà el nombre total de Diputats, assignarà una representació mínima inicial a cada circumscripció i distribuirà els altres en proporció amb la població.

3. L'elecció es farà a cada circumscripció atenint a criteris de representació proporcional.

4. El Congrés és elegit per quatre anys. El mandat dels Diputats acaba quatre anys després de l'elecció o el dia de la dissolució de la Cambra.

5. Són electors i elegibles tots els espanyols que estiguen en ple ús dels seus drets polítics. La llei reconeixerà l'exercici del dret de sufragi als espanyols que es troben fora del territori d'Espanya i l'Estat els el facilitarà.

6. Les eleccions tindran lloc entre els trenta i els seixanta dies després de l'acabament del mandat. El Congrés elecle haurà de ser convocat dins els vint-i-cinc dies següents al de la celebració de les eleccions.

Article 69.

1. El Senat és la Cambra de representació territorial.

2. Els votants de cada província elegiran quatre Senadors per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret en els termes que assenyale una llei orgànica.

3. A les províncies insulars, cada illa o agrupació d'illes, amb cabildo o consell insular, constituirà una circumscripció a efecte de l'elecció de Senadors; en correspondran tres a cadascuna de les illes majors (Gran Canària, Mallorca i Tenerife), i un a cadascuna de les illes o agrupacions d'illes següents: Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma.

4. Les poblacions de Ceuta i Melilla elegiran cadascuna dos Senadors.

5. Les Comunitats Autònomes designaran a més un Senador i encara un altre per cada milió d'habitants del seu territori respectiu. La designació correspondrà a l'Assemblea Legislativa o, si no n'hi havia, a l'òrgan col.legiat superior de la Comunitat Autònoma, d'acord amb el que establesquen els Estatuts, que asseguraran, en qualsevol cas, la representació proporcional adequada.

6. El Senat és elegit per quatre anys. El mandat dels Senadors acaba quatre anys després de l'elecció o el dia de la dissolució de la Cambra.

Article 70.

1. La llei electoral determinarà les causes d'inelegibilitat i incompatibilitat dels Diputats i dels Senadors, les quals comprendran, en qualsevol cas:

a) Els components del Tribunal Constitucional.
b) Els alts càrrecs de l'Administració de l'Estat que determine la llei, amb l'excepció dels membres del Govern.
c) El Defensor del Poble.
d) Els Magistrats, els Jutges i els Fiscals en actiu.
e) Els militars professionals i els membres de les Forces i Cossos de Seguretat i Policia en actiu.
f) Els membres de les Juntes Electorals.

2. La validesa de les actes i de les credencials dels membres de totes dues Cambres restarà sotmesa al control judicial en els termes que establesca la llei electoral.

Article 71.

1. Els Diputats i els Senadors gaudiran d'inviolabilitat per les opinions manifestades en l'exercici de les seues funcions.

2. Durant el període del seu mandat, els Diputats i els Senadors gaudiran també d'immunitat, i només podran ser detinguts en cas de delicte flagrant. No podran ser inculpats ni processats sense l'autorització prèvia de la Cambra respectiva.

3. En les causes contra Diputats i Senadors serà competent la Sala del Penal del Tribunal Suprem.

4. Els Diputats i els Senadors percebran una assignació que serà fixada per les Cambres respectives.

Article 72.

1. Les Cambres estableixen els propis reglaments, aproven autònomament els seus pressuposts i, d'un comú acord, regulen l'estatut del personal de les Corts Generals. Els reglaments i la reforma d'aquests seran sotmesos a una votació final sobre la totalitat, la qual requerirà la majoria absoluta.

2. Les Cambres elegeixen els presidents respectius i els altres membres de les Meses. Les sessions conjuntes seran presidides pel President del Congrés i es regiran mitjançant un Reglament de les Corts Generals aprovat per la majoria absoluta de cada Cambra.

3. Els Presidents de les Cambres exerceixen en nom d'aquestes tots els poders administratius i les facultats de policia en l'interior dels estatges respectius.

Article 73.

1. Les Cambres es reuniran anualment en dos períodes ordinaris de sessions: el primer, del setembre al desembre, i el segon, del febrer al juny.

2. Les Cambres podran reunir-se en sessions extraordinàries a petició del Govern, de la Diputació permanent o de la majoria absoluta dels membres de qualsevol de les Cambres. Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades amb un ordre del dia determinat i seran closes després d'haver-lo exhaurit.

Article 74.

1. Les Cambres es reuniran en sessió conjunta per tal d'exercir les competències no legislatives que el Títol II atribueix expressament a les Corts Generals.

2. L'adopció de les decisions de les Corts Generals previstes en els articles 94.1, 145.2 i 158.2 requerirà la majoria de cada una de les Cambres. En el primer cas, el procés serà iniciat pel Congrés, i en els altres dos, pel Senat. En tots dos casos, si no hi hagués acord entre el Senat i el Congrés, s'intentarà obtenir-lo mitjançant una Comissió Mixta composada per un mateix nombre de Diputats i de Senadors. La Comissió presentarà un text que haurà de ser votat per totes dues Cambres. Si no s'aprova en la forma establida, decidirà el Congrés per majoria absoluta.

Article 75.

1. Les Cambres funcionaran en Ple i per Comissions.

2. Les Cambres podran delegar a les Comissions Legislatives permanents l'aprovació de projectes o proposicions de llei. El Ple, això no obstant, podrà requerir en qualsevol moment el debat i la votació de qualsevol projecte o proposició de llei que haja estat objecte de la delegació.

3. Resten exceptuats del que disposa l'apartat anterior la reforma constitucional, les qüestions internacionals, les lleis orgàniques i de bases i els Pressuposts Generals de l'Estat.

Article 76.

1. El Congrés i el Senat i, si pertoca, totes dues Cambres conjuntament, podran nomenar Comissions d'investigació sobre qualsevol afer d'interés públic. Les conclusions obtingudes no seran vinculants per als Tribunals ni afectaran les resolucions judicials, sense que això siga obstacle perquè el resultat de la investigació siga comunicat al Ministeri Fiscal per tal que aquest exercesca, si cal, les accions oportunes.

2. Serà obligatori de comparéixer a requeriment de les Cambres. La llei regularà les sancions que puguen imposar-se per causa de l'incompliment d'aquesta obligació.

Article 77.

1. Les Cambres poden rebre peticions individuals o col.lectives, sempre per escrit. En resta prohibida la presentació directa per mitjà de manifestacions ciutadanes.

2. Les Cambres poden trametre al Govern les peticions que rebran. El Govern té l'obligació d'explicar-se sobre el contingut d'aquestes sempre que les Cambres ho exigesquen.

Article 78.

1. A cada Cambra hi haurà una Diputació Permanent composta per un mínim de vint-i-un membres que representaran els grups parlamentaris en proporció a la importància numèrica.

2. Les Diputacions Permanents seran presidides pel President de la Cambra respectiva i tindran per funcions la que preveu l'article 73, la d'assumir les facultats que corresponguen a les Cambres, de conformitat amb els articles 86 i 116 si aquestes hagueren estat dissoltes o n'haguera expirat el mandat, i la de vetlar pels poders de les Cambres, quan aquestes no estiguen reunides.

3. Havent acabat el seu mandat o en cas de dissolució, les Diputacions Permanents continuaran exercint les seues funcions fins que es constituesquen les noves Corts Generals.

4. Reunida la Cambra corresponent, la Diputació Permanent donarà compte dels assumptes tractats i de les seues decisions.

Article 79.

1. Per tal d'adoptar acords, les Cambres han d'estar reunides reglamentàriament i comptar amb l'assistència de la majoria dels membres.
2. Perquè els dits acords siguen vàlids hauran de ser aprovats per la majoria dels membres presents, sens perjudici de les majories especials que establesquen la Constitució o les lleis orgàniques i les que establesquen els Reglaments de les Cambres per a l'elecció de persones.
3. El vot dels Senadors i el dels Diputats és personal i indelegable.

Article 80.

Les sessions plenàries de les Cambres seran públiques, salvant l'acord en contra de cada Cambra, adoptat per majoria absoluta o de conformitat amb el Reglament.

CAPITOL SEGON

De l'elaboració de les lleis

Article 81.

1. Són lleis orgàniques les relatives al desenvolupament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, les que aproven els Estatuts d'Autonomia i el règim electoral general i les previstes per la Constitució.
2. L'aprovació, la modificació o la derogació de les lleis orgàniques exigeix la majoria absoluta del Congrés en una votació final sobre el conjunt del projecte.

Article 82.

1. Les Corts Generals podran delegar al Govern la potestat de dictar normes amb rang de llei sobre matèries determinades no incloses en l'article anterior.
2. La delegació legislative haurà d'atorgar-se mitjançant una llei de bases quan tinga per objecte la formació de texts articulats o mitjançant una llei ordinària quan es tracte de refondre diversos texts legals en un de sol.
3. La delegació legislativa haurà d'atorgar-se al Govern de forma expressa, per a una matèria concreta, i fixant-ne el termini d'exercici. La delegació resta esgotada en fer-ne ús el Govern amb la publicació de la norma corresponent. No podrà entendre's que ha estat concedida de manera implícita o per un lapse de temps indeterminant. Tampoc podrà permetre'n la subdelegació a autoritats altres que el matelx Govern.
4. Les lleis de bases delimitaran precisament l'objecte i l'abast de la delegació legislativa i els principis i criteris que en regiran l'exercici.
5. L'autorització per a refondre texts legals determinarà l'àmbit normatiu a què es referelx el contingut de la delegació, i ahurà d'especificar si resta circumscrita a la mera formulació d'un text únic o si inclou la de regularitzar, aclarir i harmonitzar els texts legals que hagen de ser refosos.
6. Les lleis de delegació podran establir en cada cas fórmules addicionals de control sens perjudici de la competència pròpia dels Tribunals.

Article 83.

En cap cas podran les lleis de bases:

a) Autoritzar la modificació de la pròpia llei de bases.
b) Facultar per a dictar normes amb caràcter retroactiu.

Article 84.

Si una proposició de llei o una esmena és contrària a una delegació legislativa vigent, el Govern té la facultat d'oposar-se a la tramitació. Si això s'esdevenia, podrà presentar-se una proposició de llei per a la derogació total o parcial de la llei de delegació.

Article 85.

Les disposicions del Govern que continguen legislació delegada rebran el títol de Decrets Legislatius.

Article 86.

1. En cas d'una necessitat urgent i extraordinària, el Govern podrà dictar disposicions legislatives provisionals que prendran la forma de Decrets-Lleis i que no podran afectar l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans regulats en el Títol I, el règim de les Comunitats Autònomes ni el Dret electoral general.
2. Els Decrets-Lleis hauran de ser sotmesos inmediatament a debat i votació de la totalitat en el Congrés dels Diputats, convocat a aquest efecte si no estiguera reunit, dins el termini dels trenta dies següents a la promulgació. El Congrés haurà de pronunciar-se expressament dins aquest termini sobre la convalidació o la derogació, per a la qual cosa el Reglament establirà un procedíment especial i sumari.
3. Durant el termini establit en el paràgraf anterior, les Corts podran tramitar-los com a projectes de llei pel procediment d'urgència.

Article 87.

1. La iniciativa legislativa correspon al Govern, al Congrés i al Senat, d'acord amb la Constitució i els Reglaments de les Cambres.
2. Les Assemblées de les Comunitats Autònomes podran demanar al Govern l'adopció d' un Projecte de Llei o trametre a la Mesa del Congrés una Proposició de Llei, i podran delegar davant la dita Cambra un màxim de tres membres de l'Assemblea encarregats de defensar-la.
3. Una llei orgànica regularà les formes d'exercici i els requisits de la iniciativa popular per a la presentació de proposicions de llei. En qualsevol cas es requerirà no menys de 500.000 signatures acreditades. No serà procedent aquesta iniciativa en les matèries pròpies de la llei orgànica, tributàries o de caràcter internacional ni en allò que pertany a la prerrogativa de gràcia.

Article 88.

Els projectes de llei seran aprovats pel Consell de Ministres, el qual els sotmetrà al Congrés acompanyats d'una exposició de motius i dels antecedents necessaris per a pronunciar-s'hi.

Article 89.

1. La tramitació de les proposicions de llei serà regulada pels Reglaments de les Cambres, sense que la prioritat deguda als projectes de llei impedesca l'exercici de la iniciativa legislativa en els termes regulats en l'article 87.
2. Les proposicions de llei que, de conformitat amb l'article 87, el Senat prenga en consideració seran trameses al Congrés perquè aquest les tramite com a tal proposició.

Article 90.

1. Una vegada haja estat aprovat un projecte de llei ordinària o orgánica pel Congrés de Diputats, el President d'aquest en donarà compte immediatament al President del Senant, el qual el sotmetrà a la deliberació d'aquesta darrera Cambra.
2. El Senat, dins el termini de dos mesos a comptar des del día de la recepció del text, pot oposar-li el seu veto o introduir-hi esmenes imtjançant un missatge motivat. El veto haurà de ser aprovat per majoria absoluta. El projecte no podrà ser sotmés al Rei perquè el sancione sense que el Congrés ratifique per majoria absoluta, en cas de veto, el text inicial, o por majoria simple, transcorreguts dos mesos d'ençà que fou interposat, o sense que es pronuncie sobre les esmenes, havent-les acceptades o no per majoria simple.
3. El termini de dos mesos reduirà al de vint dies naturals en els projectes declarats urgents pel Govern o pel Congrés dels Diputats.

Article 91.

El Rei sancionarà les lleis aprovades per les Corts Generals dins el termini de quinze dies, i les promulgarà i n'ordenarà la puclicació inmediata.

Article 92.

1. Les decisions polítiques de transcendència especial podran ser sotmeses al referèndum consultiu de tots els ciutadans.
2. El referèndum serà convocat pel Rei a proposició del President del Govern, autoritzada prèviament pel Congrés dels Diputats.
3. Una llei orgànica regularà les condicions i el procediment de les diverses modalitats de referèndum previstes per la present Constitució.

CAPÍTOL TERCER

Dels Tractats Internacionals

Article 93.

Mitjançant una llei orgànica es podrà autoritzar la celebració de tractats pels quals s'atribuesca a una organització o a una institució internacional l'exercici de competències derivades

de la Constitució. La garantia del compliment d'aquests tractats i de les resolucions emanades dels organismes internacionals o supranacionals titulars de la cessió correspon, segons els casos, a les Corts Generals o al Govern.

Article 94.

1. La prestació del consentiment de l'Estat per a obligar-se mitjançant tractats o convenis requerirà l'autorització prèvia de les Corts Generals en els casos següents:

a) Tractats de caràcter polític.
b) Tractats o convenis de caràcter militar.
c) Tractats o convenis que afecten la integritat territorial de l'Estat o els drets i els deures fonamentals establits en el Títol I.
d) Tractats o convenis que impliquen obligacions financeres per a la Hisenda Pública.
e) Tractats o convenis que suposen la modificació o la derogació d'alguna llei o l'execució de la qual exigesca mesures legislatives.

2. El Congrés i el Senat seran informats immediatament de la conclusió dels altres tractats o convenis.

Article 95.

1. La celebració d'un tractat internacional que continga estipulacions contràries a la Constitució exigirà la revisió constitucional prèvia.
2. El Govern o qualsevol de les Cambrese pot requerir el Tribunal Constitucional perquè declare si aquesta contradicció existeix o no.

Article 96.

1. Els tractats internacionals celebrats vàlidament formaran part de l'ordenament intern una vegada hagen estat publicats oficialment a Espanya. Les seues disposicions només podran ser derogades, modificades o suspeses en la forma prevista en els mateixos tractats o d'acord amb les normes generals del Dret internacional.
2. Per a denunciar els tractats i els convenis internacionals es farà servir el mateix procediment previst per a aprovar-los en l'article 94.

TÍTOL IV

Del Govern i de l'Administració

Article 97.

El Govern dirigeix la política interior i l'exterior, l'Administració civil i militar i la defensa de l'Estat. Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d'acord amb la Constitució i amb les lleis.

Article 98.

1. El Govern es composa del President, els Vice-presidents en el seu cas, els Ministres i els altres membres que establesca la llei.
2. El President dirigeix l'acció del Govern i coordina les funcions dels altres membres d'aquest, sens perjudici de la competència ni de la responsabilitat directa d'aquells en la seua gestió.
3. Els membres del Govern no podran exercir funcions representatives altres que les pròpies del mandat parlamentari ni qualsevol altra funció pública que no derive del seu càrrec ni cap activitat professional o mercantil.
4. La llei regularà l'Estatut i les incompatibilitats dels membres del Govern.

Article 99.

1. Després de cada renovació del Congrés dels Diputats, i en els altres casos en què siga procedent, el Rei, prèvia consulta amb els representants designats pels Grups Polítics amb representació parlamentària i a través del President del Congrés, proposarà un candidat a la Presidència del Govern.
2. El candidat proposat conformement al que estableix l'apartat anterior exposarà davant el Congrés dels Diputats el programa polític del Govern que pretenga formar i demanerà la confiança de la Cambra.
3. Si el Congrés dels Diputats atorgava la seua confiança al dit candidat mitjançant el vot de la majoria absoluta dels seus membres, el Rei el nomenarà President. En el cas de no obtenir la dita majoria, la mateixa proposta serà sotmesa a una nova votació quaranta-vuit hores després de l'anterior i s'entendrà que la confiança ha estat atorgada si obtenia la majoria simple.
4. Si, una vegada fetes les votacions esmentades, no fóra atorgada la confiança per a la investidura, es tramitaran propostes successives en la forma prevista en els apartats anteriors.
5. Si, després d'haver transcorregut el termini de dos mesos a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat haguera obtingut la confiança del Congrés, el Rei dissoldrà totes dues Cambres i convocarà noves eleccions amb l'aprovació del President del Govern.

Article 100.

Els altres membres del Govern seran nomenats i remoguts pel Rei a proposició del seu President.

Article 101.

1. El Govern cessa després de la celebració d'eleccions generals, en cas de pèrdua de la confiança parlamentària previst per la Constitució o per la causa de la dimissió o la defunció del seu President.
2. El Govern cessant continuarà en funcions fins a la presa de possessió del nou Govern.

Article 102.

1. La responsabilitat criminal del President i dels altres membres del Govern serà exigible, en el seu cas, davant la Sala del Penal del Tribunal Suprem.
2. Si l'acusació fóra per traició o per qualsevol delicte contra la seguretat de l'Estat en l'exercici de les seues funcions, només podrà ser plantejada per iniciativa de la quarta part dels membres del Congrés i amb l'aprovació de la majoria absoluta d'aquesta Cambra.
3. La prerrogativa reial de gràcia no serà aplicable a cap dels supòsits del present article.

Article 103.

1. L'Administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
2. Els òrgans de l'Administració de l'Estat són creats, regits i coordinats d'acord amb la llei.
3. La llei regularà l'estatut dels funcionaris públics, l'accés a la funció pública d'acord amb els principis del mèrit i de la capacitat, les peculiaritats de l'exercici del seu dret a la sindicació, el sistema d'incompatibilitats i les garanties per a la imparcialitat en l'exercici de les seues funcions.

Article 104.

1. Les Forces i els Cossos de Seguretat sota la dependència del Govern tindran per missió protegir el lliure exercici dels drets i de les llibertats i garantitzar la seguretat ciutadana.
2. Una llei orgànica en determinarà les funcions, els principis bàsics d'actuació i l'estatut.

Article 105.

La llei regularà:

a) L'audiència dels ciutadans directament o a través de les organitzacions i associacions reconegudes per la llei en el procediment d'elaboració de les disposicions administratives que els afecten.
b) L'accés dels ciutadans als arxius i als registres administratius, salvant el que afecte a la seguretat i a la defensa de l'Estat, la indagació dels delictes i la intimitat de les persones.
c) El procediment a través del qual han de fer-se els actes administratius, serà amb garantia, quan siga procedent, de l'audiència de l'interessat.

Article 106.

1. Els tribunals controlen la potestat reglamentària, la legalitat de l'actuació administrativa i la submissió d'aquesta als fins que la justifiquen.
2. Els particulars, en els termes establits per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que patesquen en qualsevol dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament dels serveis públics.

Article 107.

El Consell d'Estat és l'òrgan consultiu suprem del Govern. Una llei orgànica en regularà la composició i la competència.

TITOL V

De les relacions entre el Govern i les Corts Generals

Article 108.

El Govern respon solidàriament de la seua gestió política davant el Congrés dels Diputats.

Article 109.

Les Cambres i les seues Comissions podran requerir a través dels Presidents d'aquelles, la informació i l'ajut que necessiten del Govern i dels seus Departaments i de qualssevol autoritats de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Article 110.

1. Les Cambres i les seues Comissions poden requerir la presència dels membres del Govern.
2. Els membres del Govern tenen accés a les sessions de les Cambres i a les seues Comissions i la facultat de fer-s'hi escoltar, i podran demanar que hi informen els funcionaris dels seus Departaments.

Article 111.

1. El Govern i cadascun dels seus membres resten sotmesos a les interpel.lacions i a les preguntes que els formulen davant les Cambres. Per a aquesta classe de debat els Reglaments establiran un temps mínim setmanal.
2. Tota interpel.lació podrà donar lloc a una moció, amb la qual la Cambra manifeste la seua posició.

Article 112.

El President del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, pot plantejar davant el Congrés dels Diputats la qüestió de confiança sobre el seu programa o sobre una declaració de política general. S'entendrà que la confiança ha estat atorgada si voten favorablement la majoria simple dels Diputats.

Article 113.

1. El Congrés dels Diputats pot exigir la responsabilitat política del Govern mitjançant l'adopció de la moció de censura per majoria absoluta.
2. La moció de censura haurà de ser proposada com a mínim per la desena part dels Diputats i haurà d'incloure un candidat a la Presidència del Govern.
3. La moció de censura no podrà ser votada fins que hagen transcorregut deu dies des de la presentació. Dins els dos primers dies d'aquest termini podran presentar-se mocions alternatives.
4. Si la moció de censura no fóra aprovada pel Congrés, els signataris no en podran presentar cap més durant el mateix període de sessions.

Article 114.

1. Si el Congrés nega la confiança al Govern, aquest presentarà la dimissió al Rei. A continuació s'haurà de procedir a la designació de President de Govern segons el que disposa l'article 99.
2. Si el Congrés adopta una moció de censura, el Govern presentarà la dimissió al Rei, i s'entendrà que resta investit de la confiança de la Cambra el candidat proposat dins la moció als efectes prevists per l'article 99. El Rei el nomenarà President del Govern.

Article 115.

1. El Presiden del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, podrà proposar la dissolució del Congrés, del Senat o de les Corts Generals, la qual serà decretada pel Rei. El decret de dissolució fixarà la data de les eleccions.
2. La proposta de dissolució no podrà presentar-se quan hi haja en tràmit una moció de censura.
3. No serà procedent cap nova dissolució abans que haja transcorregut un any des de l'anterior, llevat del que disposa l'article 99, apartat 5.

Article 116.

1. Una llei orgànica regularà els estats d'alarma, d'excepció i de setge, i les competències i limitacions corresponents.
2. L'estat d'alarma serà declarat pel Govern mitjançant un decret acordat en un Consell de Ministres, amb una durada màxima de quinze dies; haurà de donar-ne compte al Congrés del Diputats, que serà reunit immediatament a aquest efecte i no podrà ser prorrogat sense l'autorització d'aquesta mateixa Cambra. El decret determinarà l'àmbit territorial al qual s'estenen els efectes de la declaració.
3. L'estat d'excepció serà declarat pel Govern mitjançant un decret acordat en un Consell de Ministres, prèvia autorització del Congrés dels Diputats. L'autorització i la proclamació de l'estat d'excepció haurà de determinar expressament els efectes d'aquest, l'àmbit territorial al qual s'estenga i la durada, que no podrà excedir de trenta dies, prorrogables per un termini igual, amb els mateixos requisits.
4. L'estat de setge serà declarat per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, a proposició exclusiva del Govern. El Congrés en determinarà l'àmbit territorial, la durada i les condicions.
5. El Congrés no podrà ser dissolt mentre resten declarats alguns dels estats compresos en el present article; si les Cambres no es trobaren en període de sessions, restaran convocades automàticament. Durant la vigència d'aquests estats no podrà interrompre's el funcionament de les Cambres ni el dels altres poders constitucionals. Si, havent estat dissolt el Congrés o havent-ne expirat el mandat, es produïra alguna de les situacions que donen lloc a qualsevol dels dits estats, les competències del Congrés seran assumides per la seua Diputació Permanent.
6. La declaració dels estats d'alarma, d'excepció i de setge no modificaran el principi de responsabilitat del Govern ni dels seus agents reconeguts en la Constitució i en les lleis.

TITOL VI

Del poder judicial

Article 117.

1. La justícia emana del poble i és administrada en nom del Rei pels Jutges i pels Magistrats que integren el poder judicial, independents, inamovibles, responsables i sotmesos únicament a l'imperi de la llei.
2. Els Jutges i els Magistrats no podran ser remoguts, suspesos, traslladats ni jubilats més que per motiu de les causes que la llei preveu i amb les garanties que aquestes ofereixen.
3. L'exercici de la potestat jurisdiccional, en qualsevol mena de processos, jutjant i fent complir allò que haja estat jutjat, correspon exclusivament als Jutjats i als Tribunals que les lleis determinen, segons les normes de competència i de procediment que elles establesquen.
4. Els Jutjats i els Tribunals no exerciran funcions altres que les que assenyala l'apartat anterior i les que els siguen atribuïdes expressament per la llei en garantia de qualsevol dret.
5. El principi d'unitat jurisdiccional és la base de l'organització i del funcionament dels Tribunals. La llei regularà l'exercici de la jurisdicció militar dins l'àmbit estrictament castrense i en ocasió de l'estat de setge, d'acord amb els principis de la Constitució.
6. Resten prohibits els Tribunals d'excepció.

Article 118.

Tothom té l'obligació de complir les sentències i les altres resolucions fermes dels Jutges i dels Tribunals i de prestar la col.laboració que aquests requeresquen en el curs del procés i en l'execució d'allò que haja estat resolt.

Article 119.

La justícia serà gratuïta quan la llei ho dispose, i, en qualsevol cas, per a aquells que acrediten insuficiència de recursos per a litigar.

Article 120.

1. Les actuacions judicials seran públiques, amb les excepcions previstes per les lleis de processament.
2. El procediment serà predominantment oral, sobretot en matèria criminal.
3. Les sentències seran motivades sempre i pronunciades en audiència pública.

Article 121.

Els danys causats per error judicial i els que siguen conseqüència del funcionament anormal de l'Administració de Justícia donaran dret a una indemnització a càrrec de l'Estat conformement amb la llei.

Article 122.

1. La llei orgànica del poder judicial determinarà la constitució, el funcionament i el govern dels Jutjats i dels Tribunals, i l'estatut jurídic dels Jutges i dels Magistrats de carrera, els quals formaran un cos únic, i el del personal al servei de l'Administració de Justícia.

2. El Consell General del poder judicial és l'òrgan de govern d'aquest darrer. La llei orgànica n'establirà l'estatut i el règim d'incompatibilitats i les funcions dels seus membres, assenyaladament en matèria de nomenaments, ascensos, inspecció i règim disciplinari.

3. El Consell General del poder judicial serà integrat pel President del Tribunal Suprem, que el presidirà, i per vint membres nomenats pel Rei per a un període de cinc anys. D'aquests, dotze entre els Jutges i els Magistrats de totes les categories judicials en els termes que establesca la llei orgànica; quatre, a proposició del Congrés dels Diputats, i quatre a proposició del Senat, elegits en tots dos casos per majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, entre advocats i altres juristes, tots de competència reconeguda i amb més de quinze anys d'exercici professional.

Article 123.

1. El Tribunal Suprem, amb jurisdicció a tota Espanya, és l'òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres, llevat del que es disposa en matèria de garanties constitucionals.

2. El President del Tribunal Suprem serà nomenat pel Rei, a proposició del Consell General del poder judicial, en la forma que la llei determine.

Article 124.

1. El Ministeri Fiscal, sens perjudici de les funcions encomanades a altres òrgans, té la missió de promoure l'acció de la justicia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interés públic tutelat per la llei, d'ofici o bé a petició dels interessats, vetlar per la independència dels Tribunals i procurar davant ells la satisfacció de l'interés social.

2. El Ministeri Fiscal exerceix les seues funcions per mitjà d'òrgans propis, de conformitat amb els principis d'unitat d'actuació i dependència jeràrquica i subjectant-se, en tot cas, als de legalitat i imparcialitat.

3. La llei regularà l'estatut orgànic del Ministeri Fiscal.

4. El Fiscal General de l'Estat serà nomenat pel Rei, a proposició del Govern, havent estat escoltat el Consell General del poder judicial.

Article 125.

Els ciutadans podran exercir l'acció popular i participar en l'Administració de Justícia mitjançant la institució del Jurat, en la forma i en els processos penals que la llei determine, i en els Tribunals consuetudinaris i tradicionals.

Article 126.

La policía judicial depén dels Jutges, dels Tribunals i del Ministeri Fiscal en les seues funcions d'indagació del delicte i de descobriment i assegurament del delinqüent, en els termes que la llei establesca.

Article 127.

1. Els Jutges i els Magistrats i també els Fiscals, mentre resten en actiu, no podran exercir altres càrrecs públics ni pertànyer a partits polítics o a sindicats. La llei establirà el sistema i les modalitats d'associació professional dels Jutges, dels Magistrats i dels Fiscals.

2. La llei establirà el règim d'incompatibilitats dels membres del poder judicial, que n'haurà d'assegurar la total independència.

TITOL VII

Economia i Finances

Article 128.

1. Tota la riquesa del país en les seues diverses formes, i siga quina siga la seua titularitat, resta subordinada a l'interés general.

2. Es reconeix la iniciativa pública en l'activitat econòmica. Mitjançant una llei, determinats recursos o serveis essencials podran ser reservats al sector públic, especialment en cas de monopoli; podrà ser acordada, també, la intervenció d'empreses quan ho exigesca l'interés general.

Article 129.

1. La llei establirá les formes de participació dels interessats en la Seguretat Social i en l'activitat dels organismes públics la funció des quals afecte directament la qualitat de la vida o l'interés general.

2. Els poders públics promouran eficaçment les diverses formes de participació en l'empresa i fomentaran, mitjançant una legislació adequada, les societats cooperatives. També establiran els mitjans que faciliten l'accés dels treballadors a la propietat dels mitjans de producció.

Article 130.

1. Els poders públics atendran a la modernització i al desenvolupament de tots els sectors econòmics i, assenyaladament, de l'agricultura, la remaderia, la pesca i l'artesania, a fi d'equiparar el nivell de vida de tots els espanyols.

2. Amb la mateixa finalitat es donarà un tractament especial a les zones de muntanya.

Article 131.

1. L'Estat, mitjançant una llei, podrà planificar l'activitat econòmica general per a atendre les necessitats collectives, equilibrar i harmonitzar el desenvolupament regional i sectorial i estimular el creixement de la renda i de la riquesa i la distribució més justa d'aquesta darrera.

2. El Govern elaborarà els projectes de planificació d'acord amb les previsions que li siguen subministrades per les Comunitats Autònomes i l'assessorament i la collaboració dels sindicats ide les altres organizacions professionals, empresarials i econòmiques. Amb aquesta finalitat es constituirà un Consell, la composició iles funcions del qual desenvoluparà una llei.

Article 132.

1. La llei regularà el règim juridic dels béns de domini public i dels comunals inspirant-se en els princips d'inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat, i també en regularà la desafectació.

2. Són béns de domini públic estatal els que la llei determine i, en qualsevols cas, la zona marítimo-terrestre, les platges, la mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica I de la plataforma continental.

3. Seran regulats per llei, el Patrimoni de l'Estat i el Patrimoni Nacional, i l'administració, defensa i conservació d'aquests.

Article 133.

1. La potestat originària per a establir els tributs correspon exclusivament a l'Estat mitjançant una llei.

2. Les Comunitat Autònomes i les Corporacions locals podran establir i exigir tributs, d'acord amb la Constitució i amb les lleis.

3. Qualsevol benefici fiscal que afecte els tributs de l'Estat haurà d'establir-se en virtut d'una llei.

4. Les administracions públiques solament podran contraure obligacions financeres i fer despeses d'acord amb les lleis.

Article 134.

1. Correspon al Govern d'elaborar els presuposts generals de l'Estat, a les Corts Generals d'examinar-los, esmenar-los i aprovar-los.

2. Els pressuposts generals de l'Estat tindran caràcter anual, inclouran la totalitat de les despeses i els ingressos del sector públic estatal I s'hi consignarà l'import dels beneficis fiscals que afecten els tributs de l'Estat.

3. El Govern tindrà l'obligació de presentar davant el Congrés dels Diputats els pressuposts generals, tres mesos abans, com a mínim, que expiren els de l'any anterior.

4. Si la Llei de Pressuposts no s'aprovava abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, els Pressuposts de l'exercici anterior restaran prorrogats automàticament fins que s'aproven els nous.

5. Havent aprovat els pressuposts generals de l'Estat, el Govern podrà presentar projectes de llei que impliquen l'augment de la despessa pública o la disminució dels ingressos corresponents a aquell mateix exercici pressupostari.

6. Tota proposició o esmena que supose un augment dels crèdits o una disminució dels ingressos pressupostaris requerirà la conformitat del Govern per tal de ser tramitada.

7. La Llei de Pressuposts no pot crear tributs. Podrà modificarlos si una llei tributària substantiva ho fa preveure.

Article 135.

1. El Govern haurà de restar autoritzat per una llei per tal d'emetre deute públic o contraure crèdit.

2. Es considerarà sempre que els crèdits per a abonar el pagament d'interessos i capital del Deute Públic són inclosos en l'estat de despeses dels pressuposts, i no podran ser objecte d'esmenes ni de modificacions mentre s'ajusten a les condicions de la llei d'emissió.

Article 136.

1. El Tribunal de Comptes és l'òrgan fiscalitzador suprem dels comptes i de la gestió econòmica de l'Estat i, alhora, del sector públic. Dependrà directament de les Corts Generals i exercirà les seues funcions delegadament d'elles en l'examen i la comprovació del Compte General de l'Estat.

2. Els comptes de l'Estat i del sector públic estatal seran retuts al Tribunal de Comptes, el qual els censurarà. El Tribunal de Comptes, sens perjudici de la seua jurisdicció, trametrà a les Corts Generals un informe anual en què, sempre que siga procedent, comunicarà les infraccions o les responsabilitats en què, segons el seu judici, s'haja incorregut.

3. El membres del Tribunal de Comptes gaudiran de la mateixa independència i inamobilitat i restaran sotmesos a les mateixes incompatibilitats que els Jutges.

4. Una llei orgànica regularà la composició, l'organització i les funcions del Tribunal de Comptes.

TÍTOL VIII

De l'organització territorial de l'Estat

CAPÍTOL PRIMER

Principis generals

Article 137.

L'Estat s'organitza territorialment en municipis, en provincies i en les Comunitats Autònomes que es constituesquen. Totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels interessos respectius.

Article 138.

1. L'Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat en l'article 2 de la Constitució i vetlarà per l'establiment d'un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol, i atendrà assenyaladament les circumstàncies del fet insular.

2. Les diferències entre els Estatuts de les diverses Comunitats Autònomes no podran implicar en cap cas privilegis econòmics o socials.

Article 139.

1. Tots els espanyols tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions en qualsevol part del territori de l'Estat.

2. Cap autoritat no podrà adoptar mesures que directament o indirectament obstaculitzen la llibertat de circulació i l'establiment de les persones i la lliure circulació de béns per tot el territori espanyol.

CAPÍTOL SEGON

De l'administració local

Article 140.

La Constitució garanteix l'autonomia dels municipis, els quals gaudiran de personalitat jurídica plena. El govern i l'administració municipal correspon als respectius Ajuntaments, integrats pels alcaldes i els regidors. Els regidors seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal igual, lliure, directe i secret, en la forma establida per la llei. Els alcaldes seran elegits pels regidors o pels veïns. La llei regularà les condicions en què siga procedent el règim de consell obert.

Article 141.

1. La provincia és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinada per l'agrupació de municipis i la divisió territorial per al compliment de les activitats de l'Estat. Qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals per mitjà d'una llei orgànica.

2. El Govern i l'administració autònoma de les provinces seran encomanats a Diputacions o altres Corporacions de caràcter representatiu.

3. Es podran crear agrupacions de municipis diferents de la provincia.

4. En els arxipèlags, les illes tindran, a més, la seua administració pròpia en forma de cabildos o consells.

Article 142.

Les Hisendes locals hauran de disposar dels mitjans suficients per a l'exercici de les funcions que la llei atribueix a les Corporacions respectives, i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de la participació en els de l'Estat i en els de les Comunitats Autònomes.

CAPÍTOL TERCER

De les Comunitats Autònomes

Article 143.

1. En l'exercici del dret a l'autonomia reconegut en l'article 2 de la Constitució, les provincies limítrofs que tinguen característiques històriques, culturals i econòmiques comunes, els territoris insulars i les provincies d'entitat regional històrica podran accedir a l'autogovern i constituir-se en Comunitats Autònomes d'acord amb el que preveu aquest Títol i els Estatuts respectius.

2. La iniciativa del procés autonòmic correspon a totes les diputacions interessades o a l'òrgan interinsular corresponent, i als dos terços dels municipis la població dels quals represente, com a mínim, la majoria del cens electoral de cada provincia o de cada illa. Aquests requesits hauran d'acomplir-se dins el termini de sis mesos d'ença del primer acord al respecte adoptat per alguna de les Corporacions locals interessades.

3. La iniciativa, en el cas de no reeixir, només podrà repetir-se al cap de cinc anys.

Article 144.

Per motiu d'interés nacional, i per mitjà d'una llei orgànica, les Corts Generals podran:

a) Autoritzar la constitució d'una comunitat autònoma encara que el seu àmbit territorial no supere el d'una provincia i no reunesca les condicions de l'apartat 1 de l'article 143.

b) Autoritzar o acordar, en el seu cas, un estatut d'autonomia a territoris que no es troben integrats en l'organització provincial.

c) Substituir la iniciativa de les Corporacions locals a què es refereix l'apartat 2 del l'article 143.

Article 145.

1. En cap cas s'admetrà la federació de Comunitats Autònomes.

2. Els estatuts podran preveure els casos, requisits i termes en què les Comunitats Autònomes podran celebrar convenis entre elles per tal d'acomplir i prestar serveis que els siguen propis; i podran preveure, també, el caràcter i els efectes de la corresponent comunicació a les Corts Generals. En els altres casos, els acords de cooperació entre les Comunitats Autònomes requeriran l'autorització de les Corts Generals.

Article 146.

El proyecte d'Estatut serà elaborat per una assemblea composta pels membres de la Diputació o l'òrgan interinsular de les provincies afectades i pels Diputats i els Senadors que n'hagen estat elegits i serà elevat a les Corts Generals, les quals li donaran tramitació de llei.

Article 147.

1. Dins els termes de la present Constitució, els estatuts seran la norma institucional bàsica de cada Comunitat Autònoma, i l'Estat els reconeixerà i els empararà com a part integrant del seu ordenament jurídic.

2. Els estatuts d'autonomia hauran de fer constar:

a) La denominació de la Comunitat que s'ajuste més bé a la seua identitat històrica.

b) La delimitació del territori.

c) La denominació, l'organització i la seu de les institucions autònomes pròpies.

d) Les competències assumides dins el marc establit per la Constitució i per les bases per al traspàs dels serveis que els correspondran.

3. La reforma dels Estatuts s'ajustarà al procediment que ells mateixos establesquen i requerirà, en qualsevol cas, l'aprovació de les Corts Generals per llei orgànica.

Article 148.

1. Les Comunitats Autònomes podran assumir competències en les matèries següents:

1 Organització de les seus institucions d'autogovern.

2 Les alteracions dels termes municipals compresos en el

seu territori i, en general, les funcions que corresponguen a l'Administració de l'Estat sobre Corporacions locals, la transferència de les quals autoritze la legislació sobre Règim Local.

3 Ordenació del territori, urbanisme i habitatge.

4 Les obres públiques d'interés per a la Comunitat Autònoma dins el seu territori.

5 Els ferrocarrils i les carreteres l'itinerari dels quals transcorre íntegrament dins el territori de la Comunitat Autònoma i, de la mateixa manera, el transport fet per aquests mitjans o per cable.

6 Els ports de refugi, els ports i els aeroports esportius i, en general, els que no acomplesquen activitats comercials.

7 L'agricultura i la ramaderia, d'acord amb l'ordenació general de l'economia.

8 Espais forestals i el seu aprofitament.

9 La gestió en matèria de protecció del medi ambient.

10 Els proyectes, la construcció i l'explotació dels aprofitaments hidràulics, canals i regadius d'interés per a la Comunitat Autònoma, les aigües minerals i les termals.

11 La pesca en aigües interiors, la de marisc i l'aqüicultura, la caça i la pesca fluvial.

12 Fires interiors.

13 El foment del desenvolupament econòmic de la Comunitat Autònoma dins els objectius marcats per la política econòmica nacional.

14 L'artesania.

15 Els museus, les biblioteques i els conservatoris de música d'interés per a la Comunitat Autònoma.

16 El patrimoni monumental d'interés per a la Comunitat Autònoma.

17 El foment de la cultura, de la investigació i, en el seu cas, de l'ensenyament de la llengua de la Comunitat Autònoma.

18 La promoció i l'ordenació del turisme dins el seu àmbit territorial.

19 Promoció de l'esport i del lleure.

20 Assistència social.

21 Sanitat i Higiene.

22 La vigilància i la protecció dels seus edificis i de les seues instalacions. La coordinació i altres facultats en relació amb les policies locals en els termes que establesca una llei orgànica.

2. Havent transcorregut cinc anys, i mitjançant la reforma dels seus estatuts, les Comunitats Autònomes podran ampliar successivament les seues competències dins el marc establit per l'article 149.

Article 149.

1. L'Estat té la competència exclusiva sobre les matèries següents:

1 La regulació de les condicions bàsiques que garantesquen la igualtat de tots els espayols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals.

2 Nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d'asil.

3 Relacions internacionals.

4 Defensa i Forces Armades.

5 Administració de Justicia.

6 Legislació mercantil, penal i penitenciària; legislació processal, sense perjudici de les especialitats que en aquest ordre es deriven necessàriament de les particularitats del dret substantiu de les Comunitat Autònomes.

7 Legislació laboral; sens perjudici que siga executada pels òrgans de les Comunitats Autònomes.

8 Legislació civil, sens perjudici de la conservació, modificació i desenvolupment dels drets civils, forals o especials per part de les Comunitats Autònomes allà on n'hi haja. En qualsevol cas, les regles relatives a l'aplicació i a l'eficàcia de les normes jurídiques, relacions jurídico-civils relatives a les formes de matrimoni, ordenació dels registres i instruments públics, bases de les obligacions contractuals, normes per a resoldre els conflictese de lleis i la determinació de les fonts del Dret, d acord, en aquest darrer, amb les normes del dret foral o especial.

9 Legislació sobre propietat intelectual i industrial.

10 Règim duaneri i aranzelari; comerç exterior.

11 Sistema monetari: divises, canvi i convertibilitat; bases de l'ordenació del crèdit, banca i assegurances.

12 Legislació sobre pesos i mesures, determinació de l'hora oficial.

13 Bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica.

14 Hisenda general i Deute de l'Estat.

15 Foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica.

16 Sanitat exterior. Bases i coordinació general de la sanitat. Legislació sobre productes farmacèutics.

17 Legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social, sens perjudici que les Comunitats Autònomes n'executen els serveis.

18 Les bases del règim jurídic de les Administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris, les quals garantiran, en qualsevol cas, als administrats un tractament comú davant aquelles; el procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats derivades de l'organització pròpia de les Comunitats Autònomes; legislació sobre expropiació forçosa; legislació bàsica sobre contractes i concessions administratives i el sistema de responsabilitat de totes les Administracions públiques.

19 Pesca marítima, sens perjudici de les competències que s'atribuesquen a les Comunitats Autònomes en aquest sector.

20 Marina mercant i abanderament de vaixells, il·luminació de costes i senyals marítims; ports d'interés general; control de l'espai aeri, trànsit i transport aeri; servei meteorològic i matriculació d'aeronaus.

21 Ferrocarrils i transports terrestres que circulen dins els territoris de més d'una Comunitat Autònoma; règim general de comunicacions; tràfic i circulació de vehicles de motor; correus i telecomunicacions; cables aeris, submarins i radiocomunicació.

22 La legislació, ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics si les aigües passen per més d'una Comunitat Autònoma, i l'autorització de les instal·lacions elèctriques si l'aprofitament afecta una altra Comunitat o si el transport d'energia ix del seu àmbit territorial.

23 Legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les Comunitats Autònomes per a l'establiment de normes addcionals deprotecció. La legislació bàsica sobre espais i aprofilaments forestals vies ramaderes.

24 Obres públiques d'interés general o que la realització de les quals afecte més d'una Comunitat Autònoma.

25 Bases del règim miner i energètic.

26 Règim de producció, comerç, tinença i ús d'armes i d'explosius.

27 Normes bàsiques del règim de premsa, radio i televisió i, en general, de tots els mitjans de comunicació social, sens perjudici de les facultats de desenvolupament i execució que corresponguen a les Comunitats Autònomes.

28 Defensa del patrimoni cultural, artístic i monumental espanyol contra l'exportació i l'expoliació; museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal, sens perjudici que les Comunitats Autònomes n'exercesquen la gestió.

29 Seguretat pública, sens perjudici que les Comunitats Autònomes puguen crear policies en la forma que els respectius estatuts establesquen dins el marc del que dispone una llei orgànica.

30 Regulació de les condicions d'obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals, i normes bàsiques per al desenvolupament de l'article 27 de la Constitució, a fi de garantir el cumpliment de les obligacions del poders públics en aquesta matèria.

31 Estadística per a finalitats estatals.

32 Autorització per a la convocatòria de consultes populars per via de referèndum.

2. Sens perjudici de les competències que podran assumir les Comunitats Autònomes, l'Estat considerarà el servei de la cultura com un deuve i una atribució essencial i facilitarà la comunicació cultural entre les Comunitats Autònomes d'acord amb elles.

3. Les matèries, no atribuïdes expressament a l'Estat per aquesta Constitució podran correspondre a les Comunitats Autònomes en virtut dels Estatus respectius. La copetència sobre les matèries que no hagen estat assumides pels Estatuts d'Autonomia correspondrà a l'Estat, les normes del qual prevaldran, en cas de conflicte, sobre les de les Comunitats Autònomes en tot allò que no haja estat atribuït a la competència exclusiva d'aquestes darreres. En qualsevol cas, el Dret estatal serà supletori del dret de les Comunitats Autònomes.

Article 150.

1. Les Corts Generals, en matèries de competència estatal, podran atribuir a totes o a algunes de les Comunitats Autònomes la facultat de dictar, per a elles mateixes, normes legis-

latives dins del marc dels principis, bases i directrius fixats per una llei estatal. Sens perjudici de la competència dels Tribunals, dins cada llei-marc s'establirà la modalitat del control de les Corts Generals sobre aquestes normes legislatives de les Comunitats Autònomes.

2. L'Estat podrà transferir o delegar a les Comunitats Autònomes, mitjançant una llei orgànica, facultats corresponents a una matèria de titularitat estatal que per la seua naturalesa siguen susceptibles de transferència o de delegació. La llei preveurà en cada cas la transferència corresponent de mitjans financers i també les formes de control que l'Estat es reserve.

3. L'Estat podrà dictar lleis que establesquen els principis necessaris per a harmonitzar les disposicions normatives de les Comunitats, fins i tot en el cas de matèries atribuïdes a la seua competència, sempre que ho demane l'interés general. Correspon a les Corts Generals d'apreciar l'existència d'aquesta necessitat, per majoria absoluta de cada Cambra.

Article 151.

1. No caldrà deixar transcórrer el termini de cinc anys a què es refereix l'apartat 2 de l'article 148 en cas que, dins el termini que estableix l'article 143.2, acorden la iniciativa del procés autonòmic, a més de les Diputacions o els òrgans interinsulars corresponents, les tres quartes parts del municipis de cadascuna de les provincies afectades, les quals representen, com a mínim, la majoria del cens electoral de cadascuna i siga ratificada mitjançant un referèndum pel vot afirmatiu de la majoria absoluta dels electors de cada provincia en els termes que establesca una llei orgànica.

2. En el cas previst en l'apartat anterior, el procediment per a elaborar l'Estatut serà el següent:

1 El Govern convocarà tots els Diputats i Senados elegits en les circunmscripcions compreses dins l'àmbit territorial que pretenga accedir a l'autogovern per tal que es constituesquen en Assemblea, amb l'única finalitat d'elaborar l'Estatut d'autonomia corresponent, mitjançant l'acord de la majoria absoluta dels seus membres.

2 Una vegada haja aprovat el projecte d'Estatut l'Assemblea de Parlamentaris, aquest serà tramés a la Comissió Constitucional del Congrés, la qual, dins el termini de dos mesos, l'examinarà amb el concurs i l'assistència d'una delegació de l'Assemblea proposant per tal de determinar ne d'un acord comú la formulació definitiva.

3 Si s'arribava a un acord, el text que en resultara serà sotmés al referèndum del cos electoral de les previncies compreses dins l'àmbit territorial de l'Estatut projectat.

4 Si el projecte d'Estatut és aprovat a cada provincia per la majoria dels vots emesos vàlidament, serà elevat a les Corts Generals. Els Plens de totes dues Cambres decidiran sobre el text per mitjà d'un vot de ratificació. Havent estat aprovat l'Estatut, el Rei el sancionarà i el promulgarà com a llei.

5 Si no s'arribava a l'acord a qué es refereix l'apartat 2 d'aquest número, les Corts Generals donaran al projecte d'Estatut la tramitació de llei. El text que aquestes aproven serà sotmés al referèndum del cos electoral de les provincies compreses dins l'àmbit territorial del l'Estatut projectat. Si tóra aprovat per la majoria dels vots emesos vàlidament a cada provincia, la promulgació será feta en els termes de l'apartat anterior.

3. En els casos prevists pels paràgrafs 4 i 5 de l'apartat anterior, la manca d'aprovació del projecte d'Estatut per part d'una o de més d'una provincia no impedirá la constitució de la Comunitat Autònoma projectada per part de les altres en la forma que estableseca la llei orgànica prevista per l'apartat 1 d'aquest article.

Article 152.

1. En els Sstatus aprovats pel procediment a què es refereix l'article anterior, l'organització institucional autonòmica es basarà en una Assemblea Legislativa elegida per sufragi universal d'acord amb un sistema de representació proporcional que assegure també la representació de les diverses zones del territori; un Consell de Govern amb funcions executives i administratives, i un President, elegit per l'Assemblea entre els seus membres i nomenat pel Rei, al qual correspon la direcció del Consell de Govern, la suprema representació de la comunitat respectiva i la de l'Estat dins aquella. El President i els membres del Consell de Govern seran responsables políticament davant l'Assemblea. Un Tribunal Superior de Justicia, sens perjuidici de la jurisdicció que corresponda al Tribunal Suprem, culminarà l'Organització judicial dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma. En els Estatuts de les Comunitats Autònomes podran establir-se els supòsits i les formes de participació d'aquelles en l'organització de les demarcacions judicials del territori, tot de conformitat amb el que preveu la llei orgànica del poder judicial i dins la unitat i la independència propies d'aquest darrer. Sens perjudici del que disposa l'article 123, les successives instàncies processals, en el seu cas, s'esgotaran davant òrgans radicats en el mateix territori de la Comunitat Autònoma en què estiga l'òrgan competent en primera instància.

2. Una vegada hagen estat sancionats i promulgats els respectius Estatuts, només podran ser modificats mitjançant els procediments que ells mateixos establesquen i mitjançant referèndum entre els electors inscrits en els censos corresponents.

3. Els Estatuts podran establir circumscripcions territorials pròpies que gaudiran de plena personalitat jurídica mitjançant l'agrupació de municipis limítrofs.

Article 153.

El control de l'activitat dels òrgans de les Comunitats Autònomes serà exercit:

a) Pel Tribunal Constitucional en allò que es referesca a la constitucionalitat de les seues disposicions administratives amb força de llei.

b) Pel Govern, previ dictament del Consell d'Estat, en allò que pertoque a l'exercici de funcions delegades a què es refereix l'apartat 2 de l'article 150.

c) Per la jurisdicció contencioso-administrativa en allò que es refereix a l'administració autònoma o a les seues normes reglamentàries.

d) Pel Tribunal de Comptes en els aspectes econòmics i pressupostaris.

Article 154.

Un delegat nomenat pel Govern dirigirà l'administració de l'Estat en el territori de la Comunitat Autònoma i la coordinarà, si és procedent, amb l'administració pròpia de la Comunitat.

Article 155.

1. Si una Comunitat Autònoma no complia les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposaven, o actuava de forma que atemptara greument contra l'interés general d'Espanya, el Govern, previ requeriment desatés fet al President de la Comunitat Autònoma, amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat podrà adoptar les mesures necessàries per tal d'obligar-la al compliment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l'interés general esmentat.

2. Per a l'execució de les mesures previstes a l'apartat anterior, el Govern podrà donar instruccions a totes les autoritats de les Comunitats Autònomes.

Article 156.

1. Les Comunitats Autònomes gaudiran d'autonomia financiera per a acomplir i exercir les seues competències d'acord amb els principis de coordinació amb la Hisenda estatal i de solidaritat entre tots els espanyols.

2. Les Comunitats Autònomes podran actuar com a delegats o col.laboradors de l'Estat en la tasca de recaptació, gestió i liquidació dels recursos tributaris d'aquest, d'acord amb las lleis i els Estatuts.

Article 157.

1. Els recursos de les Comunitats Autònomes seran constituïts per:

a) Impostos cedits totalment o parcialment per l'Estat; recàrrecs sobre impostos estatals i altres participacions en els ingresos de l'Estat.

b) Els seus propis impostos, taxes i contribucions especials.

c) Transferències d'un fons de compensació interterritorial i altres assignacions a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.

d) Rendiments procedents del seu patrimoni i ingresos de dret privat.

e) El producte de les operacions de crèdit.

2. Les Comunitats Autònomes no podran adoptar en cap cas mesures tributàries sobre béns situats fora del seu territori o que constituesquen un obstacle per a la lliure circulació de mercaderies o de serveis.

3. L'exercici de les competències financeres enumerades en l'anterior apartat 1, les normes per a resoldre els conflictes que pogueren sorgir i les possibles formes de col.laboració financiera entre les Comunitats Autònomes i l'Estat podran ser regulades per mitjà d'una llei orgànica.

Article 158.

1. En els Pressuposts Generals de l'Estat es podrà establir una assignació a les Comunitats Autònomes en funció del volum dels serveis i de les activitats estatals que hagen assumit i de la garantia d'un nivell mínim en la prestació dels serveis públics fonamentals en tot el territori espanyol.

2. Per tal de corregir desequilibris econòmics interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat es constituirà un Fons de Compensació destinat a despeses d'inversió, els recursos del qual seran distribuïts per les Corts Generals entre les Comunitats Autònomes i les províncies, en el seu cas.

TÍTOL IX

Del Tribunal Constitucional

Article 159.

1. El Tribunal Constitucional es compon de 12 membres nomenats pel Rei, dels quals, quatre a proposició del Congrés, per majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, quatre a proposició del Senat, amb idèntica majoria, dos a proposició del Govern, i dos a proposició del Consell General del Poder judicial.

2. Els membres del Tribunal Constitucional hauran de ser nomenats entre Magistrats i Fiscals, Professors d'Universitat, funcionaris públics i advocats, tots ells juristes de competència reconeguda amb més de quinze anys d'exercici professional.

3. El període de designació dels membres del Tribunal Constitucional tindrà una durada de deu anys i es renovaran per terços cada tres anys.

4. La condició de membre del Tribunal Constitucional és incompatible: amb qualsevol mandat representatiu; amb els càrrecs polítics o administratius; amb l'exercici de funcions directives en un partit polític o en un sindicat o d'un càrrec al seu servei; amb l'exercici de les carreres judicial i fiscal; i amb qualsevol activitat professional o mercantil.

Altrament, els membres del Tribunal Constitucional tindran les incompatibilitats pròpies dels membres del poder judicial.

5. Els membres del Tribunal Constitucional seran independents i inamovibles en l'exercici del seu mandat.

Article 160.

El president del Tribunal Constitucional serà nomenat entre els membres d'aquest, pel Rei, a proposició del mateix Tribunal en ple i per a un període de tres anys.

Article 161.

1. El Tribunal Constitucional té jurisdicció en tot el territori espanyol i és competent per a conèixer:

a) Del recurs d'inconstitucionalitat contra lleis i disposicions normatives amb força de llei. La declaració d'inconstitucionalitat d'una norma amb rang de llei, interpretada per la jurisprudència afectarà aquesta, però la sentència o sentències que n'hagen recaigut no perdran el valor de cosa jutjada.

b) Del recurs d'emparament per violació dels drets i de les llibertats continguts en l'article 53.2 d'aquesta Constitució, en els casos i formes que la llei establesca.

c) Dels conflictes de competència entre l'Estat i les Comunitats Autònomes o dels de les Comunitats Autònomes entre elles.

d) De les altres matèries que li atribuesquen la Constitució o les lleis orgàniques.

2. El Govern podrà impugnar davant el Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les Comunitats Autònomes. La impugnació provocarà la suspensió de la disposició o de la resolució recorreguda, però el Tribunal, en el seu cas, haurà de ratificar-la o alçar-la en un termini no superior als cinc mesos.

Article 162.

1. Tenen legitimitat:

a) Per a interposar el recurs d'inconstitucionalitat, el President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta Diputats, cinquanta Senadors, els òrgans col·legits executius de les Comunitats Autònomes i, en el seu cas, les seues Assemblees.

b) Per a interposar el recurs d'emparament, tota persona natural o jurídica que invoque un interés legítim, a més del Defensor del Poble i del Ministeri Fiscal.

2. En els altres casos la llei orgànica determinarà les persones i els òrgans legitimats.

Article 163.

Quan en algun procés, un òrgan judicial considere que una norma amb rang de llei, aplicable al cas, de la validesa de la qual depenga el veredicte, puga ser contrària a la Constitució, plantejarà la qüestió davant el Tribunal Constitucional en els casos, en la forma i amb els efectes que la llei establesca, que en cap cas seran suspensius.

Article 164.

1. Les sentències del Tribunal Constitucional es publicaran en el butlletí oficial de l'Estat amb els vots particulars, si n'hi haguera. Tenen el valor de cosa jutjada a partir de l'endemà d'haver estat publicades i no hi ha cap mena de recurs en contra. Aquelles que declaren la inconstitucionalitat d'una llei o d'una norma amb força de llei i totes aquelles que no es limiten a l'estimació subjectiva d'un dret, tenen plens efectes davant tothom.

2. Llevat que en el veredicte es dispose altrament, subsistirà la vigència de la llei en la part no afectada per la inconstitucionalitat.

Article 165.

Una llei orgànica regularà el funcionament del Tribunal Constitucional, l'estatut dels seus membres, el procediment davant aquell i les condicions per a l'exercici de les accions.

TÍTOL X

De la reforma constitucional

Article 166.

La iniciativa de reforma constitucional s'exercirà en la forma prevista en els apartats 1 i 2 de l'article 87.

Article 167.

1. Els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats per una majoria de les tres cinquenes parts de cada una de les Cambres. Si no hi haguera acord entre totes dues, s'intentarà obtenir-lo mitjançant la creació d'una Comissió de composició paritària de Diputats i Senadors que presentarà un text que serà votat pel Congrés i pel Senat.

2. En cas de no aconseguir-se l'aprovació mitjançant el procediment de l'apartat anterior, i sempre que el text haguera obtingut el vot favorable de la majoria absoluta del Senat, el Congrés, per majoria de les dues terceres parts, podrà aprovar la reforma.

3. Una vegada haja estat aprovada la reforma per les Corts Generals, serà sotmesa a referèndum per tal de ser ratificada, sempre que ho demane una dècima part dels membres de qualsevol de les Cambres, dins l'espai dels quinze dies següents al de l'aprovació.

Article 168.

1. Si es proposava la revisió total de la Constitució o una de parcial que afectara al títol Preliminar, el Capítol Segon, Secció 1ª del Títol I, o el Títol II, es procedirà a l'aprovació del principi per majoria dels dos terços de cada Cambra, i a la dissolució immediata de les Corts.

2. Les Cambres elegides hauran de ratificar la decisió i procedir a l'estudi del nou text constitucional, que haurà de ser aprovat per majoria dels dos terços de les dues Cambres.

Article 169.

No podrà iniciar-se la reforma constitucional en temps de guerra o de vigència d'algun dels estats previstos en l'article 116.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.

La Constitució empara i respecta els drets històrics dels territoris forals.

L'actualització general del dit règim foral es durà a terme, en el seu cas, dins el marc de la Constitució i dels Estatuts d'Autonomia.

Segona.

La declaració de majoria d'edat que conté l'article 12 d'aquesta Constitució no perjudica les situacions emparades pels drets forals en l'àmbit del dret privat.

Tercera.

La modificació del règim econòmic i fiscal de l'arxipèlag canari requerirà un informe previ de la Comunitat Autònoma o, en el seu cas, de l'òrgan provisional autonòmic.

Quarta.

En les Comunitats Autònomes on residesca més d'una Audiència Territorial, els Estatuts d'Autonomia respectius podran mantenir les que ja hi eren i distribuir les competències entre elles, sempre de conformitat amb el que preveu la llei orgànica i mantenint-ne la unitat i la independència.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.

En els territoris dotats d'un règim provisional d'autonomia, els seus òrgans col.legiats superiors, per mitjà d'un acord adoptat per la majoria absoluta dels seus membres, podran substituir la iniciativa que l'apartat 2 de l'article 143 atribueix a les Diputacions Provincials o als òrgans interinsulars corresponents.

Segona.

Els territoris que en el passat hagueren plebiscitat afirmativament projectes d'Estatut d'Autonomia i en el moment de promulgar aquesta Constitució compten amb règims provisionals d'autonomia, podran procedir immediatament en la forma prevista per l'apartat 2 de l'article 148, sempre que ho acorden així, per majoria absoluta, els òrgans preautonòmics col.legiats superiors, els quals hauran de comunicarho al Govern. El projecte d'Estatut serà elaborat d'acord amb allò que estableix l'article 151, número 2, a convocatòria de l'òrgan col.legiat preautonòmic.

Tercera.

La iniciativa del procés autonòmic per part de les Corporacions locals o dels seus membres, prevista per l'apartat 2 de l'article 143, s'anten que és diferida, amb tots els seus efectes, fins a la celebració de les primeres eleccions locals sota la vigència de la Constitució.

Cuarta.

1. En el cas de Navarra, la efectes de la seua incorporació al Consell General Basc o al règim autonòmic basc que el substituesca en lloc del que estableix l'article 143 de la Constitució, la iniciativa correspon a l'organ Foral competent, el qual adoptarà la seua decisió per majoria dels membres que la componen. Per tal que la dita iniciativa siga vàlidà, caldrà, a més, que la decisió de l'òrgan Foral competent siga ratificada per un referèndum convocat expressament a aquest efecte, i aprovat per majoria dels vots vàlids emesos.

2. Si la iniciativa no reeixira, només es podrà tornar a produir en un altre període de mandat de l'òrgan Foral competent, i en qualsevol cas, quan haja transcorregut el termini mínim que estableix l'article 143.

Cinquena.

Les ciutats de Ceuta i Melilla podran constituir-se en Comunitats Autònomes en el cas que ho decideixquen així els seus respectius Ajuntaments, per mitjà d'un acord adoptat per la majoria absoluta dels seus membres i, si ho autoritzen les Corts Generals, mitjançant una llei orgànica, en els termes prevists per l'article 144.

Sisena.

Si es trameten a la Comissió de Constitució del Congrés diversos projects d'Estatut, seran dictaminats per l'ordre en que hi hagueren entrat, i el termini de dos mesos a què es refereix l'article 151 començarà a comptar des que la Comissió acabe l'estudi del projecte o projectes de què successivament haja conegut.

Setena.

Els organismes provisionals autonómics es consideraran dissolts en els casos següents:

a) Una vegada hagen estat constituïts els òrgans que estableixquen els estatuts d'autonomia aprovats conformement a aquesta Constitució.

b) En cas que la iniciativa del procés autonòmic no arribara a reixir per tal com no complira els requisits prevists a l'article 143.

c) Si l'organisme no haguera exercit el dret que li reconeix la disposició transitòria primera dins el termini de 3 anys.

Vuitena.

1. Després de l'entrada en vigor de la present Constitució les Cambres que l'han aprovada assumiran las funcions i les competències que s'hi assenyalen respectivament per al Congrés i per al Senat, cense que en cap cas el seu mandat s'estenga més enllà del 15 de juny de 1981.

2. A efecte del que estableix l'article 99, la promulgació de la Constitució es considera com un cas constitucional en el qual es proceden d'aplicarl-lo. A aquest efecte, a partir de la dita promulgació s'abrirà un periode de trenta dies per a l'aplicació del quo disposa el dit article. Durant aquest periode, l'actual President del Govern, que assumirà les funcions i les competències que la Constitució estableix per a aquest càrrec, podra optar per usar de la facultat que li reconeix l'article 115 o bé donar pas, amb la seuadimissió, a l'aplicació del que estableix l'article 99; en aquest darrer cas restarà en la situació prevista en l'apartat 2 de l'article 101.

3. En cas de dissolució, d'acord amb el que preveu l'article 115 i si no s'haguera produït legalment allò que prexeuen els articles 68 i 69, caldrà aplicar a les eleccions les normes vigents anteriorment, amb les úniques excepcions que en allò que fa referéncia e ineligibilitats i incompatibilitats s'aplicarà directament allò que preveu l'incis segon de la lletra *b)* de l'apartat 1 de l'article 70 de la Constitució i el que aquesta mateixa disposa respecte a l'edat de votar i el que estableix l'article 69.3.

Novena.

Als tres anys d'haver estat elegits per primera vegada els membres del Tribunal Constitucional es designarà per sorteig un grup de quatre membres de la mateixa procedència electiva que hagen de cessar i ser renovats. A aquest únic efecte, es consideraran agrupats com membres de la mateixa procedècia els dos designats a proposició del Govern i els dos que procedeixen de la formulada per Consell General del poder judicial. Després d'un segon periode de tres anys es renovarà pel mateix procediment un dels dos grups no afectats pel sorteig anterior. Des d'aquell moment la renovació hom s'ajustarà al que estableix el número 3 de l'article 154.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

1. Resta derogada la Llei 1/1977, del 4 de gener per a la Reforma Política, i, en la mesura que no foren ja derogadas per aquesta llei, la de Principios Fundamentales del Movimiento del 17 de maig de 1958, el Fuero de los Españoles del 17 de juliol de 1945, el Fuero del Trabajo del 9 de març de 1938, la Ley Constitutiva de las Cortes del 17 de juliol de 1942, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado del 26 de juliol de 1947, modificades totes per la Lley Orgànica de l'Estat del 10 de gener de 1967 i de la mateixa manera, aquesta darrera i la del Referèndum Nacional del 22 d'octubre de 1945.

2. En la mesura que poguessen conservar alguna vivència, es considera derogat definitivament el Relat Decret del 25 d'octubre de 1839 en allò que poguera afectar les provinces d'Alaba, Guipúscoa i Biscaia.

De la mateixa forma es considera derogada definitivament la Llei del 21 de juliol de 1876.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Constitució entrarà en vigor el mateix dia que en siga publicat el text oficial el butlletí oficiel de l'Estat. Serà publicada també en les altres llengües d'Espanya.

IMPRENTA NACIONAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
GACETA DE MADRID

Depósito Legal M. 1-1958 Año CCCXVIII Viernes 29 de diciembre de 1978 Núm. 311.6

KONSTITUZIO ESPAINIAKO

1978ko URRIAREN 31n GORTEEK ONARTUA

1978ko ABENDUAREN 6an, ESPAINIAKO HERRIAK BIRRETSIA

1978ko ABENDUAREN 27an B. M. ERREGEK, GORTEEN AURREAN SINATUA

KONSTITUZIO ESPAINIAKO

HITZAURREA

Espainiako Nazioa, justizia, askatasun, seguritate eta hura osotzen duten ontasuna bultzatu eta ezarri nahiaz, subiranotasuna erabiliz, hurrengo nahia adierazten du:

Demokratik bizikidetasuna garantizatu Konstituzio eta legeen barruan ekonomik eta sozial justu baten arau adostasunaz.

Ezkubidezko Estatu bat indartu, lege agintea herri nahiaren azalpen bezala aseguratuz.

Espainol eta Espainiako Herri guztiak giza eskubideen partea izan dezaten, baita beraien kultura eta tradizioek, hizkuntza eta erakundeek ere.

Kultura eta ekonomia bultzatu denek bizitza duin kalitatezko bat asegura dezaten,

Gizarte demokratiko eta aurrerakoi bat ezarri, eta

Harreman paketsu batzu sendotu eta baita lurreko herri guztien arteko herkidego eragile bat sortu.

Ondorioz, Gorteek onartzen dute eta Espainiako herriak hurrengo hau berresten du

KONSTITUZIOA

AINTZIN TITULUA

1. artikulua

1. Espainia Eskubidezko Estatu sozial eta demokratiko bat batetan eraikitzen da, eta beraren balore nagusi bezala, lege araugintza, askatasuna, justizia, berdintasuna eta politik aniztasuna.

2. Subiranotasun nazionala Espainiako herrian datza, eta honengandik darizkio Estatuaren botereak.

3. Estatu Espainolaren politik era Monarkia parlamentaria da.

2. artikulua

Konstituzioa Nazio espainolaren banaezinezko batasunean oinarritzen da, hura espainol guztien aberria arrunt eta banaezinezkoa, eta hurrengo hau berrezagut eta garantizatzen du, hots, Espainia osotzen duten nazionalitate eta herrialdeen autonomiarako eskubidea eta denon arteko lagunkidetasuna.

3. artikulua

1. Gaztelania da Espainiako Estatuaren hizkuntza ofiziala. Espainol guztiek jakin behar dute eta erabiltzeko eskubidea dute.

2. Espainiako beste hizkuntzak ere ofizialak izango dira haiei dagozkien Erkidego Autonomoetan beraien Estatutoei dagozkien eran.

3. Espainiako hizkuntza moeta ezberdinen aberastasuna kultur ondare bat da eta hura babes eta begirunegarri izango da.

4. artikulua

1. Espainiako bandera hiru lerro horizontalez osoturik izango da, hots, gorri, hori eta gorria, horia, bi gorri hainekoa izanik.

2. Estatutuek Erkidego Autonomoen bandera eta enseina beronar ditzakete. Hauk Espainiako banderaren ondoan jarriko dira etxe publikoetan eta ekintza ofizialetan.

5. artikulua

Estatu hiriburua Madrid hiria da.

6. artikulua

Alderdi politikoek politik aniztasuna adierazten dute, herri nahiaren hezkuntz eta agerpenean konkurritzen dira, eta politikan parte hartzeko oinarrizko tresnak dira. Haien sortze eta ekintza ariketak askeak dira Konstituzio eta lege errespetu barruan. Haien barne egitura eta iharduera demokratikoek izan behar dute.

7. artikulua

Langile sindikatu eta entrepresari elkarteek beraiei dagozkien ekonomik eta sozial interes eragindura eta defentsaren alde jokatzen dute. Haien sormen eta ekintzen ariketa libre edo askeak dira Konstituzio eta legearen begirune barruan. Haien barne egitura eta iharduera demokratikoek izan behar dute.

8. artikulua

1. Indar Armatuak, lehor, itsas eta aireko harmadak osoturik betebehar bezala Espainiaren subiranotasuna eta independentzia, lurralde osotasun araugintza Konstituzionala zaintzean datza.

2. Lege organikoak erakunde militarraren oinarriak arautuko ditu aurreko Konstituzioko funtsen arabera.

9. artikulua

1. Hiritar eta botere publikoak Konstituzioaren eta araugintza juridikoaren menpean daude.

2. Botere publikoei baldintzak bultzatzea dagozkie askatasun eta pertsona baten eta taldea osotzen dutenena benetazko eta eragileak izan daitezen; baita galerazi edo osotasuna zalitzen dituzten oztopoak eragitea hiritargoen parte hartzea erraztea bai politika mailan, bai ekonomia, kultura eta gizarte mailan ere.

3. Konstituzioak legalitatearen printzipioa garantizatzen du, baita arau jerarkia, arau publizitatea, eskubi bakarren aurkako edo murrizgarri diren zigor disposapen atzeragaitza, juridik zihurtasuna, ardura eta botere publikoen arbitrakeriaren eragozpena.

1. TITULUA

Oinarrizko eskubide eta betebeharrak

10. artikulua

1. Pertsonaren duintasuna, hari dagozkion eskubide ukiezinekoak, nortasunaren hezkunde libreа, lege begirunea eta besteekiko eskubideak ordenu politikoa eta giza bakearen oinarriak dira.

2. Konstituzioak onartzen dituen oinarrizko askatasun eta eskubideei dagozkien arauak honela adieraziko dira, hots, Giza Eskubide Orokorren adostasunez eta berauei dagozkien tratatu eta nazioarteko akordioen arauera hauk Espainiak berretsi baitutu.

LEHEN KAPITULUA

Espainol eta atzerrikoei buruz

11. artikulua

1. Espainiako nazionalitatea legeak finkatzen duen eran lortu, gorde eta galtzen da.

2. Sorterriz espainola denari ezin zaio bere nazionalitatea gabetu.

3. Estatuak kontzerta dezake nazionalitate bikoitza iberoamerikotako Herriekin edo Espainiakin honelako edo halako

lotura berezia duten edo izan dutenekin. Herri hauetan, nahiz eta bertako hiritarrei elkarrekiko eskubiderik aitortu ez, espainolek bertakoak egin daitezke sorterriko nazionalitatea galdu gabe.

12. artikulua

Espainiarrak 18 urtekin dira gaiatasun-adineko.

13. artikulua

1. Atzerritarrek Espainian zera gozatuko dute, hots, orain Titulu honek garantizatzen dituen libertate publikoak, tratatuek eta legeak ezartzen dituzten eran.

2. 23 artikuluan aitortzen diren eskubideen titularrak espainolak bakarrik izan ahal dira, elkarrekiko eritziei kasu eginez, ezarri ahal da tratatuz edo legez bozketa eragilearen eskubiderako udal hauteskundeetan.

3. Extradizioa tratatu edo lege baten betetzeaz emango da, elkarrekiko oinarri kasu eginez. Extradiziotik kanpo geldituko dira delitu politikoak, baina ez dira hemen terrorismo ekintzak sartzen.

4. Legeak ezarriko ditu mugak beste Herri batzutako hiritarrek eta herrigabeek Espainian ihesleku eskubidea noraino gozatu ahal duten.

BIGARREN KAPITULUA

Eskubide eta eskatasunak

14. artikulua

Espainolak legearen arabera berdinak dira eta ezin da onartu diskriminapenik, jaiotze, sexu, erlijio edo beste baldintza edo egoera pertsonal edo sozialagatik.

LEHEN SAILA

Oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak

15. artikulua

Pertsona guztiek bizitza eta osotasun fisikoa eta moralerako eskubidea dute, eta inoiz ezin dira maneratu torturetara ez eta zigor edo tratu ezgizakor edo itsusietara. Heriotza zigorra baztertua geratzen da, salbuespen bezala gerrateetarako Harmadako zigor legeek zer erabakitzen duten albo batetara utziz.

16. artikulua

1. Pertsonen eta komunitateen askatasun ideologiko, erlijioso eta kultuarena garantizatzen da, beraien agerpenetan muga bakar bat izanik, hots, legeak babesten duen ordenu publikoaren jagoterako behar dena bakarrik.

2. Ezin ezingo da inor behartu bere ideologia, erlijio edo sineskizunei buruz aitortzen.

3. Inolako sineskerak ez du estatu seinurik izango. Botere publikoek kontutan hartuko dute Espainiako gizartearen sineskizun erlijiosoak eta Eliza katoliko eta beste sineskerekin lankidetza harremanak izango dituzte.

17. artikulua

1. Edozein pertsonak askatasun eta seguritate eskubidea du. Inori ez zaio askatasunik galeraziko, artikulu hontan agintzen dena betetzen ez baldin bada eta beste jazoeretan legeak adierazten duen eran.

2. Epai aurreko atxilotzea, egintzak argitzeko hertsiki behar den denboratik gora ez da luzatuko eta, hirurogei eta hamabi ordu barruan, atxilotua askatua izango da edo auzitegi agintarien pentsutan jarria.

3. Edozein pertsona atxilotzeari lehen bait lehen jakinaraziko zaio eta era ulerkor batez, bere eskubide eta atxilotze errazoiak emanez, aitortzen bortxatu ezinik. Legeak agintzen duen eran, polizi eta judizial diligentzietan atxilotuari abokatu laguntza garantizatzen zaio.

4. Legeak «habeas corpus» prozedura arautuko du edozein pertsona ilegalki atxilotua, lehen bait lehen auzitegi eskuetan jartzeko. Era berean legeak mugatuko du behin behineko atxilotzearen gehiengo epea.

18. artikulua

1. Ohore, norberaren eta senitarteko barrukotasuna eta bakoitzaren irudi eskubidea garantizatzen da.

2. Bizilekua sarezinezkoa da. Bertan jabearen edo epaile erabakiaren baimen gabe ezin da sartu ez eta erregistra ere, delitu nabarian izan ezik.

3. Komunikapen sekretua garantizatzen da eta, bereziki, posta, telegrafo eta telefonoenak, epai erabakirik izan ezik.

4. Legeak informatik erabilera mugatuko du hiritargoaren ohore, norberaren eta senitarteko barrukotasuna eta berauen eskubideen ihardun osoa garantizatzeko.

19. artikulua

Espainolek, beraien bizitokia libreki aukeratzeko eskubidea dute eta baita lurralde nazionaletik zehar ibiltzeko ere.

Era berean, legeak ezartzen dituen neurrietan, Espainian libreki sartu eta bertatik irteteko eskubidea dute. Eskubide hau arrazoi politiko edo idiologikoek ezin dute mugatu.

20. artikulua

1. Hurrengo eskubideok aitortu eta babesten dira:

a) Pentesamenkera, ideia eta eritziak hitzez, idatziz edo beste edozein era batez libreki azaldu eta zabaltzeko.

b) Emaitza eta sortze literario, artistiko, zientifiko eta teknikorako.

c) Katedraren askatasunerako.

d) Edozein hedabidetatik libreki egiazko informazioa komunikatu edo jasotzeko. Askatasun iharduera hauetan, legeak, kontzientzia baldintze eta profesioari dagokion sekreturako eskubidea arautuko du.

2. Eskubide hauen erabilera ezin da inola mugatu aldez aurretiko zentsura batez

3. Estatuaren edo beste erakunde publiko baten menpean daude giza komunikabideen eratze eta parlamentu eta kontrole legeak arautuko du, eta adierazgarri diren talde sozial eta politikoei haietara parte hartzea garantizatuko dio, Espainiako gizarte aniztasuna eta hizkuntza ezberdinak errespetatuz.

4. Askatasun hauek, Titulu hontan, errekonozituniko eskubide errespetuan, aurrera eramaten duten legeen agindu eta, batez ere, ohore, barrukotasun, norberaren irudi, gaztaroaren eta haurtzaroaren babes eskubidean dute muga.

5. Auzi erabakiz bakarrik argitalpen, grabaketa eta beste komunikabideen bahimendua akorda daiteke.

21. artikulua

1. Bilera paketsu eta harma gabeko eskubidea aitortzen da. Eskubide honen erabilera ez du aldez aurretikako baimenik behar.

2. Iraganbide publikoetako bilera kasuetan eta manifestaldietan agintariari aldez aurretikako adierazpena emango zaio, hark bakarrik galeraziko du kale matrakorako oinarrituriko arrazoiak daudenean, pertsona eta ondasunen arriskuaz.

22. artikulua

1. Elkartze eskubidea aitortzen da.

2. Erabili edo jarraiktzen dituzten bide eta helburuak delitu bezala tipifikaturik dauden elkargo ilegalak dira.

3. Artikulu honen babesean sorturiko elkargoak erregistroan ezarri beharko dira zabalkunde ondorioetarako bakarrik.

4. Elkargoak beraien ekintzetatik ezeztatu edo galerazi ahal izango dira arrazoituniko epai erabakiaren bitartez.

5. Isileko eta paramilitar izakerako elkargoak galerazten dira.

23. artikulua

1. Hiritargoak arazo publikoetan zuzenki edo aldikako aukeramenetan bozketa orokorraren bidez libreki aukeratutako ordezkarien bitartez parte hartzeko eskubidea du.

2. Era berean, berdintasun baldintzetan eskubidea dute, legeek ezartzen dituzten baldintzez, funtzio eta kargu publikoetara heltzeko.

24. artikulua

1. Pertsona eskubidea epaile eta auzitegietatik benetako babesa lortzeko eskubidea dute beraiei dagozkien eskubide eta interes legezkoen ihardunetan, inoiz ere babes gabe eman ahal ez izateko.

2. Era berean, denek dute hontarako eskubidea: legeak lehendik izendatuniko Epaile arruntegana jotzeko, baita abokatuaren defentsa eta laguntza exigitzeko ere, halen aurkako salaketaren azalpenerako, auzibide agirizkora behar ez bezalako luzapenik gabe eta garantia osoz defentsarako dagozkien froga guztiek erabiltzeko,

norbereren aurka ez aitortzeko, errudunak ez aitortzeko eta errugabetzat hartzeko;

Legeak kasuok arautuko ditu, hots, senitarteko edo sekretu profesionalagatik ustezki delituzko ekintzez ez dira deklaratzera behartuak izango.

25. artikulua

1. Ezin da Inor kondenatu edo zigortua izan ekintza edo uzteengatik berauk egiteko unean delitu, huts edo administrazio arau hauste izan ez badira, une hartan zutik dirauen legearen arabera.

2. Askatasun baztertze zigorrak eta seguritate neurriek birhezitzeta eta gizartean bersartzera joko dute eta ez dira izango lan bortxatuak. Presondegira kondenatuak, hura betetzen ari baldin bada, kapitulu hontako oinarrizko eskubideez goza dezake, baina ez expreski huts kondenatorio arazoagatik, zigor zentzu eta presondegi legeagatik mugaturik daudenak. Edonola ere, lan ordaindu batetara eskubidea izango du, eta baita gizarte asegurantza dagozkion etekinetara ere, kultura sarbidera eta bere nortasun osoko hazkundera.

3. Administrazio zibilak, zuzenki edo laguntza gisaz askatasun gabetasuna inplikatzen duen zigorrik ezingo du ezarri.

26. artikulua

Administrazio zibil eta erakunde profesionalen hezparruan gelerazten dira Ohore auzitegiak.

27. artikulua

1. Guztiek dute hezkuntzarako eskubidea. Irakaskuntzaren askatasuna aitortzen da.

2. Hezkuntzak, helburu bezala, giza nortasunaren aurreramendu osoa, bizikidetasun printzipio demokratikoak errespetatuz eta baita behin behineko eskubide eta askatasunak ere.

3. Botere publikoek gurasoei dagokien eskubidea garantizatuko dute halen semealabek hezkuntza erlijioso eta morala har dezaten beraien uste sendoei dagokien bezalaxe.

4. Oinarrizko irakaskintza behartua eta dohainik da.

5. Botere publikoek hezkuntzarako guztien eskubidea garantizatzen dute, irakaskintzako programaketa orokor baten bitartez, dagozkien sail guztien egiazko parte hartzeaz eta ikastetxeak sortuz.

6. Pertsona fisiko eta juridikoei aitortzen zaie ikastetxeak sortzeko askatasuna printzipio konstituzionaleko konstituziokó oinarriei dagokien begirune barruan.

7. Irakasle, gurasó eta, dagokienean, ikasleek parte hartuko dute, legeak ezartzen dituen mugetan, Administrazioak herri ondasunez ordaindutako ikastetxe guztien kontrol eta jestioan.

8. Botere publikoek hezkuntza sistima arakatu eta homologatuko dute legeen betetzea garantiza dadin.

9. Botere publikoek, ikastetxeak legeak ezartzen dituen baldintzak betetzen dituzten lagunduko dituzte.

10. Unibertsitateen autonomia errekonozitzen da legeak ezartzen dituen neurrian.

28. artikulua

1. Guztiek dute libreki sindikatzeko eskubidea. Legeak muga edo salbuespen liezaieke eskubide honen iharduera Erakunde Harmatu edo beste Talde diziplina militerraren menpean daudenei eta funtzionari publikoentzako ihardun berezitasunak arautuko ditu. Askatasun sindikalak sindikatuak sortzeko eskubidea barnetzen du eta aukeran kidetzeko; baita sindikatuek konfederazioak sor ditzakete eta nazio arteko erakunde sindikalak ere edo haietan bazkidetu. Inor ezin da behartu sindikatu batetan kidetzera.

2. Langileen greba eskubidea aitortzen da beraien interesak defendatzeko. Eskubide honen iharduera arautuko duen legeak beharrezko diren garantiak ezarriko ditu komunitateko zerbitzu premiazkoenen mantenua aseguratzeko.

29. artikulua

1. Espainol guztiek dute eskubidea idatziz, legeak onartzen duen era eta ondorioz eskabide partikularra eta amankomunekoak egiteko.

2. Indar edo Erakunde harmatu edo diziplina militarraren menpean dauden Taldeek erabil dezakete eskubide hau indibidualki eta beren lege berezi espezifikoen erabakitzen den arabera.

BIGARREN SAILA

Hiritargoen eskubide eta betebeharrak

30. artikulua

1. Espainolek Espainia defendatzeko eskubidea eta betebeharra dute.

2. Legeak finkatuko ditu espainolen betebehar militarrak eta arautuko du, beharrezko diren garantiez; kontzientzia objekzioa, eta baita beste arrazoi batzu ere beharrezko soldaduzkatik libratzeko, ezarri ahalez, kasu bakoitzean, ordezkako giza prestapena.

3. Zerbitzu zibil bat ezarri ahal izango du interes orokorren helburuak lortu ahal izateko.

4. Hiritargoaren betebeharrak legearen bidez erregula daitezke, bai arrisku larrian, bai katastrofe edo lazeria publikoan.

31. artikulua

1. Guztiek lagunduko dute gastu publikuen euspena bakoitzak ahal duen ekonomik gaitasunaz zerga sistema baten bidez; berau berdintasun eta aurrerapen printzipioetan oinarriturik eta inoiz ez da konfiskagarri izango.

2. Gastu publikoak baliákizun publikoen bidezko banantze bat egingo du eta haren programaketa eta betetzeez erantzungo dute eragile eta ekonomiaren erizpideen arauera.

3. Mendu publikoko prestapen pertsonalak edo ondasunezkoak bakar bakarrik ezarri daitezke legearen arabera.

32. artikulua

1. Bai gizonak eta bai emakumeak berdintasun juridiko osoz ezkontzeko eskubidea dute.

2. Legeak ezkontza erak arautuko ditu, adina, gaitasuna, ezkontideen eskubide eta betebeharrak, banatze arrazoiak, disoluzio eta haren ondorioak.

33. artikulua

1. Jabego pribatu eta oinorde eskubidea aitortzen da.

2. Eskubide hauen funtzio soziala hauen edukia mugatuko du legeen arauera.

3. Inor ez da izango bere ondasun eta eskubidez gabetua baliagarritasun publikoa edo interes sozial justifikaturen bat ez bada medio dagokion kalteordaina eta legeek erabakitzen duten arabera.

34. artikulua

1. Fundakuntza eskubidea aitortzen da legearen arabera, onura orokorreko helburuez.

2. Fundakuntzeterako ere 22 artikuluko 2 eta 4 ataleen erabakitakoak aginduko du.

35. artikulua

1. Espainol guztiok lan egitera behartuak daude eta baita lan aukera, profesio eta bizibide askeramen libre batetarako ere ba dute eskubiderik; baita lanaren [illegible]zko bultzapenera eta alogera nahiko batetara beraien eta familiaren beharrizanetarako, inoiz ere sexu arrazoiagatik bereizteketerik egin gabe.

2. Legeak langileen estatutu bat arautuko du.

36. artikulua

Legeak arautuko du Kolejio Profesionalen lege errejimena eta tituludun profesioen iharduera ere bai. Kolejioen barne egitura eta iharduera demokratikoek izan behar dute.

37. artikulua

1 Legeak garantizatuko du entrepresari eta langileen ordezkarien lankide amankomunen negoziaketa, baita hitzarmenen indar elkartua ere.

2. Langile eta entrepresariek har dezaketen gatazka kolektibo neurrien eskubidea aitortzen da. Eskubide honen exerzizioa erregulatzen duen legeak, ezarri dakizkiokeen mugen trabarik gabe, beharrezko diren garantiak sartuko ditu Erkidego zerbitzu esentzialak funtzionamendua aseguratzeko.

38. artikulua

Entrepresa askatasuna aitortzen da merkatu ekonomiaren barrutian. Botere publikoek haren iharduera garantiza eta babestu

egiten dute eta baita ekoizpenaren defentsa ere, ekonomia orokorraren eskabideei kasu eginez, eta kasu hontan, planifikapena kontutan izanik.

HIRUGARREN KAPITULUA

Politika soział eta ekonomikoaren gida oinarriez

39. artikulua

1. Botere publikoek familiaren babespen sozial, ekonomik eta juridikoa zihurtatzen dute.
2. Botere publikoek, era berean, seme-alaben babespen osoa zihurtatzen dute, hauk legearen aurrean berdinak izanik jatorria alde batetara utziz, eta hauen amena berauon egoera zibila edonolakoa izanik. Legeak posibilitatuko du aitatasunaren ikerketa.
3. Gurasoek era guztietako laguntza eskaini behar diete seme-alabei nahiz ezkontzakoak nahiz ezkontzatik kanpokoak izan, haien adingabezaroan eta beste kasuetan legalki eratortzen denean.
4. Umeek nazio arteko akordioetan beraien eskubideen alde bailatzen den aldez aurretik ikusitako babesa gozatuko dute.

40. artikulua

1. Botere publikoek zera eraginduko dute, alegia, aurreramendu sozial eta ekonomikorako baldintza lagungarriak eta herrialde errenta eta pertsonaleko banaketa egokiagoa, oreka ekonomiko politikoaren hesparruan. Era bereziz, irabazpide osora gidatuniko politika baten alde jokatuko du.
2. Era berean, botere publikoek hurrengo politika honen alde egingo dute, hots, hezkuntza eta biregokitze profesionalen garantizapenen alde; laneko seguritate eta garbiduraren alde eta behar beharrezko den atsedena garantizatuko dute lan egunak mugatuz, aldizkako oporrak ordainduz eta egokizko zentruak eragindurik.

41. artikulua

Botere publikoek hiritargo guztientzat giza asegurantza delakoaren erregimen publiko bat mantenduko dute, beharrizan egoeretan laguntza eta giza prestapenak garantizatuz eta batez ere enplegu ezaren garaian. Laguntza eta gehigarrizko prestamenak libreak izango dira.

42. artikulua

Estatuak bereziki atzerriko ari diren langile espainolen eskubide ekonomiko eta sozial babesen alde begiratuko du, eta haien itzuleraren alde zuzenduko du politika.

43. artikulua

1. Osasun babesaren eskubidea aitortzen da.
2. Botere publikoei dagokie osasun publikoa antola eta babestea beharrezkoak diren zerbitzu eta prestamenen neurri, aldez aurretikakoen bitartez. Hontarako, legeak ezarriko ditu guztien eskubide eta betebeharrak.
3. Botere publikoek bizkortuko dute osasuna eta fisikoen hezkuntza eta kirolak. Era berean, astiguneak emateko era aproposak eskainiko ditu.

44. artikulua

1. Botere publikoek kulturara bidetzea bultzatu eta babestuko dute, berton denek eskubidea izanik.
2. Botere publikoek zientzia, ikerketa zientifiko eta teknikoa bultzatuko dituzte onura orokorraren alde izanik.

45. artikulua

1. Guztiek dute eskubidea pertsonaren hazkundera egokizko ingurune batez gozatzeko, eta baita hark iraun dezan betebeharra ere.
2. Botere publikoek, berezko baliabide guztien erabiltze arrazionala zainduko dute, bizitza kalitatea hobetu eta babesteko eta ingurunea berriztatu eta defendatu, behar beharrezko den elkartasun kolektiboan oinarrituz.
3. Goiko apartatuan erabaki dena, legeak ezartzen dituen mugetan, zigor penalak ezarriko zaizkie edo, dagokienean, administratiboak, eta era berean sortutako kaltearen berriztatze betebeharra.

46. artikulua

Botere publikoek ondare historikoaren jagotea garantizatuko dute, eta aberastasuna bultzatuko, eta baita Espainiako Herrien kultural eta artistikoa ere; hauek osatzen dituzten ondasunak, edozein lege erregimen eta jabegoa izanda ere. Zigor legeak gaztigatuko ditu patrimonio honen kontrako atentatuak.

47. artikulua

Espainol guztiek bizitza duin eta egokizko bat izateko eskubidea dute. Botere publikoek behar diren baldintzak bultzatuko dituzte eta arau erokoak ezarriko eskubide hau egiaztatzeko, lurraren erabilpena arautuz interes orokorraren arabera espekulazioa baztertzeko.
Erkidegoak erakunde publikoetako hiri ekintzek dakartzaten plusbalietan parte hartuko du.

48. artikulua

Botere publikoek baldintza batzu bultzatuko ditu gazteriak parte hartze libre eta eragilea izan dezan hazkunde politiko, sozial, ekonomiko eta kulturazkoan.

49. artikulua

Botere publikoek aintzinamendu politika bat aurrera eramango dute, baita tratamendu, berrabiltze eta helbarri fisiko, zentzu eta sikikoen integrakuntza, hauei behar duten arreta berezia eskainiz eta bereziki babestuko die, Titulu honek hiritargoei eskaintzen dien eskubidearen gozatzeko.

50. artikulua

Botere publikoek, dagozkien pentsioez aldika gaurkotuz zahartzaroan garantizatuko dio hiritargoari behar beharrezko ekonomia. Era berean, eta familiako betebeharretatik kanpo, haien ongitasuna bultzatuko dute zerbitzu sozialen bidez beraien arazo bereziei kasu eginez, hots, osasun, bizileku, kultura eta aisiari.

51. artikulua

1. Botere publikoek kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsa garantizatuko dituzte, era eragile batzuren bidez, seguritate, osasun eta beraiei dagozkien interes ekonomikoak babestuz.
2. Botere publikoek kontsumitzaile eta erabiltzaileen kezkuntza eta informapena bultzatuko dituzte, halen erakundeak lagundu, eta entzun, legeak ezartzen dituen neurrian haiei dagozkien arazoetan.
3. Aipaturiko apartatuetan erabaki den hesparruan, legeak barne merkatalgoa eta merkatal ekoizpen baimenaren erregimena arautuko du.

52. artikulua

Legeak erakunde profesionalak arautuko ditu berauei dagozkien interes ekonomikoek defendatzen baitute. Haien barne egitura eta funtzionamendua demokratikoek izan behar dute.

BIGARREN KAPITULUA

Askatasun garantia eta funtsezko eskubideez

53. artikulua

1. Aurre Tituluko bigarren kapituluan aitorturiko eskubide eta askatasunek botere publiko guztiak behartzen dituzte. Bakar bakarrik, legez, kasu guztietan haren oinarrizko funtsa errespetatu beharrez, arau daiteke haien eskubide eta askatasun iharduera, berauk 161 garrengo artikuluan, 1 a) aldez aurretik pentsaturiko arauez babestuta izanik.
2. Edozein hiritarrek eskatu ahal du 14. artikuluan aitortutako askatasun eta eskubideen babespena eta baita bigarren kapituluko lehen atala Auzitegi arruntetan aurretasun eta arintasun oinarrietako prozeduran finkatuz eta, behar denean, Auzitegi konstituzional deritzanaren babes baliabidearen bitartez. Azken baliabide hau kontzientzia objekzioa, 30. artikuluan aitortutakoa, aplika daiteke.
3. Hirugarren kapituluan aitortuak onartze, errespetu eta babesaz adieraziko du legeztapen positiboa auzi praktika eta botere publikoen ekintzak. Bakarrik aipatu ahalko dira arruntaren aurrean aurrera eramaten duten legeek erabakitzen duten arabera.

54. artikulua

Lege organiko batek arautuko du Herri Defendatzaile erakundea, Gorte Orokorretako komisionatu gorena, hauek izendaturik Titulu hontan barnetzen diren eskubideen defentsarako, berauen ondorioetarako Administralgo ekintzak gainbegira dezake, Gorte Orokorrei kontua eskainiz.

BOSGARREN KAPITULUA

Eskubide eta askatasunen etendurez

55. artikulua

1. 17. eta 18. artikuluetako 2. eta 3. apartatuetan aitorturiko eskubideak eta baita 19. eta 20. artikuluetako 1. a) eta d) eta 5. apartatuetako, 21. 28. artikuluetako 2. apartatuko eta 37. artikuluko 2. apartatukoa etendura daitezke salbuespen edo hertsipen egoera deklaratzen denean, konstituzioan aurrez ikusten den punduen arabera. Salbuespen egoera balitza, goian ezarriniko 17. artikuluko 3. apartatua salbuespentzen da.

2. Lege organiko batek muga dezake era eta kasuak nola, era bakarrez eta behar den partehartze judizialez eta egokizko kontrol parlamentariez 17. artikuluan 2. apartatuan eta 18. artikuluetako 2. eta 3. apartatuetan aitorturiko eskubideak, pertsona batzurentzat etendura daitezke, banda harmatu edo elementu terroristen ekintzei burozko ikerketak egin ondoren.

Aipaturiko lege organikoaren edo neurriz gainekoz aitortu fakultateen erabilpen justifikagaitzak zigor erantzukizun bat sortuko du legeek errekonozitutako eskubide eta askatasun bortxatze bezala.

II. TITULUA

Koroaz

56. artikulua

1. Erregea Estatuko burua da, haren batasun eta iraupenaren sinboloa, erakundeetako funtzionamendu erregularra arbitratu eta moderatzen du, nazioarteetako harremanetan Estatu espainoleko ordezkaritza jasotzen du, batez ere bere komunitate historikoko nazioetan, eta konstituzio eta legeek expreski ematen dizkioten funtzioak iharduntzen ditu.

2. Haren titulua Espainiako Erregean datza eta erabil ditzake Koroari dagozkion besteak ere.

3. Erregearen pertsona ukiezinekoa da eta ez du inolako erantzunkizunik. Haren ekintzak 64. artikuluan ezarritako eran berretsiturik daude beti, aipaturiko berritsipen gabe baliapenik ez dute. 65. 2. artikuluan erabakitzen dena izan ezik.

57. artikulua

1. Espainiako Koroa heredagarria da Borbongo S. M. Juan Carlos I. ondorioengan, hura dinastia historikoaren legezko oinordekoa izanik. Tronu jarraipena primutasun eta ordezkaritza lehentasuna jarraituko du, lehenago izanik beti gerokoak baino aurretikako oinordekoak; eta berdinean, hurbilengoak urrunengoak baino; maila berdinean, gizonezkoa emakumezkoa baino, eta sexu berdinean pertsona adintsua gazteak baino.

2. Printze oinordekoa, beraren jaiotzetikan edo deitze ekintza sortzen denetandik, Asturiasko Printze duintasuna izango du eta beste tituluak Espainiako Koroa ondorengoari tradizionalki loturik daudenak.

3. Deretxoz deitutako oinordeko denak akiturik, Gorte Orokorrek hornituko dute Koroaren jarraipena Espainiako interesei gehien komeni zaien eran.

4. Tronuan ondoren eskubidea izan duten pertsonak Errege eta Gorte Orokorren debeku argiaz ezkondu baldin badira, beraik eta beren ondorengoak koroa jarraipenetik at geratzen dira.

5. Abdikapen, etsipen eta koroa jarraipenari egitez edo eskubidezko edozein zalantza gertatuz gero lege organikoaren bidez erabakiko da.

58. artikulua

Erregina ezkontideak edo Erreginaren ezkontideak ezin dute funtzio konstituzionalik jaso, Errejentzlako erabakita dagoenetik kanpo.

59. artikulua

1. Erregea adinagabea denean, Erregearen aita edo ama eta, hauen ezean, Konstituzioan erabakitzen den ordenez, koroan jarraitzeko hurbilen dagoen, adin nagusiko ahaidea, bereziaxe Errejentzia iharduntzera sartuko da eta Erregearen adinagabe garai osoan ihardungo da.

2. Erregea bere agintea iharduntzeko gaieztatzen baldin bada eta ezina Gorte Orokorrek errekonozitua izan, berealaxe Koroaren Printze oinordekoa Errejentzia iharduntzera sartuko da adin nagusikoa baldin bada. Eta ez baldin bada lehenagoko apartatuan aurre ikusi den eran, Printze oinordeak adin nagusigoa lortu arte.

3. Errejentzia dagokion pertsonarik baldin ez bada, berau Gorte Orokorrek aukeratuko dute eta bat, hiru edo bost pertsonek osotuko dute.

4. Errejentzia iharduntzeko espainola izan behar da eta adinez nagusia.

5. Errejentzia konstituzional aginduz ihardungo da eta beti Erregearen izenean.

60. artikulua

1. Errege gaztearen tutorea Errege zenduak bere testamentuan izendaturiko pertsona izango da; adin nagusikoa izanik eta jaiotzez espainola; izendatu ez baldin bazuen, aita edo ama, alargun diren bitartean, tutore izango dira. Hauen ezean, Gorte Orokorrek izendatuko dute, baina Errejentzia eta tutore karguak ez dira batengan izango aita edo ama edo Erregearen arbaso zuzenak ez baldin badira.

2. Tutorego ihardunketa ere elkartezinekoa da beste kargu edo errepresentapen politiko batez.

61. artikulua

1. Erregeak, Gorte Orokorren aurrean aldarrikatzean, zin egingo du zintzoki bere funtzioak helburutzeko, konstituzioa eta legeak gorde eta gorde arazi eta hiritargoaren eskubideak errespetatu eta baita Erkidego Autonomoenak ere.

2. Printze oinordekoak, adin nagusia lortzean, eta Errejente edo Errejenteek beraien funtzioez jabetzean zin berbera egingo dute eta baita Erregearenganako leialtasuna ere.

62. artikulua

Erregeari dagokiona.

a) Legeak onetsi eta promulgatu.

b) Gorte Orokorrak bilerazi eta deuseztatu eta konstituzioan aurre ikusitako arauetara hauteskundeak bilerazi.

c) Referendumera bilerazi Konstituzioan aurre ikusitako kasuetan.

d) Gobernuko lehendakaritzarako hautagarria proposatu eta, behar denean, izendatu, eta baita haren funtzioei amaiera eman Konstituzioan aurre ikusitako arauen neurrian.

e) Gobernuko taldekiak izenda eta banatu, lehendakariaren proposamenez.

f) Ministru Kontseiluetan erabakitako dekretuak expeditu, enplegu zibil eta militarrak konferitu eta legeen arauera ohore eta aipamenak eman.

g) Estatuko arazoez informatua izan eta hauen ondorioetarako Gobernuko lehendakariaren eskabidez egoki iruditzen zaionean Ministru Kontseiluko bilkurak presiditu.

h) Indar Harmatuen gorengo agintea.

i) Grazi Eskubidea baliatu legearen arabera, indultu baimen orokorren baimenik ezin du eman.

j) Erret Akademien babesgo Nagusia.

63. artikulua

1. Erregeak enbaxadore eta beste ordezkari diplomatikoak Kreditatzen ditu. Espainian atzerriko ordezkariak Erregearen aurrean Kreditaturik dauda.

2. Erregeari dagokio Estatuko baimendua agertzea, itunen bidez nazioartekotasunki behartzeko, konstituzio eta legeen adostasunez.

3. Erregeari dagokio, Gorte Orokorren aurre baimenaz, gerra aldarrikatu eta bakea egitea.

64. artikulua

1. Erregearen ekintzak Gobernu Lehendakariak berretsiak izango dira eta, honen ezean, dagokion Ministruak. Gobernuko Lehendakariaren proposatze eta izendatzea eta 99. artikuluan aurreikusiriko deuseztatze Biltzar Lehendakariak berretsiak izango dira.

2. Erregearen ekintzen arduradunak berresten dutenak izango dira.

65. artikulua

1. Erregeak Estatuko Aitzin kontutik kantitate orokor bat jasotzen du bere Familia eta Etxea sostengatzeko eta hura libreki banatuko da.
2. Erregeak libreki izendatu eta txandatzen ditu bere Etxeko Kide zibil eta militarrak.

III. TITULUA

Gorte Orokorrez

LEHEN KAPITULUA

Ganbarez

66. artikulua

1. Gorte Orokorrak Espainiako herriaren adierazgarri dira eta haik Diputatu eta Senatuaren biltzarreak osotzen ditu.
2. Gorte Orokorrek Estatuko legegintza botersa dute, aitzin kontuak onartzen, Gobernu ekintza kontrolatzen eta ba dituzte Konstituzioak ematen dizkien beste eskubideak ere.
3. Gorte Orokorrak ukiezinak dira.

67. artikulua

1. Inor ezin da izan era berean bi Ganbaratako kidea, ez eta gehitu Erkidego Autonomaren Biltzar Izendapena Diputatuen Biltzarrekoarekin.
2. Gorte Orokorreko kideak ez dira inoren agintzaari lotuak izango.
3. Parlamentari bilerak arauzko deitze batez egiten ez badira ez ditu Ganbarak lotaraziko, eta beraien funtziorik ezin dute erabili ez eta priblejiorik eduki ere.

68. artikulua

1. Biltzarrea gutxienez 300 Diputatu eta gehienez 400ek osotzen du, berauk bozketa orokorrez, libre, berdin zuzen eta isilpean aukeratuak izanik legeak ezartzen duen arabera.
2. Hauteskunde barrutia probintzia da. Ceuta eta Melilla bakoitza Diputatu batez ordezkatua izàngo da. Legeak banatuko du Diputatugoa, haserako gutxiengo ordezkaritza barruti bakoitzari egokituz eta besteak populazioaren arabera banatuz.
3. Hautapena barruti bakoitzean egingo da ordezkaritza proportzionalaren bideak jarraiturik.
4. Biltzarra lau urtetarako hautatua da. Diputatuen eginpidea berauen hautapenetik lau urtetara bukatzen da edo Ganbararen deuseztatze egunean.
5. Espainol guztiak, beren politik eskubideen erabilpen osoan aurkitzen direnak hautesle eta hautagarriak dira.
Legeak aitortuko du eta Estatuak Espainiatik kanpo dauden espainolei bozketa eskubidearen iharduera eskainiko die.

6. Agintea bukatu ondoreneko hogei eta hamar eta hirurogei egunen bitartean izango dira hauteskundeak. Biltzar hautatua hauteskundeak egin eta hurrengoko hogeitabost egunen barruan bilerazia izango da.

69. artikulua

1. Senatua lurraldeen ordezkaritzaren Ganbara da.
2. Probintzia bakoitzean lau senatore hautatuko dira bozketa orokor, libre, berdin, zuzen eta bozemailleen isilpean haietariko bakoitzetik lege organiko batek finkatzen duen arabera.
3. Irla probintzietan, irla bakoitza edo taldeka, kabildu edo irla Kontseiluak barruti bat osatuko du Senatoreen hauteskundeetarako, hiru irla nagusiko —Gran Canaria, Mallorca eta Tenerife— bakoitzari hiru dagozkiolarik eta hurrengo irla eta irla taldeko bakoitzari bat: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote eta La Palma.
4. Ceuta eta Melillakoek, bakoitzak bi senatore hautatuko ditu.
5. Erkidego Autonomoek izendatuko dute gainera Senatore bat eta beste bat dagokion lurraldean milioi bat biztanleko. Izendatzea legegile Biltzarrari dagokio edo Erkidego Autonomako erakunde kolejiatu Gorenari, Estatutuetan ezartzen denaren arabera, era guztietara egokizko ordezkaritza proportzionala aseguratzen dutelarik.
6. Senatua lau urtetarako hautatzen da. Senatoreen agintea hautapenetik lau urtetara bukatzen da edo Ganbararen deseztatze egunean.

70. artikulua

1. Hauteskunde legeak mugatuko ditu Diputatu eta Senatuak hauta ezineko eta adostezineko arrozoiak era guztietan zera barneratuz:
a) Konstituzio Auzitegiko kideak.
b) Legeak mugatzen dituen Estatu Administraigoko goi arduradunak, Gobernu kideak izan ezik.
c) Herri Defendatzailea.
d) Lanean ari diren Magistratu, Epailari eta Fiskalak.
e) Militar profesionalak eta lanean ari diren Polizi eta Seguritate indarretako kideak.
f) Hauteskunde batzarre kideak.
2. Ganbara biotako kideen izendapen eta noragin baliapena epaile kontrolaren menpean izango da, lege hauteskundeak ezartzen duen arabera.

71. artikulua

1. Diputatu eta Senatoreek beraien funtzio ihardunketetan agertutako eritziengatik ukiezintasuna gozatuko dute.
2. Era berean Diputatu eta Senatoreek beraien agintaritza garaian inmunitateaz gozatuko dute eta delitu agirikoagatik bakar bakarrik atxilotuak izan daitezke. Ezin zaie errurik bota ez eta prozesatu ere dagozkien Ganbaren aldez aurretikako autorizapenik gabe.
3. Diputatu eta Senatoaren aurkako auziak Goren Auzitegiko zigor sailan dagokizkio.

4. Diputatu eta Senatoreek beraiei dagozkien Ganbarek finkaturiko soldata jasoko dute.

72. artikulua

1. Ganbarek beraien Barne Erregelak ezartzen dituzte, beraien aitzinkontuak autonomikoki onartu eta adostasunez Gorte Orokorretako Pertsonal Estatutua arautu. Araudiak eta hauen osotasunean, era azken botoetara eramanak izango dira, gehiengo absolutoa behar izanik.
2. Ganbarek berei dagozkien lehendakari eta mahaiko beste kideak hautatzen dituzte. Elkarrekiko bilkurak Biltzarre lehendakaria buru izango da eta Gorte Orokorreko Araudiaren arabera zuzenduak Ganbara bakoitzeko gehiengo absolutuaz onarturikoa.
3. Ganbaretako Lehendakariek hauen izenean erabiltzen dituzte bote administratibo eta polizi eskubideak beraien dagozkien tokietako hesparruan.

73. artikulua

1. Ganbarak urtero bilduko dira bi aldi arruntetako bilkuretan, Lehena, Irailetik Abendura, eta bigarrena, Otsailetik Ekainera.
2. Ganbarak aparteko bilkuretan bil daitezke Gobernuaren eskabidez, Diputazio Iraunkor edo edozein Ganbaratako gehiengo kide absolutoen eskakizunez. Aparteko bilkurak eguneko aztergai mugatu batez bileraziak izango dira eta bukatuak hura ahitzen denean.

74. artikulua

1. Ganbarak elkarrekiko bilkuretan bilduko dira legegintzakoak ez diren konpetentziak erabiltzeko II. Tituluak expreski Gorte Orokorrei iratxekitzen dizkienak.
2. Gorte Orokorretako erabakiak, 94, 1, 145, 2 eta 158, 2 artikuluetan aurreikusiak Ganbara bakoitzeko gehiengoan eritziz aukeratuko dira. Lehen kasuan, prozedura Biltzarretik hasiko da, eta beste bietan, Senatutik. Kasu biotan, Senatu eta Kongresoa akordio batetara ez badatoz, Batzorde nahasi baten bidez salatuko da Diputatu eta Senatoreen zenbakia berdina izanik. Batzordeak textu bat aurkeztuko du berau Ganbara biok botatuz. Ezarririk dagoen eran onartzen ez bada, biltzarrak gehiengo absolutoz erabakiko du.

75. artikulua

1. Ganbarek Osoan eta Batzordez funtzionatuko dute.
2. Ganbarek Batzorde legegile iraunkorrengan lega dezakete lege proposizio edo proiektuaren onartzea. Bestalde, Osoak edozein unetan eska dezake ordezkaritza honen gaia izan den lege proposizio edo proposamenaren eztabaida eta bozketa.
3. Aipatutako apartatuan erabakitik at gelditzen dira Konstituzio aldaketa Konstituzionala, nazioarteko arazoak, lege organiko eta oinarrizkoak eta Estatuko aitzinkontu Orokorrak.

76. artikulua

1. Kongreso eta Senatuak, eta haien kasuan Ganbara biek elkar, edozein interes publiko gai ikerketarako Batzordeak izenda ditzakete. Hauen erabakiak auzitegientzat ez dira betebeharrezkoak izango, eta ez dituzte eragingo epaileen erabakiak. Hala ta guztiz ere, ikerketa ondorioaren berri egoki denean, aproposeko ekintzak, Ministeritza Fiskalari komunikatu beharko zaizkio.

2. Ganbaren eskabidez beharrezkoa izango da azaltzea. Legeak arautuko ditu betebehar hau ez betetzeagatik ezarri ahal diren zigorrak.

77. artikulua

1. Ganbarek eskakizun bakarko eta kolektiboak jaso ditzakete, beti idatziz, hiritar agerpenetako aurkezpen zuzenak galeraziak geldituz.

2. Ganbarek jasotzen dituzten eskakizunak Gobernura bidal ditzakete. Gobernua haien azalpenen bat ematera beharturik dago Ganbarek eskatzen dioten bakoitzean.

78. artikulua

1. Ganbara bakoitzean Diputazio Iraunkor bat izango da gutxienez hogei eta bat kidez horniturik, hauek talde parlamentarioek. errepresentatuz, haien zenbaki garrantzi aren proportziotan.

2. Diputazio Iraunkorraren Ganbara bakoitzeko Lehendaria buru izango da eta eginbehar bezala 73. artikuluan aurre ikusitakoak izango ditu, hots, Ganbarei dagozkien eskubideak berengan jasotzea 86. eta 116. artikuluen arabera, hauk deuseztuak izanez gero edo beraien agintea amaitu eta Ganbaren ahalmenez kezkatu, hauk bildurik ez daudenean.

3. Agintea amaituz edo deuseztatzean Diputazio Iraunkorrek beren eginbeharrak betetzen jarraituko dituzte Gorte Orokor berrietako Konstituzio arte.

4. Egokizko Ganbara bildurik, Diputazio Iraunkorrak erabilitako gaiez eta erabakiez kontua emango du.

79. artikulua

1. Ganbarek akordioak onartzeko arauzkoi bildurik izan behar dute eta taldeka gehiengoaren parte hartzeaz.

2. Akordio hauk, baliakizuna izatekotan, bertako kide gehiengoak onartuak izan behar ditu Konstituzioak ezartzen dituen gehiengo bereziaren kaltetan edo lege organikoetan eta pertsonak hautatzeko Ganbara Erregelak ezartzen dituenak.

3. Senatore eta Diputatuen boza pertsonal eta ordezkatu ezinekoa da.

80. artikulua

Ganbaren bilkura orokorrak publikoak izango dira, Ganbara bakoitzean aurkako akordiorik ez baldin bada, gehiengo absolutuak onartua eta Erregelen arabera.

BIGARREN KAPITULUA

Legegintzaz

81. artikulua

1. Askatasun publiko eta oinarrizko eskubideen aurreramenduari dagozkionak, Autonomi Estatutuak onartu eta hautapen orokor errejimena Konstituzioan aurre ikusitako besteak dira lege organikoak.

2. Lege organikoen onartze, aldatze edo baztertzeak proiektu osoari buruzko kongresoaren gehiengo absolutoa exijituko du.

82. artikulua

1. Gorte Orokorrek Gobernuan ordezka dezakete lege mailan arauak emateko ahalmena gai mugatu batzuri buruzkoak, berauk aipatutako artikuluan sartu ez direnak izanik.

2. Lege aintzerako ordezkaritza oitzat eman ahal da oinarri lege baten bidez haren zeregina textu artikulatuen sortzea denean edo lege arrunt batez textu legal ezberdin batzu batetan birmoldatu behar direnean.

3. Legegintzarako ordezkaritza hertsiki Gobernuari utzi beharko zaio gai mugatu bat denean eta haren erabilpenerako epe zihur bat ezarriz. Ordezkaritza agortuko da Gobernuak erabiltzen duen neurrian dagokion araberen argitalpenaz. Ezin izango da ulertu, emanda bezala, aipatu edo denbora mugatu gabe bada. Bestalde, subordezkapena Gobernutik aparteko agintariei ezingo die utzi.

4. Oinarri legeek mugatuko dute zehazki legegintza ordezkaritzaren gai eta irispidea eta hark erabiltzean, jarraitu behar diren funts eta erizpideak.

5. Textu legalak birmoldatzeko baimenak ordezkaritza funtsari dagokion arau ingurunea mugatuko du, zehaztuz textu bakar batetako formulapen soilera mugatzen den ala barnetzen duen birmoldatu behar diren textu legalak arau, argi eta armonizatzea.

6. Auzitegiei dagozkien konpetentzien kaltetan jo gabe, Legegintzako ordezkaritzek, kasu bakoitzean, ezar ditzakete kontroleko formula gehigarriak.

83. artikulua

Oinarrizko legeek inoiz ezin dute:

a) Oinarrizko lege bereren aldapena baimenda.

b) Atzerauzko balioaz diktatzeko bide eman.

84. artikulua

Lege proposamen bat edo zuzenketa dirauen legezko ordezkaritzaren aurkakoa denean, Gobernuak ahal du fakultatu haren tramitapenaren aurka jartzeko. Orduan lege proposamen bat aurkez daiteke legezko ordezkaritzaren derogapen oso edo zatikarako.

85. artikulua

Gobernuko erabakiek legezko ordezkaritza edukitzean Lege Dekretu titulua jasoko dute.

86. artikulua

1. Kasu berezi eta beharrizan premiatsuan, Gobernual behin behineko lege erabakiak eman ditzake, Dekretu-lege era harturik eta ezingo dute eraginik izan Estatuko oinarrizko erakundeen ordenamendua, ez eta, I. Tituluko hiritar arautuen eskubide, betebehar eta askatasunik, ezta Erkidego Autonomoen errejimenik, ezta hauteskunde Orokor Eskubiderik ere.

2. Dekretu-legeak, behingoan, Diputatuen Biltzar osoaren estabalda eta bozketara meneratuak izango dira, haren promulgapenetik hurrengo hogei eta hamar egunera bildua ez baldin bada hartarako deituz. Biltzarrak aipatu epe barruan erabaki beharko da haren konbalidapen edo baztertzea, horretarako Erregelak prozedura berezi eta sumari bat ezarriz.

3. Goiko apertuan ezarritako epe barruan, Gorteek premiatsu prozeduraz lege proiektu bezala tramita ditzakete.

87. artikulua

1. Legengintza iniziatiba Gobernu, Kongreso eta Senatuari dagokio, Konstituzio eta Ganbaren Erregelen arabera.

2. Erkidego Autonometako Biltzarrek eska diezaiokete Gobernuari lege proiektu bat aukeratzea edo Biltzar Mahaira lege proposamen bat bidali, Ganbara harengan, gehien jota Biltzarreko hiru kide delegatuz eta bereren defentsaz arduratuz.

3. Lege organiko batek arautuko ditu erabilpen erak eta herri iniziatiben baldintzak, lege proposamenak aurkezteko. Edonola ere, gutxienez 500.000 sinadura ospetsu exijituko dira. Lege organikako gai berean, zergadura edo nazio artekoetan, edo grazi eskubide bakarrari dagokionean ez da iniziatibarik izango.

88. artikulua

Lege proiektuak Ministruen kontseiluan onartuko dira, biltzarrera meneratuz. Haiei buruz erabaki hartzeko arrazoibide eta behar diren aitzindariz lagunduak izango dira.

89. artikulua

1. Lege proposamenen tramitapena Ganbaretako Erreglek arautuko dute lege proiektuei dagokien lehentasunak legegintza iniziatiben erabilpena eragotzi gabe 87. artikuluak arautzen duen arabera.

2. Lege proposamenak, 87. artikuluaren arabera, Senatuak kontutan hartzen baldin baditu. Biltzarrera igorriko dira hontan tramitatzeko haleko proposamen bezala.

90. artikulua

1. Diputatuen Biltzarrak lege arrunt edo organiko bat onartuz gero, bertako Lehendakariak hontaz berealaxe kontua emango dio Senatuko Lehendakariari, honek bestearen eztabaida menderatuz.
2. Senatuak, bi hilabeteren barruan, textua jasotako egunetik hasita, ahal du, arrazoitutako mezu bidez, betoa ezarri edo hartan zuzenketak sartu. Betoa gehiengo absolutuak onartua izan behar du. Proiektua ezin zaio Erregeari menderatu Biltzarrak gehiengo absolutuz berretsi gabe, betoaren kasuan, lehen textua, edo gehiengo soilez haren aurkezpenetik bi hilabeteren epean, edo zuzenketei buruz erabakirik hartu, onartuz edo gehiengo soilez.
3. Senatuak betatzeko edo proiektua zuzentzeko duen bi hilabeteko epea berezko hogei egunetara gutxituko da Gobernuak edo Diputatuen Biltzarrak premiatsu deklaratutako proiektuetan.

91. artikulua

Erregeak, hamabost eguneko epean, berretsiko ditu Gorte Orokorrek onartutako legeak, eta promulgatu eta aginduko du haien berealaxeko argitalpena.

92. artikulua

1. Garrantzi handiko erabaki politikoak hiritargoaren kontsulta Referendumera meneratuak izan daitezke.
2. Referenduma deia Erregeak egingo du, Gobernuko lehendakariaren proposamenez, aldez aurretik Diputatuen Biltzarrak baimendurik.
3. Lege organiko batek arautuko ditu baldintzak eta Konstituzio hontan aurrez ikusitako Referendumaren moeta ezberdinetako prozedura.

HIRUGARREN KAPITULUA

Nazioarteko itunez

93. artikulua

Lege organikoaren bidez baimena itunak sinatzeko eman daiteke; hauk direla eta, nazioarteko erakunde edo instituzio bati atxekitzen zaio Konstituziotik ondorio daitekeen konpetentzien erabilpena. Gorte Orokor edo Gobernuari dagokio, itun hauk betetzeko garantia. Baita ere nazioarteko edo naziogaineko erakundeek emandako erabakiak ere bai.

94. artikulua

1. Estatu baietzaren prestapena, itunen bidez behartzeko, Gorte Orokorren aldez aurretikako autorizapena behardo da hurrengo kasuoten:
a) Politika kutsuzko itunetan.
b) Militar kutsuzko itunetan.
c) Estatuko osotasunari ikutzen dioten itun edo hitzarmenetan, I Tituluan ezarritako oinarrizko eskubide eta betebehar ituneten.
d) Herri Hazienda barnetzen dituzten finantziar betebehar itun edo hitzarmenetan.
e) Legeren baten baztertze edo aldatzean edo hura betetzeko eskatzen diren lege erabakiak itun edo hitzarmenetan.
2. Bai Kongresoa eta bai Senatua berealaxe informatuak izango dira gelditzen diren itun edo hitzarmenetako erabakiez.

95. artikulua

1. Nazioarteko tratatu bat egitekotan Konstituzioaren aurkako akordioak izanez, aldez aurretikako berrikuskeia Konstituzionala exijituko du.
2. Gobernuak edo edozein Ganbarak eska diezaioke Konstituzional Auzitegiari aldarrika dezala Kontraesanik dagoen ala ez.

96. artikulua

1. Nazio arteko tratauak balioz eginikakoak, Espainian ofizialki argitaratuz gero, barne ordenamenduan parte izango dira. Haien erabakiak bakar bakarrik derogatu, aldatu edo baztertu ahal dira itun baraietako araberan edo nazioarteko Deretxo arau orokorren arabera.
2. Nazioarteko itun eta hitzarmenak salatzeko, 94. artikuluan, hauk onartzeko aldez aurretikako prozedura hura erabiliko da.

IV. TITULUA

Gobernu eta Administraigoaz

97. artikulua

Gobernuak barne eta kanpoko politika gidatuko du, baita Administrazio zibil eta militarra eta Estatuaren defentsa ere. Aginte boterea eta arauzko ahalmena erabiliko ditu Konstituzio eta legeen arabera.

98. artikulua

1. Gobernua hauek osotzen dute: Lehendakariak, lehendakari ordeak, Ministru eta legeak ezartzen duen beste kideek.
2. Lehendakariak Gobernu ekintza gidatzen du eta Gobernuko beste kideen eginbeharrak koordinatzen, baina hauk izango dira zuzenki jestioaren erantzuna emango dutenak.
3. Gobernu kideek ezin dute beste ordezko eginbeharrik bete agindu parlamentario propioetik aparte, ez eta beste eginkizun publikorik ere beraien arduran satzen ez dena, ez eta ekintza profesional edo merkatalik ere.
4. Legeak arautuko ditu Estatutua eta Gobernu kideen elkarezintasunak.

99. artikulua

1. Diputatuen biltzarreko berriztatze bakoitzaren ondoren, eta beste balizko konstituzionaletan honela prozeditzean, Erregeak, aldez aurretikako kontsulta eginik errepresentapen parlamentarioaz, izendatutako talde politikoen errepresentapenarekin, eta Biltzarreko lehendakariaren bidez, Gobernuko lehendakaritzarako hautagarri bat proposatuko du.
2. Aipatutako apartatuaren araberan proposaturiko hautagarriak Diputatuen biltzar aurrean azalduko du sortu nahi duen Gobernuaren egitarau politikoa; eta Ganbaren konfidantza eskatuko du.
3. Diputatuen Biltzarrak, bere kideen gehiengo absolutuaren botuaz kandidatu hari konfidantza emango balio, Erregeak lehendakari izendatuko du. Gehiengo hura lortu ezik, proposamen berdina lehengotik berrogei eta zortzi ordu igaroz gero berriz ere botoetara eramango da, eta konfidantza emanda bezala, ulertuko da gehiengo soila lortzen baldin bada.
4. Aipatu botazioak eginik inbestidurarako konfidantza ez baldin bada jasotzen, goiko apartatuetan aurrez ikusitako elkar jarrai proposamenak tramitatuko dira.
5. Lehen botazio eta ibestiduratik bi hilabete igaro ondoren, Biltzar konfidantzarik inork ez baldin badu jaso, Erregeak Ganbara biak deuseztatuko ditu eta hauteskunde berriak bilerazi Biltzarreko lehendakariaren berrespenaz.

100. artikulua

Beste Gobernu kideak Erregeak izendatu edo baztertuko ditu lehendakariaren proposamenez.

101. artikulua

1. Gobernua hauteskunde orokorren ondoren deuseztatuko da, baita Konstituzioan aurrez ikusitako konfidantza parlamentarioa galtze kasuetan edo bere lehendakariaren uztean edo hiltzean.
2. Deuseztaturiko Gobernuak, Gobernu berriak karguz jabetu arte eginbeharrak beteko ditu.

102. artikulua

1. Lehendakariaren eta Gobernuko beste kideen erantzukizun kriminala, dagoklonean, exijigarri izango da Gorengo auzitegiko Penal Sail Aretoan.
2. Salakuntza traizioz edo halen funtzio erabilpenetan Estatuko Seguritatearen aurka joango balitz, bakar bakarrik plantea daiteke Biltzarreko kideen laugarren partearen iniziatibaz eta bere gehiengo absolutoaren onartzeaz.
3. Erret grazi eskubidea artikulu hontako balizko batetarako ere ezin da aplikagarri izan.

103. artikulua

1. Administraigo publikoak objetiboki zerbitzatzen ditu interes orokorrak eta efikazia, jerarkia, deszentralizapen, deskonzentrapen eta koordinaketa oinarriz lege eta Deretxoaren mendura osoaren arabera jokatzen du.

2. Estatutko Administraigo organoak legearen arabera sortu, zuzendu eta koordinatuak izango dira.
3. Legeak arautuko du herri funtzionarien estatutua, funtzio publikoan sartzea meritu eta gaitasun printzipioez, sindikapen eskubidean iharduntzeko berezitasunak, elkartezintasun sistema eta beraien eginkizunak betetzean inpartzialtasun garantiak.

104. artikulua

1. Indar eta Seguritate taldeak, Gobernuaren mende, betebehar bezala eskubide eta askatasun iharduntze librearen babestea eta hiritargoaren seguritatea garantizatzea.
2. Lege organiko batek finkatuko ditu eginbeharrak, ekintzako oinarrizko printzipioak eta baita, Indar eta talde, seguritate estatutuak ere.

105. artikulua

Legeak zera arautuko du:
a) Hiritarren audientzia, zuzenki edo legeak aitortutako erakunde eta elkarteak, haiei dagozkien administrai erabakietako elaborapen prozeduran.
b) Artxibu eta Erregistroetara hiritarren sarbidea, Estatuko defentsa eta seguritateari dagokiona, delituen hautemetez eta pertsonen barrukotasuna salbuespenduz.
c) Sortu behar den administrai ekintzaren prozedura, eta behar denean, interesatuaren entzutea garantizatuz.

106. artikulua

1. Auzitegiek kontrolatzen dituzte arauzko ahalmena eta administrai ekintzaren legalitatea, eta hau justifikatzen duten helburuen menpekotasuna.
2. Partikularrek, legeak finkatutako araberan, jasaten duten edozein gaitz, ondasun eta eskubideengatik kalte orderako eskubidea dute, indar nagusigo batez izan ezik, gaitza herri zerbitzuetarako ondorio bat denean.

107. artikulua

Estatu Kontseilua Gobernu gorengo organo kontsultiboa da. Lege organiko batek arautuko ditu haren konposapen eta konpetentzia.

V. TITULUA

Gobernu eta Gorte Orokorren arteko harremanez

108. artikulua

Gobernuak erantzuten du solidaritatez Diputatuen Biltzarraren aurrean bere jestio politikoaz.

109. artikulua

Ganbarek eta beren Batzordeek, jaso ditzakete, beren lehendakarien bidez, Gobernuarengandik honen Departamentu eta Estatuko edozein agintarei eta Erkidego autonomoengandik behar dituzten informapen eta laguntza.

110. artikulua

1. Ganbarek eta beren Batzordeek Gobernuko kideen presentzia eska dezakete.
2. Gobernuko kideek Ganbara eta Batzordeetako bilkuretara sarbiderik ba dute eta baita haietan entzun arazteko ahalmena ere, eta eska dezakete, beraien Departamenduetako funtzionariek, haietan informatzea.

111. artikulua

1. Gobernua eta bere kide guztiak Ganbaretan formulatzen diren eskaera eta galderetara menderatuta daude. Eztabaida moeta hontarako Barne Erregeiek astebeteko epe gutxiengoa ezarriko dute.
2. Edozein eskaerak arrazoi eman dezake mozio batetara bertan Ganbarak bere jarrera ager dezan.

112. artikulua

Gobernu Lehendakariak, Ministru Kontseiluan aurrez ikusitako eztabaidaz Diputatuen biltzar aurrean ager dezake bere egitarauko konfidantza arazoa edo politika orokorraren adierazpen bat. Konfidantza emanda bezala ulertuko da Diputatuen gutxiengo soilak haren alde botua ematean.

113. artikulua

1. Diputatuen Biltzarrak Gobernu erantzukizun politikoa eska dezake zentsura mozioaren gehiengo absolutu aukeraren bitartez.
2. Zentsura mozioa, gutxienez Diputatuen hamargarrenak proposatua, eta barnetu beharko du Gobernuko lehendakaritzarako hautagarri bat.
3. Zentsura mozioa ez da botatu beharko bere aurkezpena egin eta bost egun igaro arte. Epe honen barruko bi egunetan hautakizun proposamenduak aurkez daitezke.
4. Zentsura proposamendua Biltzarrak onartzen ez baldin badu haren sinatzaileek ezin dute aurkeztu besterik epe berdinetako bilkuretan.

114. artikulua

1. Biltzarrak Gobernuari konfidantza ukatzen badio, honek bere dimisioa Erregeari aurkeztuko dio, bereziaxe Gobernuko Lehendakaria izendatuz, 99. artikuluan erabakitzen den arabera.
2. Biltzarrak beste zentsura proposamen bat onartzen baldin badu, Gobernuak bere dimisioa Erregeari aurkeztuko dio eta hau barnetzen den hautagarria Ganbararen konfidantza jasoa bezala izango du 99. artikuluan aurrez ikusten den ondorioetarako. Erregeak Gobernu Lehendakari aurkeztuko du.

115. artikulua

1. Gobernu Lehendakariak, Ministru Kontseiluaren aurrez ikusitako deliberapenaz, eta bere ardurakizun bakarraz, proposa dezake Biltzar, Senatu edo Gorte Orokorren deuseztatzea, hura Erregeak dekretatua izanik. Dekretu deusezteak hautezkundeen data finkatuko du.
2. Deusezte proposamena ezingo da aurkeztu zentsura proposamendua tramitean ari denean.
3. Ez da deusezte berririk izango azkenengotik urte bat igaro arte, 99. artikuluko 5. apartatuan erabakitzen dena ez baldin bada.

116. artikulua

1. Lege organiko batek arautuko ditu alarma, salbuespen eta sitiapen egorak eta baita dagozkien konpetentzia eta mugaketak.
2. Alarma egoera Gobernuak aldarrikatuko du Ministro Kontseiluan erabakitako Dekretuaren bidez gehien jota hamabost eguneko epea izanik. Diputatuen biltzarrari kontua emanez, hura hontarako berealaxe bildurik eta beronen baimen gabe epe hura ezingo da luzatu. Dekretuak finkatuko du lurralde barrutia eta noraino heltzen diren aldarrikatzen denaren ondorioak.
3. Salbuespen egoera, Gobernuak aldarrikatuko du Ministru Kontseiluan erabakitako dekretuaren bidez, Diputatuen Biltzarrean aurrez ikusitako baimenez. Salbuespen egoera baimentze eta aldarrikatzeak expreski bere mugak finkatu behar ditu, noraino heldu ahal denaren lurralde ingurunea eta haren iraupena, hau hogei eta hamar egunetik gora luzatu ezinik, baldintza berdinez, epe berdinera luzatu ahal izanik.
4. Sitiapen egoera Diputatuen Biltzarreko gehiengo absolutuak aldarrikatuko du, Gobernuaren proposamen exklusiboz. Biltzarrak finkatuko ditu haren lurralde ingurunea, iraupen eta baldintzak.
5. Biltzarra ezin egingo da deuseztatu artikulu hontan barnetzen diren egoerak aldarrikaturik dauden bitartean, automatikoki Ganbarak bilerariak izanik bilkura garaian ez baldin badira. Hauen funtzionamendua, Estatuko beste botere Konstituzionalak bezala ezingo dira eten egoera hauek dirauten bitartean.
Biltzarra deuseztatuz edo haren agintza amaituz aipatutako edozein egoera gertatzen baldin bada, biltzarreko konpetentziak Diputazio Iraunkorrak bereganatuko ditu.
6. Alarma, salbuespen eta sitiapen egoera aldarrikatzeak ez du Gobernuaren erantzukizun oinarria aldatuko, ez eta haren funtzionariena ere Konstituzio eta legeetan aitorturik.

VI. TITULUA

Auzi Boterez

117. artikulua

1. Justizia herriari dario eta Erregearen izenean auzi botereko Epaileri eta Majistratuek administratzen dute, haik independiente, mugi ezinak, erduradun eta bakarrik legearen aginpera menderatuak.

2. Epailari eta Majistratuak ezin dira banatu, eragotzi, tokiz aldatu ez eta erretiratu arrazoi batengatik ez baldin bada eta legean aurrez ikusitako garantiez.

3. Era guztietako auzietan jurizdizio ahalmenaren ihardunketa, epaituz eta epaitutakoa betez, legeek finkatutako Epaitegi eta Auzitegiei dagozkie zehazki, konpetentzia arauak eta berauek ezartzen duten prozeduraz.

4. Epaitegi eta Auzitegiek goiko apartatuak markatutako funtzioetatik at ez dute ihardungo eta bai legeak expreski emandakoak edozein eskubideren garantiaz.

5. Batasun jurisdizionalaren funtsa Auzitegien eratze eta funtzionamenduen oinarria da. Legeak arautuko du jurisdizio militarraren ihardunteza zehazki militar hesparruan eta sitiapen egoera balizkoetan Konstituzioko printzipioen arabera.

6. Salbuespen Auzitegiak galerazten dira.

118. artikulua

Beharrezkoa da betetzea Epailari eta Auzitegien epaitzak eta beste erabaki tinkoak eta baita hauek eskaturiko laguntza eskaintzea epaibide garaian eta erabakitakoa betetzean.

119. artikulua

Justizia dohainik izango da legeak honela erabakitzen duenean eta, edozein eratan, auzitan aritzeko baliakizun nahikorik ez dutela erakusten dutenentzat.

120. artikulua

1. Auzi Ekintza jendaurrekoak izango dira, prozedura legeek aurreikusten duten salbuespenez.

2. Prozedura nagusiki ahozkoa izango da, batez ere kriminal arazoetan.

3. Epaiak arrazoituak izango dira eta jendaurrean aldarrikatuak.

121. artikulua

Epailari errakuntzagatik egindako kalteek, eta ere berean administra Justiziako funtzionamendu normalaren ondorio bezala direnek kalte ordea eskubide bat emango dute Estatuaren kontura, legearen adostasunez.

122. artikulua

1. Auzi botereko lege organikoak finkatuko du Epaitegi Auzitegien izaera, funtzionamendu gobernamendua, baita karreradun Epailari eta Majistraduen estatutu juridikoa Talde bakar bat eginik, eta Justizia administralgoaren zerbitzutako pertsonalarena.

2. Botere Judizialaren kontseilu orokorra bere gobernamendu organoa da. Lege organikoak bere estatutua ezarriko du eta bere kideen elkarezintasun eta funtzioen errejimena, batez ere izendatze, igote, inspekzio eta errejimen diziplinario arazoetan.

3. Auzi botereko Kontseilu Orokorra Auzitegi Gorenaren lehendakariak osotua izango da, berak lehendakatuko du, eta gainera Erregeak bost urtetarako izendatutako hogei kideez. Hauetatik, lege organikoak ezartzen duen eran hamabi maila judizial guztietako Epailari eta Majistratu; lau Diputatuen Biltzarraren proposamenez eta lau Senatuarenean; kasu biotan abokatu eta beste jurista kideen bost zatitako gehiengoak hautatuak, denok aitorturiko honpetentziakoak eta beren profesioetan hamabost urte baino gehiagotan arituak.

123. artikulua

1. Auzitegi Gorenak, Espainia osoko jurisdizioaz, maila guztietako gorengo organo jurisdizionala da, garantia konstituzional gaietako erabakietan izan ezik.

2. Auzitegi Gorengo Lehendakaria Erregeak izendatua izango da, Auzi Botereko Kontseilu Orokorraren proposamenez, legeak finkatzen duen arabera.

124. artikulua

1. Ministeritza Fiskalak, beste organoei agindutako funtzioetatik salbu, misio bezala legalitatearen defentsarako justiziaren eraginpena bultzatzea du, baita hiritargoaren eskubideak zaintzea eta legeak berez edo interesatuen eskabidez babestutako interes publikoa begiratzea, eta baita Auzitegien independentziaz beilatzea eta hauen aurrean giza sozialaren asetasuna eskuratzea.

2. Ministeritza Fiskalak ihardunten ditu bere funtzioak dagozkion organoen bitartez batasun ekintza eta dependentzia jerarkikaren printzipioen arabera, eta edozein kasutan legalitate eta inpartzialtasunari lotuz.

3. Legeak arautuko du Ministeritza Fiskaleko estatutu organikoa.

4. Estatu Fiskal Orokorra Erregeak izendatua izango da, Gobernuaren proposamenez, auzi botereko Kontseilu Orokorra entzun ondoren.

125. artikulua

Hiritargoak herri ekintzan ihardun ahal du eta Epaimahaiko erakundearen bitartez Justizia Administralgoan parte hartu, legeerara eta berak finkatzen dituen prozesu penaletan, eta baita ohiturazko eta tradizional auzitegietan ere.

126. artikulua

Polizia judiziala Epailari, Auzitegi eta Ministeritza Fiskalaren menpe dago legeak finkatzen duen arabera, delitu ikertze funtzioetan eta delitugilearen aurkitze eta asegurantzetan.

127. artikulua

1. Epailari eta Majistratu, baita Fiskalek lanean ari direnean, ezin dute beste kargu publikorik ukan, ez eta alderdi politiko edo sindikatoetan parterik hartu ere. Legeak ezarriko ditu Epailari, Majistradu eta Fiskalen sistema eta elkarte profesionalen moetak.

2. Legeak ezarriko du auzi botere kideen elkartezineko errejimena, eta haien independentzia osoa aseguratu beharko du.

VII. TITULUA

Ekonomia eta Hazienda

128. artikulua

1. Herri guztiko aberastasuna, honen era guztiak eta beronen jabetza edozein moetatakoa izanik interes orokorraren menpe dago.

2. Ekonomia ekintzan herri iniziatiba aitortzen da. Lege bitartez erreserba dakioke sektore publikoari baliazpen edo behar beharrezko zerbitzuak, batez ere monopolio kasuetan eta era berean, interes orokorrak exijitzen duenean, entrepresetan eskusartzea erabakiz.

129. artikulua

1. Legeak ezarriko ditu Giza Asegurantzan eta organismo publikoen ekintzan interesaturik parte hartze erak, hauen eginbeharrak bizitza kalitate edo ongitasun orokorrari zuzenki ikusten baitio.

2. Botere publikoek bultzatuko dituzte eglazki entrepresan parte hartze era ezberdinak eta bizkortuko, lejislapen egoki baten bidez, kooperatiba elkarteak. Baita jarriko dituzte bideak langileek haien bitartez ekoizpen medioetako propietatean sarbiderik izan dezaten.

130. artikulua

1. Botere publikoek sektore ekonomiko guztien aurreramen eta modernizapenean lagunduko dute eta, batez ere, nekazaritza, abeltzantza, arrantza eta eskulangintza espainol guztien bizitza maila berdina izan dadin.

2. Helburu berdinez, mendi aldeai tratamendu berezi bat eskainiko zaie.

131. artikulua

1. Estatuak, lege bidez, planifika dezake ekonomik ekintza orokorra beharrizan kolektiboei erantzuteko, herrialde eta sektoreetako aurreramendua oreka eta armonizatzeko, errenta eta aberastasun hazkuntza eta hauen banaketa zuzenagoa piztu.

2. Gobernuak planifikapen proiektuak elaboratuko ditu Erkidego autonomoek emandako aurreikuspenen arabera eta sindikatuen kontseilaritza eta laguntzaz, eta baita erakunde profesional, entrepresarial eta ekonomiko-naz ere. Hartarako, kontseilu bat sortuko da, honen osotze eta funtzioak legez aurrera eramanik.

132. artikulua

1. Legeak arautuko du herri ondasunen errejimen juridikoa eta baita komunalak ere, bestelaketa, ezinbestekotasun eta

ezinbetetasun printzipioetan oinarriturik, baita haien gaitzestasunean ere.

2. Domeinu publiko estataleko ondasunak legeak finkatzen dituenak dira eta, edozein kasutan, itsas-lehor aldea, hondartzak, itsas ingurunea eta ekonomik aldeko berezko baliapenak eta plataforma kontinentarra.

3. Legez arautuko dira Estatu Ondorea eta Ondore Nazionala, honen administralgo, defentsa eta jagotea.

133. artikulua

1. Zergak ezartzeko, jatorrizko ahalmena, lege bitartez, exklusiboki, Estatuari dagokio.

2. Erkidego Autonomo eta tokiko Gorporazioek ezer eta exiji ditzakete zergak, Konstituzio eta legeen arabera.

3. Edozein etekin fiskala Estatuko zergei dagokiena legearen arabera ezarri beharko da.

4. Administralgo publikoek bakarrik betebehar finantziarrak kizkur ditzakete eta gastuak sor, legeen arabera.

134. artikulua

1. Gobernuari dagokio Estatuko Aintzinkontu Orokorren elaborapen eta Gorte Orokorrei haren azterketa, zuzenketa eta onartzea.

2. Estatuko Aintzinkontu Orokorrak urtero aldatuko dira, sail publiko estataleko gastu eta sarrera guztien osotasuna barneratzen dute eta beraietan konsignatuko da Estatuko zergei dagozkien mozkin fiskalen prezioa.

3. Gobernuak Diputatuen Biltzarraren aurrean Estatuko Aintzinkontu Orokorrak aurkeztu beharko ditu, gutxienez hiru hilabete lehenago, urtea bukatu baino lehen.

4. Aintzinkontuen legea dagokion ekonomik ihardunaldiaren lehen eguna baino lehen onartzen ez baldin bada, automatikoki lehenagoko ihardunaldiko Aintzinkontuak berrien onartzea iritsi arte luzatuak izango dira.

5. Estatuko Aintzinkontu Orokorrak onartuz gero, Gobernuak lege proiektuak aurkez ditzake gastu publikoen gehitzea edo gutxitzea barneturik ihardunaldi aintzinkontuetako sarrerei dagozkienez.

6. Edozein proposamen edo zuzenketa kredituetan gehitze edo gutxitzea barnetzen duenak Gobernuaren baimena behar du tramitapena lortzeko.

7. Aintzinkontuen legeak ezin du zergarik sortu. Alda dezake oinarrizko zerga lege batek honela aurreikusten duenean.

135. artikulua

1. Gobernua legez baimendua izan behar du Zor Publikoa igortzeko edo kreditua kizkurtzeko.

2. Interesen ordainketa egiteko kredituak eta Estatuko Zor Publikoaren kapitala beti ulertuko dira aintzinkontuen gastuen egoeran sarturik eta zuzenketa edo aldatzerik ez dute izango emisio legearen baldintzetara egokitzen diren bitartean.

136. artikulua

1. Kontu Auzitegia da kontuen fiskalizatzaile goren organoa eta Estatuko gestio ekonomikoarena eta baita publiko sailarena ere. Zuzenki Gorte Orokorren menpe izango da eta bere funtzioak haien ordezkaritzez ihardungo ditu Estatuko Kontu Orokorreko aztertze eta frogaketan.

2. Estatu kontuak eta sail publiko estatalarenak kontu Auzitegiari errendituko zaizkio eta honek zentsuratuko ditu.

Kontu Auzitegiak, bere eremuaren kaltetan gabe, Gorte Orokorretara urtero txosten bat bidaliko du eta bertan, dagokionean, haren eritziz hutsak edo ardurakizunak egiten direnean komunikatuko ditu.

3. Kontu Auzitegi kideek independentzia eta mugiezintasuna izango dute eta Epailarien antzera elkarezintasunaren menpe egongo dira.

4. Lege organiko batek arautuko ditu Kontu Auzitegiko konposamen, eratze eta funtzioak.

VIII. TITULUA

Estatu lurralde eratzeaz

LEHEN KAPITULUA

Oinarri Orokorrak

137. artikulua

Estatua lurraldez udal, probintzia eta sortuko diren Erkidego Autonomoez eratzen da. Entitate guztiok berei dagozkien interesen.

138. artikulua

1. Estatuak garantizatzen du solidaritate oinarriaren egiazko betetzea konstituzioko 2. artikuluan konsakratua, lurralde espainoleko parte ezberdinetan, oreka ekonomiko, egokl eta justuaren jarrera babestuz, eta bereziki intsular egoera kontutan edukirik.

2. Erkidego Autonomo ezberdinetako Estatutuen desberdintasunek inoiz ez dute esan nahiko pribilejio ekonomiko edo sozialik.

139. artikulua

1. Espainol guztiek eskubide eta betebehar berdinak dituzte Estatuko edozein lurraldetan.

2. Inolako agintarik ez dezake har zuzenki edo zeharki zirkulapen askatasunak oztopatzen dituen neurririk ez eta Espainiako lurralde osoan pertsonen ezarrera eta ondasunen eta zirkulapen askatasunik ere.

BIGARREN KAPITULUA

Tokiko Administralgoaz

140. artikulua

Konstituzioak udalen autonomia garantizatzen du. Udalek legezko nortasun osoa dute Udalen gobernua eta administralgoa, alkate eta kontzejalez horniturikó udalbatzarrei dagozkie. Kontzejalak auzakideek aukeratuaz izango dira, legeak esaten duen erara eta bozketa orokor, berdin eske, zuzen eta isil baten bidez. Alkateak kontzejalek edo auzakideek aukeratuak izango dira. Batzarre irekiaren beharrak legeak arautuko ditu

141. artikulua

1. Probintzia legezko nortasun osoa duen toki erakunde bat da, Estatuaren betekizuna betetzeko eta udalek eta lurralde antolaketek mugatua. Probintziaren edozein muga aldaketa Gorte Orokorretan eta Lege Organiko baten bidez egin behar da.

2. Prohibintzietako gobernua eta administralgo autonomoa Diputazio edo bestelako ordezkotasundun erakundeei dagokie.

3. Zilegi da pribintzi arteko udal elkarteak sortzea.

4. Arkipielagotan irla bakoitzak gainera bere administralgoa izango du Kabildu edo Kontseilu eran.

142. artikulua

Tokiko Haziendak bertako Erakundei dagozkien betekizunei aurrea emateko beharrezkoa den dirua izan beharko dute, eta diru iturri zihurrenak, berek ezarritako zergek, eta Erkidego Autonomo eta Estatutokoetatik datozkienek osatuko dute.

HIRUGARREN KAPITULUA

Erkidego Autonomoez

143. artikulua

1. Konstituzioaren 2. artikuluak onartzen duen autonomia eskubidea erabiltzeko, mugakide izanik eta historia, kultur eta ekonomi ezaugarri berdintsuk dituzten probintziak, irla lurraldeak eta historikoki herrialde nortasun bat izan dutenek bere autogobernua lor dezakete eta titulu hontan eta prestatzen dituzten Estatutuak beteaz Erkidego Autonomo bat sor dezakete.

2. Autonomi bidea Diputazioei edo irla arteko Erakundeari dagokie, eta Probintzia edo irla bakoitzaren hauteskunde zerrendaren gehiengoa osatzen duten Udalen hirutik bi. Betebehar hauk, tokiko erakundeak alor hontan lehen erabakia hartuz gero, hurrengo sei hilabetetan bete beharko dira.

3. Inlziatiba hau, aurrera ateratzen ez bada, bost urte igaro ondoren bakarrik berregin daiteke.

144. artikulua

Gorte Orokorrek, lege organikoaren bidez, eta nazioaren onerako erabaki dezakete:

a) Erkidego Autonomoak onartzea, nahiz eta bere mugak probintzia baten barnean gelditu, eta 143. artikuluaren lehen sailean eskatzen dena bete ez.

b) Probintzia eraketa barnean sartu gabeko lurralde bati Autonomi Estatutua ematea edo erabakitzea.

c) 143. artikuluaren 2. sailak aipatzen duen tokiko erakundearen iniziatiba, haren ordez betetzea.

145. artikulua

1. Inolaz ere ez da onartuko Erkidego Autonomoaren Federakuntzarik.

2. Estatutuetan aipa daitezke, Erkidego Autonomoek dituzten gestio eta eginkizunak betetzeko elkartea eta Gorte Orokorren kontu emateko aldian, beharrezko gertatzen diren baldintza betebehar eta erak. Bestelakoetan, Erkidego Autonomoen lankidetza Gorte Orokorren baietza behar du.

146. artikulua

Estatutu proiektua Diputazioetako edo Irla arteko erakundeetako ordezkariek eta Gorteetako Diputatu eta Senatoreek osaturiko biltzarrak egina izango da, eta lege bezala onartua izateko Gorteetara bidalia.

147. artikulua

1. Konstituzio honen arabera, Erkidego Autonomo bakoitzeko oinarrizko legeak izango dira Estatutua, eta Estatua bere lege ordenamenduaren zati bat bezala onartu eta zainduko du.

2. Autonomi Estatutua bete beharko ditu ondorengo baldintzok:

a) Historikoki ondoen dagokion Erkidegoaren izena

b) Lurraldearen mugatzea

c) Beren erakunde autonomoen izen antolaketa eta egoitza

d) Konstituzioaren arabera beregainaturiko eginkizunak eta betetzeko beharrezko diren zerbitzuen aldaketa egiteko oinarriak.

3. Estatutuak aldatzeko, bertan jarritako baldintzak bete beharko dira eta nahi eta ezkoa gertatzen da, Gorte Orokorrek onartzea lege organiko baten bidez.

148. artikulua

1. Erkidego Autonomoek har dezaketen honpetentziak alor hontakoak dira:

1.° Autogobernurako Erakunde antolaketa.

2.° Bere lurralde barneko Udalen barrutia aldaketa, eta orokorki Estatuaren administralgoari tokiko gorporazioetan dagozkiona, eta tokiko errejimen legeak onartzen duen aldaketa maila.

3.° Lurralde, hirigintza, eta etxegintza eraketa.

4.° Erkidego Autonomoaren lurralde barrutiaren zehar igarotzen diren eta interesgarri zaizkion Herri Lanak.

5.° Erkidego Autonomoaren lurralde barrutian zehar bakarrik igarotzen diren trenbide eta bideak eta ere berean trenbidez, bidez, eta kablez egiten den garraioa.

6.° Babesportu, jolasportu eta aideportua eta, orokorki, merkatal harremanetarako erabiltzen ez direnak.

7.° Nekazaritza eta abeltzantza, ekonomi eraketa orokorraren arabera.

8.° Baso eta oiharronurak.

9.° Ingurugiroaren zaintzearen jestioa.

10.° Erkidego Autonomo barneko urindar, ubide, eta erregadio aitzinasmo, eraikitze eta erabiltzeak; metalurak eta urberoak.

11.° Itsas bazterreko arrantza itsaskikintza, arrainzaintza, ehiza eta ibaiarrantza.

12.° Lurralde mailako feriak.

13.° Estatu osorako ekonomi plangintza barnean, Erkideo Autonomoaren ekonomi aurrerakuntza bultzatzea.

14.° Eskulangintza.

15.° Erkidego Autonomoarentzat interesdun diren museo, biblioteka eta musika kontserbategiak.

16.° Erkidego Autonomoarentzat interesgarri den orolkarri ondarea.

17.° Kultura eta ikerkuntza bultzatzea eta dagokionean, Erkidego Autonomoaren hizkuntza irakastea.

18.° Bere lurralde barrutian turismoa bultzatu eta eratzea.

19.° Kirolgintza bultzatu, eta aisia betegarri egokiak aurkitzeko.

20.° Gizarte Laguntza.

21.° Osasun eta garbidura zerbitzuak.

22.° Bere egoitzak eta instalapenak zaintzea. Lege organiko baten arabera bertako ertzainen zerbitzua antolatzea.

2. Bost urte igaro ondoren Estatutua aldatuz, Erkidego Autonomoek bere eginkizunak zabal ditzakete Konstituzio honen 149. artikuluan dion eran.

149. artikulua

1. Estatuari bakarrik dagozkio ondorengo alor hauk:

1.° Edozein espainolek dituen eskubide eta Konstituzioa ematen dizkion eginkizuna betetzeko beharrezkoa den egoera arautzea.

2.° Naziotasun barneraldatze, migratze, arrostze eta ihesleku arazoak.

3.° Nazioarteko harremanak.

4.° Defentsa eta Indar harmatuak.

5.° Justiziaren administralgoa.

6.° Saleroskeia, zigor eta presondegietako legegintza; auzitegietako legegintza. Erkidego Autonomoetan bere berea duten legerlaren berezitasunak salbu.

7.° Lanekiko legegintza Erkidego Autonomoen alor honetan izan dezaketen eginkizunak salbu.

8.° Zibil legegintza edo bestelako deretxo berezlak diren tokietan, Erkidego Autonomoek hauk gordetzeko, aldatzeko edo aitzinatzeko duten eskubidea salbu. Beti arau juridikoen aplikapen eta eraginkortasunari dagozkion erregelak, ezkontzarekiko erei dagozkien harreman juridiko-zibilak, Erregistro eta fzkribu publikoen eraketa; Kontratuetako betebeharren oinarriak, lege arteko eztabaida konpontzeko arauak, deretxoaren iturburuak finkatzea, azken kasu honten Foru errejimen edo Deretxo berezien arauak errespetatuz.

9.° Industria eta intelektual jabego legegintza.

10.° Aduana eta mugesari errejimena; eta kanpoerekiko merkatalgoa.

11.° Dirugintza, dibisak, diru aldaketa eta bihurgarritasunak; kredito, baku eta Asegurantza eraketa oinarriak.

12.° Pisu eta neurri legegintza; eta ordu ofiziala erabakitzea.

13.° Ekonomi eragintza. plangintza orokorraren oinarriak eta koordinaketa.

14.° Hazienda Orokorra eta Estatuaren Zorra.

15.° Zientzia eta Teknik mailako ikerkuntza bultzatzea eta koordinatzea.

16.° Kanporako Osasun Zerbitzua: Zerbitzuon oinarritze eta koordinaketa. Botikarekiko legegintza.

17.° Giza Asegurantzaren oinarrizko legegintza eta ekonomi errejimena, Erkidego Autonomoek alor hontan duten eskuhartzea salbu.

18.° Administralgo Publikoaren legegintza oinarriak, eta funtzionarien arautegi errejimena, beti arau hauetan administratu guztiak era berean tratatuz; administral prozedura orokorra, beti Erkidego Autonomoen berezitasunak salbu; nahi eta nahiezko desjabetze legegintza; administral kontzesio eta kontratuei buruzko legegintza eta administral publiko orokorren erantzukizun era.

19.° Itsasarrantza, Erkidego Autonomoei alor hontan ematen zaizkien ahalmenak salbu.

20.° Itsasgarraioa eta itsasuntzien banderak, itsasbazterreko argitze lana, interesgarri diren itsasportu eta aireportu; aire espazio, abiaidi eta garraioen kontrola, metereoloji albiste eta airauntzien matrikulapena.

21.° Erkidego Autonomo baten mugaz kanpoko trenbide eta lehor garraioa; komunikabide errejimen orokorra; trafiko eta motordun guztien antolaketa; pozta eta telekomunikabidea, aire edo itsasazpiko kable komunikabideak eta irrati komunikebidea.

22.° Erkidego Autonomo baten mugaz kanpo dauden uren legegintza, erakata, eta baimena eta beste Erkidego bat ukitzen dituzten Indar instalapenak onartu edo elektrik Indarra kanpora bidaltzea.

23.° Ingurugiroarekiko oinarrizko legegintza; Ingurugiroa zaintzeko Erkidego Autonomoek har ditzaketen erabaki gehiagarriak salbu. Baso oihan eta ganadu bideei buruzko oinarrizko legegintza.

24.° Denen onerako diren Herri Lana, Erkidego Autonomo bat baino gehiago ukitzen badute.

25.° Meha eta enerji errejimenerako oinarriak.

26.° Zuharmagintza eta lehergailugintza, eta saimenta edukitze eta erabiltze.

27.° Prentsa, irrati eta telebisteren errejimenerako oinarri araua eta orokorki giza komunikabide guztiena, alor hontan Erkidego Autonomoek izan dezaketen ahalmena salbu.

28.º Espainiako kultur, arte, eta oroikarri ondarea, jagotea, kanporatu edo indarrez ez arrapatzeko; Estatuaren museo, biblioteka eta artxiboak, Erkidego Autonomoek izan dezaketen ahalmena salbu.

29.º Asegurantza publikoa, lege organikoaren arabera eta Erkidego Automoen estatutuak jarraikiz sor daitezkeen artzaintza ahalmenaz salbu.

30.º Akademik edo Profesional mailako titulua eskuratzeko, beharrezko diren baldintza, emate edo onartzeko eraketa eta Konstituzio honen 27. artikulua eratzeko behar diren oinarrizko arauak, botere publikoak alor hontan duen betebeharra bete ahal izateko.

31.º Estatu mailako estadistika.

32.º Referendum bidez, herri kontsulta egiteko deiaren baimena.

2. Erkidego Autonomoek izan dezaketen ahalmenez kanpo, Estatuak bere funtsezko eginkizun eta betebehar bat bezala hartuko du kultur zerbitzua, eta Erkidego Autonomoen arteko kultur harremanak erraztuko ditu.

3. Konstituzio hontan zehazki Estatuari atxeki ez zaizkion eginkizunak eta beraien Estatutuen arabera Erkidego Autonomoen betebeharra gertatuko dira. Autonomi Estatutuak beregenatu ez dituen eginkizunak Estatuaren betebehar gertatuko dira eta auzi garai batetan Estatuaren legeak nagusituko dira Erkidego Autonomoen gainetik, hauek expreski beregenatu ez duten alor guztietan. Dena dela Estatu mailako Deretxoa, Erkidego Autonomoen deretxo osagarri izango da.

150. artikulua

1. Gorte Orokorrek Estatu mailako eginkizunetan eman diezaiokete Erkidego Autonomo bati edo guztiei Estatu mailako legearen oinarri, funts eta jarraikideen arabera legegintzarako ahalmena. Auzitegien ahalmenez kanpo, lege ereduak zehaztuko du Erkidego Autonomoek emanikako legeak kontrolatzeko Gorte Orokorrek jarraikiko duten bidea.

2. Estatuak lege organiko baten bidez Erkidego Autonomoen esku utz dezake berari dagozkion eta aldagarri gertatzen diren zenbait eginkizun. Arazo bakoitzean legeak aurrez ikusi behar ditu diru iturri aldaketa eta Estatuak bere esku gordetzen dituen kontrolbideak.

3. Hiritar guztien ongitasunak hala eskatzen duenean, Estatuak eman ditzake lege batzu Erkidego Autonomoek jarritako legeak armonizatzeko nahiz eta legeok hauen esku dauden gaiak erautu. Gorte Orokorrei dagokien Ganbara bakoitzeko gehiengo absolutu baten bidez, behar horren neurrera.

151. artikulua

1. Konstituzio honen 148. artikuluaren bigarren zatian aipatzen diren bost urteak ez dira igaro behar, Autonomi prozesua 143. 2. artikuluak jartzen duen epean, Diputazio edo Irla arteko Erakundeez gain probintzia bakoitzeko hauteskunde zerrendaren gehiengoa osatzen duten udaletan lautik hiruk onartzen dutenean, eta lege organikoaren arabera probintzia bakoitzean bozemaile gehiengo absolutuak eta referendumaren bidez birresten duenean.

2. Aurreko artikuluaren arabera, Estatutua egiteko prozedura hauxe dateke:

1.º Gobernuak Autonomia nahi duten lurraldeetako Diputatu eta Senatoreak deituko ditu, biltzarra sortu eta Estatutu egin dezaten, biltzarkide gehiengo absolutuak onartuz.

2.º Parlamentarien biltzarrak Estatutu proiektua onartuz gero, Kongresuko Konstituzio batzordearengana bidaliko da, eta batzorde honek hurrengo bi hilabeteetan, biltzarkide batzuren laguntzaz aztertuko du, erabateko moldaketa burutzeko.

3.º Akordio batetara helduko balira, delako testua Referendumaren bidez bozkatua izan beharko du, Estatutu proiektuko lurralde barrutian dauden probintzietan.

4.º Probintzia bakoitzean, emanikako balio duten bozen gehiengoak onartua bada, Estatutu proiektua Gorte Orokorretara bidaliko da. Bi Ganbara osoek bildurik bere birrespena eman beharko diote. Estatutua onartua izan ezkero, Erregeak izenpetuko du eta lege bezala jakin araziko da.

5.º Zenbaki honen bigarren zatian aipatzen den akordioa lortzen ez bada, Estatutu proiektua Gorte Orokorretan aitzinlege bat bezala tramitatuko da. Gorteek onartzen duten aitzinlege hori Referendum bidez bozkatua izango da, Estatutu proiektuko lurralde barrutian dauden probintzietan. Probintzia bakoitzeko ballodun bozen gehiengoak onartua bada, aurreko zatian aipatu den eran jakin araziko da.

3. Aurreko 4. eta 5. zatietan aipatu bezala, Estatutu proiektua probintzia batetan edo gehiagotan ez onartzea ez du esan nahi, besteetan Erkidego Autonomi hori ezin dela sortu, artikulu honen lehen zatian esaten den lege organikoaren arabera.

152. artikulua

1. Aurreko artikuluaren arabera onarturiko Estatutuetan, Autonomi dun Instituzio eraketa biltzar legegile batetan oinarrituko da. Biltzar hau bozketa orokor baten bidez aukeratua izango da, bertan proporzionalki lurralde osoko eskualde guztietako ordezkariak izanik; Administral eta Eragile boteredun Gobernu Kontseilu bat eta Biltzarrak aukeraturiko eta Erregeak izendaturiko lehendakari bat. Gobernu Kontseiluaren zuzendari bezala, Erkidegoaren Ordezkari Nagusia izango dena eta bertan Estatuaren ordezkari arrunta. Lehendakariak eta Gobernu kontseilukideek biltzarraren aurrean erantzukizun politikoa izango dute.

Erkidego Autonometan tokiko auzi eraketaren gailurra goi mailako Justizia Auzitegi Nagusi batek izango da. Auzitegi Gorena delakoaren agintea errespetatuz. Erkidego Autonomoen Estatutuetan lurralde auzitegi eraketaren zatikatze baldintzak eta erak jar daitezke. Hauzi Boterearen lege organikoak dioenarekin batera eta honen batasuna eta askatasunaren arabera.

123. artikuluan esandakoaz gain, auziaren prozesu maila dezberdin guztiak, lehen mailan hasitako Erkidego Autonomoaren lurralde berbereko auzitegi erakundeetan amaituko dira.

2. Estatutuak behin izenpetu eta jakin arazi ondoren, bertan jartzen diren aldabideak jarraikiz bakarrik alda daitezke, eta Hauteskunde zerrendetarl sarturik dauden bozemaileen artean Referenduma eginaz.

3. Mugakide diren Udalak elkartuz Estatutuak lurralde zatiketa bereziak sor ditzakete, nortasun juridikoa izanik.

153. artikulua

Erkidego Autonomoek egiten dituzten ekintzen kontrola eramango dute:

a) Lege indarrez emanikako arauen Konstituzionaltasunari buruz, Konstituzio Auzitegiak.

b) Estatu Kontseilua entzun ondoren, 150. artikuluaren 2. zatiaren arabera aldatu zaizkion ekintzetan, Gobernuak.

c) Administral Autonomoaren eta haren erregla arauak kontentzio administral auzitegiak.

d) Ekonomi eta Aitzinkontuak Kontu Auzitegiak.

154. artikulua

Erkidego Autonomen lurraldeetan Estatuaren administralgoa, Gobernuak izendaturiko ordezkari batek eramango du eta bidezkoa denean, erakundearen administralgoaz koordinatuko.

155. artikulua

1. Erkidego Autonomo batek Konstituzio edo bestelako legeek ezarritako eginkizunak beteko ez balitu, edo Espainiako ongitasunaren aurka astun jokatuko balu, Gobernuak Erkidego Autonomoaren Lehendakaria deituz, eta honek erantzun ezik, Senatuaren gehiengo absolutua lortu ondoren, onarturiko eginkizunak nahi eta ez betetzera bortxatzeko edo ongitasun orokorra lortzeko beharrezko diren erabakiak har ditzake.

2. Goragoxe aipaturiko erabakiak betetzeko, Erkidego Autonomoen agintari guztiei behar diren azalpenak emango dizkie Gobernuak.

156. artikulua

1. Erkidego Autonomoek bere eginkizunak bete ahal izateko ekonomi asketasuna izango dute, Estatu mailako Hazienda eta espainol guztien arteko solidaritatearen koordinaketa oinarrien arabera.

2. Erkidego Autonomoek Estatuaren lankide edo ordezkari izan daitezke zergak biltzeko, jestionatzeko eta likidapenak egiteko, Estatutuen eta legeen arabera.

157. artikulua

1. Erkidego Autonomoen diru iturriak izango dira:

a) Estatuak osorik edo zatika utzitako zergak, Estatu mailako zergei gehitutakoa eta Estatuak emanikako beste diru iturri batzu.

b) Bere zerga propioak, tasa eta zergaemaitza bereziak.

c) Lurralde arteko diru multzotik eginikako aldaketak eta Estatuaren Aitzinkontu orokorreko beste zenbait egoklera.

d) Bere ondasunen obariak eta Deretxo Pribatuko emaitzak.

e) Kredit erabileraren emaitzak.

2. Erkidego Autonomoek ezin izango dute bere mugaz kanpoko ondasunen kontura zergarik jarri edo zerbitzu eta saikarien zirkulapen aske bat behaz topa dezaketenak.

3. Lege Organiko baten bidez aurreko lehen sailean aipaturiko ekonomi ahalmenak sor ditzaketen auziak argitzeko arauak eta Estatu eta Erkidego Autonomoen arteko ekonomi harremanak muga daitezke.

158. artikulua

1. Estatuko Aitzinkontu Orokorretan Erkidego Autonomoentzat egokiera bat eman daiteke aldatu zaizkion zerbitzu eta eginkizunen neurrian eta Estatu osoko oinarrizko zerbitzu publikoak beteko diren zihurtasunean.

2. Lurralde arteko ekonomi desegokierak zuzentzeko asmoaz eta solidaritate bat sortzeko konpenzazio diru multzo bat sortuko da, inbertipen gastuak ordaintzeko eta diru multzo hau Erkidego Autonomo eta behar den probintzien arteko banaketa guzti hau, Gorte Orokorrek eginez.

IX. TITULUA

Konstituzio Auzitegiaz

159. artikulua

1. Konstituzio Auzitegia Erregeak izendaturiko hamabi lagunek osatzen du; Lau Biltzarkideen artean Biltzarrak aukeratuak, bostik hiruren gehiengoaz; Lau Senatorkideen artean Senatuak aukeratuak, bostik hiruren gehiengoaz; bi Gobernuak aukeratuak eta bi Auzi botereak Kontseilu Orokorrak aukeratuak.

2. Konstituzio Auzitegiko Epailariak, Majistratu, Fiskal, Unibertsital irakasle, Administral funtzionari eta abokatu artean izentatuak izango dira, hamabost urtez profesional lanean arituak eta lan hortan prestuak direla erakutsi dutelarik.

3. Konstituzio Auzitegiko Epailariak bederatzi urtetarako izendatuak izango dira, eta hiru urtero hiruren bat aldatuko da.

4. Konstituzio Auzitegiko Epailariak ezin izango dira izan: Ordezkotasun agintedunak, Administral eta politik karguduna, Alderdi politiko edo sindikal batetako zuzendaritzakoak eta beraien lankideak; Epaile edo Fiskal edo edonolako profesional edo merkatal lana egiten dutenak. Bestelakoetan Konstituzio Auzitekideek Auzi botereko judizialeko talde adostezintasun berbera izango dute.

5. Konstituzio Auzitegikideak independienteak izango dira eta bere agintearen ihardueran aldaezinak.

160. artikulua

Konstituzio Auzitegiko lehendakaria Auzitegiko taldekideen artean aukeratua eta Erregeak hiru urtetarako izendatua izango da.

161. artikulua

1. Konstituzio Auzitegia Espainia guztia du bere eskuera eta gai da:

a) Lege eta lege bezala erabakitako edozein Konstituzioaren kontra dagoela erabakitzeko. Lege bezala erabakitako arau bat Konstituzioaren kontra dagoela esan ondoren eta Jurisprudentziak horrela ulertu, lege hau ukitzen du, baina emandako epaia edo epaiek ez dute epaitutakoaren balioa galduko.

b) Konstituzioaren 52. 2. artikuluan onartzen diren eskubideen bortxapen kontrako babiakizuna egiteko, legeak jartzen dituen kasu eta eratan.

c) Estatu eta Erkidego Autonomoen arteko auzietan edo azken hauen arteko auzietan.

d) Konstituzioak edo lege organikoak iratxekitzen dizkion beste gaietan.

2. Konstituzio Auzitegira bidal ditzake Gobernuak Erkidego Autonomoen edozein erabaki edo arau. Auzitegira eramandako edozein erabaki edo arau etenaldi batetan sartzen da baina auzitegiak hurrengo bost hilabeteetan nahi eta ez birretsi edo kendu egin beharko dio etenaldi hori.

162. artikulua

1. Legeztaturik daude:

a) Konstituzioaren aurkako salakuntza egiteko, Gobernu Lehendakaria, Herriaren defendatzailea, 50 Diputatu, 50 Senatore, Erkidego Autonomoen Erakunde eragile kolejiatua eta behar denean halen Biltzarrak.

b) Babes baliakizuna eskatzeko, edozein pertsona edo lege nortasun duen edozein elkarte da gai, bidezko den eskubidea aipatuz, bai eta herriaren defendatzailea eta Fiskal Ministeritza.

2. Gainerako kasuetan, lege organikoak erabakiko du zein pertsona edo legezko erakunde den gai.

163. artikulua

Prozesu batetan Auzitegi erakunde batek lege bezala emanikako araua Auzi batetan erabilgarri dela erabaki dezake, eta lege hori Konstituzioaren aurka dagoela uste badu, orduan legeak jartzen dituen baldintza, era eta ondorioa jarraikiz. Konstituzio Auzitegira eramana izango dá eta inolaz ere ez da izango etenaldi bat sortzekoa.

164. artikulua

1. Konstituzio Auzitegiko erabakiak «Boletín Oficial del Estado» delakoan argitaratuko dira eta baleude, boz partikular eta guzti. Argitaratutako biharamunetik erabakitako balioa dute eta ezin izango da jaso baliakizunik haren aurka. Lege edo lege bezala emanikako araua Konstituzioaren aurka dagoela adierazten dutenak, eta eskubide subjetibo baten balioa ez dutenak, denen aurrean azken erabaki bezala dira.

2. Erabakiak bestelakorik esaten ez duen bitartean, Konstituzioaren aurka ez dauden beste zatiek indar guztia dute.

165. artikulua

Lege organiko batek arautuko du Konstituzio Auzitegia, bere taldekideen egoera, Auzi garaietako prozedura eta baliakizunak egiteko baldintzak.

X. TITULUA

Konstituzioaren aldaketaz

166. artikulua

Konstituzioa aldatzeko iniziatiba erabili ahal izango da 87. artikuluaren 1. eta 2. apartatuetan jartzen kasuetan.

167. artikulua

1. Konstituzioa aldatzeko proeiktuak Ganbara bakoitzeko bosteko hiruk onartu beharko ditu. Biotan akordiorik ez baldin bada, lortzeko ahaleginduko da Diputatu eta Senatoreen batzorde konposaketa berdinezkoa sortuz, beronek textu bat aurkeztuko du biltzarreak eta Senatuek botatuko dutena.

2. Goiko apartatuko prozeduraz onartzea ez baldin bada lortzen, eta textuak Senatuko gehiengo absolutik baiezko botua lortu izan baldin badu, biltzarreak hirutik bik aldatzea onar dezakete.

3. Gorte Orokorrek aldatzea onartuz haren berretsipenerako referendumera mendeko da honela eskatzen denean, hura onartzeko hurrengo hamabost egun barruan, edozein Ganbarako kideen hamargarren zatia.

168. artikulua

1. Konstituzioaren berrikuste osoa edo zatikakoa proposatzen denean, aurretiko Titulua, bigarren kapitulua, I. Tituluko lehen Saila, edo II. Titulua ikutuz, printzipioaren onartzera joko da Ganbara bakoitzeko hirutik bi, eta Gorteen berealaxeko deuseztatzera.

2. Hautaturiko Ganbarek berretsi beharko dute erabakia eta textu Konstituzional berriaren estudioetan ihardun, hau Ganbara biotako hirutik bik onartua izan beharko du.

3. Gorte Orokorrek aldatzea onartuz, honen berretsipenerako referendumera mendu behardo da.

169. artikulua

Ez da egingo Konstituzioaren aldatzerik gerratean edo 116. artikuluan aurrezikusitako egoeraren bat gertatzen denean.

DISPOSAPEN GEHIGARRIAK

Lehena

Konstituzioak babestu eta onartzen ditu forundun lurraldetako eskubide historikoak.

Forudun errejimenaren gaurkotze orokorra, dagokionean, Konstituzio eta Autonomia Estatuen barnean egingo da.

Bigarrena

Konstituzio hontako 12. artikuluko adinez nagusitasunaren deklarapenak ez ditu kaltetan egiten Deretxo Pribatu inguruneko, eskubide foraletan babestuko egoerak.

Hirugarrena

Arkipielago Kanariarren errejimen ekonomik eta fiskalaren aldatzea Erkidego Autonomoaren aurrez ikusitako txostena eskatuko du edo behin behineko organo autonomikoarena.

Laugarrena

Erkidego Autonomoetan Lurralde Audientzia bat baino gehiago daudenetan, Autonomia estatutuek daudenak iraun ditzakete, beraien artean konpetentziak banatuz, beti auzi boterako lege organikoan aurreikusitakoaren arabera eta honen batasun eta independentziaren barnean.

BEHIN BEHINEKO ERABAKIAK

Lehena

Behin behineko autonomia errejimena duten lurraldeetan, haien goiko organo kolejiatuek, beren kideen arteko gehiengo absolutua jasoz, hurrengo iniziatiba hau-alda dezakete, hots, 143. artikuluko 2. apartatuak Diputazio Probintzial edo dagozkien organo Intsular artekoei ematen die.

Bigarrena

Lehenago baiezki autonomia estatutu proiektuak plebizitatu zituzten lurraldeek eta Konstituzio hau aldarrikatzen denerako, behin behineko autonomia errejimenez kontatzen dutenek bereslaxe joka dezakete 148. artikuluko 3. apartatuan aurreikusten den araberan: honela gehiengo absolutua akordatzen dutenean goren organo preautonomik kolejiatuek Gobernuari adieraziz. Estatutu proeiktua, 151. artikuluko 2. zenbakian ezartzen denaren araberan elaboratuko da, preautonomik organo jolejiatuaren deiaz.

Hirugarrena

Prozesu autonomikoaren iniziatiba, 143. artikuluko 2. apartatuan aurreikusitakoa, Gorporazio Lokal haien kideengandik ondorio guztiez atzeratua ulertzen da, lehen hauteskundeak egin arte Konstituzioak dirauenetik.

Laugarrena

1. Nafarroaren kasuan eta berau Eusko Kontseilu Nagusian edo ordezkatuko duen euskal autonomik errejimenean sartzeaz, Konstituzioko 143. artikuluak ezartzen duenaren ordez, iniziatiba Organo Foral konpetenteari dagokio; beronek erabakiko du hura osotzen duen kideen gehiengoaren erabakiz. Aipatutako iniziatibaren baliotasunerako beharko da, gainera, Foru Erakundeari erabakia berretsi ahal dakikeo referendumez expreski hontarako bilduraziz, eta emandako baliodun botuen gehiengoak onartua.

2. Iniziatibak ez balu aurrera joko hura bakar bakarrik birsor daiteke Foru Erakunde konpetentearen aginte garaitik kanpo, eta gehien jota, 143. artikuluan ezartzen den epe gutxiengoa igaro ondoren.

Bostgarrena

Ceuta eta Melilla hiriak Erkidego Autonomikoetan era daitezke bertako Udalek honela erabakitzen baldin badute, beraien kideen gehiengo absolutuak hartutako akordioaren arabera eta Gorte Orokorrek baimendu lege organiko baten bidez, 144. artikuluan aurreikusitako arabera.

Seigarrena

Biltzarreko Konstituzio Batzordera estatutu proiektu ezberdin batzu igortzerakoan, sarrera ordenan erabakiko dira, eta 151. artikuluan dioen bi hilabetetako epea kondatuko da, Batzordeak proiektu estudioa edo elkarren segidan ezagututako proiektuak bukatzetik.

Zazpigarrena

Behin behineko erakunde autonomikoak hurrengo kasuetan deuseztatuak izango dira:

a) Autonomia Estatutuak Konstituzio honen arabera onartutakoak, ezartzen dituzten organoek eratzerakoan.

b) Prozesu autonomikoaren iniziatiba balizkoak aurrera jotzen ez duenean 143. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetu ez direlako.

c) Organismoak lehen behin behineko erabakiak aitortzen dion eskubidea ihardun ez balu hiru urtetako epe barruan.

Zortzigarrena

1. Konstituzio hau onartu duten Ganbarek bereganatuko dituzte, hark funtzionatzen duenetik, bertan arauzki biltzar eta Senaturako markatzen diren funtzio eta konpetentziak, eta guzti hauen aginteak 1981. eko Ekainetik aurrera ez du baliorik izango.

2. 99.eko artikuluan ezarritako ondorioez Konstituzioaren aldarrikatzea baliozko Konstituzionala bezala kontutan hartuko da haren aplikapenera bideratuz. Hontarako, aipatutako aldarrikatzetik hogei eta hamar eguneko epe bat irekiko da artikulu hartan erabakitakoa betetzeko.

Epe honten, oraingo Gobernu Lehendakariak, Konstituzioak kargu hontarako ezartzen dizkion betebehar eta konpetentziak bereganatuz aukera egin dezake 115. artikuluak aitortzen dion ahalmenaz baliatzeko, edo laga uztearen bidez 99. artikuluan ezarritako betetzerako, azken kasu hau 101. artikuluko 2. apartatuan aurreikusitako egoeran geraturik.

3. Deuseztatze kasuan, 115. artikuluan aurreikusitakoaz, eta 68. eta 69. artikuluetan aurreikusitakoa aurrera legaiki ez baldin bazen eraman, hauteskundeetan lehenagoz dirauten arauen aplikapenerako izango da, salbuespen bakarrik hautaezintasun eta elkartezintasunei dagokiena izanik zuzenki aldarrikatuko da Konstituzioaren 70. artikuluan 1. apartatuko «b» letraren bigarren etenean aurreikusitakoa, eta era berean, bertan botu emateko adinaz erabakitakoa eta 69. artikuluko, 3an ezarritakoa.

Bederatzigarrena

Konstituzio Auzitegiko kideak lehenez hautatu ondorenetik hiru urtetara, zozketaren bidez bertako lau kideen talde bat izendapenerako utzi eta berriztatu behar den hautagai etorki berdineko. Bakarrik ondorio hauetarako ulertuko da Gobernuaren proposamenez hautaturiko bi etorki berdineko kideez eta Auzi Botereko Kontseilu Orokorreko formulatik datozenak taldeturik. Era berdinez, aldarrikatuko da hiru urte igaro ondoren, goiko zozketak eragin gabeko talde bien artean. Ordutik 159. artikuluko 3. zenbakian ezarrita.

DISPOSAPEN DEROGATZAILEA

1. 1977.eko Urtarrilaren 4eko legea aldatze politikarako derogaturik geratzen da, lehenago aipatutako legeak ez baldin badu derogatuta izan, hots, 1958. eko Maiatzaren 17ko Mugimenduko Oinarrizko Printzipioa, 1945.eko Uztailaren 17ko Espainolen Forua, 1938.eko Martxoaren 9ko Lanarena, 1942eko Uztailaren 17ko Gorteetako Lege Konstitutiboa, 194eko Uztailaren 26ko Buruzagitzaren oinordekoa. Guztiok 1967eko Uztailaren 10eko Estatuaren Lege Organikoak aldaturik eta era berean azkenau eta 1945eko Urriaren 22ko Referendum Nazionalarena.

2. Inolako iraupenik gorde ahal baldin badu, 1839eko Urriaren 25eko legea, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko probintziei dagokiena, behin betiko derogaturik kontutan hartuko da.

Era berdinetan 1876eko Uztailaren 21eko legea behin betiko derogaturik geratuko da.

3. Era berean derogaturik geratzen dira Konstituzio honen aurka dauden disposapen guztiak.

AZKEN DISPOSAPENA

Konstituzio hau «Estatuko Boletin Ofizialean» textu ofiziala argitaratzen den egun beretik funtzionamenduan sartuko da.

Espainiako beste hizkuntzetan ere argitaratuko da.

IMPRENTA NACIONAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO